

© Luis Hernández Navarro
Julio 2014

Esta es una publicación de Para Leer en Libertad A.C.

brigadaparaleerenlibertad@gmail.com
www.brigadaparaleerenlibertad.com

Cuidado de la edición: Luis Hernández Navarro, Paco Ignacio
Taibo II, Alicia Rodríguez y Jorge B. Fernández.
Diseño de interiores y portada: Daniela Campero
Autor de foto: Hans-Maximo Musielik @2014

**HERMANOS EN ARMAS.
POLICÍAS COMUNITARIAS
Y AUTODEFENSAS**

Luis Hernández Navarro

Para Carmen Lira, mi jefa

El cartel H 3 son mentiras. Es el orden cronológico en que nos fuimos levantando en armas. La H significa Hermandad. Sinónimo que le están poniendo para las gentes que se agrupan en una causa común. Yo había sugerido que le pusieran F, de Fraternidad, pero muchos dijeron que no entendían la palabra fraternidad, pero hermandad es la misma palabra.

José Manuel Mireles

Hermano es el que sabe ser hermano

Adolfo Gilly

PRESENTACIÓN

Desde hace muchos años he buscado comprender la complejidad de los procesos de autodefensa indígena. Seguí de cerca la experiencia de la policía comunitaria en Guerrero y la nueva guerra sucia que se vive en la entidad. La promulgación del Manifiesto de Ostula en 2009 me cimbró. Fue evidente que algo muy profundo y muy relevante estaba pasando entre los pueblos originarios, aunque tuviera poca repercusión en el mundo urbano. Cuando los chihuhueneses comenzaron a defender a sí mismos me resultó claro que nos encontrábamos ante un vuelco en la resistencia popular a la inseguridad pública. Me acerqué al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con la esperanza de que nuestro camino al abismo lograra frenarse. El alzamiento de Tierra Caliente en Michoacán me intrigó profundamente. La irrupción de grupos de autodefensa en más de la tercera parte del país se convirtió en un hecho inusitado. En 2013 fue evidente que el país vivía una situación absolutamente inédita.

Durante todo este tiempo traté de explicar (me) lo que sucedía. Leí religiosamente la prensa, buscando encontrar las huellas de lo acontecido. Conversé con actores claves y periodistas rigurosos. Traté de estudiar todos aquellos materiales que me dieran luz en la oscuridad. Parte de mis hallazgos los fui compartiendo en artículos y charlas.

Parece un disco rayado. No lo es. La escritura de este libro surgió de una sugerencia de Paco Ignacio Taibo II y Paloma Saiz, después de que di una conferencia sobre las autodefensas michoacanas en un evento realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Brigada Para Leer en Libertad. Como es casi imposible decirles que no, puse manos a la obra. Desde entonces, la presión, el estímulo y el apoyo de los dos y del resto de los integrantes de la brigada fueron claves para terminarlo.

Muchas de las ideas y opiniones aquí expresadas surgieron de reuniones, pláticas y comentarios de amigos míos, mucho más enterados que yo de estos temas. Arturo Cano, Abel Barrera, Magdalena Gómez, Miguel Álvarez, Dolores González, Miguel Ángel Romero, Ernesto Ledesma y Sergio Ocampo fueron fundamentales para redactar estas páginas.

El libro recupera y reelabora algunos escritos publicados en *La Jornada* y en la revista *El Cotidiano*. El apoyo de la directora del diario Carmen Lira, y de mis compañeros en el periódico Josexo Zaldúa, Elena Gallegos, Fabrizio León, Mireya Cuellar, Luis Gutiérrez y Miguel Ángel Velázquez fueron fundamentales para que el libro se terminara. La huella del extraordinario trabajo realizado por mis colegas Rosa Rojas, Karina Avilés, Gustavo Castillo y

Ernesto Martínez puede verse en parte de los capítulos de este trabajo.

Los escritos, conferencias, comentarios y charlas informales con Alice Brooke Wilson, Carlos González, Simón Vargas, Gilberto López y Rivas, Gustavo Leal, Martha Singer, Gloria Muñoz, Ana de Ita, César Reyes, Víctor Saavedra, Laura Carlsen, Marcos Tello, Andrés Barreda, Ramón Vera, Magdiel Sánchez y Christiane Schultz me han sido una fuente permanente de información y análisis sobre el tema. Muchos maestros democráticos me aportaron pistas e información medular. La cobertura de *Desinformémonos* y la *Agencia Subversiones* resultó muy valiosa. A todos ellos les estoy profundamente agradecido.

I) INTRODUCCIÓN. LA VIRTUD DE LA NECESIDAD

EL CUARTO ESTADO

Como si fuera una imagen calcada del cuadro de Giuseppe Pellizza da Volpedo *El Cuarto Estado*, que el director de cine Bernardo Bertolucci retomó al inicio de su película *Noventa*, ese 8 de abril de 2013 fue un día para la historia. Fue suceso nunca visto en fechas recientes; un acontecimiento que prendió las luces de alarma del aparato del estado. Las fotos dan cuenta del hecho insólito.

Eran casi 50 policías comunitarios. Entraron armados a Chilpancingo, entre vítores y saludos de más de tres mil maestros en paro en contra de la reforma educativa. Habían marchado durante casi 20 kilómetros, con el sol a plomo, uniformados, con fusiles, pistolas y machetes, por la carretera que une Tixtla con la capital de Guerrero. Exigían la liberación la liberación de su comandante, Nahum Santos Bartolo. De paso, la del profesor de Chilapa Mario

Durán Torres, apresado durante el operativo de desalojo de la Autopista del Sol.

Nahum era para ellos su hermano. Y, además de ser el segundo comandante de la comunidad de El Troncón, es profesor. Unos días antes, una noche de domingo, cuando iba rumbo a su casa, después de salir de una asamblea del magisterio disidente, fue arrestado por elementos del Ejército. Lo acusaron de portar un arma de fuego, la que carga siempre como policía comunitario. Apenas en esa reunión los profesores habían acordado convertir su lucha en un movimiento popular, es decir, fabricar un coctel con las disidencias sociales del estado. Los soldados entregaron a Nahum a la PGR.

Los comunitarios que ese 8 de abril caminaron la autopista con sus fusiles, venían de las comunidades de Acatempa, Tecocintla, Zacazonapa y El Troncón. Hacía poco que se habían adherido a la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC. A la marcha se sumaron 120 normalistas rurales de Ayotzinapa.

La orden que traían los policías comunitarios era muy sencilla. El primer comandante de El Troncón se lo dijo a la prensa sin tapujos: “Es una injusticia y vamos por él, no hay otra consigna, nomás ir por él. Lo vamos a traer de regreso”.

Los ánimos estaban calientes en Guerrero. Faltaba más. El gobierno y los diputados locales habían traicionado a los maestros democráticos. Primero firmaron con los docentes un compromiso para darle una salida digna a su movimiento de huelga contra la reforma educativa y luego lo incumplieron. Los profes respondieron el 5 de abril blo-

queando por segunda ocasión consecutiva la Autopista del Sol, que conecta la ciudad de México con el puerto de Acapulco. La policía los desalojó con violencia y los mentores se replegaron. Rabiosos e indignados, al día siguiente, efectuaron una numerosa marcha en Chilpancingo y lanzaron huevos y piedras al local del PRD por incumplir su palabra y negarse a apoyar en el Congreso local sus demandas. Así estaban los ánimos cuando al ejército se le ocurrió arrestar a Nahum, policía comunitario y profesor.

Ese 8 de abril de fotografía, en la entrada de Chilpancingo esperaba a los comunitarios marchistas un comité de recepción integrado por elementos de la Policía Federal, soldados y dos helicópteros de la Marina. No iban en plan amistoso. Pero entre los planes de los de las CRAC no estaba rajarse. Pastor Coctecón Plateado, comisario de Acatempa y comandante en su comunidad, anunció: “vamos a luchar frente a frente, aquí están las armas, y las vamos a usar si es necesario. No hay paso atrás”.

Los comunitarios no estaban solos. Miles de maestros aguardaban su arribo para sumarse a su lucha. Hubo un momento de tensa calma. Finalmente, a las 2 de la tarde, cuando los marchistas se alistaban para entrar a la ciudad, la PGR les entregó a Nahum. Fue un triunfo grande pero no suficiente. Faltaba aún que el maestro Mario, a quien la justicia acusaba de golpear, él solo a ocho policías, recuperara su libertad.

Los comunitarios acordaron seguirse de frente y entrar a la ciudad. Se formó entonces una enorme cadena humana de policías comunitarios armados, maestros democráticos y habitantes de las colonias populares de Chil-

pancingo, que se enfiló rumbo a las instalaciones del Poder Judicial. Desafiante, la policía estatal se encerró en el edificio para impedir el paso de los docentes. Bragados, los de la CRAC-PC se colocaron frente a ellos para protegerlos.

Para destensar la situación, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, salió de los juzgados e informó a los maestros que con seguridad Mario alcanzaría pronto la libertad. Sus palabras fueron escuchadas y atendidas.

Los manifestantes tomaron rumbo hacia la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. Al llegar, los comunitarios se colocaron debajo de la estatua de José María Morelos. La multitud los ovacionó como héroes. Al terminar el acto regresaron a sus pueblos.

La movilización de comunitarios armados y su alianza con el magisterio y sectores populares encendieron las luces de alarma. Apanicados, senadores del PRI y PAN condenaron el llamado de los profesores de Guerrero para que en sus movilizaciones participen los grupos de auto-defensa. La vinculación de los policías comunitarios con el movimiento popular les resultó indigerible. Nunca les había gustado que las comunidades se hicieran cargo de su seguridad, pero que, además de armadas, se sumaran a las protestas de otros sectores de la población les resultó inadmisibile.

Sí, fue una imagen similar a la del *Cuarto Estado* del pintor da Volpedo, que plasma la emergencia de un nuevo estamento social, que hasta ese momento no había tenido cabida en el viejo régimen, que representa la larga marcha de un proletariado, lleno de rasgos campesinos, hacia la conquista de sus derechos.

A partir de ese momento, digno también de figurar en un filme de Bertolucci, la ofensiva gubernamental contra las policías comunitarias se intensificó. Era ya, sin embargo, un poco tarde. Distintas expresiones del pueblo armado haciéndose cargo de su propia seguridad habían surgido en al menos diez estados de la República. Los hermanos se estaban levantando en armas.

LOS MONTAÑEROS

Felipe Francisco Reyes habla el español como si lo fuera traduciendo de su lengua original. Él es Me'phaa (tlapaneco), del municipio de Ilantenco, en la Montaña de Guerrero, tiene 37 años y cinco hijos. Es de palabra fácil y firme. Y cuando comienza a conversar, no para hasta que dice lo que quiere decir. No en balde fue locutor de la estación de radio La Voz de la Montaña, del Instituto Nacional Indigenista.

En 1995, Felipe fue nombrado Tesorero de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOOC), una red nacional de organizaciones regionales de pequeños cafecultores, democrática y autogestiva, que ayuda a sus socios a comercializar sus cosechas, les brinda asesoría y los representa ante distintas instancias gubernamentales.

Campesino minifundista, Felipe es socio de la Unión de Ejidos Luz de la Montaña (UELM), localizada en una de las regiones de mayor pobreza extrema de Guerrero y del país. Fue delegado a la organización entre 1991 y 1994 y Presidente del comité encargado de construir un módulo para tostar y moler el aromático, y almacenar el maíz y el fertilizante. Estudió la secundaria y tomó un curso de com-

putación en la UNAM, para aprender a utilizar un programa que lleva el registro de los socios de su organización.

En aquellos años yo trabajaba, como asesor de la CNOC, en estrecha relación con sus dirigentes, todos ellos pequeños productores. Conocí a Felipe en la asamblea en la que él fue nombrado tesorero y, desde entonces, conversamos regularmente a lo largo de tres años, no sólo de la problemática cafetalera sino de su vida, y de la situación que él, su comunidad y su organización vivían. Esas pláticas eran una ventana privilegiada para asomarme a un México casi existente en los medios de comunicación electrónicos. Fue en una de esas charlas que me enteré de lo que, con el paso del tiempo, llegaría a ser la Policía Comunitaria de Guerrero.

La Luz de la Montaña (o LuzMont) era en 1995 (como lo es ahora) una organización campesina ejemplar. Formada oficialmente en 1985 por caficultores Mé'phaa para comercializar su producción a precios justos, derrotó a los coyotes que acaparaban la cosecha del aromático y al Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), el organismo gubernamental que desempeñó hasta 1992 un papel medular en el financiamiento, acopio y venta del grano en el país.

Pero esa exitosa incursión en la esfera productiva y del bienestar social de las comunidades no fue suficiente. Al arrancar la década de los noventa del siglo pasado, la LuzMont se topó con la barbarie de los caciques regionales y sus pistoleros, con la inseguridad en la región y la complicidad policíaca con los maleantes. Sus socios y la Luz de la Montaña misma fueron víctimas de asaltos, robo de ganado, asesinatos y de la violación de sus mujeres. Como el

gobierno no se hacía cargo del problema, inevitablemente ellos tuvieron que enfrentar el reto de solucionarlo.

Felipe participó en esa lucha. Realmente estaba muy orgulloso de lo que él y sus compañeros habían logrado hacer en el terreno productivo. Pero también se encontraba muy preocupado del clima de inseguridad que se vivía en su tierra, de los robos a la Luz de la Montaña. En varias ocasiones —nos platicó— asaltaron a los comisionados de la organización que subían a pagar a sus miembros el café ya vendido. El abigeato marchaba a toda máquina. Incluso habían abusado de varias mujeres. Cada vez que hacía referencia a esa penosa situación sentenciaba: “No vamos a estar esperando a ver cuándo llegan la seguridad, la democracia y la justicia, si no las hacemos nosotros nunca van a llegar”.

En 1995, la Luz de la Montaña, junto a otras organizaciones productivas como la Unión Regional Campesina (también integrante de CNOOC), la Sociedad de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz, y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia comenzaron a movilizarse para exigir al gobierno que cumpliera con sus obligaciones de garantizar la seguridad pública y a defender ellos mismos a sus comunidades. En estas jornadas de lucha se establecerían las bases de lo que años después sería la Policía Comunitaria.

Sacerdotes de la diócesis de Tlapa sensibles al sufrimiento de sus feligreses también se involucraron en el asunto. Ni siquiera ellos pudieron escapar de robos, agresiones y complicidad policiaca con los asaltantes. Mario Campos Hernández, entonces párroco de Santa Cruz del Rincón,

en el municipio de Malinaltepec, y mixteco de nacimiento, fue reiteradamente hostilizado. En 1994, delincuentes lo atacaron a él y a sus acompañantes en un camino. La denuncia fue presentada ante el Comisariado Municipal, que lo transfirió al Ministerio Público. Según cuenta Ángeles Gama, después de un tiempo, este MP resolvió que se trataba de “una banda que atacaba en los caminos”, pero se supo que fue el mismo Comisariado de Santa Cruz del Rincón el que pagó a los “asaltantes”.

Los ataques en su contra fueron constantes. Cinco años después de ese incidente, en 1999, el religioso fue detenido por la Policía Judicial, acusado de allanamiento de morada. La razón real era otra: su participación en la organización del pueblo. Ante la movilización, fue liberado y se cerró la averiguación previa.

Las agresiones contra Mario Campos no fueron casualidad sino represalias directas por su compromiso con las comunidades. Él desempeñó un papel muy relevante en la formación del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), integrado por 28 comunidades de la parroquia del Rincón. El CAIN demandó la construcción de la carretera pavimentada entre Tlapa y Marquelia y otros caminos. Más adelante buscó que una sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se estableciera en la comunidad del Rincón.

Años antes del arranque formal del proceso organizativo que dio vida a la policía comunitaria, en 1993, en Iliatenco, había surgido una misteriosa asociación justiciera, integrada por varios hombres ataviados con largas túnicas blancas, que actuaba en las sombras. Bautizada como la

“Mano Blanca”, se encargó de limpiar el municipio de varios pistoleros al servicio de Pedro Cantú Aburto, un profesor priísta expulsado de su empleo, cacique y jefe de una de las bandas de asaltantes que aterrorizaba la región. En su libro *México de salario mínimo*, el periodista Arturo Cano narró la historia, que parece sacada de una novela.

Confluyeron en las movilizaciones contra la inseguridad de los pueblos de la Montaña, tanto las experiencias adquiridas por estas agrupaciones económicas y reivindicativas a lo largo una década, como la organización ancestral de las comunidades indígenas regionales. La fusión de la experiencia adquirida por centenares de representantes en la toma de decisiones colectivas en asambleas, en la elaboración y gestión de sus proyectos y en la negociación con el gobierno, con la recuperación de su identidad étnica y sus sistemas normativos, fue la materia prima que permitió forjar un nuevo sistema de justicia.

La fortaleza de la LuzMont se había gestado a través de años de distintos combates. La Unión de los montañeros nació para defender los intereses de los cultivadores de café más pobres de la Montaña de Guerrero, una región en donde casi las tres cuartas partes de los productores tienen predios menores a las 2 hectáreas y obtienen cosechas de menos de 20 quintales al año. Surgió de un intenso trabajo organizativo en asambleas comunitarias, desarrollado entre 1982 y principios de 1983, que formó parte de una lucha nacional de caficultores por mejores precios. También, del apoyo y la experiencia de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil en Atoyac de Álvarez, y de la Unión de Crédito Pajal Ya Kac’ic en Chiapas.

Los montañeros -asegura un indígena mé'phaa, en un testimonio recogido por Beatríz Canabal y José Joaquín Flores- "somos los que habitamos los cerros, los que no hablamos español, los sombrero-dos, los huancos (forma humillante de referirse a los indios por parte de los mestizos), los mugrosos, los huarachudos; así nos dicen los comerciantes de Tlapa. Montañeros es sinónimo de pobreza."

La Unión se fundó oficialmente en octubre de 1985, en el municipio de Iliatenco, en la parte alta de la Montaña, el mismo donde nació Felipe. Aunque sólo median 60 kilómetros de distancia entre ese poblado y San Luis Acatlán, se necesita hacer un viaje de seis horas en camioneta para trasladarse de un lugar a otro. En los cinco meses que dura la temporada de lluvias es imposible trasladarse. El entonces gobernador Alejandro Cervantes Delgado, que asistió al evento, prefirió llegar en helicóptero. El encuentro fue una especie de bautizo porque, en los hechos, la Unión ya funcionaba como una organización campesina real.

Fiel a su nombre, la Luz de la Montaña iluminó la lucha de las comunidades de la región. Se llamó así porque, según cuenta Alejandro Pérez Quiroz, uno de sus principales asesores, "los compañeros de antemano dijeron que el nombre no sería en tlapaneco y proponiendo nombres, un compañero de Iliatenco argumentó que cuando estábamos desorganizados era como estar a oscuras, en cambio ahora con organización y unidos se veía por dónde ir y qué hacer para mejorar las condiciones de vida, era como tener luz para ver el camino de lucha. Y otro compañero de Tlapa dijo que debería quedar claro que era en la Montaña donde se estaban organizando, de ahí surgió "Luz de la Monta-

— Luis Hernández Navarro
ña”. (Adolfo Orive y José Luis Torres: *Poder Popular. Construcción de ciudadanía y comunidad*).

Sus logros -de los que Felipe participó- fueron sorprendentes. Diez años después de fundada, la Unión agrupaba a casi 5 mil productores de 22 comunidades. Sorteando los auges y crisis en los mercados cafetaleros, con genuina vocación de servicio comunitario, de manera escalonada, se deshicieron de los coyote apoyándose en el Inmecafé y luego se zafaron de su férula; lograron mejorar el precio del grano, regulando el mercado regional del café, y obligando a los particulares a pagar más dinero; compraron fertilizante barato y a tiempo; adquirieron despulpadoras a buen precio, incursionando en la producción de café pergamino; abastecieron las comunidades de maíz; contrataron créditos de avío; construyeron un almacén para mil toneladas y un beneficio seco; envasaron miel; instalaron tiendas de consumo con mercancías a precios razonables e, incursionaron, con éxito relativo, en la fabricación de café soluble, al que bautizaron como LuzMont.

Caminando en dos pies, los montañeros fueron más allá de lo estrictamente productivo, y gestionaron obras y servicios para los poblados. Cuando el ciclón *Cosme* devastó la región, la Unión se puso al frente en las tareas de brindar apoyo a los damnificados y suplir el abandono gubernamental. Por eso, al momento en que el desafío de la inseguridad pública se tornó insoportable, la organización, como el resto de las existentes en la Montaña, se desdobló para enfrentar el nuevo reto, y parir un nuevo sistema de justicia y una policía comunitaria. En sus bases había germinado ya una transformación sorprendente en la actitud

de la gente hacia sus viejas formas de hacer las cosas, a través de un proceso que respetaba sus tradiciones y valores.

El camino para llegar a la policía comunitaria ha sido largo y fue andado no sólo por la Luz de la Montaña. En esa misma zona, a finales de mayo de 1970, después de dar una fuerte lucha contra los cacicazgos, el profesor Genaro Vázquez Rojas estableció su primero campamento guerrillero, el "José María Morelos y Pavón". Otras organizaciones campesinas, también volcadas al acopio y comercialización de café, al abasto y a la producción de miel, como la Sociedad de Solidaridad Social Café-Maíz, la Unión Regional Campesina de la Costa Chica y Montaña y el Consejo Comunitario de Abasto y el Consejo de Autoridades Indígenas, desempeñaron también un papel relevante en el establecimiento de un sistema regional de justicia.

No fueron los únicos. Las jornadas de lucha, nacionales e internacionales, para conmemorar los 500 años de resistencia indígena, negra y popular tuvieron un gran impacto en el mundo indio en Guerrero. Como parte de esta campaña, se realizaron varias manifestaciones en Chilpancingo, Acapulco y la Ciudad de México. En septiembre de 1991, como resultado de los contrafestejos del "Encuentro de dos mundos", diversas organizaciones acordaron formar una coordinación estatal: el Consejo Guerrerense 500 años (CG500-años). Los pueblos indígenas del estado participaron activamente, combinando sus reivindicaciones étnicas con demandas de obras y servicios. Al calor de la protesta se forjó una nueva camada de dirigentes indígenas con un horizonte novedoso de lucha.

Un papel muy importante en la formación del Consejo fue jugado por el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que, a comienzos de los noventa, protagonizó una significativa y exitosa movilización contra la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo, que amenazaba con expulsar de su territorio ancestral a los pueblos nahuas enclavados en los márgenes del río Mezcala. El CG500-años le abrió a esa convergencia indígena el terreno para potenciarse y romper el aislamiento.

La lucha del Consejo se mantuvo a lo largo de 1993 y se enlazó con el levantamiento del EZLN. En marzo de 1994 los guerrerenses marcharon en el Distrito Federal, bajo la consigna *No están solos*. Como sucedió con las organizaciones indígenas de casi todo el país, el zapatismo le proporcionó al Consejo una plataforma privilegiada para desplegarse.

Sin embargo, con el paso de los años, al interior de la organización las cosas se fueron complicando. Según el investigador Sergio Sarmiento “El CG500-años contaba con un cuerpo compacto de líderes, pero lo cierto es que muy pronto aparecieron dificultades con aquellos dirigentes que les interesaba más aparecer en el escenario internacional, los que aspiraban a ocupar un cargo de representación popular o un puesto en la burocracia y los que realmente iban tras el dinero. El CG500-años no pudo sortear estas dificultades y mucho menos ejercer un control sobre sus diputados y funcionarios que salieron de su seno. Tampoco pudo justificar parte de los recursos económicos que manejó.

No obstante ello, el Consejo dejó su huella en las Policías Comunitarias. Una parte de su dinámica interna, de su

cultura política, de lo que fue la aparición de la UPOEG en 2013 y de sus contradicciones son herencia del CG500-años.

DE COMPAÑEROS A HERMANOS

El 30 de enero de 1994, cuando el olor a pólvora del levantamiento zapatista estaba todavía fresco y el país entero no terminaba de salir de una conmoción profunda, la CNOG realizó en San Cristóbal de las Casas una reunión nacional en solidaridad con el alzamiento y a favor de una salida pacífica al conflicto. Asistieron a ella integrantes de la Coordinadora de casi todas las regiones donde se cultiva el aromático en México.

El evento fue inaugurado por Humberto Juárez, profesor bilingüe mazateco y pequeño caficultor, entonces al frente de la organización. Inesperadamente, al tomar la palabra se dirigió a los asistentes en mazateco, y se refirió a ellos como “hermanos indios”, en lugar de hablar en español y utilizar el tradicional “compañeros”. Los delegados que intervinieron después, mixtecos, nahuas, amuzgos, zapotecos y choles, repitieron el ritual y comenzaron sus discursos, comentarios y propuestas utilizando su lengua.

Nunca había sucedido algo así desde que se fundó la Coordinadora. La mayoría de los asistentes se conocían desde años atrás (algunos desde las movilizaciones por el incremento a los precios de 1982), habían estado juntos en muchos otros encuentros nacionales, pero en todos, se daban trato de compañeros (excepto uno que otro viejo militante del Partido Comunista, como el profesor Manuel Sedas, que se dirigían a la audiencia llamándolos camaradas) y se hablaba exclusivamente en español.

El cambio en el idioma y en el sujeto a quien los cafetaleros se dirigían en sus discursos fue propiciado por la insurrección zapatista. Había transcurrido sólo un mes de su inicio, pero había dejado ya una huella profunda entre los pueblos originarios. Los productores presentes en la reunión, mayoritariamente indios, tenían años de haberse asociado para democratizar sus comunidades, y algunos se habían involucrado en la lucha por la defensa de los derechos humanos en su región. Muchos de ellos participaron en diversos eventos ligados a la conmemoración, en 1992, de los 500 años de resistencia indígena, negra, campesina y popular. Pero, en su gran mayoría, no habían hecho de su identidad étnica un terreno de organización, ni de solidaridad, ni de fraternidad. Hasta que llegó 1994 y con él una convulsión profunda en sus identidades.

A partir de entonces la lucha indígena se desplegó con una vitalidad y profundidad no vista en mucho tiempo. Hace años, el escritor italiano Lucian de Crescenzo dijo "Somos ángeles con una sola ala, y sólo podremos volar abrazándonos unos a los otros." El zapatismo convocó a los pueblos indios a juntarse para poder volar como los ángeles de Crescenzo, abrazándose unos a otros junto a los demás habitantes del México de abajo. Y, literalmente, los pueblos originarios comenzaron a volar.

La historia del evento de los productores de café en Chiapas constituye un pequeño ejemplo de las transformaciones internas operadas en las comunidades indígenas de México a partir de esa fecha. La multitud de encuentros y reuniones, de propuestas programáticas, de debates sobre la cuestión étnica en la que los pueblos indios se han vis-

to involucrados de manera directa a partir de entonces en todo el país es enorme. Las instituciones gubernamentales sufrieron el “oleaje” de esta irrupción, pero permanecieron ajenas a él. En parte, lo que se puso a debate en este despertar étnico, fue un nuevo terreno de relación entre el Estado nacional y los pueblos indios, que sustituya al viejo pacto existente entre ambos.

Entre otros muchos, tras hechos sobresalieron de la irrupción étnica de 1994: primero, el vacío jurídico en la legislación para tratar las cuestiones indígenas; segundo, la pretensión gubernamental de desplazar las demandas indias al ámbito casi exclusivo de la atención de la pobreza extrema negando el reconocimiento de sus derechos; y, tercero, la revaloración de lo indio en la sociedad.

El marco jurídico que regulaba las relaciones entre pueblos indios y Estado nacional en 1994 estaba plasmado en los artículos 4 y 27 constitucionales y en el Convenio 169 de la OIT. Era absolutamente insuficiente. En el caso de los artículos constitucionales, se otorgaba un reconocimiento parcial e incompleto de los derechos de los pueblos originarios y la legislación contenía enormes vacíos jurídicos.

El que el movimiento indígena haya desplazado el terreno de sus reivindicaciones de la atención de la pobreza extrema hacia las demandas políticas, destacadamente la de autonomía, es un elemento clave de la actual coyuntura política-social de nuestro país a partir de 1994, fundamental para entender el fenómeno de las policías comunitarias, pero está presente también en otros países de América Latina. El fenómeno es aparentemente contradictorio. Es en la población indígena donde se concentran los

mayores índices de rezago social. Sectores cada vez más numerosos de la población india creen que se requiere que ellos tengan en sus manos los instrumentos políticos para aplicar las medidas necesarias a fin de combatir la pobreza y promover el desarrollo. La experiencia les ha mostrado que la lucha por la tierra, por la apropiación del proceso productivo, por el bienestar social y por la defensa de los derechos humanos, es insuficiente y limitada si no se lucha también por la modificación de las relaciones de poder.

Durante el último medio siglo, los pueblos indios han vivido transformaciones profundas. El fin de la reforma agraria, la educación pública, la construcción de vías de comunicación, la presencia de la radio y la televisión, el mercado, la apertura comercial, la militarización, el alcoholismo, la prostitución, el cultivo de estupefacientes y la migración han transformado dramáticamente sus sociedades. Los mecanismos tradicionales de cohesión y reproducción social han sido destruidos o erosionados por el avance de la modernidad. Sin embargo, han resistido, y de esa resistencia han surgido procesos de reconstitución de nuevas identidades que combinan tradición e innovación.

La insurrección zapatista precipitó dentro de las comunidades indias una revaloración profunda de su identidad. Sin embargo, más que sembrar una semilla, el zapatismo sirvió como fermento que aceleró un proceso previamente en marcha. Con el inicio de la década de los 70 comenzó a construirse una nueva forma de ser indio y una valoración distinta a la tradicional dentro de la sociedad urbana. El derecho y el valor de la diferencia, la reivindicación de la autonomía como el terreno propicio para de-

sarrollarla, y la exigencia de participar en el pacto nacional sin tener que renunciar a lo específico, comenzaron a abrirse paso de muy distintas maneras. Detrás de este proceso hay un aliento democratizador profundo.

El levantamiento armado de enero de 1994 catalizó la gestación de un nuevo movimiento indio en el país. No inventó la lucha de los pueblos originarios pero le dio una dimensión nacional, estimuló su crecimiento, unificó a muchas de sus corrientes, arrancó al Estado el compromiso de hacer reformas constitucionales profundas y le facilitó la construcción de una plataforma organizativa relativamente estable.

De la misma manera en la que lo hizo con otras franjas sociales no indias, el EZLN puso a disposición de los pueblos originarios su capital político y su crítica al Estado mexicano. Con ello, el zapatismo se convirtió en un instrumento facilitador del desarrollo del movimiento indígena dentro de la sociedad nacional, y éste, a su vez, le proporcionó a los rebeldes del Sureste solidaridad, apoyo y “nutrientes” para su crecimiento y conversión en una fuerza política.

De la convergencia entre la rebelión zapatista y la lucha de pueblos y comunidades indígenas surgió una nueva visión de país. Los Diálogos de San Andrés y una multitud de foros regionales fueron el espacio para elaborarla. En ellos participaron las organizaciones etnopolíticas más importantes y un número relevante de los estudiosos del tema.

Esta oleada de recomposición de los pueblos originarios se vivió en la Montaña y Costa Chica de Guerrero con gran intensidad. El debate sobre derechos indígenas

abierto en los Diálogos de San Andrés dio a muchas comunidades de esas regiones un horizonte presente ya en su propia experiencia. La creación de la CRAC-PC es expresión de este proceso.

A comienzos de 1997, en San Luis Acatlán, impartí un pequeño curso sobre derechos indígenas, derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés a afiliados de la CNOC en Guerrero. Asistieron varias decenas de delegados de las organizaciones de caficultores de la región e integrantes de la policía comunitaria, con fusiles y uniformes incluidos. Al finalizar, hicimos un balance de la reunión. Varios de los policías comunitarios presentes concluyeron que la autonomía, la recuperación de los sistemas normativos y los Acuerdos de San Andrés eran justamente lo que ellos estaban haciendo en la práctica, en el terreno de la seguridad y la justicia.

Guerrero no fue el único estado donde se vivió una experiencia así, aunque su experiencia de lucha por la seguridad y la justicia es de las más acabadas. El horizonte autonómico abierto por la experiencia práctica de los zapatistas, por el marco conceptual de los Diálogos de San Andrés y continuado por la acción de los montañeros ha servido de inspiración y referencia a otros pueblos indios para formar sus guardias comunitarios y recuperar sus sistemas normativos. La proliferación de estos cuerpos armados en los años recientes en comunidades indígenas no puede explicarse al margen de estos hechos.

LAS AUTODEFENSAS

En 2008 en la comunidad purépecha de Nurío, en Michoacán se formó una guardia comunitaria que funciona hasta la fecha. Un año después, la experiencia fue replicada por los nahuas de Ostula, en la misma entidad, y en la comunidad de Cherán. En junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena proclamó el Manifiesto de Ostula, reivindicando el derecho a la autodefensa indígena. La experiencia se extendió a otras comunidades originarias de Michoacán, y trataría de echarse a andar a finales de 2012 entre los nahuas de Ayotitlán, acosados por los pistoleros al servicio de compañías mineras.

La fiebre de autodefensa indígena que comenzó a brotar en diversas entidades del país tuvo como trasfondo la lucha contra el despojo de sus recursos naturales, y el creciente involucramiento de los Señores de la droga en estos rubros.

Coincide en el tiempo con el surgimiento de expresiones de autodefensa colectiva como la protagonizada por la comunidad mormona disidente de los Lebarón en Chihuahua. También con actitudes heroicas individuales como la de Francisco Garza Tames, un empresario que prefirió enfrentar armado solo a un grupo de sicarios antes de entregarles su rancho en Tamaulipas.

Para ese momento era ya evidente la crisis generalizada de la seguridad pública en el país. Lejos de solucionar el problema, la guerra contra las drogas del entonces presidente Felipe Calderón, la profundizó aún más y acabó por convertir a México en un país de nota roja.

En 2011, la convocatoria del poeta Javier Sicilia a manifestarse en contra de la violencia, tanto la generada por el crimen organizado como la de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, desembocó en la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Al llamado del poeta se sumaron miles de ciudadanos, algunos provenientes de experiencias de resistencia a la guerra previas. Sin embargo, la convergencia no estuvo exenta de conflictos internos. La idea de hacer de ciudad Juárez, severamente castigada por esa guerra, no sólo el epicentro del dolor sino el epicentro de la lucha, generó diferencias casi insalvables dentro del movimiento.

El gobierno fue emplazado a dialogar sobre su equivocada estrategia de combate a la delincuencia organizada. El 23 de julio de 2011 se celebró el primero de estos diálogos. No obstante la contundencia de los testimonios de las víctimas, Calderón se empeñó en seguir adelante con su estrategia de muerte.

Dieciocho meses después, el movimiento había logrado visibilizar a las víctimas de la guerra y convertirlas en actores legítimos pero no alcanzó a tener la fuerza suficiente para descarrilar la política gubernamental.

Se dio así la paradoja de que un movimiento pacífico terminara abriéndole espacio a la acción de civiles armados contra los cárteles de la droga y la inseguridad pública. La documentación que el Movimiento de Sicilia acopió y difundió en la sociedad, su diagnóstico del desastre, hizo que el alzamiento de los rancheros michoacanos de Tierra Caliente en febrero de 2014, encontrara, a una opinión pública dispuesta, más allá de un mar de dudas, a reconocerles razones justificadas.

Así lo reflejó la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en Michoacán a comienzos de 2014. El 58 por ciento de los entrevistados avala que las autodefensas actúen mientras los gobiernos no garanticen la seguridad. El 54 por ciento considera que protegen del crimen al ciudadano, ayudan a restablecer el orden y las tareas de la policía. En cambio solo 3 por ciento piensa que defienden a los criminales. Dato por demás interesante.

Contradictoriamente uno de cada tres michoacanos tiene una opinión buena o muy buena de esos grupos, contra 37 por ciento con opinión mala o muy mala. La mitad de los encuestados creen que, en un balance general, los civiles armados son perjudiciales.

Medio estado de Michoacán asume que los narcotraficantes están detrás de ellas. Otra mitad piensa que son los gobernantes quienes las respaldan.

Nacidas originalmente de la confluencia de intereses de los grandes agricultores privados, del Ejército y, muy probablemente, de cárteles rivales de los Caballeros Templarios, las autodefensas michoacanas se transformaron muy rápidamente en una movilización social armada, con fuerte contenido popular. Al calor de ella, la reivindicación de autodefensa indígena en la entidad se recompuso. Aunque nunca han sido un movimiento contra el gobierno, una parte de sus integrantes parecen no estar dispuestos a disciplinarse incondicionalmente a los dictados de las autoridades.

Las autodefensas michoacanas se convirtieron, en los hechos, en un ejército informal. No sólo defendieron sus municipios sino que emprendieron ofensivas milita-

res sobre el territorio controlado por los Templarios. Hasta que se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para la administración de Enrique Peña Nieto. Las quejas en su contra de organismos empresariales internacionales y del mismo gobierno de Estados Unidos obligaron a las autoridades a intentar desmantelarlas.

Sin embargo, los intentos gubernamentales por desarmarlas y desmovilizarlas se han topado con múltiples obstáculos. Las presiones oficiales para que lo hagan han incluido detenciones y campañas de satanización de los líderes pero no han tenido mucho éxito. Aunque formalmente la entrega de las armas fue pactado con una parte del autodefensas, y hasta se realizó el 10 de mayo una ceremonia oficial en la que se anunció su integración a una Fuerza Rural, se mantienen retenes y combates. No exhiben sus armas como en el primero momento pero de que las conservan, las conservan.

La experiencia michoacana disparó en casi la tercera parte del territorio nacional la formación de grupos similares. Se produjo una verdadera efervescencia de asociaciones de civiles armados para enfrentar la inseguridad pública. El debate nacional escaló a niveles inusitados. Curiosamente, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia se convirtió en un verdadero cruzado contra las autodefensas. En lugar de defender las violaciones de los derechos de los individuos por el Estado, el Ombudsman se dedicó a hacer una campaña nacional contra las policías comunitarias y las autodefensas.

A pesar de ello, las autodefensas siguen actuando y surgiendo en los más diversos rincones del país.

UNA DISTINCIÓN NECESARIA

Aunque frecuentemente se piensa que son lo mismo, en realidad policías comunitarias y grupos de autodefensa son cosas distintas. Como lo ha explicado el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, “las policías comunitarias son una realidad en todo el país, tienen historia y son de diversos tipos. En el norte del país, por ejemplo, existen las guardias tradicionales de los pueblos seri y yaqui, con una estructura militar, producto de la influencia jesuita sobre ellos, pero también de las largas luchas que el Estado mexicano les declaró en el siglo XIX. Por el sur del país existe la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto. Se trata de estructuras de los pueblos indígenas forjadas a través de los años, de acuerdo con las circunstancias que les ha tocado vivir. Junto con ellas existen las policías comunitarias de las comunidades, que año con año son nombradas por los pueblos de entre sus mismos integrantes para que se encarguen de su seguridad. Se trata de prácticas milenarias.”

En cambio, las autodefensas son grupos de ciudadanos armados que buscan defenderse de las agresiones de la delincuencia organizada y los abusos policíacos. Sus integrantes no son nombrados por sus pueblos y no les rinden cuentas de sus acciones. Usualmente carecen de reglamentos o principios de funcionamiento.

Éstos, a su vez, debe diferenciarse de las *guardias blancas*, los *escuadrones de la muerte* y los paramilitares, todos ellos distintos entre sí. Las *guardias blancas* son grupos de pistoleros al servicio de finqueros. Latifundistas o gran-

des agricultores; actúan bajo sus órdenes. Los *escuadrones de la muerte* son grupos clandestinos que operan sobre todo en el medio urbano, amenazando y atacando a activistas populares y defensores de los derechos humanos, y usualmente están cohesionados por ideologías anticomunistas, e integrados por elementos de las fuerzas públicas.

Los grupos paramilitares, en cambio, son una red de pequeños ejércitos irregulares que cuentan con mandos, integrados por indígenas y campesinos pobres, reclutados en comunidades beneficiarias de las redes clientelares del priísmo tradicional, entrenados y financiados en una especie de *joint venture* por las fuerzas de seguridad pública y los grupos de poder local, cuyo objetivo central es tratar de frenar la expansión de la organización campesina e indígena independiente.

Su surgimiento, más allá de factores endógenos, proviene de una decisión estratégica del poder. A diferencia del Ejército o las policías, los paramilitares no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan a cualquier escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como “víctimas”. Son el instrumento para hacer la guerra que el Ejército federal no puede hacer directamente, para tratar de frenar la expansión de la insurgencia.

A nivel nacional, la acción de las policías comunitarias en pueblos originarios se apoya en el artículo segundo constitucional, que les garantiza — así sea de palabra — el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural; a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución

de sus conflictos internos, y a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. En el terreno estatal, — en entidades como Guerrero — cuenta con normatividades que legitiman su existencia.

Pero la cobertura legal para su existencia proviene también de la legislación internacional, en la que se reconoce la existencia de pueblos indígenas y algunos derechos colectivos, entre ellos el de la libre determinación, expresada como autonomía, y como parte de ésta reconoce su propio gobierno, establecido de acuerdo con sus propias normas.

Enfrentado a la amarga noticias de la existencia de guardias comunitarios en su estado, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, respondió tratando de ridiculizarlos. “Que tres cuates se tomen una foto en una sala-, encapuchados, con un bate, y digan que son una guardia comunitaria, por favor, eso es una vacilada. No tiene ningún efecto legal ni jurídico. (Esa información) tiene el mismo efecto que una foto de tres personas disfrazadas de Batman, Blue Demon y la Mujer Maravilla”, dijo en plan de burla.

Ciertamente, los indígenas y campesinos que se levantaron para hacerse cargo de su seguridad y la de sus pueblos no son superhéroes sacados de una tira cómica. Están muy lejos de contar con superpoderes para enfrentar a los delincuentes que los agreden. Son, sin embargo, algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más poderoso: son hermanos en armas. De ellos trata este libro.

II) RENACIMIENTO EN EL MUNDO MAYA ZAPATISTA

EL EZLN Y LAS AUTODEFENSAS

Escueto, el comunicado preguntó: “¿Escucharon?”, para responder a continuación: “Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”.

El 21 de diciembre de 2012, fecha del 13 Baktún maya, más de 40 mil rebeldes mayas zapatistas ocuparon pacíficamente y en silencio cinco ciudades chiapanecas. Tenían tiempo de no hacerlo. Poco más de un año y medio. Para ser precisos, desde que el 5 de mayo de 2011 marcharon 20 mil de ellos en San Cristóbal de las Casas, para apoyar la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia, convocada por el el poeta Javier Sicilia.

Esas mismas calles los habían visto desfilar armados y en plan de guerra el 1 de enero de 1994. Más que una reaparición, la jornada zapatista del fin del Baktún fue una

forma de reafirmar su vigencia. Después de todo no puede reaparecer lo que nunca se ha ido.

Fundado en 1983, el EZLN ha estado actuante desde hace más de 30 años. Nunca se ha ido. Durante diez años creció bajo la hierba; en 1994 se dio a conocer públicamente. Desde entonces ha hablado y guardado silencio intermitentemente, pero nunca ha dejado de hacer. Una y otra vez se ha decretado su desaparición o su irrelevancia, pero siempre ha resurgido con fuerza y con mensaje.

Apenas tres semanas antes de la movilización, Enrique Peña Nieto había ocupado la silla presidencial. El regreso del PRI a Los Pinos marcó el fin de un ciclo de la lucha política y la apertura de otro. Con su movilización masiva el 21 de diciembre de 2012, el EZLN anticipó muchas de las cosas que sucederían en el país en los años siguientes. De alguna manera anunció el derrumbe y resurgimiento de dos mundos al que su comunicado aludió.

Ese año, las luchas se encontraron con nuevos entornos, diferentes a los fijados por 12 años de administraciones panistas. El más obvio de ellos fue el regreso a Palacio Nacional no sólo del viejo dinosaurio priísta, sino de una de sus facciones más duras: el grupo Atlacomulco y sus modos autoritarios de ejercicio del mando estatal. Otro fue, la pretensión de conducir la conflictividad social a partir del Pacto por México, un acuerdo entre las dirigencias de los tres partidos políticos mayoritarios que excluye a los mexicanos de a pie. Uno más fue la promoción de un programa de combate a la pobreza, la Cruzada contra el Hambre, claramente inscrito en una política de contrainsurgencia. La reorganización de la izquierda partidaria, con la formación

de Morena fue otro más. Finalmente, la emergencia de nuevos movimientos sociales, y el surgimiento y beligerancia de asociaciones civiles armadas nacidas para resistir el despojo, enfrentar la inseguridad pública y hacer justicia, son una de las claves básicas de la nueva etapa.

Esta irrupción de una constelación de policías comunitarias y grupos civiles armados en casi la tercera parte de la geografía nacional no fue ajena al zapatismo. No porque los rebeldes las hayan auspiciado ni conducido sino por otras razones. Primero, porque su existencia misma y la continuidad de su proyecto autonómico sentó un precedente y una inspiración para muchos de quienes emprendieron ese camino. Segundo, porque su impulso a la lucha indígena abrió un espacio de legitimidad a las reivindicaciones étnicas y las dotó de un horizonte de lucha novedoso, en el que las tareas de seguridad y justicia son relevantes.

El autoreconocimiento rebelde como una fuerza guerrera y guardiana ha sido explícita a lo largo de su vida pública. Durante la Marcha del Color de la Tierra en marzo de 2001, el subcomandante Marcos explicó al Congreso Nacional Indígena reunido en la comunidad de Nurío, Michoacán, su visión de sí mismos y de su origen: “Nosotros —dijo allí— venimos de una raza de guerreros. De los antiguos mayas es la sangre que nos corre. Es ella quien nos vive y arma. Nosotros somos guerreros.

“Somos los últimos de una generación de hombres y mujeres cuya encomienda colectiva ha sido ser guardián y corazón de nuestros pueblos. Guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada”.

En distintos momentos, también, los insurgentes han expresado su apoyo a las comunidades indígenas que han emprendido la ruta de la autodefensa. Sin embargo, esto no implica que sean lo mismo. Lo que distingue, entre otras cosas, la experiencia zapatista de autodefensa de otras autodefensas es que la suya forma parte de un ambicioso y radical proyecto de transformación social desde abajo que tiene en la construcción de la autonomía su estrella polar.

Con el zapatismo arrancó un nuevo ciclo de luchas de autodefensas campesinas e indígenas en el país. La formación de la CRAC en Guerrero estuvo profundamente influida por la insurrección rebelde. El Manifiesto de Ostula, acordado en 2009 en Michoacán, en el que se reivindica el derecho a la autodefensa indígena, tiene el sello de agua de los insurgentes del sureste mexicano. La dinámica adquirida por las autodefensas michoacanas sería impensable sin lo sucedido en Chiapas años atrás.

Por supuesto, la historia de las autodefensas campesina en el campo mexicano no empieza ni termina con el EZLN. Muchos años antes de la sublevación chiapaneca y en las más diversas regiones, la lucha contra guardias blancas de ganaderos y pistoleros al servicio de caciques y hacendados obligó a diversos núcleos campesinos organizados a tomar las armas para defenderse de las agresiones que sufrían. La misma guerrilla de Lucio Cabañas tuvo en sus inicios un fuerte componente de autodefensa.

Sin embargo, el zapatismo representa en el terreno de la autodefensa un parteaguas.

En una entrevista publicada en *La Jornada* entre el 4 al 7 de febrero de 1994, el subcomandante Marcos le con-

tó a Blanche Petrich y a Elio Henríquez, que más allá de ser desde sus orígenes una organización político-militar que buscaba la transformación revolucionario del país, “el EZLN nació como un grupo de autodefensa”. Una fuerza que los indígenas hacen suya “enfrentados a un grupo armado muy prepotente que es la guardia blanca de los finqueros que les quitan la tierra y los maltratan, y limita el desarrollo social y político de los indígenas.

“Luego los compañeros —añadió Marcos en su narración— vieron que el problema no era el de la autodefensa de una comunidad, o de un ejido, si no que era necesario establecer alianzas con otros ejidos, con otras comunidades y comenzaron a hacer contingentes militares más grandes, pero todavía con la idea de la autodefensa. Hubo un estancamiento hasta que el supremo gobierno tuvo la brillante idea de reformar el 27 y ese fue un poderoso catalizador en las comunidades. Esas reformas cancelaron toda posibilidad legal de tener tierra, que era lo que finalmente los mantenía como grupo armado de autodefensa”.

Finalmente, concluyó, “llegó el fraude electoral del 88 y ahí los compañeros vieron que tampoco el voto servía porque no se respetaba lo que era evidente. Estos dos fueron los detonantes, pero a mí se me hace que lo que más radicalizó a los compañeros fue la reforma al artículo 27, eso fue la puerta que se les cerró a los indígenas para sobrevivir de manera legal y pacífica. Por eso se alzaron en armas, para que se les oyera, porque ya estaban cansados de pagar una cuota de sangre tan alta”.

ABSALÓN Y LA JUSTICIA ZAPATISTA

Wolonchán ocupa un lugar destacado en la geografía de la ignominia chiapaneca. En 1980, en esa comunidad enclavada el municipio de Sibacá, el Ejército masacró a un grupo de campesinos. Por lo menos 12 de ellos fueron asesinados e incinerados. El general Absalón Castellanos Domínguez era el jefe de la 31 Zona Militar. Nieto de don Belisario Domínguez, entre 1981 y 1988 gobernó el estado e hizo que la represión se intensificara y sus propiedades crecieran.

El 3 de enero de 1994 los zapatistas lo tomaron prisionero en su rancho "El Momón". El General fue sometido junto a René Rodríguez, su guardaespaldas y chofer, por centenares de milicianos insurrectos, muchos de ellos peones de sus ranchos, o hijos de ellos. Durante unas horas, el casco de la antigua hacienda familiar, se convirtió en su prisión. Más adelante, fue trasladado a las bodegas de una organización cafetalera en el municipio de Las Margaritas, y luego rumbo a La Realidad.

Juzgado por un tribunal popular el 13 de enero, por hechos como la masacre de Wolonchán, pero también por muchas otras barbaridades más, Absalón Castellanos Domínguez fue encontrado culpable de haber orillado a la población indígena chiapaneca a alzarse en armas "en contra de las injusticias, al cerrarle todo camino legal y pacífico para sus justas demandas durante el periodo en que se desempeñó como titular del Ejecutivo estatal en Chiapas", además de los delitos de violación a los derechos humanos indígenas, robo, despojo, secuestro, corrupción y asesinato.

A pesar del tamaño de los agravios infringidos, la resolución rebelde lo condenó a vivir "hasta el último de

sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó”.

Días después de su aprehensión, el EZLN entregó al preso al Comisionado para la Paz, Manuel Camacho, en la comunidad de Guadalupe Tepeyac. El mayor Moisés informó: “He venido a entregar al prisionero de guerra, que es el general Absalón Castellanos Domínguez, un distinguido miembro del Ejército, por haber gobernado seis años a Chiapas”. El reo estaba sano y sin heridas.

El juicio y castigo al general Castellanos Domínguez fue el primer acto de ejecución de justicia zapatista hecho público. Lo insólito de la condena y la espectacularidad de la ceremonia de entrega provocó un gran impacto en el mundo indígena

EL BAKTÚN

Con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 en las élites mexicanas comenzaron a soplar aires similares a los que corrían hace 20 años, cuando Carlos Salinas de Gortari se sentía invencible. Su proyecto para reformar México de manera autoritaria y vertical a costa de lo que fuera, comenzando por el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, avanzaba sin mayores obstáculos. Su publicidad lo presentaba como la superación de mitos y atavismos históricos. Según él, había puesto ya los cimientos de su poder transexenal. Sus índices de aprobación en la opinión pública se encontraban por las nubes.

La reforma al artículo 27 constitucional, que privatizó el ejido y abrió el paso a la concentración de la tierra

en el campo, se aprobó sin mayores contratiempos. Lo mismo sucedió con la modificación del artículo 130, que concedió derechos políticos al clero. Al firmar el Tratado de Libre Comercio se anunció una era de abundancia, progreso y bienestar.

El salinismo se creyó eterno. No había más reformas que la suyas. No tenía frente a sí una oposición capaz de resistir su embate. El PRD perdió abrumadoramente las elecciones intermedias de 1991, y más de 300 de sus militantes fueron asesinados. Era tanta la soberbia presidencial, que hasta el nombre del país se quería modificar, argumentando que los organismos financieros internacionales identifican al país como México, y el TLCAN fue firmado con este nombre.

El surgimiento del EZLN en enero de 1994 trastocó drásticamente ese panorama. Su alzamiento descarriló el proyecto trasaxenal del salinismo, dinamitó el presidencialismo autoritario, puso en el centro de la agenda pública la cuestión indígena, desenmascaró como una farsa el proyecto gubernamental de combate a la pobreza, abrió espacios para que una amplia variedad de fuerzas políticas y ciudadanas bloqueadas políticamente se expandieran, obligó la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), sentó las bases para la reforma política de 1996, acabó con el reinado de los dos bloques político-culturales hegemónicos y oxigenó el debate público sobre el destino del país.

La rebelión zapatista ganó, en muy poco tiempo, una enorme legitimidad social, que le fue reconocida política y jurídicamente, primero en los Diálogos de la Catedral, y después en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz

digna en Chiapas. Esa adhesión a su causa no fue ajena a los devastadores efectos de las reformas modernizadoras del salinismo entre amplios sectores de la población. Muchos damnificados vieron a los insurgentes como sus vengadores. Los mismos rebeldes justificaron el levantamiento armado, en parte, en la contrarreforma al 27 constitucional y la firma del TLCAN.

El surgimiento del zapatismo no frenó el ciclo de reformas neoliberales, pero sus promotores se vieron obligados a retardarlas. Aunque hizo evidente una crisis de representación política en la que la sociedad no cabe en el régimen, y fue un factor real para empujar la alternancia política, no tuvo la fuerza suficiente para limitar la partidocracia. Tampoco pudo ocupar un lugar permanente en la mesa política nacional. Los grandes jugadores no se lo permitieron.

Esto fue palpable en al menos tres ocasiones distintas. Primero, en 1996, con el incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés y la firma de los acuerdos de Barcelona, mediante los cuales se pactó una nueva reforma política que propició un reparto real del poder entre los tres principales partidos. Esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política, dejó fuera de los espacios institucionales a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y conservó prácticamente intacto el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.

Segundo, en 2001, en lo que es el antecedente del actual Pacto por México, PRI, PAN y PRD votaron unificados en el Senado una caricatura de reforma indígena que

convirtió en letra muerta los Acuerdos de San Andrés, cerrando la posibilidad de que el EZLN y sus aliados se insertaran en la vida política nacional de otra manera.

Y, tercero, a mediados de 2005 y a lo largo de 2006 el zapatismo impulsó, a través de la otra campaña, una iniciativa política no partidaria, no electoral, que puso en el centro la participación popular para promover, desde abajo y a la izquierda, un proceso de cambios políticos de corte anticapitalista. El proyecto fue bloqueado por la represión gubernamental a los habitantes de San Salvador Atenco y la incomprensión de sectores de la izquierda institucional.

Pero sin su visión de autodeterminación indígena y de su defensa armada recorrió de un lado a otro el país generando una enorme influencia.

PRUEBAS DE FUEGO

El 14 de febrero de 2014, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) anunció en Chiapas la formación de grupos de autodefensa. El 2 de mayo, sus integrantes asesinaron con arma de fuego y machetes al maestro José Luis Solís López, zapatista de la comunidad La Realidad, e hirieron a 15 rebeldes más.

En febrero, los cioaquistas informaron públicamente su acuerdo de armar sus autodefensas. Dijeron que lo hacían para garantizar la seguridad e integridad de su organización y sus dirigentes. “Queremos – señalaron – que se cree un clima de defensa.” Lo hicieron por boca de José Dolores López Barrios, su secretario de organización nacional. Lo divulgaron en su boletín con el nombre de Declaración de la C Región III Fronteriza

El 2 de mayo, apenas dos meses y medio después de hacer pública su decisión, la banda de los Luises (como se conoce a los cioaquistas por los nombres de pila de sus dirigentes) emboscó a José Luis y a sus compañeros. Sus miembros en La Realidad dispararon contra él una bala calibre 22 en la pierna derecha y otra en el pecho, le propinaron un machetazo en la boca, garrotazos en la espalda y lo remataron con un tiro de gracia atrás de la cabeza. No fue sólo salvajismo. El crimen colectivo fue la forma en que los paramilitares sellaron un pacto de impunidad.

El homicidio del zapatista *Galeano* (como lo nombran sus compañeros) fue una agresión alevosa y premeditada, planeada, orquestada con lógica militar, y ejecutada con sevicia. Estuvo antecedida por la destrucción de una escuela y una clínica, y el robo de un camión. Fue una emboscada, una turbamulta paramilitar.

En el homicidio participaron militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Acción Nacional (PAN), herencia de la labor contrainsurgente de Luis H. Álvarez en la región.

No se trata de un hecho aislado, sino del último eslabón de una cadena de agresiones hacia los zapatistas por organizaciones campesinas ligadas al gobierno, tales como las distintas Cioac, la Orcao, la Oruga, la URPA y un mar de siglas más. Es una provocación en el corazón de un lugar emblemático para el EZLN: el *caracol* de La Realidad. Es un golpe artero en un momento en que los rebeldes estaban activamente comprometidos en la rearticulación del movimiento indígena nacional.

La agresión contra los zapatistas no es una novedad. Hace ya muchos años que la Cioac-Histórica ha pacta-

do todo tipo de compromisos con los distintos gobiernos de Chiapas. Su relación con Juan Sabines, el anterior mandatario que sigue moviendo hilos en el estado, fue excepcionalmente buena. Tanto así que él mismo lo reconoció públicamente al final de su periodo. “Lo que yo refrendo – dijo en diciembre de 2012 – es mi admiración a la organización, mi cariño personal a la Cioac, mi gratitud por el respaldo recibido como candidato y después como gobernador, hasta el último día. Valoro mucho ese gesto, en mí tendrán siempre un amigo, un aliado”.

Ligada al PCM, al PSUM y al PMS, integrada por catequistas comprometidos con sus pueblos, promotora en Chiapas de la lucha por la tierra, la sindicalización de jornaleros agrícolas y la organización de productores de café, promotora de grandes movilizaciones en algunas regiones del estado, la Cioac entró en 1994 en un profundo proceso de descomposición.

El levantamiento del EZLN la fracturó. Muchas de sus bases la abandonaron para sumarse a las filas rebeldes. Buena parte de sus dirigentes se volvieron funcionales a las necesidades del gobierno. La organización dejó de lado sus antiguas ideales y se transformó en un aparato rural clientelar y corporativo, dedicado a negociar proyectos gubernamentales y buscar posiciones políticas.

La Cioac ha sufrido en Chiapas gran cantidad de rupturas, provocadas por la ambición de sus líderes. Las peleas entre ellos han sido, literalmente, a balazos y golpes. Con el nombre Cioac, pero con distintos apellidos, existen varias organizaciones: Histórica, Democrática, Independiente, Nueva Fuerza, Autónoma Región Quinta Norte

Zoque-Tzotzil, más las que se acumulen en la rebatiña por la paga y los favores gubernamentales.

Aliada con un grupo de empresarios que rompió con el PRI y que se bautizaron como Auténticos Margaritenses, los dirigentes que conducen la Cioac-H ganaron la alcaldía de Las Margaritas (el municipio constitucional en el que se encuentra el *caracol* de La Realidad) en 2001, en tres ocasiones seguidas.

Uno de sus dirigentes históricos, Alberto Alfaro, le resumió el proceso de claudicación y descomposición moral de la organización en Chiapas al investigador Guillermo Trejo (*Popular movements in autocracies: religion, repression, and indigenous collective action in México*): Todo mundo se volvió corrupto. Antonio Hernández, otro de sus líderes originales, le confesó: No hay más movimientos sociales en Las Margaritas, sólo hay maquinarias políticas. La democracia se ha convertido en un negocio en el que se cambian votos por recursos.

Sumergida sin escrúpulo alguno en el negocio de transar con el gobierno favores políticos por recursos económicos y prebendas, la Cioac-H y sus paramilitares disfrazados de autodefensas acordaron golpear al EZLN, sin importarles el tirar por la borda un legado de grandes luchas campesinas.

¿Cómo enfrentaron los zapatistas el asesinato de su compañero? Por principio de cuentas, esperaron a que sus bases de apoyo solicitaran su intervención directa. “El EZLN —explicó el subcomandante Moisés— no se puede meter así nomás por su gana en las comunidades y gobiernos autónomos” porque “sólo puede entrar en un asunto

Hermanos en armas
de las comunidades zapatistas si es que las autoridades
autónomas lo piden”.

Simultáneamente, realizaron una documentada investigación de los hechos que hicieron pública. Vieron en el asesinato de José Luis Solís López una grave advertencia de lo que se les viene encima. Y, para enfrentarla, convocaron a la solidaridad internacional y la movilización de sus bases de apoyo y redes de simpatizantes en una ceremonia luctuosa.

III) PAÍS DE NOTA ROJA

SAGA SANGRIENTA

México se ha convertido en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es un hecho. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.

No es que los medios de comunicación exageren para pelear por la audiencia o para vender más ejemplares. Las primeras planas de los periódicos reproducen, lisa y llanamente, lo que acontece en las plazas públicas y en los sótanos del país. No inventan, reflejan. La prensa no es hoy más amarillista o escandalosa de lo que era hace unos años. Es la realidad la que se ha modificado y ha hecho de las acciones criminales un asunto cotidiano. Los medios no pueden ignorar este hecho. La prensa construye una realidad a la medida de su público, no la inventa.

La detención de Elba Esther Gordillo y su traslado a la cárcel de Tepepan, balaceras interminables, la captura

del Chapo, grupos de autodefensa en acción, por citar algunos eslabones de la cadena, son realidades, no invenciones mediáticas. Como lo son, con toda su elocuencia dramática, los cadáveres colgados en un puente en Cuernavaca; las cabezas cercenadas que regularmente aparecen en Guerrero y otros lugares del país; las *narcomantas*; la *ejecución* de cantantes famosos a los que se relaciona con *cárteles* de la droga; el asesinato de 16 muchachos en una fiesta en Ciudad Juárez, o la muerte del estudiantes del Tec de Monterrey.

Escribió Jorge Ibargüengoitia (*En primera persona: nota roja*): “Leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni sentirme morboso. Creo que todas las noticias que se publican son las que presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo y ciertos aspectos del ser humano que para el hombre común y corriente son en general desconocidos; además siento que me tocan de cerca”.

Al contar lo que sucede en México como un país de nota roja, los medios están describiendo, con toda crudeza, el panorama moral de nuestro tiempo y nuestro país. La historia de la administración de Felipe Calderón se contó desde la nota roja de los periódicos y no en los artículos y discursos de sus publicistas oficiales. Algo parecido está sucediendo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque trate de ocultarse la realidad de la violencia maquillando cifras sobre delitos. El sexenio del primero pasó a la historia como el del Ejército en las calles, los miles de asesinados, las violaciones a los derechos humanos y la inseguridad pública. El del segundo, será recordado como el de la entrega del petróleo a los inversionistas extranjeros, el hun-

dimiento de la economía y la expansión de autodefensas y policías comunitarios.

En su libro *Terribilísimas historias de crímenes y horrores en la ciudad de México en el siglo XIX*, Agustín Sánchez cuenta cómo la nota roja del siglo XIX nos habla de la nación de la derrota, de la venganza, de la frustración, reflejadas en el robo, el asesinato, el suicidio. De la misma manera, en sus informaciones diarias, la prensa de hoy nos cuenta el drama de la descomposición política y económica de sus elites. Es sus páginas están narrados el dolor y el drama de los ciudadanos de a pie, la intriga y el odio de las cúpulas del poder, el grado de corrupción cívica.

De cuando en cuando, desde el poder se ensayan maniobras para contener daños. Cuando a comienzos del sexenio de Calderón comenzaron a agolparse los cadáveres y el papel de las rotativas se llenó de sangre, operadores gubernamentales trataron de convencer a los directivos de los medios de la inconveniencia de decir que los muertos habían sido *ejecutados*. La iniciativa hizo agua a los pocos días. Años después, Peña Nieto apostó por cambiar la narrativa. Sus consejeros quisieron sacar el tema de los medios de comunicación. Las autodefensas lo metieron por la ventana.

El presidente Felipe Calderón trató de presentar el problema de la gravedad de la violencia como un asunto de percepción y no de hechos. Según el gobierno y sus intelectuales, los medios divulgaban la existencia de los corceles del Apocalipsis trotando por el país, pero las catástrofes no existían realmente, no, al menos, en la magnitud en la que se reportaban. Y, con todos los recursos a su alcance, pro-

curaron construir consensos para que los medios moderaran su cobertura. El renegado ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, asesor de la administración calderonista, se encargó, desde las páginas de la revista *Nexos*, de leerle la cartilla a quienes desde los medios informativos alertaron sobre el fracaso de la estrategia gubernamental del combate a las drogas. La realidad se encargó demostrarle que más que como analista trabajaba de publicista. Enrique Peña Nieto apostó por el apagón informativo alrededor del clima de inseguridad pública. Pero su estrategia naufragó. Una vez tras otra, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido sobre los graves riesgos de viajar a distintas ciudades del país. Regularmente, la prensa de ese país publica reportajes estremecedores sobre lo que acontece en México. Y hasta los canales de televisión difunden imágenes que los operadores de Los Pinos desearían que nunca se hubieran proyectado.

En la lógica de las últimas dos administraciones, el siguiente paso será emular al Congreso de Rumania, que aprobó que la mitad de las noticias difundidas por los medios debían de ser positivas. O, quizás, promover la publicación de un periódico quincenal como el estadounidense *Good News*, que se negaba a divulgar malas noticias. *Good News* apareció sólo 16 meses y, por supuesto, rechazó informar sobre su fracaso. La cabeza de su último número decía No se declaró ninguna guerra en 16 semanas.

México se ha convertido en el país de una nota roja que es retrato fiel de la decadencia de sus elites económicas y políticas. Que a esas elites no les guste verse reflejados cada mañana en el espejo de la prensa es explicable. Lo

que es inadmisibles que los diarios renuncien a funcionar como espejos que reflejen la descomposición del país.

LA MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Vicente Fox comenzó su sexenio en el año 2000 con una fiesta popular. Felipe Calderón inició el suyo en 2006 con una parada militar. No fue una casualidad. Lo que sobresalió de su mandato fue su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las Fuerzas Armadas como telón de fondo.

El 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública en ese año, el jefe del Ejecutivo se hizo retratar con uniforme de campaña, con una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional. Cuatro meses más tarde, el 8 de mayo, en el mismísimo Apatzingán, la foto era una continuación de la del 3 de enero: elementos del ejército, utilizando vehículos blindados y lanzagranadas, se enfrentaban con presuntos narcotraficantes.

El discurso de endurecimiento de Felipe Calderón quiso mandar mensajes de dominio y disciplina. Acosado por manifestaciones ciudadanas que impugnaron su triunfo, el presidente intentó romper su aislamiento social y carencia de legitimidad utilizando como pretexto la guerra al narcotráfico. Con el apoyo de los poderes fácticos que lo hicieron mandatario, desde el inicio mismo de su administración convirtió al Ejército su principal sostén.

Felipe Calderón hizo de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno. El combate al crimen organizado le proporcionó a su mandato una vía de legitimación que

las urnas le negaron. La militarización de la política le dio las herramientas para administrar el país con medidas de excepción. La politización de la seguridad pública le facilitó recomponer la cadena de mando-obediencia.

De la misma manera en la que el 11 de septiembre de 2001 le permitió a George W. Bush intentar hacer de la guerra el poder constituyente de un nuevo orden neoconservador, la batalla contra los *cárteles* de la droga possibilitaron al jefe del Ejecutivo mexicano tratar de afianzar y perpetuar su gobierno. Pero, en lugar de enviar tropas a Irak y Afganistán, el mandatario mexicano las sacó de sus cuarteles para tomar posiciones dentro del territorio nacional.

Desde entonces, el Ejército está en las calles de muchas localidades del país, desempeñando funciones que no le corresponden. Ha establecido retenes, toques de queda *de facto* e inspecciones. Los mandos militares ocupan los puestos policiales.

Felipe Calderón se presentó ante los medios de comunicación como el comandante en jefe de una gran cruzada nacional. La propaganda nacional lo hizo ver como el defensor de las familias mexicanas. Sus desplazamientos por el país fueron organizados con el mayor sigilo. Sus actos públicos fueron encapsulados por elementos del Estado Mayor Presidencial. La fuerza pública acalló las demandas o protestas en su contra.

Sin embargo, su guerra fue un fracaso. Según Jorge Carrillo Olea, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el jefe del Ejecutivo “abrió una guerra sin información, sin plan y sin cálculo de consecuencias. No sabe adonde ir ni como ejercer el mando; no ha tenido

la capacidad para controlar sus huestes. Las bases, mandos básicos y medios de las fuerzas armadas están en un estado de ánimo bajísimo y una situación moral deplorable. Tienen miedo a cumplir misiones inexplicadas y sin objetivos claros. El solitario de Palacio — dice — “vive su propio Vietnam, sordo y solitario.”

A corto plazo, la politización de la seguridad pública le acarrió al jefe del Ejecutivo saldos positivos. Las encuestas le reconocieron niveles de aceptación razonables. Las violentas expresiones de descontento social que se vivieron durante 2006 se acotaron. Sin embargo, a final de cuentas terminó perdiendo las elecciones.

Entre las primeras bajas de la guerra en que se sumergió al país se encuentran los derechos humanos. El marco jurídico fue transformado en despecho de éstos. En la macabra cuenta de descabezados, cadáveres insepultos y *pozoleros* que se registraron cada día, el asesinato de líderes sociales apenas contó. La criminalización de la protesta social avanzó cada día.

No le importó al jefe del Ejecutivo que al militarizar la política la haya desgastado y degradado. Le tuvo sin cuidado que en plena crisis económica, con la producción nacional estancada, el desempleo creciendo y la válvula de escape de la migración hacia Estados Unidos atascada, el país se bañara en sangre. Su salida fue decretar una guerra santa y asumir el papel de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Al hacerlo precipitó una verdadera emergencia nacional.

Allí convergen el descontento social, el impacto del narcocapitalismo, la devastación rural que facilita el creci-

miento del narcotráfico, la desbocada adquisición de armas de fuego por parte de particulares, la incubación del rencor social y la emergencia de grupos de autodefensa armadas y de heroísmo individual. Ciudades enteras como Juárez se transformaron en el epicentro del dolor y en territorio de múltiples resistencias.

El resultado final de esta explosiva mezcla fue tanto el surgimiento de movimientos ciudadanos para frenar la guerra contra las drogas de Calderón, como la germinación de policías comunitarias y autodefensas armadas en, al menos, una tercera parte del territorio nacional.

EL DESCONTENTO SOCIAL

Más de lo mismo, pero peor. Así se resume la posición que Felipe Calderón asumió frente a los graves problemas sociales que parece al país. Durante los últimos meses de su administración, Vicente Fox quiso suplir su desconcierto ante la creciente rebeldía social con el uso de la fuerza pública. Con acciones relámpago, en nombre del Estado de derecho, la firmeza y el uso legítimo de la violencia, se reprimió a movimientos novedosos como el de los mineros de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Atenco y la sublevación oaxaqueña.

Felipe Calderón mantuvo esa misma política que, lejos de solucionar los conflictos, la complicó más. Embistió con toda la fuerza del Estado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Llegó al extremo de perseguir a Napoleón Gómez Urrutia, líder de los metalúrgicos. En muchos casos la población enfrentó indignada a la fuerza pública y, lejos de atemorizarse, se mantuvo en lucha.

La ofensiva gubernamental contra las disidencias sociales pareció no tomar en cuenta que una nueva conflictividad sacude al país. Los síntomas son claros. Han aparecido una multiplicidad de nuevos actores. Los métodos de lucha de las organizaciones populares se han radicalizado al tiempo que los problemas se multiplican. Los canales institucionales para atender sus demandas han sido frecuentemente desbordados. La lógica de la autodefensa forma parte de esta nueva conflictividad.

Los desplantes autoritarios de dos sexenios panistas respondieron, en parte, al gran temor que estas luchas desde abajo provocan en los sectores acomodados. Desde que a raíz de la Marcha del Color de la Tierra del EZLN en marzo de 2001, el ideólogo empresarial Juan Sánchez Navarro recomendó a los suyos encerrarse ante el empuje del *pobrerío*, en las clases pudientes hay miedo. Para su gusto, hay demasiado desorden y en lugar de aplicar la ley se negocia con los inconformes.

Esta nueva conflictividad social tiene un punto de arranque en 1999 al desarrollarse una intensa lucha social que enfrentó con relativo éxito las políticas gubernamentales de privatización. En esa fecha la sociedad civil se hizo pueblo y las demandas ciudadanas se reciclaron en lucha de clases. Por supuesto siguen desarrollándose luchas cívicas e identitarias, pero la mayoría de ellas se expresan en clave clasista. El protagonismo de las ONG y las organizaciones ciudadanas dio paso a la acción de organismos gremiales y profesionales. El afán de avanzar en las propuestas se transformó en un retorno a la protesta. Surgieron grandes expresiones gremiales de resistencia, movimientos de base

“feos” para el mundo de la política formal y una multitud de luchas locales contra el despojo. A diferencia de otros tiempos, una parte de esas movilizaciones han sido parcialmente exitosas. Comenzaron a emerger así expresiones de autodefensa popular armada.

Desde entonces se ha producido una tenaz movilización social. Centenares de protestas de indígenas, campesinos, trabajadores, pobres urbanos, mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas han surgido en todo el país enarbolando diversas demandas. Algunas, incluso, han decidido darse sus propias formas de gobierno. Estas luchas expresan el hastío hacia una cierta forma de hacer política. Está presente en su seno una tradición antipartidista y una desconfianza en la política institucional. Sin embargo, la radicalización social proviene también del entorno de la política institucional. El fraude electoral de 2006 provocó que una muy importante parte de la población que confiaba en los partidos y las elecciones se haya sumado a una dinámica de movilización antinstitucional y de resistencia civil pacífica.

Muchas de las expresiones de malestar social reciente han tomado forma de acciones de desobediencia civil. Han emprendido acciones voluntarias y públicas que violan leyes, normas y decretos porque son considerados inmorales, ilegítimos o injustos. Han hecho de la transgresión que persigue un bien para la colectividad, un acto ejemplar de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia. Aunque no son pacíficas, policías comunitarias y autodefensas tienen una línea de continuidad con esta resistencia. Son, en parte, su prosecución por otros medios.

EL ORO BLANCO

El Chapo —dice el escritor italiano Roberto Saviano— posee la autoridad mística de un papa, la misma autoridad que puede tener Obama. Su genialidad le permite ver nuevos espacios de mercado, es un Steve Jobs de la coca.

En este momento —asegura en una entrevista con la revista finanzas.com— México es el centro del mundo. Es el país que está experimentando con más violencia las contradicciones del capitalismo. México cuenta con las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias del planeta. Aquí se hacen negocios con la cocaína por valor de muchos miles de millones. El dinero se lava luego en los mejores bancos de los Estados Unidos, como han demostrado las investigaciones realizadas por las propias autoridades americanas. México es como un Estado más de los Estados Unidos, pero sin sus leyes ni sus reglas. El crimen organizado disfruta allí de todas las ventajas de los Estados Unidos, pero sin los inconvenientes, afirma el analista italiano.

México es un importante productor de drogas y un territorio de paso estratégico para su distribución en Estados Unidos. Es el principal abastecedor de mariguana y uno de los más importantes proveedores de metanfetaminas. Aunque su producción de heroína es relativamente pequeña, suministra una parte relevante de la que se consume en la Unión Americana. El Departamento de Estado estima que el 90 por ciento de la cocaína que se vende en aquel país llega a través de México. Según el Nacional Drug Intelligence Center, quienes dominan el mercado de la droga en Estados Unidos son los cárteles mexicanos.

La cocaína —explica el mismo Saviano en su libro *CeroCeroCero*— no es un negocio especulativo; es economía real, el último sector sólido en un mundo gaseoso. “La cocaína es una inversión segura. Es una mercancía que no está sujeta a fluctuaciones de la demanda, que es siempre elevada, siempre en expansión. No es especulación, es como la compraventa de oro o de petróleo. Su cultivo y su elaboración son arriesgados y es una mercancía ilegal, lo que eleva su precio”.

El narcotráfico en México ha cambiado aceleradamente en las últimas dos décadas. Los cárteles buscan hoy no sólo protección, sino también poder político. Si antes negociaban cobertura en una relación de subordinación frente a la autoridad, hoy son capaces de fijar reglas en temas económicos, sociales y políticos.

Una transformación importante en el modelo de relación entre los grandes *cárteles* dominantes de la droga, Cali y Medellín, y sus socios mexicanos, se produjo en 1989. Hasta entonces, los colombianos pagaban por protección a los mexicanos con dinero. Sin embargo, a partir de esa fecha el pago comenzó a hacerse en mercancía, esto es, en droga. Se modificó así la dinámica de operación de los mexicanos, que no tenían mucha infraestructura. La necesidad de comercializar la droga los hizo crecer. A partir de ese momento, México dejó de ser un país de tráfico para convertirse también en uno de consumo (Simón Vargas Aguilar, *¿Narcoestado o auge del narcotráfico?*)

Según una investigación de la organización no gubernamental Integridad Financiera Global y de la Universidad de Columbia en Nueva York, las ganancias del crimen

organizado en México durante 2012 oscilaron entre los 36 mil y los 38 mil 800 millones de dólares (3.6 por ciento del PIB), de los cuáles —probablemente— entre 10 mil y 14 mil 500 millones fueron blanqueados.

“La red de empresas que se dedica a blanquear dinero proveniente de las actividades del narcotráfico —señala Randal C. Archibold, corresponsal del diario estadounidense *The New York Times*— opera a plena vista de las autoridades mexicanas y su desmantelamiento es más complicado que capturar a los líderes de los cárteles”.

El dinero del narcotráfico en actividades lícitas ha provocado que diversos segmentos de la sociedad obtengan considerables beneficios. Javier Valdez Cárdenas, periodista de *La Jornada*, lo describe así: “La ciudad se mantiene a flote por el dinero del narco. Los restaurantes, los spas, los centros comerciales, las distribuidoras de autos de lujo, los condominios no corresponden a la vida diaria de los sina-loenses. Todo se debe a la presencia del narco”.

Esta fortaleza económica y política se ha acompañado en muchas regiones de la contratación de los delincuentes locales por parte de los cárteles. Junto al tráfico de drogas han crecido las extorsiones, los secuestros, los robos, las violaciones y todo tipo de abusos contra la población. Las autodefensas han surgido en muchas de esas localidades para hacer frente a la expoliación de estas redes mañosas.

PARADOJAS DE LA DEVASTACIÓN RURAL

Curiosa ironía. La principal mercancía de exportación rural, la más rentable, la que más divisas trae al país, es la

única que no fue negociada en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

La fuerza de trabajo migrante quedó fuera del acuerdo comercial. Creció enormemente a raíz de su firma. No cuenta con protección alguna. Labora en condiciones terriblemente desventajosas en relación con los trabajadores formales. Sin embargo, envía cada año de Estados Unidos, como remesas, alrededor de 21 mil millones de dólares.

La acción combinada de apertura de fronteras a la importación de alimentos, privatización y desregulación ha despoblado el agro. Según un informe del Banco Mundial, desde que México forma parte del TLCAN, el campo ha perdido la cuarta parte de su población; sin embargo, en números absolutos viven allí alrededor de 28 millones de habitantes, los mismos que había en 1994, año en que entró en vigor el Tratado.

Pero la expulsión de mano de obra sigue, de la mano de la destrucción del tejido social rural. Los jóvenes campesinos han tenido que dejar sus pueblos y sus tierras para buscar empleo en los centros urbanos o en el otro lado de la frontera. El país se ha convertido en el principal expulsor de fuerza de trabajo del mundo. La patria del Tío Sam es su principal destino.

Quienes negociaron el tratado por la parte mexicana sabían que esto iba a suceder. Según ellos, era un paso necesario para “la modernización”, pues una nación como la nuestra no podía tener 30 por ciento de su población en el medio rural. Se requería drenarla: mandarla a las ciudades.

Los tecnoburócratas aseguraron que el acuerdo comercial estimularía el crecimiento de la economía y crearía

empleos suficientes para los desterrados. Afirmaron que era más eficaz asistir a los campesinos como pobres en las grandes ciudades que hacerlo en las comunidades rurales. Dijeron que importar granos básicos y oleaginosas de Estados Unidos era bueno para México y para sus sectores más desfavorecidos, porque era más barato que producirlos aquí. Prometieron que nuestra ventaja comparativa en la agricultura semitropical –el nicho de mercado en el que somos más rentables– crearía riqueza en el campo y compensaría las compras de alimentos al exterior.

Nada de eso sucedió. La apertura comercial puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad y arrasó con los agricultores nacionales. La producción rural se modernizó muy marginalmente. La economía no creció significativamente y no se crearon los empleos suficientes. Los programas de combate a la pobreza en las ciudades y la dotación de servicios en las colonias pobres de las grandes urbes decayeron. El precio de los granos básicos en el mercado mundial se elevó y tuvimos que importarlos caros, pudiendo sembrarlos. La cosecha de productos tropicales como el café o el cacao se estancó. Nos quedamos sin autosuficiencia alimenticia y sin ventajas comparativas.

El campo se convirtió en una inmensa fábrica de pobreza que expulsa a la población más joven, escolarizada y emprendedora. Los ejidos y rancherías son estacionamientos de seres humanos en los que viven ancianos, mujeres y niños, en parte gracias a las remesas que sus familiares les mandan del otro lado.

Por supuesto, quienes negociaron o inspiraron tan desastroso acuerdo comercial para el campo mexicano están

muy lejos de haber rendido cuentas de su desaguisado. Por el contrario, fueron premiados: Luis Téllez con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este sexenio, y Santiago Levy fue nombrado director del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la administración de Vicente Fox.

Además de padecer la expulsión de sus habitantes, el agro se convirtió en territorio fértil para la siembra de estupefacientes y el lavado de dinero del narcotráfico. En las zonas de riego, donde ni la banca comercial ni la de desarrollo otorgan crédito suficiente, el financiamiento de las siembras y las cosechas de particulares se ha convertido en forma habitual de blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.

En distintas regiones de la geografía nacional el paisaje rural ofrece discontinuidades aparentemente inconcebibles. Grandes y lujosas fincas rodeadas de ejidos miserables. Comunidades llenas de antenas parabólicas y camionetas del año, al lado de rancherías paupérrimas. Poblados donde generosos benefactores, enriquecidos de la noche a la mañana, levantan iglesias y hacen obra pública. Semejantes desigualdades no pueden ser explicadas por la fortuna, un puesto gubernamental o la migración exitosa. Menos aún por el espíritu empresarial de unos y el conformismo de los otros. No son escasos los habitantes de comunidades, enclavadas en abruptas serranías, que han decidido reconvertir las siembras de granos básicos en cultivos más rentables, aunque más inseguros. No son pocos los ejidatarios norteños dispuestos a servir de *burreros* en el trasiego de pequeñas cantidades de droga al otro lado del río Bravo.

Desde hace muchos años se siembra mariguana y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Pero en los pasados 20 años esta actividad se ha intensificado.

Ciertamente, la siembra de amapola y mariguana precede y excede al libre comercio, pero éste le ha abierto posibilidades de crecimiento insospechadas a quienes se dedican al cultivo de estupefacientes. Un campesino puede obtener en una cosecha de productos “no convencionales” el equivalente a sus ingresos totales en 10 años. Más aún si debe competir con siembras altamente subvencionadas provenientes de nuestro vecino. Está en posibilidad de hacerse de un arma moderna y una camioneta, así como de tener ingresos suficientes para *pistear* a gusto.

Los campesinos y jornaleros que siembran y cosechan los plántíos son gente del campo. Una parte nada despreciable de *camellos*, *gatilleros* y operadores del *narco* son jóvenes, hijos de labriegos. Montos considerables de dinero proveniente de la droga son lavados en actividades rurales. Algunos de los grandes capos que controlan el negocio declaran dedicarse a la ganadería y poseen modernos ranchos. Inclusive varios de ellos reciben subsidios gubernamentales de programas como Procampo.

A esas expresiones de poder económico en el mundo rural les corresponden redes de poder político en todos los niveles. Es imposible mantener en producción grandes sembradíos de estupefacientes sin la complicidad de policías y destacamentos militares. Con frecuencia los capos donan recursos importantes a pequeños poblados para construir caminos, levantar capillas, perforar pozos de agua, atender enfermos y hacer canchas de básquetbol.

Junto con el cultivo de drogas florece la descomposición comunitaria, prolifera el tráfico de armas y se incrementa el alcoholismo. Quienes siembran y cosechan viven permanentemente con el riesgo de ser detenidos y perder sus cultivos. Requieren (y exigen) de la complicidad de quienes no se dedican a esta actividad. Las ganancias que reciben son una pequeña cantidad de lo que obtienen quienes se dedican al procesamiento y comercialización del producto. Con frecuencia son menores de edad quienes se encargan de cuidar y regar los cultivos.

Según Ricardo García Villalobos, exmagistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, hay en el país 7.2 millones de hectáreas en las que se siembra marihuana y amapola. Esto es, casi la tercera parte de las 27 mil 300 hectáreas arables y de cultivo permanente que existen en el territorio nacional son utilizadas para producir cultivos ilícitos.

El funcionario aseguró que esta tendencia se intensificó tras la firma del TLCAN, que obligó a la eliminación de los subsidios al campo. Y advirtió que los capos de la droga supieron aprovechar la coyuntura y dotaron a los campesinos e indígenas de la semilla de marihuana, de dinero y de los apoyos logísticos para el cultivo.

Desde hace muchos años, algunos negocios agropecuarios han sido la vía para blanquear el dinero proveniente del *narco*. Por ejemplo, en septiembre de 2008, en Aguascalientes, se descubrió un *narcoinvernadero* con 15 mil plantas de marihuana. La empresa era manejada por Francisco Muñoz González, socio del Grupo Industrial Lechero SA (GILSA), la productora del lácteo más importante del estado, distribuidora de la leche San Marcos.

Con una economía agrícola devastada por las importaciones de alimentos subsidiados que vienen de Estados Unidos, sin posibilidad de encontrar empleo en las grandes ciudades de México, con restricciones cada vez mayores para acceder a la educación pública, los hijos de campesinos parecen no tener más opción que irse de *mojados* al otro lado de la frontera o engancharse en el negocio de la droga. Con frecuencia los *cárteles* los reclutan directamente en las secundarias técnicas a las que asisten. Les ofrecen droga, pornografía, prostitutas, dinero y armas. Algunos ven en esta actividad un futuro de éxito.

El narcotráfico ha modificado profundamente la sociedad rural. La descomposición del tejido social que ha provocado en varias regiones es significativa y, muy probablemente, irreversible. En mucho esta situación es responsabilidad del libre comercio. No son pocas las organizaciones campesinas e indígenas que tienen que enfrentarse a este problema. Policías comunitarias y autodefensas han surgido, en buena parte, directamente de esa problemática. Paradojas de la nueva colonización: la conquista de los mercados agrícolas mexicanos por las grandes compañías agroalimentarias estadounidenses ha rebotado dentro de su territorio haciendo aún más temibles a dos de sus principales pesadillas contemporáneas: el auge de la inmigración indocumentada y el aumento del narcotráfico. *Ni modos*, nadie sabe para quién trabaja.

LA ILUSIÓN DE LA SEGURIDAD

En México había en 2007 15 y medio millones de armas en manos de civiles, según un detallado estudio sobre el trá-

fico de armamento de Estados Unidos hacia México efectuado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto significa que uno de cada tres adultos estaba en posesión de una pistola, un rifle, un fusil de asalto o una ametralladora.

Eso convertía al país en la sexta nación en el mundo en el que los civiles tienen más armas en su posesión, según un estudio efectuado por *Small Arms Survey*. En fechas anteriores ocupaba el lugar número 22.

Datos de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena muestran este crecimiento en la posesión de armas por civiles también opera en la vía legal: de dos millones 33 mil 749 registros en 2009 a tres millones 118 mil 592 en 2012, según una investigación del académico de la UNAM Ernesto Villanueva titulada Seguridad, armas de fuego y transparencia.

Y es que, lejos de disminuir, con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el armamento de civiles se incrementó significativamente. Organizaciones internacionales estiman que en 2011 circulaban unas 20 millones de armas ilegales en territorio mexicano. A esa cifra hay que sumarle las 3 millones 100 mil autorizadas por la Sedena; es decir, por cada arma legal hay por lo menos seis ilegales.

Organizaciones como IANSA y Oxfam, calculan —según un reportaje de la revista *Contralínea*— que cada día ingresan al país 2 mil armas, por las áreas fronterizas, y a través de los puertos del Pacífico mexicano, en la ruta Asia-Pacífico.

De acuerdo con la PGR, el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen

organizado. El tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa el 15 por ciento (unos mil 200) de los delitos federales cometidos en todo el país.

Antes de que el presidente Felipe Calderón iniciara la lucha contra los cárteles de la droga, en 2006, el 41 por ciento de las 4 mil armas decomisadas eran rifles, la mayoría, pistolas. Cinco años después la proporción se invirtió. Ahora las pistolas llegan apenas al 35 por ciento y los rifles a 65 por ciento. Además, la cantidad total de armas incautadas en el país se multiplicó por ocho en ese lapso.

Magda Coss (*Tráfico de armas en México*) explica cómo las armas legales que adquiere el gobierno llegan a formar parte de este mercado: “Muchas de las armas que forman parte del mercado *negro* son transferencias que hace el gobierno para abastecer a sus Fuerzas Armadas. El problema es que, debido a la corrupción o por la debilidad de las instituciones, mucho de este armamento se desvía ilícitamente de manera premeditada, o mediante el robo, para abastecer el mercado *negro*. Esto es fomentado por el encubrimiento de la identidad del usuario final, y por la corrupción de funcionarios y de agentes de [las] Fuerzas Armadas y de seguridad nacional”.

Mucho equipo bélico en manos de civiles en México proviene de Estados Unidos. Así lo reconocen diversos funcionarios. El 1 de noviembre de 2010, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el subprocurador de Asuntos Criminales del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, declaró que 64 mil de las 94 mil armas que en el último lustro se le han incautado a la delincuencia en México provinieron de su país.

“Es de mi conocimiento que 94 mil armas de fuego han sido recuperadas en los últimos cinco años en México. Éstas son sólo las que han sido recuperadas, no todas las que están en México, y de esas 94 mil armas que han sido recuperadas en México, 64 mil son rastreables a Estados Unidos. Tenemos que hacer algo para evitar que los criminales obtengan esas armas senadora. Ése es mi entendimiento de los números más exactos”, dijo Breuer a pregunta de la senadora demócrata Dianne Feinstein.

Esta carrera armamentista entre los civiles mexicanos no es resultado de una legislación laxa. Las leyes de armas en México son de las más estrictas del mundo, comparables en muchos aspectos a las leyes en el Reino Unido, pero con penas más severas, incluso para las faltas más menores.

La Constitución de 1917, reconoce el derecho a la portación de armas con limitaciones importantes: la de poseer aquellas prohibidas por el Estado o reservadas al ejército, y la de cargarlas en lugares públicos sin estar autorizado a ello.

En 2013 el Senado aprobó modificaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer las sanciones a quien no las registre, no las manifieste o no cuente con **licencia** de **posesión**. Consideró penas que van hasta los 30 años de cárcel y hasta 720 días de salario mínimo.

A pesar de ello, la adquisición de armas por parte de civiles no se detiene. De acuerdo con el citado informe de Naciones Unidas, el 23 por ciento del armamento que entró a México desde Estados Unidos entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 tuvo como destino principal el estado de Michoacán. Ocupa el segundo lugar Sinaloa, con

el 9 por ciento del total de las adquisiciones, y le siguen Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco, estados todos donde la guerra contra las drogas tuvo sus escenarios “calientes”.

La adquisición de armas por parte de civiles ha caminado de la mano de la formación de grupos de autodefensa y del surgimiento de policías comunitarias. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva entre los armamentos utilizados por unos y otros. Son las autodefensas quienes cuentan con equipo más sofisticado y poderoso.

Si hasta hace unos años el uso de las armas por parte de los civiles se concentraba en los clubes de caza y tiro, con frecuencia ligadas a las asociaciones ganaderas locales, ahora se ha trasladado a guardias comunitarias y grupos de autodefensa.

El hecho clave es que México es un país armado hasta los dientes, en el que la mayoría del armamento no está registrado oficialmente. Lo que está en manos de particulares es equipo de uso exclusivo del Ejército. No se trata de viejas escopetas de caza o pistolas calibre .22. Tampoco de un fenómeno exclusivamente rural. Las ciudades están llenas de armas. Las consecuencias de esta situación la vemos todos los días.

El espejismo de las armas —la ilusión de que teniéndolas se está más seguro— se instaló ya en el imaginario mexicano.

LA INCUBACIÓN DE LA RABIA: LUTO NEGRO Y METALERO

Manejaba la camioneta que le prestó su padre. Acababa de celebrar la llegada del Año Nuevo en Ocotlán, Jalisco.

Tenía 21 años de edad. Era músico metalero. Su nombre era Fernando López Alejandre. Sus amigos le decían *Nako*. Su familia lo esperaba en casa. Nunca llegó. Una bala de AR15SP1, calibre .223, disparada por el policía Rosendo Maldonado, alias *El Flaco*, segó su vida.

Era la una y quince de la madrugada del 1º de enero de 2009. Lo acompañaba su amigo David Briseño, vecino de Jamay. Se encontraban cerca de la caseta de cobro de la autopista Ocotlán-La Barca. Se cruzaron con un retén policial que en ningún momento les marcó el alto. Una patrulla, la GT-02, con las luces rojas y azules prendidas, comenzó a seguirlos y hostigarlos. Se escucharon varias detonaciones. Un proyectil entró por la espalda de Fernando y le perforó el pulmón derecho. Perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol.

Llorando, David agarró la cabeza de su amigo moribundo para auxiliarlo y clamó por ayuda. La respuesta policial fue ejemplar: lo amenazaron y sometieron, bajándolo del vehículo a golpes.

Del Ministerio Público de Ocotlán llamaron a Luis Fernando López Lara, padre de Fernando. Eran las 6:20 de la mañana. Le dijeron que se presentara allí con un acta de nacimiento de su hijo. No le explicaron más. Al llegar confirmaron la muerte del joven.

Los rumbos en los que Fernando fue asesinado son conocidos por los lugareños como una zona en la que la policía ejecuta revisiones de rutina, realiza detenciones injustificadas, practica cateos y visitas domiciliarias ilegales sin identificación, y extorsiona. Los agentes visten de azul, van armados y circulan a bordo de una camioneta *pick-up* sin logotipo oficial.

El músico asesinado estudiaba en el Centro Universitario de la Ciénega y tocaba el bajo en el grupo Arcadia Libre. Sus integrantes retomaron la utopía de Arcadia, la antigua provincia griega evocada por poetas y dramaturgos de distintas épocas que, desde la antigüedad, se ha convertido en un país imaginario habitado por pastores que viven felices, en unidad con la naturaleza y en paz. La música que interpreta el conjunto es *metalcore*, género de fusión del metal con el *hardcore*. El grupo se había dado a conocer en Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, la ciudad de México, Monterrey y el sur de Estados Unidos.

Fernando López era hijo de una familia acomodada. Su padre es empresario gasolinero en la región. Era lector de H. P. Lovecraft, el gran innovador del cuento de terror. A decir de sus amigos y familiares, era un buen muchacho. Sus fans, vestidos de negro, lo consideraban un buen músico. Metalero, hacía de su arte una forma de vida o, al menos, una actitud.

El asesinato de Fernando levantó una enorme ola de rabia en la región. La versión oficial de los hechos puso más leña en la hoguera. Según la policía, los jóvenes habían desoído una orden de alto, además de transportar drogas y armas, y la bala que tan certeramente le quitó la vida se habría disparado accidentalmente.

Ocotlán era en 2009 un ayuntamiento gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN). Dirigía la policía Filiberto Ortiz, *El Pinto*, conocido violador de derechos humanos. Él fue uno de los responsables de la salvaje represión contra los jóvenes altermundistas detenidos y torturados en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004. En ese

entonces Absalón García Ochoa, el hoy alcalde de Ocotlán, encabezaba la Subsecretaría para Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Tratando de aplacar el malestar ciudadano, Filiberto Ortiz renunció. Pero el descontento siguió. Cerca de 4 mil personas marcharon el 9 de enero en la cabecera municipal, exigiendo desaparecer poderes en el municipio. Uno de los carteles decía: “Estamos hasta la madre de este gobierno de mierda”. La multitud estrelló huevos contra el palacio municipal.

Las razones de esta ira son múltiples. En ella se mezclan sentimientos diversos: la compasión, la solidaridad, la ira y la incertidumbre. En su *blog*, Othéner Kasiyas lo explica así: “hay algo que me afectó más que a lo emocional, me afecta tanto a mí como a miles el hecho de que no podamos circular libremente por nuestro país. De tener miedo a salir por las noches, porque desgraciadamente los ladrones duermen, pero los policías no. Y quién sabe si un comando policiaco te persiga para dispararte por la espalda”.

El asesinato de Fernando parece una mala copia de un cuento de H. P. Lovecraft. Pero es mucho más que eso. El luto negro y metalero que sus seguidores y amigos guardan en su memoria es también una denuncia contra el abuso y la impunidad policial.

Como sucede por todo México, con programas de cero tolerancia o sin ellos, Fernando fue “castigado”, como tantos otros muchachos como él, por ser joven. En todo el país, no ser adulto, tener el pelo largo y vestir y arreglarse diferente, grabarse tatuajes o llevar *piercings*, deambular por el barrio o sentarse en la banqueta a platicar con los

amigos es, a los ojos de los encargados de velar por la seguridad pública de todos los colores políticos, razón suficiente para considerar criminales a los jóvenes o, al menos, como carne fresca para la extorsión.

REDES DE AUTOPROTECCIÓN: LOS LeBARÓN

La navidad de 2009 fue triste en Galeana. Dos viudas y diez huérfanos, todos menores de siete años, la celebraron sin sus maridos y sus padres. Cinco meses antes, Benjamín LeBarón y Luis Widmar fueron arteramente asesinados. El martes 7 de julio de 2007, un comando armado de unos veinte sicarios les quitó la vida.

Benjamín y Luis eran miembros prominentes de la comunidad LeBarón, en el municipio de Galeana, en Chihuahua. Apenas unos días antes, Benjamín había conducido exitosamente la lucha de su congregación contra los delincuentes que habían secuestrado a su hermano Erick, de 17 años de edad, y exigido un millón de dólares como rescate. El joven fue liberado sin que la comunidad les diera dinero alguno pero sus captores decidieron cobrarse la afrenta.

Ese 7 de julio en la noche, los secuestradores, vestidos con uniformes militares, entraron a la casa de Benjamín, tirando puertas y ventanas, lo torturaron frente a su familia, lo levantaron, y cuando su cuñado Luis trató de auxiliarlo, también se lo llevaron. En una brecha rumbo al poblado de Flores Magón los ejecutaron a los dos. Junto a los cuerpos sin vida —recuerda Víctor Quintana— dejaron una manta: “Para los LeBarón, que no creyeron y siguen sin creer, para Klery Jones (ex alcalde y dirigente de la co-

munidad), por los 25 levantados en Nicolás Bravo. Atentamente, El General”.

El mensaje hacía referencia a lo sucedido el 11 de junio de 2009, cuando el Ejército detuvo a 25 sicarios camuflados como soldados en el cercano poblado de Nicolás Bravo, que trabajaban para La Línea, socios del Cártel de Juárez.

Benjamín presentía lo que le iba a suceder. Su hermano Julián le contó al periodista Nacho Lozano que le había llamado para advertirle: “Carnal, siento peligro”, porque él vio que las trocas daban la vuelta aquí, y le dije: “¿Pero por qué?”, y él respondió: “Siento que me van a atacar, que algo me va a pasar”, y le dije: “No mames, carnal, tú eres el obispo y tienes palancas allá arriba, para qué te preocupas”, y contestó: “Quiero que me prometas que si algo me pasa, nunca va a ser aceptable, nunca va a estar bien”, y le pedí que me prometiera lo mismo y dijo que sí. Ese día, a las 10:30 de la noche, sonó mi teléfono y dije: “Algo pasó”, contesté y mi cuñada estaba gritando que se acababan de llevar a Benjamín y a Luis.

Los LeBarón son una congregación disidente de la iglesia mormona. En 1955 fundaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. Sacaron sus tierras de la colonia y fundaron una nueva, a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Galeana. Viven allí mil quinientas personas, de las 6 mil que forman el municipio. Siembran nueces y engordan ganado. Los padres reciben remesas de sus hijos que trabajan en Estados Unidos como carpinteros y obreros de la construcción.

Durante meses, los *lebarones* resistieron embates de los malosos, hasta que, a mediados de 2009 les secuestra-

ron a Erick LeBarón. La congregación acordó no pagar el rescate que pedían. “Hemos decidido —informaron a la sociedad— no darles un solo centavo a los delincuentes. Hacerlo es hacerse cómplices de ellos, seguir consintiendo que nos sigan secuestrando y matando.”

Los *lebarones* se movilizaron a Chihuahua, a 300 kilómetros de su poblado. Instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno y presionaron a las autoridades. Cuando finalmente el gobernador los atendió, le dijeron: “Sabemos que tienen la información sobre los delincuentes, ustedes saben cómo rescatar a Erick”.

Una semana después de su secuestro, el 9 de mayo, Erick fue puesto en libertad. “Fue un triunfo de las oraciones de todos —explicó Benjamín—, de la presión de la comunidad, de que hicimos que el gobierno se aplicara y de la actitud valerosa de mi hermano con los secuestradores”. Transcurridos poco menos de dos meses, los captores se vengaron. Ni Benjamín LeBarón, ni su familia, ni su comunidad fueron protegidos por la policía.

Los homicidios de Benjamín LeBarón y Luis Widmar levantaron una ola de indignación en la comunidad mormona trasnacional. El gobierno respondió ofreciendo capacitar a los jóvenes en el manejo de armas para que se volvieran policías comunitarios. Una avalancha de críticas se le vino encima, y lo obligó a recular.

En diciembre de 2009, Adrián LeBarón y Lenzo Widmar, hermanos de los asesinados, escribieron en *La Jornada*: “lo más grave es que sabemos que los responsables de procurar la justicia y la seguridad en nuestro estado son irresponsables y permisivos”.

Los *lebarones* -cuenta Marcela Turati en *Proceso*- se organizaron entonces en redes de autoprotección. Los jóvenes recibieron entrenamiento en el manejo de armas. Solían turnarse para vigilar desde el cerro todo el pueblo y a todos los vecinos; desde sus campos nogaleros avisaban al resto de la población de cualquier movimiento sospechoso.

“La organización de defensa partió de los hombres. Los jóvenes vigilaban el pueblo para poder avisar a las demás familias que estaban descansando si había peligro. Se coordinan por celular y están a una llamada de distancia si necesitamos defendernos, porque lo que uno logra tiene derecho a pelearlo”, le explicó a Turati el agricultor Nefi LeBarón, tío de Julián.

Aunque las policías Federal y Estatal y el Ejército establecieron bases en la comunidad, los *lebarones* se cuidan a sí mismos y parte de ellos están armados. Lo confirma el mismo Nefi, que asegura: “aquí todos tienen ranchos, becerritos y algún rifle .22 para usarlo en caso de que vengan los coyotes. Creo que en todas las comunidades rurales tenemos”.

Julián LeBarón, quien tomó el relevo en la lucha por defender a su comunidad del crimen organizado, confirma la versión de su tío. “Hay muchos que están armados, y tenemos inclusive muchos miembros del campo de tiro, que está aquí cerca, y estamos buscando la forma legal de tener armas”.

Según él, “para que una sociedad sobreviva tiene que expulsar al crimen de entre ellos”. Y, aunque en lo personal no anda armado, muchos otros de sus compañeros de congregación si lo están. “Creo -le dijo al periodista

Nacho Lozano- que todo mundo tiene el mismo derecho de defenderse que el privilegio que tiene el presidente de rodearse de gente armada que lo esté cuidando”.

Los *lebarones* no están dispuestos a que la tristeza navideña de 2009 en Galeana se vuelva a repetir. Cuando en febrero de 2014 le preguntaron a Julián, ya instalado en Estados Unidos, su opinión sobre las autodefensas, respondió: “el derecho más sagrado de las personas es defenderse. Mire, simplemente si no hay respuesta por parte de las autoridades, ¿pues que otra solución le queda al pueblo?”.

CIUDAD JUÁREZ, MUERTOS SIN NOMBRE

José Darío Álvarez Orrantes tenía 19 años de edad. Estudiaba el primer semestre de sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua en la frontera con Estados Unidos. El 29 de octubre de 2010 asistió a la onceava Kaminata contra la muerte. Protestaba pacíficamente junto a otros compañeros contra la militarización de su ciudad cuando la Policía Federal le disparó por la espalda. Tuvo que luchar por su vida.

José Darío tiene nombre y apellido. A pesar de lo grave situación que sufrió, está vivo. No se puede decir lo mismo de los casi 11 mil asesinados violentamente en Ciudad Juárez durante el sexenio de la muerte. No sólo fallecieron, sino que la mayoría son apenas una cifra más de la numerialia macabra de fallecidos en la guerra contra el narcotráfico. Sus muertes no han sido investigadas. Sobre ellos el gobierno ha sembrado la duda de su culpabilidad. En el peor de los casos se les presenta como delincuentes, en el

mejor como bajas colaterales de la guerra contra las drogas. Los caídos son, por principio de cuentas y hasta que no se demuestre lo contrario, criminales.

Las kaminatas contra la muerte son acciones simultáneas que se realizaron en Ciudad Juárez y en Chihuahua cada viernes por la tarde. Llamaban a la organización y protestaban contra la militarización. No estaban ni con los grupos de narcotraficantes ni con el Estado.

Uno de los asistentes a la marcha donde se agredió a José Darío, el profesor Willivaldo Delgadillo, contó lo sucedido: “Yo estuve en esa marcha con mi hijo de 12 años. Lo llevé porque la Kaminata es un ejercicio ciudadano pacífico y necesario ante la debacle humanitaria que se vive aquí. No quiero que mi hijo se acostumbre a la violencia ni a la impunidad. Sin embargo, al final de la marcha llegaron los federales en tres *pick-ups*; eran aproximadamente 24 elementos. Dispararon por lo menos en cinco ocasiones, en dos tandas; el ataque fue deliberado. Unos minutos más tarde un helicóptero empezó a sobrevolar el campus universitario. Es evidente que se trata de una embestida contra la protesta social. El mundo debe saber que en Juárez la única guerra que hay es contra los jóvenes y contra los más vulnerables. La supuesta guerra contra el narcotráfico es tan sólo un buen negocio más del régimen. Aun así, hoy saldremos a marchar de nuevo”.

A raíz de esa agresión, grupos de estudiantes de educación superior de UNAM, UACM e IPN efectuaron movilizaciones en la ciudad de México para denunciar los sistemáticos crímenes contra estudiantes. Una de esas protestas, realizada en la UNAM, reunió a 7 mil estudiantes.

Con veladoras encendidas dibujaron un mapa de México. De allí surgió la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia (Comecom).

La violencia en ciudad Juárez tiene historia. El 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar. Dieciséis jóvenes, algunos casi niños, fueron masacrados mientras se divertían en una fiesta. Agravio sobre agravio, Felipe Calderón dijo desde Japón, casi cuarenta y ocho horas después, que, con base en las últimas investigaciones, esos muchachos probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad.

Afuera de sus viviendas, los padres de las víctimas colgaron cartulinas con leyendas en las que se leía: "Señor Presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino. Señor Presidente, qué haría si uno de estos jóvenes fuera su hijo, ¿qué haría?"

El 11 de febrero, en Ciudad Juárez, durante un acto público, frente a las cámaras de televisión, María de la Luz Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, adolescentes asesinados en la fiesta, se plantó frente a Calderón e interrumpió el discurso del gobernador. Sin bajar la mirada le dijo: "¡Disculpe, señor Presidente!, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón! [...] Le aseguro que si a usted le hubieran matado a un hijo ya habría agarrado a los asesinos. Aquí el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo: prometen justicia pero no la tenemos; ¡yo quiero justicia!"

La rabia de María de la Luz Dávila contra el gobierno está esparcida por toda la sociedad juarense. Está presente en jóvenes como José Darío Álvarez Orrantes y sus compañeros de la Kaminata contra la muerte. Alimenta el reclamo de justicia de miles de madres que han perdido a sus hijos.

Se trata de una ira nacida no sólo de las miles de muertes violentas, sino del abuso y el atropello cotidiano de policías y el Ejército. El memorial de agravios colectivo de los juarenses es inmenso. La población tiene miedo de los uniformados tanto como teme a los narcotraficantes. Los jóvenes son sospechosos por el hecho de ser jóvenes. Se les detiene en la calle, se les encañona, se les amenaza. Las policías entran en los domicilios sin orden de cateo, con prepotencia. La primera baja en la guerra contra el narcotráfico han sido los derechos humanos.

Un hecho sorprendente es que la inmensa mayoría de los homicidios perpetrados en los últimos años fueron cometidos contra personas desarmadas, sin que se hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre *cárteles* de las drogas, ni provocados por el enfrentamiento del Ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes perpetrados en una ciudad que vive en un estado de sitio no decretado, patrullada día y noche por más de 10 mil efectivos, llena de retenes.

Quizá por ello, en amplios sectores de la población la percepción dominante es que las fuerzas policiales y militares están en la ciudad no para combatir el narcotráfico, sino para ayudar a uno de los *cárteles* de la droga contra el

otro. Así lo dicen. Y es que, a pesar de estar cerca de los lugares donde se cometen los crímenes, los uniformados no intervienen para impedirlos.

Desde que comenzó la guerra contra las drogas en Chihuahua fueron sido asesinados varios importantes dirigentes sociales. La lista es larga: Armando Villarreal Martha, líder rural y promotor de diversas huelgas de pago contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, fue baleado. Según la Asamblea Ciudadana Juarense y el Frente Nacional contra la Represión, en Juárez fueron asesinados el investigador del movimiento obrero Manuel Arroyo; el representante de los comerciantes ambulantes, Géminis Ochoa, y la defensora de derechos humanos en el Valle de Juárez, Josefina Reyes. Géminis Ochoa había sido amenazado por la entonces Policía Federal Preventiva después de anunciar una marcha contra los abusos militares. Josefina Reyes fue acosada por el Ejército a raíz de que expresó públicamente su repudio a la militarización.

En un artículo publicado en *La Jornada* al calor de las movilizaciones por la paz encabezadas por Javier Sicilia en 2011, Julián LeBarón y Adrián LeBarón, escribieron: “¿Qué pensarán de los derechos los amontonados en fosas clandestinas antes de dejar de respirar? ¿Qué piensan sus familias cuando desaparecen y su afecto y temor quedan en un limbo inconcluso e indefinido, esperando en la incertidumbre que en la siguiente fosa los siguientes huesos sean los que finalmente les den tranquilidad?” Chihuahua en lo general y Ciudad Juárez en lo particular se convirtieron en el símbolo de la lucha militarizada contra el narcotráfico. También en la mayor demostración de su fracaso.

DON ALEJO

Ese 14 de noviembre de 2010, Alejo Garza Tamez se preparó a morir. Les dijo a los empleados de su finca que no acudieran al día siguiente a trabajar. Colocó los cuatro rifles de cacería en puntos claves de la casa principal. Y aguardó a que los hombres que buscaban despojarlo de su propiedad llegaran.

Un día antes le ordenaron que desalojara su rancho San José en 24 horas. “Si no lo haces, atente a las consecuencias”, lo amenazaron. Don Alejo les contestó que no entregaría nada, y que si iban por él ahí los estaría esperando.

Tenía 77 años de edad y una vida de trabajo. Nacido en Allende, Nuevo León, se incorporó a un aserradero propiedad de su padre. Desde joven aprendió el negocio de la madera. Más adelante, junto con su hermano, fundó la maderera “El Salto” en Monterrey. Con el paso de los años, también en compañía de su hermano, compró el rancho, colindante con la Presa Padilla, a unos cuantos kilómetros de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

Era un hombre de palabra. Tenía fama de ser buen tirador. Participó en la fundación del Club de Caza, Tiro y Pesca “Dr. Manuel María Silva”, ubicado en Allende, Nuevo León.

Poco antes del amanecer de ese 14 de noviembre, llegaron los sicarios a por su botín de guerra. Eran más de 30. Se bajaron de su camioneta y rafaguearon al aire. Don Alejo los recibió a balazos. Su puntería cobró cuatros vidas y dos hombres heridos. Una lluvia de fuego cayó sobre él. A las ráfagas de las armas automáticas en su contra le si-

guió una lluvia de granadas. Los atacantes que sobrevivieron pusieron pies en polvorosa.

Cuando los marinos llegaron al rancho era ya muy tarde. El empresario falleció custodiado por dos armas a su lado. Su hija Sandra declaró: "Me siento orgullosa de ser hija de mi padre, es doloroso, es muy difícil que se acabe la violencia y desgraciadamente las autoridades no hacen nada, yo he estado muchos años en la política y me da vergüenza decirlo."

Así lo recuerda uno de los tantos corridos escritos para homenajearlo: Hombre bragado y valiente/No le importó su dolor/Nació norteño hasta el tope/Como tal defendió su honor..

En algunas partes del país, su nombre se volvió una leyenda. "Don Alejo es un héroe que prefirió confrontarse a los sicarios que entregar sus propiedades. Es un ejemplo que todos deberíamos tomar: él tenía derecho de abrir fuego con las armas que tenía en su casa. Desgraciadamente perdió su vida", le dijo el líder mormón Ray a la periodista Marcela Turati.

La semilla estaba sembrada. Germinaría al lado de los familiares de los desaparecidos, de los guardias comunitarios y las autodefensas.

DESAPARECIDOS

Ese viernes 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel Fernández Morán debió recoger a su hija en casa de una compañera. Después quedó en pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, a la estación de autobuses de la ciudad de Torreón.

Nunca llegó por ellas. Desde entonces se desconoce su paradero.

Dan Jeremeel laboraba de ejecutivo de la aseguradora ING Afore en el estado de Coahuila. En esa entidad tenía su residencia. La última persona en verlo fue Monserrat Díaz, su compañera de trabajo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, ella fue a buscarlo a su casa para cobrarle un dinero.

La familia de Dan comenzó a vivir un penoso calvario. Lo buscó infructuosamente en hospitales y en la cárcel municipal. Yolanda Morán presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. No tuvo respuesta.

El 4 de febrero, la madre de Dan Jeremeel fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo. En la guantera del coche encontraron tarjetas de presentación de la aseguradora ING Afore. El detenido era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón.

El teniente Gómez delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos: dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Dos militares más, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón. Apenas una hora después de llegar, un comando armado entró al área varonil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices varones, roció con gasolina los cuerpos y les prendió fuego. De paso, los integrantes del comando liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico.

Meses después, el 25 de marzo de 2010, fue detenido en la ciudad de México el teniente Ricardo Albino Navarro y trasladado al Cereso de Torreón. El 23 de abril fue asesinado en la cárcel.

¿Dónde se encuentra Dan Jeremeel Fernández Morán? ¿Está vivo o muerto? Si fue asesinado, ¿dónde fueron depositados sus restos? ¿Por qué fue desaparecido? A pesar del evidente involucramiento de militares en activo en su desaparición, las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a estas interrogantes. Más aún, la información que han proporcionado ha sido contradictoria.

Trágicamente, el caso de Dan Jeremeel dista de ser un hecho aislado. En 2102 en Coahuila, mil 700 personas habían desaparecido de manera forzada desde el año 2000.

La situación va a peor. De acuerdo con Blanca Martínez, quien ha dedicado años a investigar desapariciones forzadas en ese estado, la situación es dramática.

En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación dio a conocer una lista de 26,121 personas con reporte de desaparición. En mayo de 2014, el Ombudsman nacional informó ante el Senado de 24,800 personas desaparecidas. Y, en un acto que ofendió profundamente los familiares de las víctimas, el Procurador General de la República dijo que de la lista original quedaban 13,195 casos; mientras que el Secretario de Gobernación dio ante el Senado otra cifra: apenas 8 mil. Ninguno explicó de dónde provenía esa información.

México, declaró Ariel Dulitzky, jefe del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria, no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de per-

sonas desaparecidas, carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. Las autoridades –aseguró– han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigarlo.

Un estudio realizado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, en coordinación con la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, concluyó que sólo en uno de los 118 casos analizados hay algunos elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera haber sido el secuestro, pero en todos los demás casos no hubo solicitud de rescate.

Para romper el muro de silencio que se levanta sobre los miles de Dan Jeremeel, para desafiar el silencio impuesto o autoimpuesto, las madres de los desaparecidos se han movilizado. En su andar han sumado a los familiares de las víctimas de otros estados.

Ellas bautizaron su primera caravana con el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia. Demandan a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus seres queridos y garantías de seguridad a las familias de las víctimas. Buscan que todo el dolor que han vivido no sea inútil. No quitan el dedo del renglón.

El país ha vivido mucho tiempo en silencio y es hora de hablar. Si, como han dicho las víctimas, hay daños que son irreparables, la dignidad es el punto de partida de todas las acciones de reparación. La marcha de la dignidad fue ejercicio de la memoria de la persistencia, de la memoria de la solidaridad; fue una dramática advertencia de que

el olvido no se debe instalar entre nosotros. Como escribió Roberto Bolaño: “que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese”.

FOSAS CLANDESTINAS

Allende, Coahuila, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es un enorme cementerio clandestino. En 2004, las autoridades exhumaron allí 300 restos humanos. En marzo de 2011 los Zetas llegaron a la cabecera municipal. Sacaron violentamente de casas y negocios a decenas de personas y se las llevaron a ranchos cercanos. Ya no regresaron.

Allende es un municipio como tantos otros en México. Con Felipe Calderón primero, y Enrique Peña Nieto después, vastas regiones del país se convirtieron en Allendes. El hallazgo de fosas que albergan los cuerpos de difuntos sin nombre es una constante. Sólo en 2013 se encontraron en tumbas clandestinas de 18 estados, 423 cadáveres. Sólo en Hidalgo se encontraron 100 difuntos en estas condiciones.

De acuerdo la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2006 y 2013, de los mil 273 cadáveres que fueron localizados en fosas clandestinas sólo se pudo identificar al 11 por ciento. Muchos otros, ni siquiera han sido ubicados.

Según los pobladores de Allende, muchos de los secuestrados por los Zetas fueron ultimados y sus cuerpos quemados en improvisadas pilas crematorias, alimentadas con diesel, aceite y otros combustibles.

En otras latitudes, las “cocinas” donde se desaparecen los cadáveres son aún más macabras. El 22 de enero de 2009, soldados detuvieron en el campo turístico Baja Season’s, ubicado en el kilómetro 70 de la carretera Escénica Ensenada-Tijuana, a Santiago Meza López.

Santiago, a quien apodaban *El Chago*, es bajo de estatura, nació en Guamuchil, Sinaloa, y tenía 45 años de edad al momento de ser arrestado. Servía al Cártel de los Arellano Félix. Desde los 19 trabajaba en actividades criminales.

Preso, reconoció haber deshecho en sosa cáustica al menos a 300 personas durante el 2008. Así evadían los riesgos de tirar los cadáveres a las alcantarillas o los arroyos de la ciudad. Desde entonces se le conoce con el mote de *El Pozolero*.

El Chago aprendió los secretos del oficio de dos maestros traídos de Israel. Disolvía los cuerpos de los muertos en dos tambos de 200 litros cada uno, con agua y 40 o 50 kilos de sosa cáustica, durante 24 horas. Los restos de maxilares y huesos que quedaban eran depositados en el “Ojo de Agua”, una zona desértica.

Las fosas clandestinas, piras fúnebres y personajes como *el Pozolero* nos recuerdan que no hay forma de levantar la paz sobre la muerte. Tarde temprano, los difuntos hablan y señalan a quienes, por acción u omisión, fueron responsables de su homicidio. Justicia o revancha se vuelven entonces un clamor de sus deudos.

LA VENIA BENDITA

En Chihuahua, una librería tuvo a bien poner un letrero, recuerda el académico y dirigente campesino de Chihuahua

Víctor M. Quintana, que decía “Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho”. Bajo este criterio, Felipe Calderón fue el Presidente de la lectura. Su guerra contra el narcotráfico tuvo un saldo trágico: 8 mil 867 muertos en 2007, 14 mil seis en 2008, 19 mil 803 en 2009, 25 mil 757 en 2010, 27 mil 199 en 2011 y 10 mil 607 hasta el primer semestre de 2012. En total, el Inegi registra 106 mil 249 asesinatos hasta mediados de 2012. Esto es un promedio de 19 por día.

Según Amnistía Internacional la situación que vivió en México durante ese sexenio como resultado de la presunta responsabilidad del Ejército en los casos de desapariciones forzadas es alarmante: se está al borde de una represión generalizada. El país podría vivir en el ámbito de los derechos humanos circunstancias similares a las acontecidas en las dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 80.

El organismo internacional no exageraba. La cifra de defensores de derechos humanos asesinados o víctimas de desaparición forzada entre enero de 2005 y mayo de 2011, de acuerdo con la CNDH fue de 27 y ocho, respectivamente. Los expedientes abiertos por presuntas violaciones contra defensores de derechos humanos, en los últimos cinco años y cinco meses, fueron 523.

Sin embargo, Mariano Francisco Saynez, entonces secretario de Marina, opinaba que la relación existente entre derechos humanos, criminales y organizaciones civiles en la guerra contra el narcotráfico, se caracterizó por la pretensión de los grupos delictivos de manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones utilizando a grupos ciudadanos y la bandera de los derechos humanos, con el fin

malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.

No les fue mejor a los periodistas. No en balde México es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer lo que Gabriel García Márquez llamaba el mejor oficio del mundo. Según la CNDH el número de homicidios de periodistas asesinados, de 2005 a marzo de 2011, alcanzó 68. En ese mismo lapso desaparecieron 13 comunicadores. El 89 por ciento de esos crímenes quedaron impunes.

La situación no pasó desapercibida para la ONU. Irina Bukova, directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), alertó: “los ataques y homicidios contra los comunicadores atentan gravemente contra el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados, además de que generan miedo en la sociedad.

Con Calderón, ni siquiera las relaciones con el más allá no fueron garantía alguna de seguridad. Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas, aseguró que más de un centenar ministros evangélicos fueron raptados durante ese sexenio. Un reporte levantado por esta organización, estado por estado, entre 2008 y 2011, documentó que las entidades con el más alto riesgo para el ejercicio pastoral son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Las congregaciones de iglesias evangélicas y cristianas en 11 estados de la República debieron de pagar entre 10 mil y 30 mil pesos, por su seguridad.

El crimen organizado no se andaba por las ramas. Sin tocarse el corazón pasó en diversas ocasiones de las pa-

labras a los hechos. Así lo vivió el pastor Josué Ramírez Santiago, quien celebraba el culto dominical de la iglesia evangélica El Shaddai, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando un comando lo secuestró. Sus captores solicitaron una recompensa de casi 20 millones de pesos.

A los católicos no les fue mejor. México ocupa el tercer lugar en el catálogo de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Murieron de forma violenta 14 religiosos católicos, 2 sacerdotes y dos seminaristas. El año más violento fue 2011.

La cantidad es mayor a la de los sexenios anteriores. Los presbíteros asesinados durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, según la organización Centro Católico Multimedia: fueron uno (el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo), tres y cuatro, respectivamente.

Bueno, hasta encuestadores fueron *levantados* en Apatizangán, Michoacán, en agosto de 2011, en la antecámara del proceso electoral para renovar gobernador en la entidad: nueve. Y, ya encarrerados, en ese municipio desaparecieron también a cuatro repartidores de la Sección Amarilla.

En la canción “La venia bendita”, Marco Antonio Solís dice: “donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos”. Sin dificultad la balada que canta el Buki puede ser proclamada como el himno involuntario del calderonismo.

IV) EL FRENO DE EMERGENCIA

EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

Soy Nepomuceno Moreno Núñez — dijo el hombre de pelo cano y tupido bigote frente al Teatro de la Paz en San Luis Potosí, el 5 de junio de 2011 — tengo 56 años y vengo de Hermosillo, Sonora. Vengo porque tengo extraviado a mi hijo Jorge Mario Moreno León, de 19 años. Eran cuatro muchachos la noche que lo desaparecieron, por desgracia Mario Islas falleció esa misma noche. Mi hijo tiene un año de extraviado y los otros dos amigos que siguen extraviados son José Francisco Mercado Ortega y Giovanni Otero.

“En las autoridades —le narró a la revista *Desinformémonos*— no encontramos respuesta, no encontramos nada. Las autoridades dicen lo mismo, es perder el tiempo, tengo pleito con ellos; me echaron a perder evidencias, videos, y aun así les resolví el asunto pero ellos no quieren nada, porque están coludidos. La policía levantó a los chamacos y los entregó a la delincuencia. Dicen las autori-

dades que no pasa nada en el estado de Sonora, siempre salen con índices y estadísticas que dicen que es el estado con menos delincuencia. Son puras mentiras, esconden los muertos nada más.

“Debemos de esperar... no sé... que lo maten a uno. Lo que sigue es que le den pa’ abajo a uno, que lo maten porque anda pegando de gritos. Eso es todo”.

Nepomuceno, dispuesto a pelear él sólo contra el gobierno de Sonora para que le presentaran a su hijo, se unió a la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Cuernavaca al Distrito Federal, en mayo de 2011. Meses después, el 28 de noviembre de ese mismo año, fue asesinado en las calles de Sonora. En un comunicado, el movimiento denunció: “Las balas que le causaron la muerte fueron la respuesta que encontró Nepomuceno a su amor de padre, a su deseo de justicia y a su incorporación a la causa de la paz en México”.

Nepomuceno Moreno Núñez es uno más de una larga lista de familiares de desaparecidos y víctimas de la guerra de Calderón que, durante años o meses, reclamaron solitarios al gobierno la presentación de sus hijos, hermanos, padres, y que, de repente, se encontraron con muchos otros como ellos formando un movimiento.

Convocados por el poeta Javier Sicilia, intelectual inspirado por la Teología de la Liberación y el pensamiento de Ivan Illich, al que una célula de sicarios le asesinó a su hijo Juan Francisco, junto a otras seis personas más, el 28 de marzo de 2011, miles de personas como Nepomuceno dieron vida a un movimiento inédito, genuino y vigoroso de rechazo explícito a la inseguridad pública, la impunidad

y la fracasada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón: el MPJD.

Lleno de dolor, Javier Sicilia exclamó ¡Estamos hasta la madre! Su grito cuestionó simultáneamente a los criminales y al gobierno. Apeló a la indignación, no para cabildear con el poder, sino para movilizar a la sociedad. Sin el patrocinio de los grandes medios de comunicación electrónicos se convirtió en la expresión más acabada del hartazgo ciudadano ante la violencia criminal y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

El Movimiento enarbola un programa de seis puntos. Exige esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar víctimas; poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atender de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social, y democracia participativa.

Ese vigoroso y naciente movimiento ciudadano contra la violencia, la militarización del país y la criminalización de las víctimas tomó las calles del país el 8 de mayo de 2011. Un día antes, con la bandera nacional como estandarte, una caravana de 200 personas partió de la ciudad de Cuernavaca rumbo a la Capital.

Como un río que a su paso se nutre de diversos afluentes, su ¡ya basta! confluyó y retomó la trayectoria seguida por las kaminatas contra la muerte en Ciudad Juárez y Chihuahua; las protestas de los padres de familia de las víctimas de la guardería ABC en Sonora; la campaña *No más sangre*; la acción de los seguidores de Benjamín Le Ba-

ron y las movilizaciones del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra en favor de inmigrantes indocumentados.

Un parteaguas en este proceso de organización del descontento fue la campaña *No más sangre*, convocada el 10 de enero de 2011 por un grupo de caricaturistas encabezados por Eduardo del Río, *Rius*. Sumándose a su convocatoria, miles de personas han tomado las calles para protestar. El objetivo de la iniciativa, según el monero, es hacerle ver al gobierno que estamos hasta la madre de vivir esta situación de angustia y temor generalizado. Allí, el caricaturista dijo: “Esperamos que la gente se una a esta campaña y deje de estar cruzada de brazos viendo a ver cuándo se le ocurre al gobierno parar esta absurda guerra que no está sirviendo para nada”.

El padre Solalinde es coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en Zona sur-Pacífico. Ha enfrentado un permanente acoso y agresiones directas tanto de autoridades locales como de grupos ligados al crimen organizado. Su delito es mantener abierto un albergue que ofrece techo y comida de manera temporal a los migrantes que viajan en ferrocarril rumbo al norte. En 2008, el alcalde de Ixtepec, 14 policías y tres decenas de personas lo amenazaron con prender fuego al albergue si no lo cerraba en 48 horas. En varias ocasiones ha estado preso.

EL FRENO DE EMERGENCIA DE LA HISTORIA

En su libro *Sentido único*, Walter Benjamin sostiene que si la revolución proletaria no llega a tiempo, el progreso económico y técnico del capitalismo puede terminar en desastre.

Parafraseándolo, puede afirmarse la idea-fuerza que animó la formación del MPJD: si la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no llega a tiempo, la militarización del país lo llevará inevitablemente al desastre.

“Marx dijo que las revoluciones son las locomotoras de la historia —escribió Benjamin. Pero quizá sea diferente. Puede ser que las revoluciones sean la mano de la especie humana que viaja en ese tren y que tira el freno de emergencia.” La metáfora ilumina el despertar contra los desplantes policiacos-militares del calderonismo. La resistencia civil nacida del reclamo del silencio que reivindica un pacto ciudadano para detener la estrategia de guerra gubernamental se convirtió en herramienta para frenar el ferrocarril que conduce a la nación rumbo al abismo.

Un movimiento así sólo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Sólo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos, y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas, y no sus abogados, las que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas —y no sus intermediarios— quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad. Esa fue la apuesta de Javier Sicilia y sus compañeros.

Como lo evidencia la experiencia del MPJD, las víctimas, colocadas en una situación límite a raíz de una vivencia radical, comenzaron a hacer política. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión in-

dividual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa ética. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza para desmilitarizar el país y reparar el daño.

La iniciativa buscó sumar todas las voces a la causa, pues sólo así podía provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Buscó agregar a los notables y a los plebeyos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Todos tenían algo que decir. Pero la voz que comenzó a escucharse en primer plano fue la de las víctimas.

A esa convocatoria se sumaron inicialmente una variopinta congregación de actores políticos y sociales que padecían el bloqueo político del actual régimen de partidos. También sectores de la Iglesia católica que sufrían, sin deberla, el costo de las barbaridades perpetradas por su jerarquía. En los hechos, el Movimiento por la Paz abrió una brecha por la que esos actores excluidos comenzaran a colarse.

El movimiento nació siguiendo una ruta azarosa. Muchos de sus integrantes pasaron del miedo a la indignación, de la indignación a la queja, de la queja a la movilización, y de la movilización al movimiento. Su organicidad ha sido precaria desde su nacimiento y su horizonte tan diverso como sus orígenes.

Forjar la unidad de las víctimas es tarea ardua. Algunas organizaciones civiles dedicadas a denunciar la inseguridad pública y sus dirigentes fueron acallados por el gobierno federal con recursos, prebendas y cargos públicos. Era difícil de por sí, por la diversidad de circunstancias

y visiones del mundo de los afectados. El mapa del dolor dibujado por la guerra contra el narcotráfico está trazado con todos los colores del espectro político, social y religioso. Escapar del cautiverio de los intereses particulares y de los estereotipos ideológicos es tarea ardua, acaso sólo posible si se calibra en toda su magnitud el tamaño de la catástrofe nacional.

La poesía de la disidencia del MPJD se convirtió en un ejercicio de ardua gramática organizativa. Decidido a meter el freno de emergencia para detener la locomotora de la militarización del país, la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas gestó una movilización social *sui generis*.

LA CARAVANA DEL CONSUELO

Entre el 4 y el 10 de junio de 2011, 77 días después de que fuera asesinado el hijo de Javier Sicilia, se realizó la Caravana del Consuelo. Poco más de 500 personas recorrieron casi 3 mil kilómetros de distancia, cruzaron 12 estados de la República y celebraron actos públicos en nueve de ellos. A su paso, durante esos siete días, cientos de madres, esposas e hijos dieron testimonio de su dolor.

Caravaneros y víctimas buscaron en su recorrido el alivio de la pena, rabia y fatiga que aflige y oprime su ánimo. Al hacerlo, echaron a caminar una devastadora y auténtica crítica del poder nacida de la vivencia y la evidencia del sufrimiento injusto.

A su lado, miles de ciudadanos acompañaron a las víctimas en mítines, encuentros y reuniones. Mostraron así

que, como decía Theodor Adorno, nuestros juicios valorativos más elementales se fundan en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de otros.

Si el agravio es el perjuicio sobre el cual la víctima no puede rendir testimonio porque no es escuchada, entonces la Caravana del Consuelo fue, de entrada, un acto de justicia, la reparación inicial de un agravio donde los afectados hablaron y obligaron a que se les escuchara. Lo fue, porque su testimonio incursionó en la vida pública, en el imaginario, en las vivencias y concepciones de la política, y al hacerlo derribó las barreras que segregaban a las víctimas el derecho a comunicar a los otros las ofensas sufridas.

La Caravana del Consuelo —como antes la de la Paz— comenzó a abrir las puertas del diálogo. Lo hizo sin tener que renunciar a su idioma, o más bien, construyendo su propio lenguaje sobre el camino. Si, como afirman Deleuze y Guattari, es el déspota quien hace la escritura, es la formación imperial la que hace del grafismo una escritura propiamente hablando, la caravana logró decir ¡no! a ese vocabulario. En una época de confusión y perplejidad, en un momento de miedo y desconfianza, tomó la palabra sin permiso y dijo algo distinto de lo que hasta ahora se había expresado sobre la militarización del país. “Más poesía/ menos policía”, gritó alguien en el evento de San Luis Potosí. La caravana conquistó para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico simultáneamente el derecho a hablar y la legitimidad de su discurso.

En el catálogo de aflicciones que se levantó a lo largo del trayecto y del diálogo y la firma del Pacto Nacional Ciudadano con el que culminó la travesía en Ciudad Juá-

rez, fue evidente que la voz del dolor tiene rostro de mujer. El desgarrador coro de sus lamentos mostró que, además de víctimas de la violencia, ellas enfrentan la adversidad de su condición de género, de su falta de poder, el ser botín de guerra.

María Herrero Magdaleno fue una de esas voces. Sujeta una lona con la fotografía de sus cuatro hijos: Gustavo, Luis, Salvador y Raúl. Dos de ellos desaparecieron el 28 de agosto de 2008 en Atoyac, Guerrero, y los otros dos, el 22 de septiembre del 2010 en el camino a Vega de la Torre, Veracruz. Con el rostro cubierto de lágrimas le dijo a la multitud: Yo no sé hablar, pero con todo el dolor que tengo vengo a hablarles.

La Caravana del Consuelo mostró también que la violencia se ha ensañado con los indígenas. Arrinconados en territorios deseados por el *narco* como zona de paso de mercancías ilícitas o lugar para la siembra de estupefacientes, o requeridos ellos mismos como mano de obra para el cultivo o como *camellos* para el trasiego de sustancias prohibidas, padecen, adicionalmente, la represión de militares y policías que, con frecuencia, actúan de común acuerdo con los *cárteles*.

Entre otras muchas denuncias de pueblos indios, a la marcha llegó un dramático llamado de los indígenas de Ostula, en Michoacán. El saldo de la guerra contra ellos es de casi tres docenas de comuneros muertos o desaparecidos en los últimos, decenas de viudas, huérfanos y familias desplazadas y la suspensión indefinida de clases en las escuelas.

Ostula es una comunidad comprometida con la recuperación y defensa de sus tierras, así como con el ejerci-

cio del derecho a la autonomía y la autodefensa indígena. Para ella la guerra contra el narcotráfico no es más que una mascarada para que ese jugoso negocio siga existiendo, mientras la violencia se riega más y más por todos los pueblos de este país que es México, con el fin de que unos se roben lo que queda del patrimonio de nuestras comunidades y de la nación.

El 10 de junio, la Caravana llegó a Ciudad Juárez, bautizada por Sicilia como “el epicentro del dolor”. En las nueve mesas de debate abiertas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se debatió intensamente el futuro y programa del movimiento. Se acordó un largo pronunciamientos con todo tipo de demandas. Un día después, en una reunión con la comunidad latina en Texas, el poeta se desdijo del documento aprobado en la reunión y reivindicó como programa los seis puntos iniciales del Movimiento. Se abrió, a partir de ese momento, un foco de conflicto permanente con sectores de víctimas radicalizados y algunas fuerzas de izquierda.

El cambio de parecer de Sicilia no fue un capricho de última hora. No hubo tiempo para que los actores claves del proceso hicieran consenso sobre el documento que salió de las mesas de trabajo. En su redacción hubo un problema real de procedimiento, típico de reuniones de esa naturaleza. Más que una propuesta programática la redacción final fue un listado de intervenciones disímbolas. Una parte de los asistentes quiso hacer de Juárez no sólo el epicentro del dolor sino, también, de la movilización. De hecho, intentaron hacerlo durante varios meses, pero la iniciativa no prosperó nacionalmente.

María Elizabeth Flores, Directora del Centro de Pastoral Obrera de Ciudad Juárez y activa participante en la reunión, criticó la posición de Sicilia. Según ella, “el acuerdo con Ciudad Juárez fue que el pacto saldría de la caravana a Juárez, a partir de la discusión de una agenda acordada que se desarrollaría a través de mesas de discusión en las aulas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no de un pacto preestablecido”

Al final —escribió en una carta publicada en *Proceso*— se unieron todos y cada uno de los resolutivos de cada mesa. No se podía dejar fuera a ninguno, como tampoco evaluarse si alguna demanda debía ser incluida o no. Fuimos participantes, mediadores y facilitadores del diálogo, no censura.” Sicilia -afirma- no cumplió el acuerdo.

El poeta respondió que quienes condujeron el proceso —a los que llamó “izquierda dura” — decidieron no orientar, no mantener en la línea de los seis puntos la discusión y los resolutivos, y dejar demandas locas y absurdas, en relación con esos seis puntos, como el contenido del pacto. Según él, las demandas que contenía el pacto de los resolutivos eran un galimatías. De haber llevado eso al diálogo con el gobierno habría sido como suicidarse.

A pesar de ello, la movilización fue exitosa. Los sufrimientos desperdigados en el país, silenciados y desacreditados ante la opinión pública, encontraron la forma de salir de su confinamiento y reconocer el valor de su dignidad. Los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico comenzaron a dejar de ser sospechosos de defender criminales, y pasaron a ser reconocidos como lo que son: víctimas de una guerra absurda.

Miles de ciudadanos atemorizados por la acción combinada de bandas criminales, policía y militares perdieron el miedo de salir a las calles, decir su palabra y exigir el regreso de los soldados a los cuarteles. Otros comenzaron a ver que la acción colectiva tiene sentido. Como una y otra vez lo dijeron a lo largo de la marcha: ya no fueron los mismos.

El éxito de esta empresa, el sostenimiento de su impulso tuvo frente a sí un reto fundamental: organizar a las víctimas, hacer que su voz se vuelva permanente. Las víctimas no están aún organizadas de manera autónoma. En ellas se encuentra la legitimidad y razón de ser del movimiento. En su organización permanente está la clave de la continuidad y la autoridad moral del movimiento. A ello apostaron sus animadores.

Así haya sido en el terreno declarativo, con la Caravana el MPJD logró modificar el discurso gubernamental sobre la guerra contra el narcotráfico. De palabra, obligó al gobierno a hacer de las víctimas una preocupación oficial, cuando antes eran sólo sospechosos de simpatizar con los carteles de la droga. Sin embargo, no pudo modificar ni un ápice la decisión presidencial de seguir adelante con su estrategia de militarizar el país.

LOS CLAROSCUROS DEL DIÁLOGO DE CHAPULTEPEC

El 24 de junio de 2011, el MPJD sostuvo con el presidente Felipe Calderón un diálogo en el Castillo de Chapultepec que desató un intenso y enconado debate. Los medios de comunicación y los periodistas tradicionalmente afines al

gobierno federal lo presentaron como una muestra de la capacidad de Felipe Calderón de escuchar a sus detractores. Sectores importantes de la izquierda y el mundo intelectual lo cuestionaron como una maniobra distractoria y legitimadora de un gobierno severamente cuestionado.

Fue un asunto complicado. Un encuentro de esa naturaleza no debiera ser una cuestión de principios, sino de correlación de fuerzas. Toda lucha que no sea insurreccional —e incluso ésta en ciertos momentos— está obligada a negociar con el gobierno. Más aún, una movilización que exige justicia, reparación de daños y modificación de políticas tiene el imperativo de dialogar.

Dentro del movimiento hay quienes criticaron el diálogo argumentando que Felipe Calderón era un mandatario espurio, carente de legitimidad. Planteado así, el asunto se vuelve una cuestión ideológica sin salida. Por supuesto que Calderón carecía de legitimidad. Más aún, esa falta de legitimidad fue precisamente la que lo condujo a encabezar la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, dialogar o no dialogar no es asunto de legitimidad del adversario, sino de fuerza. Los movimientos dialogan con quien tiene la capacidad para resolver sus demandas. Y una convergencia de víctimas que exige justicia tiene necesariamente que emplazar y tratar con el responsable de solucionar sus demandas.

El MPJD logró que el Presidente de la República se reuniera con sus integrantes para sostener un diálogo público. Un grupo de víctimas que cuestionaba radicalmente su política dijo al jefe del Ejecutivo lo que quiso delante de los medios masivos de comunicación y Felipe Calderón les

respondió. Se trató de un hecho inusitado en el país. Lo fue tanto por la tradición autoritaria de los gobernantes como por el clima de confrontación que se vivía.

Hasta ese momento, las víctimas no habían tenido oportunidad de hablar con el Presidente como lo hicieron. Cuando en febrero de 2010 María de la Luz Dávila expresó a Calderón en Ciudad Juárez: “Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es”, lo tuvo que hacer entre forcejeos y a contracorriente.

Las víctimas que tomaron la palabra en Chapultepec lo hicieron no para engrandecer la figura presidencial, sino para decir su verdad y reclamar justicia. No dieron concesiones. Fueron actores centrales del diálogo, no personal de acompañamiento. Dijeron a Felipe Calderón cosas muy fuertes. Salvador Campanur Sánchez, representante indígena de la comunidad de Cherán, le señaló: “A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros”.

Sin embargo, Felipe Calderón también salió fortalecido del encuentro. Defendió su estrategia de guerra. No cedió un ápice en su posición. Reafirmó lo dicho el 5 de mayo de 2011: tenemos la razón, la ley y la fuerza. Utilizó a los medios masivos de comunicación en su favor. Y se tomó la foto con sus críticos.

Para muchos de quienes consideraban que su presidencia era espuria, la reunión fue un fracaso total, y hasta una traición. Para ellos, lo central no era la reivindicación de las víctimas, ni que éstas hayan dicho su palabra, ni la

dignificación de su causa, ni que ante la opinión pública hayan dejado de ser sospechosas de defender delincuentes para convertirse en damnificados legítimos. No. Lo importante, según su lógica, fue que Calderón se legitimó.

Sin embargo, es importante mirar el diálogo desde otra perspectiva. El Movimiento por la Paz es, fundamentalmente, una convergencia de víctimas que reclama justicia, con un programa que cuestiona al conjunto de la clase política y no sólo al Presidente. No pone en el centro de su acción la legitimación o deslegitimación de la figura presidencial. Como movimiento no tenía en la mira las elecciones de 2012. No rige su acción a partir del fraude electoral de 2006. Es otra cosa, tiene otros orígenes, otro horizonte y otro lenguaje. Pretender que se comportara como un movimiento social de oposición tradicional es renunciar a comprender su naturaleza y su lógica.

En la reunión Javier Sicilia saludó, abrazó y besó a sus adversarios. Le entregó un rosario al Presidente Calderón. Fue fiel a sus orígenes evangélicos, gandhianos y místicos. Para él, un beso es un acto democrático. Sus gestos precipitaron un alud de críticas en una parte de la izquierda.

En ese momento el MPJD no era, a pesar de su nombre, un movimiento articulado, sino un fenómeno de solidaridad colectiva en torno a Javier Sicilia. No era una organización permanente, sino un estado de ánimo. Alrededor del dolor y la convocatoria del poeta se nuclearon las emociones y el hartazgo de miles de ciudadanos consternados con la inseguridad pública, la violencia y la militarización del país. El diálogo le proporcionó un nivel superior de presencia política.

Hasta el surgimiento del MPJD ninguna fuerza política o social había logrado dar visibilidad nacional a la situación que viven las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. La convocatoria de Javier Sicilia dio un vuelco dramático a esta situación. Lo que la izquierda no quiso, no supo o no pudo hacer fue conseguido por el poeta y su equipo. Hablando desde una cultura católica radical y pacifista y desde las víctimas logró agrupar el descontento social contra la militarización.

Para valorar ese primer diálogo de Chapultepec resulta útil la réplica de Mefistófeles en el *Fausto*, de Goethe: “Gris es la teoría, y verde el árbol de oro de la vida”. En los claroscuros del encuentro es posible encontrar un hecho de gran relevancia: las víctimas comenzaron a transformarse en sujetos de cambio. Eso tuvo más importancia para el país y su democratización que el que Felipe Calderón se haya fortalecido a corto plazo.

CARAVANA AL SUR

Al primer diálogo con el Ejecutivo le siguió, el 28 de julio, un encuentro con el Legislativo en el mismo Castillo de Chapultepec. Flotaba ya en el aire vientos electorales. El discurso inicial de Javier Sicilia puso las cartas sobre la mesa y señaló culpables y responsabilidades sin ninguna ambigüedad. Durante cinco horas los representantes del movimiento ciudadano acusaron a los legisladores de ser corresponsables de las 50 mil muertes de la guerra contra el narcotráfico. Varios de ellos pidieron perdón públicamente por sus omisiones.

Se comprometieron a legislar para acabar con la violencia y hacer una Ley de Víctimas. Pero se negaron a firmar cualquier documento, argumentando que el verdadero capital de un representante popular es su palabra.

Javier Sicilia les dijo: “he sido muy criticado por haber abrazado al presidente y por besarle la mano a la procuradora, pero no me importa; ustedes son un chingo y aquí están mis afectos”. Pasó entonces a repartir besos, abrazos y apapachos a los legisladores.

En un primer momento, el Movimiento realizó un balance exageradamente optimista de la reunión. En un desplante verbal sin sustento alguno, a 24 horas de culminado el diálogo, Emilio Álvarez Icaza publicó en *El Universal* una reflexión en la que aseguró: “Hay elementos para pensar que la gente recuperó al Congreso de la Unión y que éste puede recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Apenas un día después del escrito de Álvarez Icaza, José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo desmintió y dijo que sería hasta septiembre cuando el Congreso de la Unión ofreciera una respuesta concreta a los compromisos adquiridos.

Álvarez Icaza amenazó que, en caso de incumplimiento, el MPJD se cobraría la afrenta en las urnas. Un desplante sin sustento. El Movimiento es una movilización social ejemplar, que logró en muy poco tiempo grandes conquistas, visibilizando el costo humano de una guerra absurda y fallida. Sentó a dialogar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión. Impactó a la opinión pública. Pero, carecía de la capacidad organizativa y de convocatoria para presionar electoralmente a los partidos en forma alguna.

Unos días antes del segundo diálogo del Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia y un grupo de tuiteros se habían presentado en el Congreso para presionar por la aprobación de una reforma electoral. Los medios registraron la iniciativa. El número de asistentes fue muy reducido. Quedó demostrado que una cosa es circular mensajes en las redes sociales y otra convocar ciudadanos a la acción, y que las redes sociales son utilizadas por todo mundo. Nadie representa a los tuiteros. Los políticos profesionales tienen tuiteros contratados para hacer labor en favor suyo en la red.

A diferencia de lo sucedido con el Legislativo y el Judicial, el diálogo con el poder judicial no caminó. A regañadientes, los togados aceptaron la reunión pero la condicionaron a que se realizara en sus oficinas. El Movimiento no accedió. Así las cosas, el MPPJD retomó el camino de las grandes caminatas nacionales, ahora hacia el sur. El 9 de de septiembre de 2011, comenzó un recorrido de 3 mil 500 kilómetros, con duración de 11 días. El 19 de de ese mes regresó al Zócalo de la ciudad de México. Allí informaron que durante el trayecto recogieron 221 casos de violación a los derechos humanos.

Entre los saldos de la Caravana al Sur se encuentra el haber construido un puente visible entre los viejos agravios del poder y la nueva inseguridad pública. Familiares de las víctimas de la *guerra sucia* que exigen justicia, comunidades indígenas que padecieron la represión de paramilitares y Ejército se encontraron y reconocieron con los parientes de los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Durante el recorrido, el clamor por detener la guerra que comenzó a escucharse en Ciudad Juárez se fundió

con las denuncias de añejos y nuevos abusos de soldados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Antes de que el Ejército saliera a las calles de Chihuahua, Nuevo León o Sinaloa, patrullaba ya muchas regiones indígenas y había convertido a Chiapas en un inmenso cuartel. Una de las novedades de la caravana fue que le dio la historia y contexto del sur a la actuación de las fuerzas armadas en el norte.

El encuentro entre ambos agravios no fue siempre fácil. Si una de las primeras bajas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón han sido los derechos humanos, en el sur profundo su violación es un hecho histórico y frecuente. Antes, se le nombraba simple y sencillamente represión gubernamental. Y muchas organizaciones populares que en el sur luchan por demandas inmediatas la sufrieron en el pasado y la siguen padeciendo en el presente. Ellas tienen un lenguaje, una cultura organizativa y una identidad construidas a lo largo de muchos años que son diferentes a los del Movimiento por la Paz. De manera que, en ocasiones, algunos actos parecieron convertirse en una moderna versión de la Torre de Babel. No faltaron tampoco momentos en los que esclarecidas vanguardias se empeñaron en mostrar a los caravaneros la verdadera ruta al Palacio de Invierno.

A pesar de ello, en diversos puntos del extenuante recorrido, caravaneros y organizaciones populares debatieron sobre un cuestionario esclarecedor del que salió un diagnóstico más o menos compartido. Las preguntas a las que buscaron dar respuesta fueron: ¿Cómo nos está afectando la Guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo estamos enfrentando la guerra? ¿Cómo nos estamos organizando para

detenerla? ¿En qué coincidimos y en qué no coincidimos en nuestras estrategias para frenarla? ¿Qué actos de acción y resistencia podemos hacer juntos para detener la guerra y construir la paz?

La Caravana al Sur mostró públicamente la grave inseguridad que viven los pueblos indígenas, los migrantes indocumentados centroamericanos y los pobres de México. El secuestro y la extorsión no son privativos de los sectores acomodados. Maestros, trabajadores asalariados y campesinos deben pagar cuotas a delincuentes para conservar sus vidas y sus pequeños patrimonios, en un siniestro pacto de impunidad, en el que los criminales actúan protegidos por autoridades y policías.

La caravana también evidenció que algunas de las más exitosas experiencias de autodefensa son obra de pueblos y comunidades indígenas que luchan por su autonomía. A pesar del acoso de paramilitares y de la presencia hostigante del Ejército, en las regiones zapatistas se vive un clima de seguridad público inusitado en el resto del país. En la Montaña de Guerrero, la policía comunitaria logró reducir los índices delictivos a niveles mínimos.

Asimismo recordó la enorme deuda que la nación tiene con los pueblos indígenas. A pesar de que el Ejecutivo firmó los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, el 16 de febrero de 1996, en representación de los Tres Poderes, siguen sin cumplirse. La reforma constitucional sobre derechos indígenas aprobada en 2001, con el apoyo en el Senado de todos los partidos políticos, fue una burla. La reforma abrió una brecha profunda entre la clase política y el país real, y creó las condiciones para la crisis de representación que se vive actualmente.

La caravana pidió perdón a los emigrantes indocumentados centroamericanos, que diariamente viven en territorio nacional abusos policíacos, humillaciones, extorsiones, y todo tipo de muestras de racismo y xenofobia. Los caravaneros hicieron así lo que gobierno federal debió haber hecho hace mucho tiempo. Como señaló Javier Sicilia, entre los logros de la movilización se encuentran “el visibilizar ese dolor que es una vergüenza para la nación, el iluminar la gran labor que está haciendo gente que es la reserva moral de este país, el padre Solalinde”.

La movilización rechazó la pretensión de varios gobernadores de tomarse la foto con ella. Al hacerlo perdió fuerza en los medios de comunicación, pero ganó en autoridad moral y confianza entre las organizaciones populares y comunidades. Los encuentros con los mandatarios locales habrían sido generosamente divulgados por sus aparatos de comunicación social, pero habrían provocado desconfianzas y recelos.

Finalmente, no pudo reunirse con el EZLN. En los inicios del movimiento, el 7 de mayo de 2011, unos 25 mil zapatistas marcharon por las calles de San Cristóbal en apoyo de la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia y contra la guerra de Calderón. Se movilizaron, dijeron los rebeldes, al llamado de quienes luchan por la vida, y a quienes el mal gobierno responde con la muerte. Ninguna otra fuerza política en el país sacó a la calle tanta gente para enfrentar este desafío. Sin embargo, durante la Caravana al Sur, la posibilidad de un encuentro abortó sin que las partes explicaran por qué.

ENTRE LAS URNAS Y EL VOTO EN BLANCO

Pasado el informe presidencial del 1 de septiembre de 2013, la cuestión electoral devoró la agenda política nacional. La distancia entre el Movimiento y la izquierda partidaria se hizo cada vez más grande. El Movimiento y Javier Sicilia buscaron desligar la lucha de las víctimas de las campañas. Los partidos de izquierda los presionaron para que se incorporaran. Ante el alboroto de los comicios, la solidaridad, la atención de la opinión pública y la capacidad de sacar a la calle gente en la lucha contra la guerra de Calderón se fueron desdibujando.

Tres meses después del primer Encuentro, el 14 de octubre, el presidente Felipe Calderón e integrantes del Movimiento sostuvieron un segundo diálogo en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. El gobierno pretendió que asistieran también otras organizaciones víctimas con una clara orientación oficialista. El MPJD lo rechazó. Javier Sicilia le dijo a José Blake Mora, entonces secretario de Gobernación: “No somos iguales a ninguna de las organizaciones con la que quiere sentarnos. Nosotros representamos a todas las víctimas del país que ustedes han negado.”

El ambiente se tensó. Al comenzar el evento, Javier Sicilia se negó a someterse a la revisión que el Estado Mayor presidencial le exigía para poder acceder al Alcázar del Castillo. Los soldados le arrancaron a los familiares de las víctimas las fotos de sus seres queridos.

En la reunión, el padre dominico Miguel Concha cuestionó la estrategia militar que “quizá ya haya causado

un daño irreparable al país. Uno de los fenómenos que ha creado esa visión militarizada que no queremos es el surgimiento de grupos paramilitares de limpieza social, cuando menos tolerados y esperamos no directamente promovidos por los gobiernos federal, estatales y municipales”.

Felipe Calderón justificó su posición diciendo que fue la población la que pidió la presencia del Ejército en las calles. Rechazó que haya un Estado autoritario: “No es el Estado que asesina o reprime sistemáticamente o que mutila a las víctimas”. Sin embargo, reconoció que “es cierto que (el Estado) no ha cumplido su función de proteger a la gente”. Aceptó, también, la necesidad de contar con una ley de víctimas.

Con el despliegue de las campañas, la solidaridad externa languideció. Sin embargo, El principal problema, no provino de afuera sino del interior del Movimiento mismo. Julián LeBarón, el dirigente mormón disidente que organiza la autodefensa comunitaria en Chihuahua rompió con la coalición.

En una entrevista con Nacho Lozano, explicó sus razones: “Me uní a Javier Sicilia -dice- porque él fue a emplazar al gobierno de Morelos diciéndoles que tenían exactamente 13 días para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo, pero luego con el Movimiento por la Paz nos fuimos por la vía del diálogo, y yo creo que ese fue el error más grande, porque vamos con la herramienta más débil que tenemos, la retórica y queremos luchar con profesionales que nos hacen garras. Por eso decidí decirle que me separaba del movimiento y él lo comprendió. Yo creo que la única forma real de dialogar con las autoridades es con las acciones”.

A pesar de ello la Cámara aprobó una Ley de Víctimas, que Felipe Calderón decidió bloquear, por medio de una controversia constitucional. Argumentó que la legislación aprobada por el Congreso no marcaba las atribuciones de los estados y municipios ni precisaba los montos para las indemnizaciones a las víctimas.

Cerca de las elecciones, el 28 de mayo de 2012, el Movimiento se reunió nuevamente en el Castillo de Chapultepec, ahora con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República. Los oradores dispararon a mansalva sobre ellos. “No escucho su corazón – le dijo el poeta a Enrique Peña Nieto- no lo escucho vibrar con el dolor de las víctimas. Escucho un discurso frío que aterra, nos aterra a todos. No le escucho una palabra de piedad, de compasión frente a tanto dolor”.

Al candidato de las izquierdas, le espetó, para enojo de sus simpatizantes: “Para muchos usted López Obrador significa la intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo que pregona su República Amorosa, con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones. Significa el resentimiento político, la revancha sin matices contra lo que fueron la desaseadas elecciones del 2006. El mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar las corrupciones de muchos miembros de su partido.”

AMLO le contestó señalándole que no lo podía meter en el mismo saco que otros políticos corruptos y represores porque él tiene más de 30 años luchando por los derechos humanos.

De cara a los comicios de julio de 2012, Javier Sicilia promovió el voto en blanco. Sostuvo que era el único acto

de resistencia que les quedaba ante el fracaso de los seis puntos, el programa original del movimiento. No ir a las urnas era, para él, “la única manera de presionar a los partidos a un cambio profundo que nos dé justicia”. Su llamado apenas y se escuchó. Desde la izquierda se le respondió que esta posición de invitar al voto nulo o en blanco sólo beneficia al régimen y al PRI.

Pasadas las elecciones el MPJD realizó una nueva Caravana, en esta ocasión en Estados Unidos. Durante un mes recorrió 22 ciudades. Denunció el papel que juegan de las armas estadounidenses en la tragedia mexicana. Sin embargo, su impacto en la opinión pública fue muy limitado. Su momento se había diluido.

Con el cambio de administración, el 10 de enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en Los Pinos la publicación de la Ley General de Víctimas en el *Diario Oficial de la Federación*. Durante la ceremonia, dijo que México es un país lastimado por la delincuencia y donde miles de personas han padecido los estragos de la violencia. El Estado –subrayó –, no puede tener oídos sordos a las voces de la sociedad, pues la dignidad de una nación se refleja en la forma en que trata a las víctimas del delito y persigue a quienes han infringido la ley.

A nombre del Movimiento, Javier Sicilia saludó la expedición del ordenamiento. “Reconocemos –dijo– este gesto; lo saludamos, lo abrazamos, lo celebramos como un consuelo y una esperanza que nos llega en medio de la noche, como un primer paso hacia la justicia y la paz que necesita la nación, y como un gran y profundo gesto democrático.

Sin embargo, su optimismo inicial se desvaneció al poco tiempo. En una reflexión realizada el 30 de marzo de 2014, con motivo del tercer aniversario del MPJD, advirtió que si las autoridades del país no dan una muestra clara de su compromiso para fortalecer y cumplir la Ley General de Víctimas, este mecanismo legal podría terminar podrido. Encarrerado, lamentó que el presidente comenzara del lado de las víctimas, incluso promulgando la ley general y asumiendo esta deuda del Estado, para después comportarse como todos los demás gobiernos: borrando a las víctimas. Peña Nieto, dijo el poeta, empezó su gobierno como un estadista y luego se volvió un viejo priísta, el líder de un partido que no sólo quiere volver a la presidencia imperial y a la verticalidad, de un PRI que no sólo quiere administrar el infierno, sino también adueñarse de él.

LA RUTA DE LOS FIERROS

El Movimiento por la Paz, más allá de sus enormes logros, no pudo ser el freno de emergencia del ferrocarril de la barbarie de la guerra. Sobrevive pero ha perdido la capacidad de movilización que tuvo en sus inicios. Hoy, está más cerca de ser una variante de ONG que una fuerza cívica. El ciclo de caravanas y diálogos nacionales con el poder ha concluido. El Movimiento sigue siendo una referencia moral en cuestiones de seguridad pública pero ha perdido la potencia para fijar la agenda política.

El florecimiento y avance de las policías comunitarias y autodefensas en la tercera parte del país a partir de 2012 no es ajeno a que los gobiernos de Felipe Calderón y

Enrique Peña Nieto hayan cerrado la vía ciudadana para enfrentar la tragedia nacional que el MPJD representa

La movilización ciudadana que Sicilia encabezó mostró la urgencia de soluciones de fondo para enfrentar estos retos. La negativa de los poderes a enfrentarlos con seriedad creó las condiciones para que un nuevo ciclo de luchas contra la inseguridad pública, en el que los pueblos y ciudadanos toman en sus manos su protección, pudiera desarrollarse con legitimidad.

El MPJD comprendió con claridad esta nueva situación. Para ellos, el surgimiento de los grupos de autodefensa en el país es un “mal necesario” y una opción “absolutamente legítima” ante la ineficiencia de las autoridades para brindarle paz y seguridad a la población.

No en balde, el Movimiento vivió con impotencia como diversos integrantes suyos fueron asesinados impunemente. Así pasó trágicamente en una caravana de solidaridad en Ostula, deficientemente planeada, en la que fue torturado y asesinado el comunero José Trinidad de la Cruz, Don Trino, en diciembre de 2012, ante los ojos impotentes de 12 caravaneros. El crimen impactó profundamente a los integrantes del Movimiento. Las reiteradas alertas del Movimiento y sus denuncias fueron insuficientes para frenar los homicidios de sus integrantes y, cuando éstos se perpetraron no lograron que se castigara a los responsables.

En esas circunstancias, incluso un pacifista tan consecuente como Javier Sicilia, consideró legítimo usar armas para la autodefensa. “Me parece -le dijo a la agencia EFE- de lo más digno que alguien tome una pistola para decir:

‘no van a cortar mi dignidad ni la dignidad de una comunidad’. La no violencia -añadió- “funciona con gente racional. Gandhi no hubiese funcionado en la Alemania nazi. Nosotros hemos tratado de hacerlo funcionar, pero parece que por más que hacemos... no”.

Según el poeta, “es absolutamente legítimo. Estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No se puede tolerar que en nombre de un gobierno que no ha cumplido su razón de ser, que es darle paz y seguridad a estos ciudadanos, la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, le secuestren a sus hijas, las violen y las descuarticen”. El dirigente del MPJD recalcó: “yo estoy de acuerdo con que la gente se arme para defenderse.

Sicilia piensa que las autodefensas son solamente el reflejo de que el Estado mexicano está “profundamente corrompido y lleno de impunidad”, que el llamado de “emergencia nacional” no es asumido por los gobiernos y que es un deber legítimo de la población tomar las armas en aras de defender su integridad.

“La clase política -alerta- tiene que aprender a ver y a escuchar lo que las autodefensas le están mostrando y diciendo: si quiere salvar al Estado y a la nación debe cambiar su conducta y trabajar del lado de la resistencia ciudadana, de las necesidades de la gente y de la paz y la justicia. De no hacerlo, su ceguera y su sordera seguirá alimentando a la máquina asesina y generando la única salida que le deja a la dignidad: continuar resistiendo”.

V) GUERRERO AMARGO

INFIERNO EN EL PARAÍSO

La tarde del sábado 16 de noviembre de 2013, los campesinos Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez llegaron en una camioneta Estaquita Nissan blanca a una reunión en Atoyac, estado de Guerrero. Un hombre los esperaba. Nada más reconocerlos les disparó, con una pistola calibre 9 milímetros, cuatro certeros balazos a cada uno. Los dos murieron. El pistolero se dio a la fuga.

Juan y José Luis eran representantes de la comunidad de El Paraíso, en la que viven unas 6 mil personas. Enclavada en el corazón de la región caficultora de la Costa Grande, muchos de sus habitantes se dedican al cultivo del aromático. Cerca de allí se siembra amapola. La producción de marihuana se abandonó, porque ya no es negocio. *La Familia* y *Nueva Generación* disputan el territorio.

Los líderes de El Paraíso fueron asesinados un día antes de anunciar la formación de una policía comunitaria.

Querían enfrentar con sus propias manos, como han hecho tantas otras comunidades, al crimen organizado. Apenas un mes antes, la hija de 27 años de Sotelo Martínez fue secuestrada por un grupo lumpen, al que llaman *Los Rojos*, presuntamente asociado con el *cártel* de los Beltrán Leyva. Cerca de 300 vecinos tomaron las armas y la rescataron. Concluyeron que no tenían de otra más que defenderse a sí mismos.

Las lluvias causadas por la tormenta *Manuel* y el huracán *Ingrid* dañaron los cafetales y causaron graves destrozos en El Paraíso. Juan y José Luis eran los dirigentes del poblado. Además de promover la autoprotección, luchaban por conseguir apoyos para compensar las pérdidas de los cafetos, y en contra de la pretensión del gobierno estatal de reubicar el poblado en otros terrenos, distantes de su asentamiento actual.

Juan y José Luis no son los únicos líderes sociales asesinados durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien tomó posesión del cargo por segunda ocasión, el 1 de abril de 2011. Nada más iniciar 2014 iban 17 representantes populares liquidados. En este registro se encuentran, entre otros, Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ultimada el 19 de octubre de 2013, después de anunciar la formación de una policía comunitaria en Atoyac. También Ana Lilia Gatica y su compañero Luis Olivares, dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ejecutados extrajudicialmente el 10 de noviembre. En la inmensa mayoría de los casos no se ha procesado a los responsables de los crímenes.

La saga de sangre del gobernador Aguirre comenzó con el violento desalojo de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011. En esa operación murieron, a consecuencia de disparos de la policía, los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Estos crímenes, presumiblemente cometidos por los grupos de poder local, no son hechos aislados. Las regiones del estado con mayor tradición de autorganización popular se han semimilitarizado. Con el pretexto de la cruzada contra el hambre, las fuerzas armadas han abierto en la Montaña comedores populares, y sometido a la población civil a rigurosos controles.

Simultáneamente región productora, consumidora y de tránsito de estupefacientes, en Guerrero se ha fortalecido el crimen organizado, al tiempo que, como en el caso de El Paraíso, disputa rutas, mercados y territorios. Irónicamente, mientras el Ejército y la policía concentran sus operaciones en la entidad en tareas de contrainsurgencia, los *cárteles* de la droga crecen y actúan con mayor la impunidad.

La represión gubernamental se ha cebado contra las policía comunitaria y ciudadana. El 21 de agosto de 2013 comenzó una ofensiva policíaca y militar que llevó a la cárcel a más de 40 integrantes de la policía comunitaria. A algunos se les ha acusado de ser secuestradores y terroristas. A varios se les ha enviado a penales fuera del estado.

Las policías comunitarias y ciudadanas en la entidad son una creación de los pueblos indios, los afrodescendientes y los campesinos mestizos de Guerrero ante la creciente inseguridad en sus regiones, que les ha permitido defenderse. Ellos han puesto al descubierto la relación que

existe en varios municipios entre funcionarios públicos, fuerzas del orden y crimen organizado.

Hasta hace poco, la autorganización de las comunidades para su defensa tenía en la Ley 701 un asidero jurídico. La norma reconocía el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Sin embargo, el Congreso estatal recibió línea del gobierno federal para aprobar una nueva legislación que crea cuerpos policíacos absolutamente obsoletos.

Esta ofensiva contra las policías comunitarias ha sido justificada diciendo que son organismos fachadas de las guerrillas. El almirante retirado y ex comandante de la octava Zona Naval con sede en Acapulco y ahora secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Lara Montellanos, dijo a *Proceso* que las organizaciones político-armadas están aprovechando el contexto de inseguridad y violencia para organizar procesos de índole política e ideológica con el propósito de generar inestabilidad social en la entidad.

En Guerrero se está regresando a los años de la *guerra sucia* que se vivió entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta, en la que se involucró al Ejército en actos contrarios al honor, la ética y la justicia. Ángel Aguirre conoce perfectamente bien esa historia. Él fue designado Gobernador sustituto de Guerrero entre 1996 y 1999 por el congreso estatal, después de que Rubén Figueroa Alcocer fue destituido, a raíz de la matanza de Aguas Blancas.

La masacre marcó un hito en la historia moderna del estado.

AGUAS BLANCAS: GUERRA TUVIERON

El 28 de junio de 1995, la policía judicial de Guerrero emboscó, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, a campesinos pobres de las comunidades de Atoyaquillo y Tepetitla, pertenecientes a la OCSS. Fueron asesinados 17 labriegos y heridos 23.

El grupo, integrado por unas 100 personas, se dirigía a la Presidencia Municipal de Atoyac en un camión torton de color rojo y una camioneta Ford de redilas azul. Exigía la entrega de fertilizantes, láminas para vivienda y otros apoyos agrícolas ofrecidos por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al frente del gobierno estatal desde 1993, y la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes.

La OCSS había sido fundada en enero de 1994 en Tepetitla, una comunidad en la sierra guerrerense, con huertas de café y milpas, llena de pobreza y carencias. Demandaba salud, vivienda, carreteras, educación y apoyos a la producción. Muchos de sus dirigentes habían participado en la década de los setenta en las jornadas por la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos.

Su primer acto público fue una movilización en Acapulco el 10 de abril, para celebrar el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Un mes después, el 18 de mayo, sus integrantes marcharon en Atoyac para conmemorar el inicio de la guerrilla de Lucio Cabañas.

Como cuenta Hilda Iturralde, desde su nacimiento la OCSS realizó acciones radicales: expulsó al grupo de la

Policía Motorizada de Tepetitla y tomó el cuartel de esa corporación; destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales; paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación entre la región y los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

El gobernador Rubén Figueroa creyó ver en la nascente organización la fachada de un agrupamiento guerrillero. Trató de dividirla, encarceló a algunos de sus dirigentes, respondió parcialmente a varias de sus demandas y desapareció a Gilberto Romero. En una reunión que sostuvo con ellos en septiembre de 1994, accedió a solucionar sus peticiones pero no a presentar con vida a los desaparecidos de la década de los setenta. “Ya se los llevó la chingada, ya no tienen vuelta”, les dijo, al tiempo que amenazó a los dirigentes: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier rato se los puede llevar la chingada”. Según Benigno Guzmán, presente en la negociación, el mandatario les dio a escoger entre “echarnos una palada de tierra o ponernos a trabajar con él”. Después “se levantó y se fue; nos dejó ahí, en su oficina de Casa Guerrero”.

Ese 28 de junio en Aguas Blancas, la amenaza de Figueroa se cumplió. A las 10.30 de la mañana, los vehículos en que se desplazaban los integrantes de la OCSS fueron detenidos en un puesto de revisión, ubicado en el río Las Hamacas. De una camioneta descendió un sujeto que disparó al aire. Durante dos horas, unos 400 agentes del agrupamiento motorizado de la policía de Guerrero, judiciales

y antimotines, fuertemente armados, hicieron fuego sobre los campesinos. A varios heridos les dieron el tiro de gracia después de patearlos para ver si seguían con vida. Otros alcanzaron a esconderse entre palmeras y matorrales.

Al frente del operativo gubernamental se encontraban altos mandos policíacos y de gobierno. El director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, encabezó a quienes dispararon. La masacre fue filmada.

El gobierno de estado quiso presentar los hechos como resultado de un “enfrentamiento” en el que las fuerzas policíacas actuaron en legítima defensa. A los muertos les puso armas en las manos. Sin embargo, reporteros gráficos de *El Sol de México* y *El Sol de Acapulco* que habían llegado antes del montaje tomaron fotos en las que los difuntos estaban desarmados.

La entonces alcaldesa de Atoyac, la perredista María de la Luz Núñez Ramos, narró públicamente una conversación que un día antes de la masacre sostuvo con el gobernador del estado. Por teléfono, Figueroa le dijo que él se iba a encargar de detener a los campesinos que iban de Tepetixtla “a como dé lugar”, y que ella debía de ocuparse de los de Atoyac. Después de la matanza, le telefoneó nuevamente: “¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?” - sentenció.

Tres días después de la masacre, Benigno Guzmán advirtió: “La muerte de nuestros diecisiete compañeros es una advertencia y una muestra clara del estilo de gobierno de la familia Figueroa. El gobierno no está de acuerdo con ninguna clase de lucha; no le gusta que el pueblo se organice. Toda la familia Figueroa ha sido represora del pueblo”.

Inicialmente, Rubén Figueroa trató de desvirtuar los hechos. Sin embargo, los testimonios de lo verdaderamente sucedido se fueron filtrando a la opinión pública, primero en la prensa, especialmente en *La Jornada* y *Proceso* y luego en la televisión. En su programa “Detrás de la noticia” en Televisa, Ricardo Rocha exhibió el 25 de febrero de 1996 un video que desnudó el montaje gubernamental y evidenció el crimen.

La situación de Figueroa se volvió insostenible. El 11 de marzo de 1996, solicitó al Congreso local “licencia definitiva” para separarse de su cargo y así facilitar la investigación del caso. Su licencia fue aceptada y fue designado como su sucesor interino el actual gobernador de la entidad Ángel Aguirre.

Aguas Blancas no fue el único caso de represión a líderes campesinos y perredistas durante los casi tres años que Rubén Figueroa estuvo al frente del gobierno del estado. El mandatario pensó que con la violencia iba a impedir el surgimiento de una nueva guerrilla, la expansión de PRD y el crecimiento de los movimientos sociales. Y se empeñó en hacer de la represión una herramienta central de control político.

Según un informe del Centro Prodh, tan sólo en 1995 se produjeron en el estado 113 hechos violentos: 37 en la Costa Grande, 18 en Acapulco, 17 en la Costa Chica, 10 en la Montaña, 10 en la Mixteca, otros 10 en la Tierra Caliente, 6 en Chilpancingo, 3 en la región Centro y 2 en la Norte.

Durante los 35 meses y 11 días en que Figueroa estuvo al frente del gobierno, la lista de militantes del PRD y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a

84. Como señaló la periodista Maribel Gutiérrez, tan sólo en los últimos ocho meses de su administración se perpetraron diez asesinatos colectivos, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, en los que murieron 67 personas.

Los crímenes con el sello de la Familia comenzaron aún antes de que tomara posesión como gobernador. El 14 de octubre de 1992, Gorgonio Flores Cortés, Presidente y fundador de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCH), fue salvajemente asesinado. Mixteco de Acalmani, en el municipio de Igualapa, al que le gustaba caminar descalzo, *Goño* había sido secuestrado y torturado en la década de los setenta, acusado de pertenecer a las fuerzas de Lucio Cabañas. No se arredró. Echado pa'delante como era, siguió organizando la lucha campesina en su región. Hasta que le quitaron la vida. Los pistoleros que lo ultimaron le dispararon a traición en la cabeza con una escopeta.

Fueron ejecutados también, recuerda Gerardo Peláez, el regidor suplente y líder del sol azteca en el municipio de Metlatónoc, Juan Mercenario, y el comisario ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava, que encabezaba una batida contra taladores de montes. Al mes siguiente fue acribillado el perredista Moisés Bruno López, líder en Moyetepec, municipio de Tlapa.

El 21 de febrero de 1995 -escribe Maribel Gutiérrez-Figueroa recibió a dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. La plática —según los asistentes a la reunión— “se desarrolló con un respeto mutuo en su primera parte, hasta que el gobernador expresó sus

comentarios sobre Chiapas. Su tono cambió de la sequedad a la burla y la advertencia. Nos los insinuó como promotores de la guerra, y nos dejó claro que los que mueren son los jóvenes”.

“Ya olvídate de *Marcos*”, dijo con el índice amenazante al diputado federal Martín Equihua, “ese pronto va a estar en paz y para siempre. Guerrero no es Chiapas. Si eso se suelta aquí, ustedes no saben lo que les espera; los primeros que mueren son los jóvenes como ustedes. Yo ya lo viví aquí, murieron 5 mil; téngalo presente. Tú, Equihua, no eres de Guerrero. Eres michoacano, te sé de memoria... tenlo presente sobre todo tú. Se los digo para que les quede claro. Así es esto”.

La saga sangrienta siguió su marcha. El 10 y el 19 de junio de 1995 fueron asesinados tres indígenas mixtecos de Tlacoachistlahuaca que participaban en un plantón de protesta frente al Palacio Municipal de ese municipio. Perteneían al Consejo 500 Años y demandaban un cumplimiento de un plan mínimo de desarrollo y la elección de comisarios municipales en cada comunidad.

Días después, el 15 de julio, en un aviso de lo que seguía después de Aguas Blancas, en un camino de terracería de Ajuchitlán del Progreso, en Tierra Caliente, 12 integrantes de una misma familia fueron ejecutados por gentes que se dijeron de “la ley”.

Ese mismo 15 de julio, dos campesinos fundadores de la OCSS fueron asesinados por la espalda y con el tiro de gracia. Los homicidas pertenecían a la Organización Benito Juárez, una escisión de la OCSS alimentada por el gobernador Figueroa.

Dos días más tarde, a tres kilómetros de Cualac, en la Montaña de Guerrero, un grupo de indígenas vestido con su ropa tradicional y equipado con cuernos de chivo, emboscó a policías motorizados. Cinco judiciales perdieron la vida, mientras los atacantes se perdieron en la oscuridad de la noche. Dijeron ser parte una Brigada Campesina de Ajusticiamiento.

Un año después de la masacre de Aguas Blancas, durante la ceremonia luctuosa para recordar a los difuntos, hizo su aparición el EPR, organización político-militar nacida de la fusión de varios grupos guerrilleros.

El surgimiento del grupo armado precipitó cambios importantes en el estado. En la Costa Grande y la Montaña —escriben Rosario Cobo y Lorena Paz— se impuso el estado de sitio: “El ejército se mantiene en alerta máxima y prácticamente decreta un toque de queda al advertir a la población la conveniencia de que no salgan de sus casas al oscurecer, ni transitar entre comunidad y comunidad”.

La persecución contra los dirigentes de la OCSS fue implacable. A Hilario Mesino lo arrestaron en la ciudad de México el 3 de julio de 1996. A Benigno Guzmán Martínez, le giraron 9 órdenes de aprehensión, acusándolo de ser el responsable de un variado menú de delitos. Finalmente lo detuvieron el 27 de febrero de 1997 por ser “cabecilla del EPR” y lo sentenciaron a 13 años y medio de cárcel. Suerte parecida corrió Miguel Ángel Mesino, otro de los dirigentes históricos de esa liga campesina. Los interrogatorios y la tortura buscaron que confesaran ser integrantes del EPR

En este clima de violencia política e inseguridad pública, de abusos sostenidos de las policías contra la pobla-

ción, de profundas heridas provocadas por la guerra sucia de la década de los setenta, por la continuación de la estirpe de los Figueroa —señores de horca y cuchillo— en la conducción de la política estatal, pero también de resistencia campesina, de lucha democrática y de recuperación de la identidad indígena, con el fantasma del zapatismo cabalgando por todo el país, surgió la policía comunitaria en Guerrero.

LA VIOLENCIA RECURRENTE

Como un río que se alimenta de distintos afluentes, el clima general de violencia que se vive en Guerrero tiene cinco caudales diversos que lo alimentan: intolerancia caciquil ancestral apoyada por el gobierno estatal; arbitrariedad e impunidad policíaca; industria del secuestro; narcotráfico, y autodefensa popular. Todas ellas confluyen para hacer de la entidad un estado conflictivo y convulso.

Muerte sobre muerte, a los asesinatos de hoy hay que sumarle los muertos y desaparecidos, los detenidos y torturados de la guerra sucia. Guerrero es tierra de viudas y huérfanos de una conflagración presente en la memoria colectiva. Si en algún estado se dejó sentir la guerra sucia de la década de los setenta del siglo pasado fue en Guerrero. Para muchos, esos agravios, vivos a flor de piel, tienen un responsable con nombre y apellido: Rubén Figueroa Figueroa, el Tigre de Huitzucó. El nombramiento de su hijo como gobernador de la entidad fue una afrenta amarga y dolorosa, que el heredero de su padre se encargó de alimentar día a día, haciendo de los conflictos sociales asuntos de nota roja.

Esta violencia tiene raíces. En su versión más inmediata, apenas en mayo de 1967, por un conflicto aparentemente escolar, los señores de la sierra, lanzaron a policías y caciques a masacrar a la población de Atoyac. El dirigente de ese movimiento, el profesor Lucio Cabañas Barrientos, amenazado de muerte, debió de internarse a la sierra para organizar una fuerza de autodefensa, que con el paso del tiempo se transformaría en una organización político-militar. Cuando años más tarde, en mayo de 1974 su guerrilla secuestró al Tigre de Huitzuc, entonces candidato del PRI a la gubernatura del estado, un nuevo baño de sangre enlutó a los hogares de la región. El memorial de agravios escrito a raíz de aquellos hechos es una fuente permanente en la que abreva la inconformidad social.

Desde entonces, nuevos ciclos de lucha se han producido de manera intermitente, combinando la formación de organizaciones campesinas autogestionarias, con movimientos cívicos en lucha por la democracia municipal y contra el caciquismo. Una vez tras otra, esas experiencias se han topado con la fuerza de los grupos de interés local, y con su pretensión de “solucionarlos” por medio de la violencia.

Los dirigentes de los movimientos sociales en el estado han tenido que enfrentar, irremediablemente, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, cárcel, tortura y persecución en su contra. Cada pequeño avance en la organización popular y la representación democrática, ha choca, casi inevitablemente, con la represión. En estas condiciones de aniquilamiento permanente de los liderazgos, mediaciones sociales y del tejido civil, la autodefensa popular ha tenido un clima más que favorable para germinar.

La situación era ya tan grave en la entidad en 2008, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó se aplicaran medidas cautelares para proteger de las agresiones a líderes y simpatizantes. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan documentó 201 denuncias penales contra dirigentes sociales y, cuando menos, 30 asesinatos en las últimas dos décadas.

Por si fuera poco, la crisis de la economía local de base agraria, precipitada por la caída y fluctuaciones del precio del café y ganado, y el encarecimiento del crédito, se han convertido en campo fértil para que florezcan el narcotráfico y el secuestro. Empero, estas actividades ilícitas, sólo pueden desarrollarse cuando cuentan con la complicidad de los verdaderos poderes. Por acción o por omisión, las fuerzas de seguridad pública en la entidad no son ajenas a la proliferación del crimen organizado.

Hoy en día, Guerrero vive según Abel Barrera, fundador de Tlachinolla, una de sus peores etapas de violencia. La colusión del narcotráfico con las policías y los cacicazgos, así como la militarización de amplias regiones del estado, han propiciado una situación de inseguridad y violación a los derechos humanos.

Sin embargo, como dejó en claro en 2011 el paso por aquellas tierras de la Caravana por la Paz encabezada por Javier Sicilia, la violencia que sacude a la entidad no es sólo resultado de la guerra contra la droga o de las disputas entre bandas criminales. Una parte muy importante de los homicidios y las desapariciones son producto verificable de una nueva *guerra sucia* contra el movimiento popular. Tan sólo, durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Ga-

lindo (2005-2011), quien llegó a la gubernatura con el PRD, fueron asesinados 32 dirigentes y militantes de ese instituto político, así como decenas de líderes sociales e indígenas y defensores de derechos humanos.

Pero Guerrero es también tierra de dirigentes populares ejemplares, que han padecido la represión sin abandonar sus causas. Por tradición e historia, la entidad ha sido campo fértil para que surjan líderes como Zohelio Jaimes.

LA INSUMISA TERQUEDAD DE ZOHELIO JAIMES

“No te metas en pendejadas”, le advirtió un día de 1995 Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, al líder campesino Zohelio Jaimes Chávez. “De la cárcel te puedo sacar, pero de la tumba no”, remató.

Zohelio Jaimes era dirigente de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero (CecgG), una combativa organización de campesinos pobres cafetaleros de los municipios de Atoyac, Coyuca y Tecpan. El EZLN lo había nombrado su asesor en los diálogos de paz de San Andrés. Y, apenas dos años antes, aparecía en listas gubernamentales como el segundo guerrillero más peligroso del país.

Zohelio era un guerrerense alto, de complexión robusta, tez morena y pelo y barba negra, hasta que las canas la blanquearon. Hablaba con acento costeño, sin prisa y con precisión. Solidario y generoso, era un líder campesino sobresaliente en una tierra en que los dirigentes sociales se dan en abundancia.

La amenaza del gobernador Figueroa no era cosa nueva para él. Con 16 años de edad fue arrestado el 2 de

octubre de 1968. Tres días después salió libre. Casi cuatro años más tarde, el 16 de julio de 1972, fue detenido nuevamente, en casa de sus padres, en San Francisco del Tibor, en Atoyac. No podía caminar bien: 12 meses antes se había lastimado la pierna al hacer deporte.

Ese día, el Ejército cercó San Francisco y cerró todos los caminos. Tomó prisioneros a 35 habitantes, incluido el padre de Zohelio, quien era el comisario ejidal. Los concentró en la cancha de basquetbol y se los llevó presos. Los uniformados querían venganza. El 25 de junio, la guerrilla de Lucio Cabañas había tendido la primera emboscada contra las fuerzas armadas.

En este arresto, Zohelio no tuvo la misma suerte que en el primero. Durante 11 días, Arturo Acosta Chaparro lo torturó salvajemente en el cuartel de Atoyac. Luego se lo llevaron a la cárcel número uno de Acapulco y lo siguieron torturando. Le dieron toques eléctricos en los testículos, lo ahogaron en agua y lo golpearon. Querían que firmara un documento reconociendo su participación en la emboscada. Sin prueba alguna en su contra, lo sentenciaron a 28 años de cárcel. Estuvo preso durante cuatro años y cinco meses, hasta que finalmente salió de prisión al final del sexenio de Luis Echeverría.

Ni la tortura, ni la cárcel, ni las amenazas lo frenaron. Ya libre exigió la presentación con vida de casi 500 desaparecidos políticos. Participó en la elaboración de una lista de los detenidos no presentados y de un memorial de los agravios perpetrados por el Ejército. En 1977 viajó a Iguala, donde se encontraba el presidente José López Portillo, a exigir solución. El gobierno respondió con el silencio.

Hasta su reciente fallecimiento, conservó en su memoria los nombres de las víctimas y las circunstancias en que fueron desaparecidos.

A partir de 1980 Jaimes Chávez comenzó a organizar a los cafetaleros de la Costa Grande de Guerrero. Todavía soplaban aires represivos en la región y convocar a asambleas para promover la lucha social era muy peligroso. La región estaba en estado de sitio. Las reuniones para formar un movimiento campesino auténtico tenían que hacerse en la clandestinidad, con todo tipo de medidas de seguridad. El grupo promotor de la resistencia estaba formado por 11 personas, Zohelio entre ellas.

El trabajo organizativo rindió frutos. Junto a otros compañeros, como Arturo García y Patricio Barrientos, hizo de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil una organización eficaz para presionar al Inmecafé por mejores precios del aromático, y un instrumento para promover otro tipo de desarrollo regional más justo. Cuando en 1987 la intervención del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu abortó ese proceso, Jaimes Chávez y sus compañeros se embarcaron exitosamente en la construcción de la CecgG. Desde allí buscaron que los campesinos se apropiaran del proceso productivo. En lo nacional, la coalición participó en la formación de la Unorca y en los primeros años de la CNOC.

En 1988 el cardenismo impactó profundamente la región y la Ccccg desempeñó un papel central en darle una fuerza organizada y conducción. Desde abajo se convirtió en actor clave en la democratización de la región. Sin embargo, chocó con la burocracia y la politiquería del PRD.

En 1996 Zohelio obtuvo la candidatura de ese partido a la alcaldía de Atoyac, pero los grupos de interés partidario terminaron sacrificándolo en una negociación mezquina.

La amarga experiencia lo llevó a concluir que el desarrollo del pueblo no va a llegar por la acción de un partido político. Al investigador Guadalupe Gabriel Durán Férman le dijo: “Obtener candidaturas, ganar puestos de representación popular no es el propósito de la organización, no es su objetivo, sino la gestión y lucha por mejorar las condiciones del campo, luchar por el desarrollo. Por ello no es importante integrarse a un partido como el PRD, que no tiene un programa y una dirigencia verdaderamente preocupada por la gente”.

Durante sus últimos años, Zohelio estaba muy preocupado por el rumbo que había tomado el movimiento campesino en el país. En un momento en que el campo está devastado —le advirtió a sus compañeros de la Unorca en 2010— sentimos a veces que vamos en retroceso. Ninguna organización ni país son nada sin sus bases. Es necesario empujar para que se retome el rumbo que le dimos al movimiento en los años 80.

También estaba consternado por los acontecimientos de su estado natal. “Guerrero —alertó— vive una historia de represión, enfrentamos los delitos comunes, de la delincuencia organizada, y de la delincuencia institucional que ataca al pueblo”.

Formado en el cabañismo y la lucha de masas, con la memoria de la *guerra sucia* contra el pueblo guerrerense siempre a flor de piel, convencido de la capacidad de los campesinos para hacer su propia historia, Zohelio fue

tercamente insumiso. Agraviado y convencido, como él lo decía una y otra vez, de que la injusticia hace al revolucionario, el revolucionario hace la revolución y la revolución transforma al mundo, se empeñó, a su manera, hasta su último soplo de vida, en transformar el mundo desde abajo.

Zohelio Jaimes sobrevivió a la cacería de brujas. Muchos otros dirigentes no lo hicieron. En la vida de ellos, como en la de Zohelio, se resume en mucho las razones del surgimiento de las policías comunitarias en la entidad

LORENZO FERNÁNDEZ ORTEGA: CLIMA DE TERROR

El 9 de febrero de 2008, el indígena Lorenzo Fernández Ortega fue secuestrado. Un día después, bajo un puente del río que cruza la cabecera municipal de Ayutla, Guerrero, fue encontrado su cuerpo sin vida y con huellas de tortura. Al parecer le cortaron el cuello con un cuchillo. Fernández Ortega tenía 39 años. Pertenecía al pueblo mé'phaa. Llevaba dos años trabajando de albañil. Era también campesino. Estaba casado y tenía dos hijos, a quienes visitaba cada fin de semana en la comunidad de El Camalote.

Entre 1998 y 2001 una brigada médica de la Secretaría de Salud esterilizó con engaños a 14 indígenas de El Camalote. Les ofrecieron una clínica, médicos, medicamentos, despensas, ropa, cobijas, vivienda y becas. Años después, ante la presión de los afectados y sus comunidades, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) emitió la recomendación 35/2004 exigiendo que se reparara el daño. La CNDH formuló la recomendación 66/2007 confirmando la violación

a los derechos fundamentales de que fueron objeto los 14 indígenas.

Lorenzo formaba parte de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM). Era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega. En marzo de 2002 elementos del Ejército Mexicano la violaron. También abusaron sexualmente de la señora Otilia Eugenio Manuel. Su caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El indígena asesinado había participado junto con sus familiares y vecinos en la denuncia de la agresión sexual contra su hermana, y en la organización de sus compañeros esterilizados. No tenía pleitos personales con nadie.

El asesinato de Lorenzo no fue un hecho de violencia aislado. Según Abel Barrera Hernández, el crimen se circunscribió “en un contexto de persecución, amenazas e intimidación sistemática contra Inés y su esposo, Fortunato Prisciliano Sierra, su familia y contra Otilia”.

¿Quién mató a Fernández Ortega? Otilia no duda que se trata de una amenaza cumplida contra los integrantes de la OPIM. Apenas unos días antes ella misma había recibido una llamada telefónica de una mujer que le advirtió: “más vale que te calmes, porque allá está mi gente vigilándote”. Desde hacía tiempo circulaban rumores de que iban a matar a todos los miembros de la organización.

Orlando Manzanares, representante de El Camalote, cree que los asesinos pudieran ser parte del grupo paramilitar que actúa en la región. Sus integrantes son vecinos de las comunidades que trabajan para el Ejército y que gozan de impunidad en sus fechorías. Están encabezados por Alfonso Morales Silvino.

La región está patrullada por el Ejército. Los retenes son frecuentes. También las agresiones de los militares a la población civil. No es un hecho nuevo. En 2006 el principal de Barranca de Guadalupe, Fortunato Flores Elena, murió después de que soldados le dieron una “medicina”. La soldadesca se comió los elotes y las chivas e hizo destrozos en la comunidad. A los pobladores les dijeron que “eran rambos, como los de las películas”. En Barranca de Guadalupe vivía, desde que se casó, Inés Fernández.

En distintos momentos la tropa ha interrogado a hombres y mujeres sobre la presencia de “grupos armados”, “encapuchados”, guerrilleros, y ha amenazado a los miembros de la OPIM. Invariablemente invade las pequeñas unidades productivas de autoconsumo y las huertas de jamaica y caña que sustentan la economía de los campesinos indígenas. Se mete a las casas, agarra el jabón y la comida. Dice estar buscando delincuentes.

La militarización de la región arrancó en junio de 1998. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, en la comunidad de El Charco, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados — algunos sumariamente — por soldados. Los campesinos pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros. Fue una masacre.

En junio de 2003, el relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, visitó a la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Allí documentó la alta conflictividad de la zona. Ante los testimonios desgarradores de Inés Fernández y Valentina Rosendo, planteó que el Ejército debía ser replegado de las inmediaciones de las comunidades indígenas, y que su presencia en estas regiones requería ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales.

Modesta Cruz Victoriano es la viuda de Lorenzo. Su futuro se volvió más difícil de lo que ya era. “No tenemos hijos grandes para sembrar — dice —, y él ya no va a volver.” Lorenzo falleció el 10 de febrero de 2008. No fue el único dirigente social que asesinado en la entidad en esos años. Raúl Lucas y Manuel Ponce lo siguieron.

RAÚL LUCAS: LA QUINTA FUE LA VENCIDA

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el 13 de febrero de 2009 ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde siempre, Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comu-

nidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. Ese 13 de febrero trágico, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nú'saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es parte de la herencia sangrienta de El Charco. La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías habían entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista

Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos representaron un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado rencor, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. En lugar de luchar contra el crimen organizado, se dedicaron a combatir a líderes indígenas.

ARMANDO CHAVARRÍA

La violencia que se vive en Guerrero no sólo afecta a campesinos e indígenas. Una fracción del PRD también la padeció. Ejemplo de ello fue el asesinato de Armando Chavarría, que sigue sin ser esclarecido.

Cuando Armando Chavarría Barrera fue ultimado en 2009 era diputado, líder del Congreso de Guerrero, ad-

versario del gobernador Zeferino Torreblanca y principal aspirante del PRD a la gubernatura del estado.

Economista, hijo de un hojalatero de Iguala, Armando Chavarría fue ejecutado de 10 balazos el 20 de agosto de 2009, al salir de su casa. Iba a bordo de un Volkswagen Bora Sport, gris plata. Su cuerpo fue encontrado 15 minutos después de su homicidio, recargado sobre la puerta derecha. El gobernador le había retirado los seis guardaespaldas que originalmente se le asignaron para su seguridad. Según documenta Tomás Tenorio Galindo en el libro *Un asesinato político*, los encargados de investigar el asesinato permitieron que se alterara la escena del crimen.

El gobierno de Zeferino Torreblanca, entonces aliado de Nueva Izquierda dentro del sol azteca, se caracterizó por una estrecha complicidad con el caciquismo priísta. La procuración de justicia le fue entregada a Eduardo Murueta Urrutia, un personaje de todas las confianzas de Rubén Figueroa. El control de la educación pública fue botín de Elba Esther Gordillo.

Armando Chavarría tuvo fuertes enfrentamientos con Zeferino Torreblanca y el mandatario se dedicó a bloquearlo permanentemente. Chavarría denunció la corrupción existente en la procuraduría de justicia y el clima de impunidad en el estado. Demandó la remoción de funcionarios y encabezó demandas por el esclarecimiento de los crímenes políticos. Él era el candidato a gobernador más viable por el PRD y el que mayores oportunidades de ganar la contienda tenía.

Chavarría fue, al final de su vida, un político absolutamente pragmático. Sus virajes eran constantes y tenían

poco que ver con consideraciones programáticas o ideológicas. Cercano a López Obrador se distanció de él. Como secretario de Gobierno justificó la represión a los alumnos de Normal Rural de Ayotzinapa. Se le criticó que fuera dueño de un automóvil Mercedes Benz, en uno de los estados más pobres del país.

El delfín de Zeferino Torreblanca era Armando Ríos Piter, quien fue coordinador del PRD en San Lázaro, y ahora es senador. Su trayectoria política es peculiar. Ha saltado de puesto en puesto y de partido en partido. Secretario de Desarrollo Rural de Zeferino, Ríos Piter fue asesor del secretario de Hacienda José Ángel Gurría y subsecretario de Reforma Agraria con Vicente Fox. En las elecciones locales de 2009 fue electo diputado por la Costa Grande, en un distrito históricamente controlado por Rubén Figueroa, en el que los resultados del PRD en el resto del estado fueron desastrosos. El entonces presidente estatal del PRI Marco Antonio Leyva reveló públicamente que Ríos Piter antes de su nominación fue a ver al señor Figueroa, para tocarle la puerta y también para pedirle su apoyo. Según el hoy perredista el encuentro con el cacique fue mera coincidencia.

Eliminado Chavarría, el candidato del PRD a la gubernatura terminó siendo el priísta Ángel Aguirre Rivero. Buen amigo de Enrique Peña Nieto, Aguirre triunfó con el apoyo de los cacicazgos locales, muchos pertenecientes al *tricolor*, con un programa que no era de izquierda en una de las entidades en la que la izquierda tiene más fuerza propia.

El crimen de Armando Chavarría sigue impune, a pesar de que el difunto era un hombre políticamente poderoso. Lo mismo ha sucedido con los múltiples homicidios

de los luchadores sociales en la entidad. Y, mientras eso sucede, el Ejército se despliega en pueblos y comunidades en tareas de contrainsurgencia, librando una nueva *guerra sucia* y cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos, sin que las autoridades locales digan algo.

En el mitin que en Acapulco efectuó la Caravana por la Paz en 2011, Marta Obeso, la viuda de Chavarría, dijo: “La justicia no es un asunto de rentabilidad política, es una necesidad para encontrar la paz”. Por supuesto, los políticos de los distintos partidos no la escucharon.

EL NARCO GUERRERENSE

La cabeza cercenada de Mario Núñez Magaña, comandante de la Policía Federal Preventiva de Acapulco, apareció frente a las oficinas de la secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Guerrero. Era el 20 de febrero de 2006. Un mensaje escrito advertía: “Para que aprendan a respetar.” No fue la única decapitación de la temporada. Cabezas sin cuerpo siguieron depositándose en lugares claves de Guerrero y otras ciudades mexicanas. La disputa por el estratégico puerto de Acapulco entre los Zetas y el Cártel del Pacífico bañó el enclave turístico con mucha sangre.

El macabro espectáculo de personajes degollados es parte de la guerra que protagonizan los más poderosos cárteles de la droga de México. En ella se disputan las plazas y las rutas de trasiego de las drogas. Sus principales víctimas son sicarios o policías al servicio de las organizaciones criminales. Guerrero y sus regiones han sido claves en esta

contienda. De hecho, la entidad ha sido una de las que concentran los mayores índices de nota roja.

La guerra de Calderón contra las drogas no consistió sólo en el combate entre el Estado y el crimen organizado, sino, también, de un grave enfrentamiento del Estado contra el Estado mismo. Durante años, lo primero que hicieron los militares que participaban en operativos contra los cárteles al llegar a las ciudades era detener y desarmar a las policías. Guerrero no fue la excepción.

En Guerrero, la guerra entre cárteles ha sido salvaje. Según un recuento del diario *Reforma*, tan sólo en 2012 murieron 925 personas en las disputas por el control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero. El semanario *El Sur* contabilizó 56 ejecutados, muchos de ellos con narcomensajes, exclusivamente en el tramo carretero que va de Coyuca de Benítez a Zihuatanejo. Muchos homicidios más ni siquiera se reportan. Ante el clima de terror que viven, decenas de comunidades, como las del municipio de Tlacotepec, han sido abandonados por sus pobladores.

Las denuncias sobre vínculos existentes en la región entre narcotraficantes y mandos militares abundan. En diciembre de 2008 se colgaron narcomantas en Petatlán, La Unión y Acapulco en las que se acusaba al entonces comandante del 19 Batallón de Infantería y mayor, de proteger al cacique y narco Rogaciano Alba y de proporcionar soldados para “catear casas, desaparecer personas y matar gente”.

De acuerdo con fuentes policiales —publicó *Proceso*— el cártel de los Beltrán Leyva tuvo durante años el control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero por conducto de grupos más pequeños, como el

Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos. En la Tierra Caliente y la Costa Grande los Beltrán se aliaron con Los Zetas para disputar el territorio a La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo.

En 2011, cinco bandas peleaban el control de la entidad: el cártel del Pacífico; la alianza entre los Beltrán Leyva y *Los Zetas* (Pacífico Sur), y *Los Caballeros Templarios* y el cártel del Golfo (que forman Cárteles Unidos).

Un informe de las Fuerzas Armadas divulgado por *Excelsior* en septiembre de 2011, dio cuenta como la fragmentación de los cinco grandes cárteles, provocada por la detención o muerte de algunos de sus principales capos, propició el surgimiento de 17 minicárteles que sembraron el terror en la entidad.

Esos grupos violentos se bautizaron a sí mismos como *El Comando del Diablo*, *El Vengador del Pueblo*, *La Barridora*, *el Cártel Independiente de Acapulco*, *el Nuevo Cártel de la Sierra*, *el Comando Negro*, *Los Pelones*, *Luzbel del Monte*, *Los Temerarios*, *la Nueva Alianza de Guerrero*, *La Tejona*, *Los Calentanos*, *Los Rojos*, *el Pueblo Pacifista Unido*, *La Empresa* y *La Resistencia*.

Según funcionarios de la Secretaría de Marina, la ola de violencia en Guerrero se explica tras la movilidad de células criminales para adueñarse de territorios. Entre las secuelas de esta disputa se encuentra la proliferación de actividades delictivas en contra de los sectores más desfavorecidos de la población. Ni siquiera los más pobres pudieron escapar a la oleada de extorsiones, robos y secuestros.

La primera ola de violencia en ese estado en los últimos años — de acuerdo con el informe — surgió de la lucha

del territorio entre el cártel del Pacífico y los Beltrán Leyva, a causa de la ruptura entre ambos en enero de 2008. Los Beltrán Leyva trataron de controlar las rutas de trasiego de droga y por ello nombraron como sus lugartenientes y jefes de sicarios a Edgar Valdés Villareal (*La Barbie*) y Sergio Villarreal Barragán (*El Grande*).

Sin embargo, el grupo se fracturó después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva (*El Barbas*), quien fue sustituido por su hermano Héctor, *El H*. La detención de Edgar Valdés Villarreal y Sergio Villarreal Barragán provocó una mayor fragmentación de la banda. Las células criminales se diseminaron por todo Guerrero.

En la entidad, el mapa de la escasez y las necesidades materiales coincide con el de los territorios indios. Según el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, “Guerrero ocupa el séptimo lugar entre los estados con mayor población indígena del país, con un total –según el Censo de Población y Vivienda 2010– de 625 mil 720 personas, que representan el 18.46 por ciento del total de la población estatal y el 5.4 por ciento de la población indígena a nivel nacional”. Los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos viven en muy difíciles condiciones.

El 60 por ciento de la población indígena es analfabeta. Su índice de escolaridad es de apenas 2.7 años. Poco menos de la mitad de mayores de 15 años carece de ingresos. Más del 90 por ciento no tiene drenaje, y sólo el 50 por ciento cuenta con electricidad. Los habitantes de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en la Montaña, tienen el porcentaje más alto del país de población en situación de pobreza extrema: 82.6 y 77 por ciento respectivamente. Cifras esca-

lofrientes que dan cuenta de este nivel de privaciones son las de mortalidad infantil: en Cochoapa el Grande la tasa es de 60.4, y en Metlatonoc de 48.48 y en Acatepec de 48.66 por cada mil nacimientos.

La diáspora criminal precipitó que las regiones indígenas del estado se convirtieran en zona de refugio natural del crimen organizado. De esta manera, además de padecer la violencia contrainsurgente, la de la delincuencia tradicional y la de la pobreza, los indígenas guerrerenses comenzaron a sufrir la del crimen organizado.

En una visita realizada al municipio de Ayutla en febrero de 2014, el obispo Raúl Vera, antiguo responsable de la diócesis de Altamirano en el estado entre 1988 y 1995, advirtió que a 19 años de su estancia en Guerrero, los niveles de impunidad siguen siendo la característica “más lacerante” del estado y el desafío “más importante”, porque ésta alienta el crimen y la violación de los derechos humanos, de la dignidad humana y los niveles de impunidad. Alertó que si no “reacciona el equipo político que gobierna aquí” podría agravarse la situación de violencia que existe en el estado.

En esas dramáticas circunstancias surgió una crisis de inseguridad pública en el estado sin paralelo. Se creó así el caldo de cultivo para el surgimiento de expresiones de autodefensa ciudadana en toda la entidad, muchas de ellas alrededor de la pionera experiencia de la CRAC.

VI) LOS COMUNITARIOS

LA MANO BLANCA

Pedro Cantú Aburto no goza de buena fama en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero. Hace algún tiempo, la Policía Comunitaria tuvo que encarcelarlo y ver si se podía reeducar para que cambiara de actitud. No tuvo mucho éxito. Durante algunos años maestro, priísta, cacique y más tarde periodista, señalado como jefe de una banda de asaltantes, volvió a las andadas y, como represalia, acusó a la institución de violar sus derechos humanos.

La desconfianza hacia él en la región tiene ya rato. En el municipio de Iliatenco lo consideran autor intelectual de los asesinatos, en 1992 de por lo menos, 3 personas: Epi-fanio Salazar, comisario municipal, que se negó a legalizar tres reses robadas, del ex regidor Herminio Alonso y de Severo Pérez, un comandante de la policía. A pesar de que en diversas ocasiones lo denunciaron ante las autoridades, ni a él ni a sus pistoleros les sucedió nada.

Los abusos que se le adjudicaron a él y a sus gentes continuaron —narra Arturo Cano en su libro *México de salario mínimo*— hasta que hizo su aparición en aquellas tierras, un grupo justiciero al que se le conoció como La Mano Blanca. Fue bautizado así porque sus integrantes vestían largas túnicas de ese color y aparecían de improviso en las noches de Iliatenco para ajustar cuentas con los gatilleros de Pedro, es decir, para defender a la comunidad.

La operación de limpieza surtió efecto: los asesinatos se frenaron. Cumplida su misión, la Mano Blanca desapareció tan misteriosamente como había surgido. Sin embargo la inseguridad siguió, como continuó la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la migración, las promesas incumplidas de las autoridades, el abandono gubernamental y la impunidad de los delincuentes.

Lo sucedido en Iliatenco no fue, ni mucho menos, la única acción de justicia a mano propia. Con menos sofisticación, a fines de 1994, habitantes de Zapotitlán Tablas, en la Alta Montaña, ahorcaron a siete asaltantes. También en la Montaña, en Alcozauca, la tierra del legendario maestro Othón Salazar, aparecieron el 28 de diciembre de ese año, los cadáveres de seis presuntos asaltantes. Habían sido secuestrados por diez hombres vestidos con ropas similares a las del Ejército federal y armados con rifles M-1 y M-2. Según el secretario general de Gobierno, Zótico García Pastana, sus muertes fueron “una cuestión entre narcotraficantes”, originada por ser época de cosecha de amapola.

Entre 1990 y 1995, los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Azoyu, Ayutla, Tlacoapa, Acatepec, Metlatonoc y San Luis Acatlán, padecieron una ola de asaltos, golpizas, violaciones sexuales (incluso de una niña de siete años) y asesinatos, en los que, según denuncias de autoridades comunitarias, estaban involucrados policías motorizados de la entidad. Los crímenes trastocaron severamente la vida social y económica de la región. Sin exagerar, casi todos los días se cometía allí un delito. Las víctimas eran tanto personas como organizaciones sociales.

Lejos del puerto de Acapulco y sus enclaves para ricos, y de ranchos de políticos y boyantes agricultores, esas regiones de Guerrero viven en una situación dramática de pobreza y marginación. En 1994 el 99 por ciento de los caminos que comunicaban las comunidades con las cabeceras municipales eran brechas angostas de terracería, que se destrozaban año tras año con las lluvias. Hoy en día las cosas no están mucho mejor, pero entonces eran peor. Aún en estos días, cientos de esas poblaciones permanecen incomunicadas por periodos de hasta cinco meses, con el inevitable desabasto de alimentos, gravísimos problemas de salud y especulación de transportistas y comerciantes.

Esas intransitables brechas que enlazaban las comunidades con las cabeceras municipales eran uno de los lugares favoritos de los truhanes para cometer sus tropelías. La mayoría de estos delitos se denunciaron ante las autoridades competentes y tuvieron el silencio como respuesta.

Las cosas nunca han sido fáciles en la Montaña —dijeron habitantes de la región a la periodista Karina Avi-

lés — pero luego de la masacre de Aguas Blancas se pusieron peor: “Se vivió una mayor inseguridad”, “no había cerro que se salvara de los mañosos”, es decir, de los asaltantes de gafas negras y con paliacates cubriendo sus rostros, que “salían tras de las rocas y las matas con pura M1 y M2”.

Muchos de los crímenes perpetrados eran absurdamente trágicos. El 15 de abril de 1995 — por ejemplo — fue baleada la camioneta pasajera de Mexcaltepec, municipio de Acatepec. Un niño de cinco años, originario de La Hacienda, municipio de Ayutla de los Libres, perdió la vida en el atraco.

“En Potrerillo del Rincón -cuenta una de las víctimas en el documento *Cuando la justicia se hace pueblo*, editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan- el 14 de abril de 1994 me asaltaron con un rifle 16 y fui despojado de 320 pesos, luego en mayo del mismo año en el tramo recta San José Vista hermosa en otro asalto me quitaron 650 pesos. La primera vez se hizo denuncia al Ministerio Público, y la policía judicial nos pidió 150-200 pesos para gasolinas. Éramos diez los asaltados, pero como nadie llevaba dinero, no actuaron.”

Ante la inseguridad generalizada que privaba en la región, el Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular, la Unión Regional Campesina, la SSS, Productores de Café-Maíz, el Consejo Comunitario de Abasto y la Unión de Ejidos y Comunidades “Luz de La Montaña”, iniciaron a finales de 1995 un proceso de organización para hacerse cargo de la seguridad pública en la región. Los aires de la rebelión zapatista soplaban fuerte en aquellas tierras y la reconstitución de los pueblos originarios había recibido un enorme estímulo.

El banderazo de salida del proceso fue una reunión efectuada 17 de septiembre de 1995, a la que fueron invitados los presidentes municipales de la región y autoridades estatales. El desaire de los funcionarios fue generalizado. Solamente asistió un representante del alcalde de Malinaltepec. Pero las organizaciones no quitaron el dedo del renglón. Los volvieron a convocar al segundo encuentro, efectuado el 2 de octubre en San Luis Acatlán. Para no variar, la historia se repitió y sólo llegó el enviado de la presidencia de Malinaltepec. Igual, ellas avanzaron en sistematizar sus exigencias.

Entre las demandas mas relevantes de las comunidades que se formularon en los encuentros, se encontraban la desaparición de la policía motorizada y la formación de una policía comunitaria, integrada por elementos de las distintas comunidades electos en asamblea, con buenos antecedentes, honestos y con conocimientos básicos además de saber escribir y leer.

En las asambleas, los representantes comunitarios discutieron, además, la elaboración de una iniciativa de ley para darle formalidad jurídica a su propuesta, así como un programa de capacitación, adiestramiento y pago de honorarios. Consideraron establecer un convenio de colaboración intermunicipal para coordinar las acciones de seguridad pública en la región.

Nada detuvo su disposición a organizarse. Encarreradas, el 15 octubre de 1995, 28 comunidades y seis organizaciones sociales *me'phaa*, *na'savi* y mestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú se reunieron en Santa Cruz del Rincón, junto al cerro en el que

Genaro Vázquez instaló su primer campamento guerrillero hace ya décadas. Asistieron al evento dos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

La reunión resultó histórica. Allí nació la policía comunitaria. “Centenas de veces —expusieron en el encuentro los asistentes— se ha puesto la denuncia ante las autoridades correspondientes y al ver que no tenemos el respaldo de ninguna de ellas, y que a diario somos víctimas de asaltos, violaciones sexuales, robos, lesiones y homicidios, nos vemos obligados a tomar el siguiente acuerdo: Decidimos que los grupos de policía comunitaria de cada comunidad se aboquen al resguardo de los caminos principales en las rutas donde suceden frecuentemente” los delitos”.

De inmediato, instruyeron a “que el comisario tome acuerdo con su asamblea o policías si no cuentan con armamento. Si lo consiguen prestado, sólo tendrá que elaborar una relación de armas con sus matrículas, que firmada y sellada por la autoridad municipal deberá portar el comandante anexándola a la presente acta”.

El acuerdo de Santa Cruz fue signado por varias decenas de autoridades de los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Acatepec y Azoyú, así como por la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, la Unión Regional Campesina, el Consejo de Abasto Indígena, el Consejo de Autoridades Indígenas y la Sociedad de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz.

Las comunidades y organizaciones signatarias del acuerdo solicitaron formalmente al gobierno del estado de Guerrero que su policía fuera legalizada y dotada de capacitación, armamento y salarios.

Para dar fe del pacto, registraron el documento ante notario público. El gobernador, el procurador de justicia, el presidente del tribunal, el congreso del estado, el director de la policía ministerial y el mismo ejército, recibieron copia.

Francisco Santos, encargado de Derechos Humanos de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, explicó a Arturo Cano el alcance de su resolución: “Ante la inseguridad y debido a que la policía judicial no hace nada para detener a los delincuentes, tomamos el acuerdo de defendernos. Lo hacemos con base en el artículo 4º constitucional y el convenio 169 de la OIT, pues tenemos el derecho de actuar y determinar nuestro destino”.

La iniciativa siguió adelante, hilvanando acciones y nuevas propuestas. El 2 de octubre, las organizaciones sociales enviaron una carta al entonces presidente Ernesto Zedillo, enumerando las 35 peores agresiones que habían sufrido. No eran todas, pero sí las más representativas. Se trataba de un verdadero memorial de agravios. El primero de ellos fue el asalto a la camioneta de Pascala del Oro, y la violación de las hermanas Ubalda y Sofía García Bravo y de Floriberta Arellano.

Apenas cuatro días más tarde, el 6 de noviembre, las comunidades se movilizaron en Chilpancingo. Una comisión se entrevistó infructuosamente con la Procuraduría de Justicia del estado. El resultado fue decepcionante. “¿De qué sirve poner a sus propios policías si no están capacitados y van a incurrir en las mismas fallas que los de la Motorizada?”, les dijo en un desplante de arrogancia el procurador Jesús Salas Moreno.

Pero los comunitarios no estaban dispuestos a bajar la guardia. El 17 de diciembre de 1995 volvieron a encon-

trarse y acordaron comenzar a movilizarse de manera más decidida, al tiempo que ponían “manos en la masa”. Toda su experiencia de organización en el terreno productivo para comercializar su café, miel y darse abasto, se volcó en la formación de un sistema de justicia local.

Según Abel Barrera, las asambleas regionales se erigieron en espacios de reflexión colectiva que ayudaron a recuperar la memoria histórica y a reivindicar los derechos del pueblo para enfrentar los embates de la delincuencia y los actos impunes de los gobiernos caciquiles. “Se preguntaban ¿cómo atacar de raíz estos males?, y discutían durante horas. El reencuentro con sus saberes milenarios y el rescate de sus instituciones comunitarias ayudaron a reencausar la fuerza alebrestada de los pueblos de la Costa-Montaña”.

De esta manera, se esfumó el fantasma de la justicia por propia mano que había provocado ajusticiamientos como el de Zapotitlán Tablas y se optó por el camino de la justicia y la seguridad comunitarias.

RELACIONES PELIGROSAS

En un primer momento, el entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, y el resto de las autoridades estatales respondieron a las demandas de los pueblos con intolerancia y despreocupación. Se negaron a disolver la policía motorizada y a reconocer a la comunitaria. Más aún, se les descalificó, se trató de desarmarlos y se les abrieron expedientes judiciales. Poco después la negativa inicial comenzó a modificarse para dar paso a una política

del “golpe y la sobada”. Las autoridades gubernamentales abrieron algunos espacios de negociación o, al menos, de entendimiento, para, a continuación, realizar acciones de hostigamiento.

La relación zigzagueante que caracterizó los primeros encuentros entre autoridades gubernamentales y policía comunitaria ha sido una constante en sus casi 19 años de vida. El ciclo de entendimiento y persecución persiste hasta nuestros días. Tan pronto el gobierno dota de armamentos y recursos mínimos a los comunitarios y les confía la seguridad en un territorio como les remite órdenes de aprehensión; los capacita y, al rato los arresta; los presenta como un ejemplo a seguir y, a continuación los exhibe como hordas violentas que se hacen justicia a propia mano.

En esta lógica, el gobernador Rubén Figueroa terminó aceptando que, el batallón de la Policía Motorizada que operaba en el municipio de Malinaltepec, fuera integrado por gentes de la región avaladas por sus comunidades. Así se hizo y el nuevo escuadrón se formó con jóvenes voluntarios, casi todos sin experiencia previa en labores policiales, que contaban la primaria y estaban dispuestos a morir.

Originalmente la administración estatal les pagó a 10 de ellos 600 pesos quincenales y los dio una muda de ropa. Por su parte, el ayuntamiento los dotó con carabinas y unas cuantas pistolas. Los recorridos de vigilancia los tenían que hacer a pie.

Meses después, recibieron instrucción de parte del Ejército. El 5 de abril de 1997, 159 policías comunitarios desarmados, recibieron una “capacitación verbal” de parte de miembros del 48 batallón, en el almacén Conasupo de San Luis Acatlán.

“El teniente coronel Joel Ciprián —narró a Karina Avilés del suplemento *Masiosare* de *La Jornada*, Juan Horta, fundador de la policía y su coordinador durante varios años— dijo que de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional tenía instrucciones de atender solicitudes de que se capacitara a la policía de parte de los ayuntamientos”. Los militares les enseñaron cómo cargar las armas, cómo se llaman las piezas, cómo defenderse de los maleantes, si ir de rodillas, cómo se corta el cartucho.

En el segundo entrenamiento, cuando los soldados llegaron a Horcasitas —contó Horta—, los comunitarios temieron que el Ejército fuera a desarmarlos, “pero resulta que se convoca a la capacitación. Y allí fue con armas propias”.

Un paso más hacia adelante se dio, ya con Figueroa fuera de la gubernatura, cuando la policía comunitaria fue reconocida de palabra por el gobierno del estado y oficialmente por los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán. El mandatario interino Ángel Aguirre les entregó credenciales, 20 armas y una camioneta.

Sin embargo, la persecución en su contra persistió. No obstante su reconocimiento oficial y la coordinación que ha mantenido con autoridades municipales y la Procuraduría de Justicia del estado, han seguido siendo perseguidos. En diversas ocasiones sus comandantes han sido acusados de privar ilegalmente de la libertad a los maleantes que detienen, aunque luego, las supuestas víctimas niegan haber levantado esas demandas.

Según Vidulfo Rosales Sierra, Coordinador del Área Jurídica de Tlachinollan, en mayo de 2013 existían 50 acciones penales contra igual número de autoridades y conseje-

ros de la CRAC-PC. Esto, no obstante que, para mantener una relación de respeto, los comunitarios presentaron su proyecto a la Procuraduría de Justicia.

Entre la lista de acciones de agresiones gubernamentales destacan la sufridas a lo largo de varios años por el padre Mario Campos Hernández, párroco de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, y fundador de la policía comunitaria. En 1994 sufrió el ataque de un grupo de delinquentes, apoyados por el Comisariado de Santa Cruz del Rincón. En 1999, fue detenido por la Policía Judicial, acusado de allanamiento de morada. La movilización popular obligó a las autoridades a liberarlo. El 16 de septiembre de 2000, un grupo de personas armadas lo atacó.

Las acometidas contra el movimiento forman un largo rosario. El 26 de marzo de 2000, militares del 49 Batallón de Infantería desarmaron a miembros de la Policía Comunitaria en Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán. El 18 de septiembre de ese mismo año, unos agentes de la Policía Judicial arrestaron a Bruno Plácido Valerio, asesor de la Policía Comunitaria, acusándolo de la violación de 4 mujeres mixtecas. El hecho fue desmentido por las agraviadas. El 20 de octubre fue detenido el comandante general de la Policía Comunitaria, Agustín Barrera Cosme. Sin pruebas en su contra obtuvo su libertad tiempo después.

En 2003, el gobierno del estado dio un ultimátum de 30 días a la CRAC-PC para que dejara de operar so pena de que los militares la desarmaran. Dos años después, la Policía Ministerial entró a la Casa de Justicia de la CRAC-PC en San Luis Acatlán y detuvo a todos los coordinadores. En 2012 elementos de la Policía Ministerial arrestaron al coor-

dinador Máximo Tranquilino Santiago. En 2013 la embestida en su contra arreció, varios de sus coordinadores fueron arrestados y el gobierno se empleó a fondo para dividir la organización.

EL SISTEMA DE JUSTICIA

El sistema de seguridad y justicia de los montañeros y la Costa Chica camina en dos pies. El primero, la Policía Comunitaria, se encarga de proteger a la población de la región. El segundo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aplica y administra la justicia a quienes delinquen en sus territorios, en base a sus sistemas normativos. La Policía Comunitaria se formó en 1995. La CRAC en 1998. Ambos se complementan

La Policía Comunitaria justificó públicamente su creación argumentando que: “la falta de respuesta eficaz, comprometida y responsable de nuestras autoridades oficiales, obligó a los pueblos indígenas de la región a hacer uso de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes de nuestro país, retomando nuestras formas de darnos la justicia. Nuestra propia tragedia y la desatención del gobierno es lo que nos ha constituido y enseñado”.

Pero la formación de este cuerpo de seguridad resultó insuficiente para las comunidades. Entre 1995 y 1997 —explica Ángeles Gama—, los comunitarios se dedicaban solamente a detener a los delincuentes y remitirlos a las agencias del Ministerio Público. Lamentablemente, más tardaban en presentarlos ante las autoridades que en ser liberados. Acordaron, entonces, incursionar en el terreno de

la justicia y comenzaron a “prevenir, proteger y sancionar los delitos”. De esa urgencia justiciera nació la CRAC.

El proceso arrancó el 22 de febrero de 2008, con una Asamblea Regional en la comunidad de Potrerillo Coapi-nole, en la que se nombró un consejo de autoridades con una función específica: impartir justicia. El consejo fue bautizado como Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), pero más adelante se le cambió el nombre a CRAC, para incorporar a las comunidades mestizas. Desde entonces, los detenidos por la policía comunitaria ya no se envían a las autoridades gubernamentales, sino a una instancia creada por los propios pueblos.

Los comunitarios —explica Gama— concluyeron que “para sancionar a los responsables, eran necesarias las cárceles en los pueblos. Se recordaron los castigos de antes, que eran de trabajo. A los delincuentes se les imponían trabajos para beneficio de todos; decidieron que iban a sancionar a las personas con días de trabajo comunal. Si se robó algún objeto o animal se determina el precio y luego se divide entre el salario mínimo de la región y así se obtiene la cantidad de días que deben trabajar; esos son los días que van a estar presos. También decidieron que cada pueblo tendría su propia cárcel, pero que sus presos serían rotados entre todas las comunidades. El motivo para compartir este esfuerzo es de índole cultural; los ancianos recordaron que cuando alguien robaba un animal y lo detenían, el responsable era paseado por el lugar. Al animal lo adornaban con colores y el ladrón lo iba jalando, al frente alguien echaba cohetes y atrás del cortejo iba la banda de música. Todo el pueblo se enteraba de lo que había sucedido, el castigo era en parte la vergüenza y a la vez servía de ejemplo”.

La idea de reeducar en lugar de castigar —explica la antropóloga Giovanna Gasparello— venía de atrás. En noviembre de 1997 un joven de la comunidad fue arrestado por los policías comunitarios por llevar mariguana para su consumo personal. La comunidad decidió en asamblea general, y con la presencia de los familiares del detenido, sancionarlo como se usaba en algunas comunidades de la zona. El joven fue condenado a hacer trabajos sociales.

A partir de ese momento, —continúa Gasparello— los detenidos dejaron de ser entregados al Ministerio Público y pasaron a ser reeducados. En lugar de considerarlos delincuentes se les ve como vecinos que cometieron una falta, a los que hay que dar una oportunidad para que se reintegren a su comunidad. La población denomina esta medida como “la terapia” y le reconoce su eficacia. El “trabajo” de reeducación se complementa con pláticas de los ancianos. La policía no se puede burlar ni agredir al infractor. “Algunos presos han regresado a las comunidades donde estuvieron detenidos para continuar la relación con la gente”.

Desde entonces, los detenidos dejaron de ser enviados a las instancias de gobierno, y son juzgados por una instancia creada por los propios pueblos, en la que se determina la justicia con otro sentido: ya no se basa en el castigo.

La comunitaria es creación de los pueblos. Su formación es expresión de su proyecto autonómico. Tiene como base la asamblea general de autoridades comunitarias y como órganos operativos de la CRAC, el comité ejecutivo, los comandantes y los cuerpos de la policía comunitaria. La Coordinadora suple, en los hechos, la labor del Ministerio Público y los jueces.

Pero, el proceso organizativo va más allá de las comunidades indígenas y abarca, también, a mestizos y afrodescendientes. En la Costa Chica guerrerense existe una muy importante población negra, que ha iniciado el rescate de su cultura e identidad. La lucha contra la inseguridad está en el centro de sus preocupaciones.

Como parte de esta travesía hacia su reivindicación identitaria, en marzo de 2007, los pueblos negros de Oaxaca y Guerrero se reunieron en Juchitán, Guerrero, en el undécimo Encuentro de Pueblos Negros.

“Los Pueblos Negros de México – resolvieron en el evento – padecemos todavía distintos niveles de marginación e invisibilidad, producto de la trata esclavista, de la herencia colonial, y de un desarrollo económico, social y cultural desigual, lo que nos ha colocado en una situación vulnerable y de exclusión, basada principalmente en el facciones raciales, a pesar de nuestra contribución a la construcción cultural, económica, social y política de la nación mexicana”.

Los asistentes al Encuentro exigieron su inclusión en las políticas públicas estatales diferenciadas y adecuadas a su historia, contexto cultural, económico y social, de acuerdo con la distribución espacial y demográfica que tienen en el territorio nacional. Hoy en día, muchas comunidades afro descendientes cuentan con sus policías comunitarias.

La Policía Comunitaria es una fuerza real y eficaz en los territorios donde opera. Ha logrado abatir en 90 por ciento la delincuencia común. Sus funciones han ido cambiando con el paso de los años.

Los policías son electos cada año en la asamblea de su comunidad. A diferencia del momento en que surgie-

ron, sus integrantes no reciben ahora salario. Cada grupo —explica el documento *Seguridad, justicia comunitaria y control del territorio*, elaborado por la CRAC-PC y publicado en el libro *Otras Geografías. Experiencias de autonomías en México*, editado por Gioavanna Gasparello y Jaime Quintana— cuenta con seis policías mínimo y 12 máximo. Al frente se encuentran un Comandante Primero y uno Segundo. El máximo órgano de dirección operativa es el Comité Ejecutivo.

El sistema de justicia comunitario está integrado por tres instancias distintas: el comisario, los coordinadores de las cuatro casas de justicia y la asamblea regional o asamblea general de las comunidades que participan en el sistema.

El comisario, también llamado delegado o encargado municipal, es electo en cada comunidad, cada año. Los ayuntamientos lo reconocen como autoridad constitucional. Su función consiste en resolver y sancionar conflictos menores. Cuando los problemas no pueden solucionarse en esta instancia pasan a la siguiente: los coordinadores de las cuatro casas de justicia.

De contar originalmente con una sola casa de justicia, hoy existen en la CRAC-PC cuatro: la más antigua, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán; en El Paraíso, municipio de Ayutla; en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y, en Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc. Los coordinadores de ellas tienen la facultad de solucionar asuntos graves. Adicionalmente, existe una más que no es reconocida por una parte de la CRAC.

El tercer nivel del sistema es la Asamblea Regional o Asamblea General de la mayoría de las comunidades par-

participantes en el Sistema Comunitario. Es la máxima autoridad y sus resoluciones son definitivas.

La existencia de la Policía Comunitaria está amparada en diversas legislaciones, tanto estatales como nacionales e internacionales, que son ley interna. Originalmente, surgió bajo la cobertura del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde su aprobación en septiembre de 2007, forma parte de esa “sombrija” también, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas. En el terreno nacional, a pesar de sus limitaciones, el artículo 2 de la Constitución otorga facultades para constituir las guardias comunitarias.

Muy importante en el terreno de la legislación estatal es la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, publicada en el diario oficial el 8 de abril de 2011. Está integrada por 74 artículos más cinco transitorios. En ella se reconoce que los pueblos indígenas tienen autonomía para decidir sus propias formas de organización social y para castigar los delitos cometidos en su territorio. Esto implica que tienen facultades para realizar tareas de prevención del delito, administración de justicia y readaptación social de los transgresores.

La norma acepta a la Policía Comunitaria como “parte” del Sistema Estatal de Seguridad Pública y “auxiliar” del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, y, también, como un medio de organización de las comunidades indígenas desde sus usos y costumbres.

La Ley establece el respeto a la “integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad

pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen” por el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias.

En su artículo 38 dice que “las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, con base en sus sistemas normativos internos, dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, deberán ser respetadas por las autoridades estatales respectivas”.

Sin embargo, acota que “los usos y costumbres que se reconocen legalmente válidos y legítimos de los pueblos indígenas, por ningún motivo o circunstancia deberán contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las Leyes Estatales vigentes, ni vulnerar los derechos humanos ni de terceros”.

LA SOBRE VIVENCIA

Las comunidades no imparten justicia discrecional o caprichosamente. Se basan en un Reglamento Interno redactado a partir de un largo proceso de consulta, reflexión y sistematización de las prácticas en las comunidades. Los principales (las personas de mayor prestigio moral en la comunidad, las más sabias, las de mayor edad) desempeñaron una función medular en su elaboración. A este resumen le incorporaron elementos de derecho positivo.

El Reglamento Interno establece un conjunto de normas para regir la organización, conducir la impartición de justicia y guiar la reeducación. En él están plasmados un conjunto de valores comunitarios y de normas jurídicas.

A su manera, el Reglamento reinventa la tradición de los pueblos.

Paulatinamente, hasta el año de 2013, el proyecto de la CRAC-PC se fue consolidado y extendido. La confianza en el sistema de justicia creció y más y más comunidades han solicitado sumarse a sus filas. Según uno de sus consejeros, ello fue resultado de “la eficiencia de las investigaciones, la rectitud de las autoridades y el hecho de que no se cobra un solo peso para obtener justicia”

Sin embargo, esta expansión del sistema comunitario de justicia ha tenido momentos particularmente graves. En diferentes momentos el gobierno ha amenazado con desarmar a los policías comunitarios y encarcelar a sus comandantes y autoridades. Así sucedió durante la administración de René Juárez, mandatario de la entidad entre 1999 y 2005.

Durante su gobierno, tanto el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, como el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, emplazaron a los comunitarios a disolverse o incorporarse como policías preventivos municipales. Ellos lo rechazaron.

Como respuesta a la amenaza gubernamental, más de cuatro mil indígenas de 60 comunidades mé'phaa y na savi tomaron las calles de San Luis Acatlán para exigir respeto a la libre determinación de los pueblos expresado en el derecho a contar con su propio sistema de justicia.

Según Tlachinollan, “en ese momento los pueblos y las autoridades de la CRAC tuvieron la inteligencia, el valor y el aplomo para no dejarse intimidar, por el contrario, salieron al paso a las amenazas. En el antiguo Palacio de

Gobierno, el 26 de febrero de 2002, las autoridades comunitarias encararon a las autoridades federales y estatales y a los mismos mandos del Ejército, para decirles que el proyecto de justicia y seguridad comunitaria es una iniciativa de los pueblos de la Costa Montaña, creada para garantizar la vida, la seguridad y la paz en la región, y que por ninguna razón, orden o amenaza gubernamental, iban a retroceder o a cancelar su proyecto". La amenaza fue conjurada. La CRAC siguió adelante.

El crecimiento de la demanda de justicia en la región obligó a la CRAC a crear tres nuevas casas de justicia, además de la original de San Luis Acatlán. A pesar de la crisis por la que atraviesa actualmente, no cesan las solicitudes de incorporación.

Pero, más allá de las amenazas externas, la CRAC enfrenta, también, diversas contradicciones internas. En 2012 éstas se hicieron más evidentes, y, un año después, explotaron públicamente, creando una situación de incertidumbre y zozobra. Sus enemigos han sabido utilizar estas diferencias y dificultades endógenas para descarrilar y desnaturalizar su vertiente más autónoma.

Muy esquemáticamente, puede decirse que el proyecto está atravesado por tres contradicciones diferentes. La primera es entre el aparato de seguridad y el sistema de justicia. Como señala Miguel Álvarez, integrante de Serapaz, sucede que tiende a prevalecer la lógica del aparato de seguridad y sus comandantes por sobre la impartición de justicia y la dinámica de comunidades y sus asambleas. Ello ha provocado que el aparato de seguridad adquiera un peso mayor en la definición del liderazgo y la conducción del aparato de seguridad.

La segunda diferencia es la existente entre la seguridad regional y la gestión de recursos para proyectos productivos y de bienestar. Aunque formalmente no debería ser motivo de contradicción, lo es puesto que la negociación de recursos económicos implica un trato regular y permanente con el gobierno, no necesariamente compatible con la distancia que requiere el hacer justicia de manera autónoma.

Finalmente, se presenta una contradicción entre la dinámica regional de seguridad y justicia y los intereses políticos, entendidos no solamente como la participación electoral. El proselitismo partidario, su tendencia a corporativizar los movimientos sociales y crear clientelas, la pretensión de que, ante la falta de organizaciones representativas, la CRAC se convierta en gestora de los pueblos, choca con el proyecto autónomo de las comunidades.

No obstante la riqueza de su experiencia práctica, la CRAC ha tenido dificultades para elaborar un proyecto estratégico. Uno de los pocos documentos que ha producido para delinear su horizonte, es su Reglamento Interno, que es, simultáneamente una especie de Constitución y un código de procedimientos, pero no una propuesta programática.

Desbordada por su propio éxito, la CRAC funciona en los hechos, más como una coordinación de las cuatro casas de justicia que como una conducción estratégica del movimiento de defensa comunitario. Su dinámica responde más a la problemática inmediata en lo local y lo regional, que a una visión de largo aliento.

El manejo inadecuado de esas contradicciones, la preocupación gubernamental ante el surgimiento de una

ola nacional de movimientos de autodefensa ciudadana que veían en la policía comunitaria una referencia, la presión de los proyectos mineros en la región y la decisión del Ejército de no tolerar más el proyecto precipitó al interior de la CRAC una fuerte crisis.

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS

En la novela *El corazón de las tinieblas*, Joseph Conrad, el célebre novelista polaco, narra la dramática travesía de un marinero llamado Marlow, que recorre el río Congo a finales del siglo XIX, en búsqueda del jefe de una explotación de marfil. El libro hace un crudo retrato del colonialismo belga en África y su saga de explotación brutal, esclavismo y racismo hacia la población nativa.

En lo que parece ser una nueva y ominosa reedición del proyecto colonial, *El corazón de las tinieblas* es, también, el nombre con el que la empresa minera Hochschild Mining bautizó el proyecto que pretende echar a caminar en territorios indígenas de la Montaña de Guerrero. Se trata de la concesión más grande otorgada por la Secretaría de Economía en aquellas tierras: casi 49 mil 739 hectáreas.

Hochschild Mining es un grupo minero inglés dedicado a la exploración y explotación de oro y plata en América Latina. Fundado en Chile en 1911, se expandió años después a Bolivia y a Perú. Su dueño fue considerado uno de los “Barones del Estaño” en la nación que Simón Bolívar calificó como su “hija predilecta”. En 1984, las operaciones del Grupo Hochschild en Sudamérica fueron vendidas a la Anglo American Corporation of South Africa. En México,

efectúa actividades de exploración desde 2007, en la mina a cielo abierto de Santa María de Moris, en Chihuahua.

A diferencia del viaje a través del río a bordo de un pequeño bote que cuenta la novela de Conrad, en la Montaña de Guerrero la incursión de los nuevos colonialistas comenzó con vuelos de helicóptero y avionetas. En noviembre de 2010 las aeronaves sobrevolaron comunidades de San José del Progreso, Tlacoapa, Acatepec, Iliatenco y San Luis Acatlán.

Al poco tiempo, tres personas, que se identificaron como empleados de la minera Hochschild México, se presentaron a las oficinas de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, para solicitar una entrevista con la dirección de la Policía Comunitaria. Querían garantías para que sus avionetas volaran sobre el territorio. Las autoridades reviraron solicitándoles la papelería que avalaba sus actividades.

Los tres enviados del Apocalipsis -como los bautizó el antropólogo Gilberto López y Rivas- mostraron un documento fotocopiado que estipula que, desde el 21 de octubre de 2010, la compañía cuenta con los permisos para realizar estas indagaciones, emitido por la Dirección de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De inmediato, se levantó en la región una ola de inquietud. En un principio se supo que las concesiones eran tres: Corazón de Tinieblas, La Diana y San Javier (perteneciente a la canadiense CamSim) y La Faraona Goliat (propiedad de la mexicana Grupo Goliat). Sin dilación, las autoridades de la CRAC realizaron asambleas informati-

vas alertando sobre el peligro minero. Se inició entonces un arduo y complejo proceso de resistencia a la invasión de las empresas trasnacionales.

Como lo demuestra un estudio elaborado por Tlachinollan, las concesiones mineras han crecido en Guerrero (como lo han hecho en casi todo el país) de manera vertiginosa. En 2005 existían en el estado 417 títulos de concesión, equivalentes a más de 328 mil hectáreas. En 2013, éstas se habían incrementado a 600 títulos que amparaban casi 705 mil hectáreas.

Buena parte de estos títulos están enclavados en los territorios indios de la región de la Montaña. El Gobierno federal entregó allí 30 concesiones para efectuar labores de exploración y explotación minera a 50 años, en cerca de 200 mil hectáreas.

Pero las empresas mineras en La Montaña no juegan. Quieren el negocio ya. De hecho, como cuenta Edith Na Savi en *Desinformémonos*, éstas “ya tenían mucho tiempo trabajando en la zona e incluso tienen gente que les hizo trabajo previo para ubicar el territorio ambicionado. De esta manera, nos enteramos que en Paraje Montero (un núcleo agrario incorporado al sistema de las CRAC) las empresas lograron entrar a base de mentiras y falsas promesas a la comunidad y seguramente con previo acuerdo con las autoridades agrarias. El argumento de la minera fue que el trabajo sería como anteriormente ya se había dado en la región, la minería de socavón. La empresa prometió trabajo, escuelas y otros beneficios, así como un pago periódico por la renta de la tierra”.

Paraje Montero no fue la única comunidad “cultivada” por las empresas. Sus agentes se desplegaron con

sigilo en toda la zona. Y, en su labor de convencimiento, contaron con la ayuda de empleados públicos e instituciones gubernamentales. Un asesor en materia ambiental del gobernador, quiso venderles el proyecto exhortándolos a que, para superar la condición de pobreza y atraso de la región, debían olvidarse de “seguir viviendo encima de los tesoros de la montaña”, y sacarlos.

A Totomixtlahuaca llegaron dos ingenieros mexicanos que dijeron pertenecer a la UNAM, para solicitarle a sus habitantes pensar en las posibilidades de “progreso” que conllevaría los permisos de explotación minera. La asamblea los invitó a abandonar el poblado. En Iliatenco se presentaron los consorcios con sus permisos de exploración. El municipio les pidió que se retiraran, “La minería significa muerte -explicó su comisariado.

La CRAC denunció estas maniobras. Nos preocupa —dijo en un desplegado público del 8 de septiembre de 2011— el “que de manera abierta y descarada, el gobierno del estado se pone al servicio de las grandes empresas haciendo labor de convencimiento en la población, desoyendo los reclamos y el rechazo que ya desde hace varios meses hemos hecho públicos (...) sabidos y concientes de que lo único que traen esas empresas es la esclavitud y la muerte. Pretenden los emisarios del “desarrollo” reeditar la triste historia de cambiarnos espejitos y cuentas de vidrio por nuestros minerales preciosos, como el oro y la plata”.

La vigorosa movilización de la CRAC y la enérgica respuesta de las comunidades frenaron la firma de otros convenios bajo engaños. Las compañías tuvieron que buscar nuevas rutas para hacer avanzar sus intereses. Recurrie-

ron a, sin consulta alguna con los pobladores, promover la conversión de 157 mil 896 hectáreas de la Montaña, en una “Reserva de la biosfera”. Ante el rechazo de los montañeros, el proyecto fue suspendido aunque no cancelado.

La CRAC considera que las concesiones mineras han violado en su perjuicio diversos derechos y ordenamientos legales que el propio gobierno debería observar y cumplir, tales como: el derecho a la consulta, previa, libre e informada, para decidir si se quiere o no explotar esos recursos, y su derecho preferente a obtener las concesiones antes que empresarios capitalistas extranjeros.

Para echar atrás las concesiones mineras los montañeros han utilizado, con el auxilio de Tlachinollan, la Ley Agraria, que les faculta a decidir colectivamente sobre el uso de sus tierras comunes. Celebraron asambleas para decidir si autorizaban o no las explotaciones mineras en sus territorios, y, mayoritariamente las rechazaron. Formaron un Comité de Defensa de su Territorio. Encarrerados, en marzo de 2011, junto a diversos medios alternativos y radios comunitarias, echaron a caminar la campaña “A corazón abierto defendamos la Madre Tierra en contra de la minería”.

Varios amparos fueron interpuestos. Unos fueron aceptados y otros rechazados, porque, supuestamente, no cumplían con los requisitos. Así lo hizo la comunidad Me’phaa de San Miguel El Progreso, enclavada en el municipio de Malinaltepec. Sus habitantes consideran inconstitucional la entrega de concesiones para exploración y explotación minera dentro de su territorio, porque contravienen la Constitución y los Tratados Internacionales

que el Estado mexicano ha ratificado, además del derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales.

En los hechos, la demanda solicita que el Poder Judicial de la Federación analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México.

En noviembre de 2012, en la celebración de su 17 aniversario, la CRAC acordó la defensa del territorio, el rechazo a la instalación de las mineras, continuar con la organización para la seguridad y justicia, acompañar a los pueblos que quieran organizarse para su autodefensa y exigir al gobierno estatal y federal respeto a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Desde su lógica, la defensa del territorio es una tarea integral, “que implica no sólo la tierra, sino también el aire, el agua, los espacios sagrados y la alimentación. Por lo tanto la defensa del territorio implica una oposición contundente a las mineras, a las represas, a los proyectos de conservación como el pago por servicios ambientales y la Reserva de la Biosfera, a las mega carreteras, a los proyectos inmobiliarios entre muchos otros megaproyectos que atentan contra el territorio de los pueblos.”

A partir de esta decisión de evitar la instalación de minas a cielo abierto en la Montaña, se recrudeció el hostigamiento gubernamental contra la CRAC y las policías comunitarias y se pretendió ilegalizarlas. El gobernador Ángel Aguirre comenzó a apoyar a una de sus facciones

del sistema de seguridad y justicia y a auspiciar su división. El gobierno quiere franquear el paso a las compañías mineras y eso sólo es posible si desmantela la organización que sirve de columna vertebral para la resistencia. Para que los nuevos colonizadores se asienten y establezcan su pleno dominio en el corazón de las tinieblas han que hacer de la CRAC-PC una anécdota.

VII) EL FINAL DEL SUEÑO

EL CRAC DE LA CRAC

En 2013, CRAC-PC sufrió una fuerte implosión. La cohesión interna se resquebrajó y distintos grupos y dirigentes disputaron la conducción del movimiento y la interlocución con el Estado. Los liderazgos se desgastaron. Las corrientes se atacaron rabiosamente y se lanzaron a la cara graves acusaciones: paramilitares, agentes del gobierno y traidores. En los hechos se perdió el rumbo y la esencia del proyecto original.

Para ese momento, la cultura del acuerdo comunitario se había desvirtuado. Se aprobaban iniciativas sin la consulta adecuada a las bases, o sin que hubiera claras mayorías en las reuniones. La necesidad de enfrentar distintos desafíos con rapidez creó las condiciones para que se abriera una fosa entre representantes y representados.

La crisis de la CRAC está asociada a su crecimiento vertiginoso y al acoso gubernamental en su contra. La

grave situación de la seguridad pública en el estado, propiciada en parte por la guerra contra el narcotráfico de Calderón y las disputas de territorios, rutas y mercados de cárteles descabezados, precipitó un imparable *boom* de solicitudes de comunidades para integrarse al sistema de seguridad pública. Asoladas por la delincuencia, sin protección gubernamental, decidieron defenderse a sí mismas con urgencia y unirse a quienes habían demostrado que sabían hacerlo.

Estas comunidades llegaron al Consejo desde dos tradiciones de participación política distintas. Por una parte, están aquellos los que no tenían la consistencia de vida comunitaria de los fundadores, y podían convertirse en presa fácil de las prácticas clientelares de las centrales campesinas tradicionales. Por el otro, sobre todo en el municipio de Ayutla, se encontraban poblaciones con una cultura política más radical, que acabaron imprimiendo en los hechos, otra dinámica el proceso.

En sus 19 años de vida, la CRAC ha sufrido tres rupturas. La primera, con el grupo que fundó la UPOEG en 2010, que fue expulsado del Consejo, y en junio y en septiembre de 2013 trató de controlar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA). La segunda, también en 2013, producto del choque entre comunidades de Tixtla, Olinalá y Ayutla que siguieron una dinámica de movilización social más radical. Y la tercera, resultado de una severa fractura dentro del equipo dirigente de esa misma Casa de Justicia.

El gobierno estatal ha sido un factor activo en la gestación y exacerbación de las contradicciones internas de la Consejo. Quiere domesticar la organización a como de

lugar, quitarle su filo autonomista e imponerle su agenda a base de cañonazos financieros. Los gobiernos local y federal buscan desaparecer por todos medios los espacios de resistencia a la invasión minera en la zona.

Curiosamente, todas las partes en pugna admiten que el gobierno fomenta el pleito interno. Según el dirigente indígena Cirino Plácido, “Gobernación está trabajando, de 15 años hacia atrás se nos infiltró gente y ahora con el gobierno de Ángel Aguirre se está haciendo todo lo posible de destruir a la CRAC. Pero no nada más eso, también se están asesinando a los luchadores sociales, no en balde hay más de 30 luchadores asesinados en Guerrero con la llegada del gobernador Ángel Aguirre. La mafia de narcoparamilitares se está encargando de hacer ese trabajo”.

Por supuesto, esto es negado por las autoridades. Jesús Martínez Garnelo, secretario general de gobierno, aseguró en abril de 2014, después de asistir al informe del gobernador, que la administración estatal no intervendría en el conflicto interno de la CRAC. El gobierno —aseguró— se mantendrá al margen del diferendo, “para que no existan tergiversación de la información para ambos grupos tanto para el grupo de Pablo como el de Eliseo”.

Sin embargo, más allá de ingerencia gubernamental es indudable que las divisiones internas en la CRAC florecieron en la medida en la que sus dirigentes dejaron de consultar a las asambleas y poner por delante los intereses generales de los pueblos. Al privilegiar la obtención de recursos y apoyos para estabilizar el proyecto se crearon las condiciones para que surgieran pleitos, desacuerdos y rupturas.

Hasta ahora, los intentos por reconstruir la unidad promovidos por diversas personalidades y organizaciones, como Serapaz y Tlachinollan, han naufragado. Se ha impuesto la lógica de los liderazgos, de la lucha por las parcelas de poder y de la rebatinga por los intereses económicos. Todas las expresiones en choque han buscado tener una mesa de negociación con el gobierno por separado.

LA UPOEG

Bruno Plácido Valerio es un indígena mixteco, nacido en 1967 en Azoyú, en la región de Costa Chica. Es carismático, hábil, pragmático y arrojado. Vive en una humilde casa con piso de tierra pero se transporta en una camioneta GMC blindada. Desde los seis años tuvo que trabajar y dormir boca abajo para no sentir hambre. Igual estudió hasta primero de secundaria y leyó hartos libros de leyes. Autodidacta, a lo largo de los años ha participado en diversos cursos de derechos humanos.

Padre de cuatro hijos, bueno para los negocios, se ganó la vida vendiendo maíz, refrescos y cerveza. Después se dedicó al transporte. El gobernador priísta René Juárez lo metió preso unas horas acusado de terrorismo, daño en propiedad ajena y otras lindezas por el estilo. Años después, en 2012, los caciques de ese partido promovieron que se le acusara de violación en una hora de cuatro indígenas amuzgos.

Según relata él sobre sus aprehensiones, “El Ejército me detuvo dos veces y me torturó y una vez la Policía Judicial me detuvo en la comunidad de Buena Vista por-

que estaba acusado de violación de cuatro mujeres en una hora. La verdad eso fue fabricado, no había denunciantes, no había víctimas no había ni siquiera una averiguación. El procurador era Francisco Vargas Nájera. Lo que se buscaba era detenerme para justificar el desarme de la Policía Comunitaria”.

Bruno ocupó en 2002 la dirección de la Policía Municipal de San Luis Acatlán, cuando el presidente municipal fue Genaro Vázquez Solís, hijo del ex guerrillero. No muy amigo de la ideología, en 2012 quiso que el PRD lo postulara como candidato a diputado plurinominal, pero Nueva Izquierda no le abrió un lugar en las listas.

Bruno está desde comienzos de 2014 en medio en el ojo del huracán. Él y su hermano Cirino, fundador de la CRAC-PC y activo participante en las luchas del Congreso Nacional Indígena, formaron el 24 de enero de 2010 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). La organización critica el cobro excesivo de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exige la apertura de caminos en zonas de alta marginación, demanda la elección de representantes populares por usos y costumbres y el financiamiento de proyectos de desarrollo.

Su pleito con la CFE ha sido intenso. En la paupérrima comunidad de Paraje Montero—recuerda Bruno— “a una vivienda le estaban cobrando 800 mil pesos de energía eléctrica. Casos como esos había cientos”.

La UPOEG se define a sí misma como un “movimiento por el desarrollo y la paz social, busca unir a todos los pueblos que están divididos por partidos políticos, re-

ligiones, gobiernos, ya que solamente los pueblos pueden ayudar a otros pueblos. Por eso aquí lo que estamos planteando es el principio de solidaridad y no buscamos que el gobierno nos de todo solamente queremos lo justo para establecer el orden público en el que participemos todos los miembros de las comunidades”.

En el camino de su lucha, Bruno construyó relaciones con el gobernador Aguirre, lo suficientemente buenas como para provocar la desconfianza en otras organizaciones. Sus críticos lo acusan de un protagonismo que lo lleva, con frecuencia, a tomar decisiones individuales, al margen del parecer de las comunidades. Difícilmente acepta contrapesos a su liderazgo.

El actual éxito político y social de Bruno en Costa Chica está asociado a su papel en la lucha contra la delincuencia. En 2009, la seguridad pública en el municipio de Ayutla colapsó. Víctima del efecto cucaracha, el crimen organizado sentó allí sus reales. Secuestros, robos, violaciones, cobro de cuotas a ganaderos, balaceras y ejecuciones se multiplicaron. Los señores de la noche no respetaban nada ni a nadie. Ni siquiera a los niños. En Cruz Grande secuestraron a un pequeño de 10 años en Cruz Grande. En Ahuacachahue a una de 11 años. Bruno decidió enfrentarlos.

De manera simultánea a la gestión de proyectos productivos, demandas sociales y la participación política, la UPOEG promovió en el sureste del municipio de Ayutla, la formación de una policía comunitaria que fuera parte de la CRAC. Las comunidades lo demandaban. Pero Bruno se fue por la libre, sin consultar al Consejo, y comenzó a nombrar por su cuenta policías y comandantes. El proceso unitario descarriló.

La dirección de la CRAC vio en la iniciativa una maniobra de los hermanos Plácido para recuperar el liderazgo que en el pasado tuvieron en la organización. La cercanía de Bruno con el gobierno del estado levantó grandes suspicacias. Las diferencias entre unos y otros se tornaron irreconciliables. El pleito escaló y, fines de 2012, fue separado del sistema de justicia.

Más allá de una rivalidad entre líderes, la ruptura surge de dos formas distintas de entender y hacer política. Mientras que para el que era el grupo hegemónico dentro de la CRAC en aquel entonces es necesario mantener una relativa distancia con el gobierno, y poner por delante la construcción de la autonomía de los pueblos, para la UPOEG es conveniente tener un trato estrecho con el Estado.

Según Valentín Hernández, asesor de la CRAC, la UPOEG, “está intentando (...) encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado. Es un problema muy fuerte, algo que no habíamos vivido nunca”.

Pero las cartas estaban ya echadas y fue cuestión de semanas formalizar el rompimiento. El pretexto fue el secuestro de Alberto Eusebio García, comisario de Rancho Nuevo y promotor de la Policía Comunitaria afín a Bruno en zonas no indígenas de la Costa Chica. La UPOEG organizó una campaña para localizarlo con vida y liberarlo. La decisión de la Unión terminó precipitando un levantamiento popular contra la delincuencia organizada en Ayutla y Tecopa.

La madrugada del 6 de enero de 2013, hombres encapuchados, armados con pistolas, machetes, escopetas y palos, levantaron retenes en los caminos de Ayutla. Se pre-

sentaron como policía comunitaria. Bruno coordinó las acciones con el rostro descubierto. Aunque la UPOEG explicó la sublevación como un acto espontáneo de la población hay evidencias de que fue preparada de antemano. Varios de los participantes vestían uniformes que luego se convirtieron en distintivo de la organización y hay testimonios de comunidades a las que se les pidió desde días antes que se sumaran a las acciones.

Los resultados inmediatos del levantamiento resultaron sorprendentes. Fueron arrestados 54 presuntos integrantes del crimen organizado, y se desmanteló la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las Mesas. El naciente aparato de seguridad cosechó un éxito indiscutible, que estimuló a otras comunidades a unirse a la lucha.

Sin embargo, la CRAC-PC se deslindó del alzamiento. Primero lo hizo el 7 de enero, a través del consejero Arturo Campos, que declaró que quienes estaban detrás de los operativos no eran miembros del Consejo. Dijo que se trata efectivamente de pobladores “de algunas comunidades del municipio de Ayutla, pero que no pertenecen a la CRAC, y otros que provienen de poblados del municipio vecino de Tecoanapa, dirigidos por Bruno Plácido Valerio”.

Distinta fue la actitud inicial del gobernador. Apenas dos días después del levantamiento, Ángel Aguirre reconoció el valor de los alzados, tuvo un encuentro con sus dirigentes, y ofreció darles apoyos económicos y fortalecer la seguridad con presencia policiaca y del ejército. El 21 de enero, anunció que preparaba un decreto por el que la Poli-

Luis Hernández Navarro

cía Comunitaria se convertiría en “auxiliar” de los cuerpos de seguridad pública del Estado.

La iniciativa no fue bien vista. Tanto por la CRAC como la UPOEG la rechazaron, porque vieron en ella la pretensión de castrar al movimiento, de someterlo.

Días después del primer deslinde del Consejo, en un comunicado firmado por dieciséis coordinadores, y fechado el 13 de enero de 2013, volvió a denunciar “la postura engañosa y de mala fe” con la que la Unión se manejó. Reconoció el legítimo reclamo de justicia de los pueblos pero sostuvo que existían importantes diferencias en cuanto a funcionamiento y tratamiento de los detenidos.

Nunca -precisó el comunicado- “nuestros elementos se han cubierto el rostro con capuchas o pasamontañas; nuestra identificación siempre ha sido el uniforme de playera verde y pantalón negro, contamos con credenciales expedidas por las autoridades comunitarias, y por ser nombrados por nuestras asambleas, todo nuestro pueblo nos conoce, por lo que no tenemos ninguna necesidad de cubrir nuestras caras”.

Los policías comunitarios –advirtió– “no estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico; nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario, por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande”.

A pesar del deslinde de la CRAC, la UPOEG creció por buena parte del estado como reguero de pólvora. De su original presencia en Ayutla, San Luis Acatlán y Tecoaapa

se extendió a San Marcos, Cruz Grande, Copala y Marquelia. A finales de marzo de 2013 desembarcó en Tierra Colorada. En junio comenzó a actuar en el mismo puerto de Acapulco. Un año después tenía grupos organizados en 13 municipios, incluidas comunidades rurales de Chilpancingo.

DOS CAMINOS

El abordaje de los desafíos del narcotráfico siempre ha sido un asunto complejo en la CRAC. Enfrentarlo directamente le supone invitar a un enemigo económica y militarmente poderoso a que se cobre la afrenta, esto es, a “meterse entre las patas de los caballos”. Por eso, el Consejo se limitó a arrestar a los delincuentes cuando incursionaban en su territorio, pero no a perseguirlos fuera de ellos. En los hechos, se dedicó a combatir los delitos comunes que afectaban a los pobladores de la región y a proporcionar información sobre los movimientos de los *mañosos* a quienes deben combatirlos.

Esa actitud inicial se modificó relativamente el 14 de octubre de 2011, cuando la policía comunitaria se topó en sus caminos con dos camionetas cargadas de seiscientos kilos de mariguana. Los guardias apresaron a cuatro indígenas y a un trailerero chilango. La CRAC puso sus cartas en el asunto. La asamblea comunitaria del poblado de Santa Cruz del Rincón quemó treinta y tres paquetes de droga y debatió si entregaban a los cinco detenidos al gobierno del estado o si los juzgaban de acuerdo con su sistema normativo. La discusión fue intensa y se escucharon muchas voces. Finalmente acordó retenerlos en la comunidad para que fueran sujetos a un proceso de reeducación.

Al enfrentar directamente a uno de los cárteles en enero de 2013, la UPOEG trastocó está lógica y abrió un nuevo flanco de confrontación en la región. De paso, propició una escalada en contra de los sistemas de procuración de justicia indígenas por parte de organismos de derechos humanos, el Ejecutivo estatal, legisladores, el aparato de seguridad del estado y el Ejército. La campaña de la mayoría de los medios de comunicación se lanzó rabiosamente contra el levantamiento y la detención de los delincuentes. La campaña en contra fue tan calumniosa como intensa. Por ejemplo, un periódico nacional “informó” que las comunidades querían quemar a los detenidos en una hoguera.

En medio de sordo griterío en los informativos de la televisión y radio, en el que se denunciaba el salvajismo de los indígenas y su pretensión de hacerse justicia a propia mano, la UPOEG presentó, el 31 de enero, en una asamblea general, celebrada en la cancha de básquetbol de la comunidad mixteca de El Mezón, en Ayutla, a sus detenidos: 49 hombres y cinco mujeres.

Lo arrestados formaban parte de la banda “La Barradora”, dirigida por Leónides Enríquez Álvarez, de 30 años de edad, conocido como *El Cholo*, un hampón acapulqueño caído en desgracia, que tenía en el cuerpo dos tatuajes: uno, en el abdomen, con la leyenda “Greñas”, y otro en el pecho que decía “perdóname madre por tus lágrimas”. Él había logrado huir pero su personal no. Eran sicarios, halcones, secuestradores, violadores y hasta un descuartizador, de nombre David Guerrero, de 24 años de edad. Entre ellos estaban la mamá, el papá, dos hermanos y la pareja sentimental de *El Cholo*.

Al Tribunal popular asistieron sacerdotes, directores de escuela y pueblo en general. Dirigió los trabajos el comandante *Guerrero*. La delincuencia, aseguró en su intervención, ya no se combate con armas, sino con educación. Encapuchadas, las víctimas brindaron su testimonio. El público clamó por justicia.

Una de las consejeras leyó el esquema de los juicios de Tribunal Popular, encargado de juzgar a los delincuentes. “Los detenidos —precisó— serán reeducados de manera itinerante en las comunidades que conforman nuestro movimiento por la seguridad y la justicia. Los comandantes estarán reunidos en el seno de las comunidades por razones de seguridad y los lugares donde se lleve a cabo la reeducación tampoco se darán a conocer. Esta asamblea estará en receso pendiente a los procesos que viven en las comunidades”.

Los detenidos —explicó— podrán defenderse, apoyados en testimonios y pruebas que aporten sus familiares en el juicio público que se les siga. “Con lo anterior —dijo— se da inicio para la transformación del sistema de justicia de nuestros pueblos, basados en nuestros usos y costumbres. Con ello retomaremos la forma de hacer justicia de nuestros pueblos indígenas”.

Pero, a pesar de expectativas que se habían levantado, ese 31 de enero, el Tribunal no juzgó a nadie. Prefirió abrir una especie de receso para tratar de distender la presión en su contra. Su prudencia no rindió frutos. En lugar de disminuir, las críticas hacia la UPOEG en general y hacia los sistemas de justicia indígenas en particular, se intensificaron. Las presiones gubernamentales para que se le entregara a los detenidos se hicieron mayores.

Abriendo un paréntesis, jugando a la “neutralidad”, el 5 de febrero, el gobierno del estado reunió en la residencia oficial Casa Guerrero a los principales representantes de la CRAC y la UPOEG. Planteó la creación de una Comisión de Concordia y Pacificación para evitar la confrontación entre ambas organizaciones. Los convocados le respondieron reprochando su incapacidad para abatir los índices de violencia en las zonas urbanas.

Un día después, la Unión se sentó a conversar con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y se comprometió a dejar de usar máscaras y capuchas, “como una muestra de buena voluntad”.

Lejos de mantener una posición única ante el surgimiento de las autodefensas guerrerenses, el secretario de Gobernación, la modificó en al menos dos ocasiones. Primero señaló que los grupos que tomaron las armas en esa región serían regularizados para coadyuvar con las autoridades. Después, aseguró que las autodefensas guerrerenses no tenían justificación del Estado ni de su secretaría. Les advirtió que debían desaparecer porque en el país no existe esa figura. La seguridad pública, les recordó, debe ser monopolio del Estado.

Acosada por todos los frentes, la situación se volvió insostenible para la Unión, que decidió finalmente cancelar el juicio popular a los delincuentes y entregarlos a las autoridades. “Lo importante no era pelearnos sino llegar a acuerdos” -dijo Bruno a manera de explicación. Al hacer el balance del momento, Ramón Gracida González y Julio Leocadio Castro, promotores del movimiento, concluyeron: “era claro de que no había opción. Lo fundamental era

blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable”.

La entrega de los presos al gobierno generó una profunda decepción entre integrantes de las comunidades que participaron en el levantamiento, que vieron en la medida una traición. Los comisarios de El Guayabo y El Carrizo, en el municipio de Tecoanapa, salieron de la organización. Quienes en la región llevan más de dos décadas y media luchando por el reconocimiento de sus sistemas normativos, juzgaron la medida como una claudicación injustificable. La entrega de patrullas y dinero a la Unión por parte del gobernador Ángel Aguirre levantó una sombra de dudas sobre la naturaleza del acuerdo entre Aguirre y la Unión.

La UPOEG explicó que ellos no estaban contra el gobierno, que el pueblo se estaba organizando pero no para la guerra. Acusó al Estado de tolerar la delincuencia. Anuncio que pretendían construir un sistema de seguridad ciudadana. Sin embargo, durante meses mantuvo un trato estrecho con las autoridades.

Una amplia coalición contra comunitarios y auto-defensas se forjó en esos días. Se les quiso presentar como instrumentos de bandas criminales o de guerrillas. El general Genaro Lozano Espinoza, comandante de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, dijo que detrás de los movimientos de autodefensa “hay una mano que mueve la cuna”.

El 7 de marzo, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva aceptó una invitación de la UPOEG a dialogar y acudió a la comunidad de Ahuacachahue, municipio de Ayutla. El ombusman era la punta de lanza de la

campaña contra las policías comunitarias. A la reunión se movilizaron cerca de mil campesinos. Con firmeza denunciaron secuestros, violaciones y desaparición de familiares en los que policías y agentes del Ministerio Público fueron cómplices o se negaron a iniciar investigaciones. Los dirigentes de la Unión solicitaron establecer un fideicomiso para los hijos de las víctimas de los delitos.

El ombudsman reconoció que hacía falta conocer la versión de las víctimas para tener un panorama más claro de lo que acontece en la zona. Sin embargo, al poco tiempo de la reunión, regresó a fustigar el movimiento en nombre de los derechos humanos.

Finalmente, el 22 de abril de 2013, la UPOEG firmó un convenio con el gobierno estatal. En él se establece que los grupos del sistema de seguridad ciudadana se encaminarán a participar dentro del marco de la ley, dejando atrás la etapa de autodefensa. Sus integrantes recibirán del gobierno un salario y asesoría de parte del Ejército. La organización seguirá gestionando proyectos productivos y de bienestar.

El convenio fue severamente cuestionado por la CRAC, que vio en él, la mano del ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Naranjo, asesor de seguridad del gobierno federal. Para el Consejo, el acuerdo significaba que la Unión se iba a convertir en una especie de policía del estado.

Curiosamente, esa desconfianza no fue compartida por los empresarios de la entidad. El 1 de julio, en Chilpancingo, la UPOEG tuvo un acercamiento con la dirigencia patronal que solicitó su ingreso a la capital para bajar el ín-

dice de secuestros y homicidios. La Unión estuvo de acuerdo en actuar, pero, a solicitud del gobierno municipal, el ejército intervino y la situación quedó solo en una marcha por la paz encabezada por los principales comandantes de la policía de la Upoeg, pertenecientes al Sistema de Seguridad Ciudadano (SCC), que en las instalaciones del Congreso local demandaron resultados concretos para regresar la tranquilidad al sector productivo.

EL VUELCO

La “luna de miel” entre la UPOEG y el gobierno estatal sufrió un quiebre drástico el 5 de agosto, cuando los integrantes de la organización retuvieron a más de cien militares en la comunidad El Pericón, durante tres días y dos noches. Acusaron al capitán al mando de proteger a *El Cholo*. Previamente, Bruno Plácido había entregado al gobernador una comprometedor lista de políticos, diputados, militares y funcionarios ligados al narco.

El conflicto comenzó a las 8 de la mañana, cuando los soldados que mantenían un retén a la entrada de la comunidad, detuvieron a cinco elementos de la Policía Ciudadana del SSC, a quienes les decomisaron cinco armas: dos calibre 45, dos calibre 9 milímetros y una metralleta Uzi.

Exaltados y furiosos, miles de pobladores bloquearon los caminos e impidieron que llegaran refuerzos para los elementos castrenses. Ni siquiera permitieron que les hicieran llegar comida. Rodeados, los soldados optaron por no usar sus armas. Los mandos salieron del cerco en helicóptero y dejaron allí a la tropa.

A partir de ese momento ya nada volvió a ser igual en Guerrero. Se dañó la relación entre Bruno Plácido y el gobierno y se escaló la ofensiva contra el conjunto de las policías comunitarias. El Ejército se indignó, endureció su posición y redujo el margen de acción de las policías populares, pues supone que detrás de ellas se encuentran grupos político-militares buscando otros espacios de acción.

Las señales de alarma que se habían prendido con la marcha magisterial-policías comunitarias de Tixtla, se volvieron a encender con el conflicto en El Pericón, pero ahora con mucha mayor intensidad. Las fuerzas armadas ven a las experiencias de seguridad y justicia de Ayutla y Tixtla como un peligro.

A partir de esa fecha, será el ejército quien marque los ritmos y los rumbos de la estrategia hacia las autodefensas. Las autoridades civiles no harán más que aterrizar las orientaciones castrenses.

LA RIVALIDAD ENTRE LA CRAC Y LA UPOEG

Según Abel Barrera, la primera crisis entre la CRAC y la UPOEG se detonó originalmente por diferencias internas en torno a dos posiciones entre las comunidades indígenas y sus dirigentes. Una, que reivindica un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, y otra, que pone por delante las tareas de seguridad y el actuar de las autodefensas, de carácter más policíaco, como el de la UPOEG, conducida por los hermanos Plácido Valero.

La primera escisión del sistema regional de justicia provocó que quienes se quedaron al frente de la CJ-

SLA endurecieran sus planteamientos y escogieran como su nuevo coordinador, en la asamblea general del 23 de febrero de 2013, a Eliseo Villar Castillo, parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

La fracción disidente de la CRAC en esta primera ruptura, la que dio vida a la UPOEG, surgida del levantamiento del 6 de enero de 2013, efectuó en Santa Cruz del Rincón, el 16 de junio de ese año, una asamblea regional convocada por autoridades de 26 comunidades de San Luis Acatlán. Allí eligieron nuevos coordinadores, revocando y desconociendo a los que operaban en la casa de justicia de San Luis Acatlán. Quienes animaron este proceso —de acuerdo con la agencia *Subversiones*— lo describieron como la reconstitución del proyecto original de la CRAC-PC de los pueblos fundadores, que busca diferenciarse de cualquier otro proyecto que pretenda adjudicarse su historia.

Entre los principios básicos de los que se identifican como pueblos fundadores se encuentran: respetar la voluntad del pueblo y no la del gobierno. La asamblea es la máxima autoridad de toma de decisiones. La justicia se aplica a través de la reeducación, esto es, por medio del trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejos de los ancianos a los detenidos. La libertad o reincorporación del detenido a la comunidad se decide en asamblea. Se respeta la dignidad de los detenidos, no se les humilla rapándolos y se prohíbe la tortura. Para que la justicia alcance para todos, no se permiten privilegios. Se le da la razón a quien la merece, sea pobre o rico, buscando siempre la verdad a través de la investigación y el careo. Para elegir los cargos

no hay planillas, ni promoción de candidatos ni campañas; la asamblea lo decide, y se respeta la voluntad del pueblo.

La corriente de los pueblos fundadores intentó recuperar su sede histórica entre el 26 al 29 de septiembre de 2013. La acción estuvo a punto de terminar en un grave enfrentamiento entre las bases de las dos expresiones en pugna. En los momentos más álgidos de la confrontación el ejército amenazó con intervenir. Finalmente los promotores de la toma del edificio optaron por replegarse.

Los pueblos fundadores de la CRAC acusan a sus detractores de lo mismo que se dice de ellos. Sostienen que quienes se han apropiado del nombre de la organización y se quedaron con la casa de justicia de San Luis Acatlán, tienen una relación cada vez es más estrecha con el gobierno, no sólo porque han recibido mensualmente mucho dinero de la administración de la entidad, sino porque dichos recursos han servido para generar lo que el gobierno había intentado por más de 17 años: la división y la ruptura de la institución indígena.

Consideran que la credencialización de los comunitarios que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de elementos del ejército y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, es un acto de sumisión que durante décadas habían deseado los distintos órdenes de gobierno.

La propuesta de credencializar a los comunitarios y registrar sus armas surgió cuando el Ejército y la Marina empezaron a detener y desarmarlos, y pretendieron confinarlos a su comunidad, impidiendo que pudieran trasladarse armados a otras poblaciones. Quienes dentro de la CRAC aprueban la credencialización sostienen que lo hi-

cieron para sortear la presión en su contra de las fuerzas armadas.

El debate sobre el significado de la credencialización de las policías comunitarias es intenso. De un lado, sus críticos aseguran que, al aceptarlo, la CRAC asumió una actitud entreguista y que cedió parte de su lucha autonómica al Estado; otros, en cambio, reivindican la medida y la ven como una conquista del movimiento, que ahora es reconocido por las autoridades.

De cualquier manera, más allá de las discusiones internas, a partir de agosto de 2013 se intensificó la ofensiva gubernamental contra los pueblos armados. Comenzaría entonces una verdadera cacería de brujas.

LA COMANDANTA

Néstora Salgado García pudo haber vivido sin problemas el sueño americano. En 1991, con 20 años de edad, migró sin papeles a Estados Unidos. Trabajó arduamente en el estado de Washington como recamarera, sirvienta, niñera y mesera. Pero decidió regresar a su pueblo, Olinalá, y organizar allí la lucha contra el crimen organizado. Y por ello, ha debido pagar un precio muy caro. El 21 de agosto de 2013 fue arrestada. Ahora se encuentra confinada en una celda del Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit.

Olinalá es un municipio de la Montaña guerrerense conocido por las hermosas cajas, baúles y cofres laqueados que sus artesanos elaboran. El vocablo, de origen náhuatl, significa “cerca de los terremotos”. El nombre podría cam-

biar ahora. Desde el surgimiento de su Policía Ciudadana y la detención de Néstora, los terremotos sociales, no están cerca de la comunidad sino en su interior.

Néstora es hija de una familia numerosa: la sexta hermana de siete hijos. A los once años la tragedia llegó a su vida: su madre falleció. Ella sólo pudo estudiar hasta sexto de primaria. A los 16 años se casó. Muy pronto fue madre de tres pequeñas: Saira, Rubí y Grisel.

Sin futuro en su tierra, Néstora migró con su marido a Estados Unidos. En una dolorosa decisión, dejó a su prole bajo el cuidado de sus hermanos. Durante siete largos años limpió casas. Finalmente se separó de su pareja, siendo aún indocumentada. En el año 2000 pudo finalmente regularizar su situación migratoria y ocho años después obtuvo la ciudadanía estadounidense. Rehizo su vida en el mismo estado de Washington al lado de José Luis Ávila, trabajador de la industria de la construcción.

En octubre del 2002, durante su segundo viaje a Olinalá, Néstora sufrió un grave accidente automovilístico en el trayecto que va de Tlapa a Huamuxtilan, junto con su padre y un hermano. Se lesionó severamente la columna y no pudo caminar por dos meses. Tuvo que emprender el viaje de retorno a Estados Unidos, para acceder a los servicios médicos a los que no tenía acceso en México.

Dos años después, regresó a Olinalá a vivir permanentemente, trabajar las tierras de su padre y reconstruir los lazos familiares. Se encontró con la pobreza ancestral de su pueblo y con la creciente inseguridad. Buscó la forma de ayudar a paliar la situación de miseria llevando ropa y provisiones a los más necesitados.

En el año 2011, la inseguridad pública se volvió inmanejable en Olinalá y varios otros municipios de la Montaña. La banda de Los Rojos se adueñó del municipio. Crecieron los secuestros, los robos a casa habitación, los asaltos a plena luz del día, las extorsiones y los asesinatos. Las autoridades dejaron hacer, dejaron pasar. Una mezcla de temor y rabia se fue apoderando de los pobladores.

La gota que derramó el vaso de la paciencia ciudadana fue la desaparición y posterior ejecución de un joven taxista que se había negado a pagar una extorsión. El 26 de octubre de 2012 apreció su cuerpo sin vida. Indignada, en pleno entierro, la multitud encontró a un sujeto desconocido que tomaba fotos a los dolientes. Lo detuvieron y entregaron a la policía. Brotó entonces el rumor de un nuevo secuestro. Los deudos todavía estaban en el panteón. Sonaron las campanas del pueblo y sus habitantes se reunieron para discutir qué hacer ante la delincuencia. Acordaron tomar en sus manos su propia seguridad y nombraron un Consejo de Supervisión y Vigilancia.

Había mucho enojo pero poca organización. Documentaron y difundieron testimonios de 11 niñas de entre 11 y 17 años que habían sido violadas. Para variar, las autoridades no hicieron nada.

Mal armados, con el rostro cubiertos con pasamontañas, los olinaltecos cerraron las entradas a la cabecera municipal. Levantaron un pliego petitorio demandando: presencia del ejército y la marina; depuración de la policía ministerial; investigación de las autoridades y ciudadanos de Olinalá y conformación de una Policía Comunitaria. Cuando el ejército arribó al municipio, nueve días después

del levantamiento cívico, la población dejó los retenes y regreso a su vida normal. De allí surgió la Policía Ciudadana (PC) de Olinalá.

El éxito de los olinaltecos fue arrollador. El 15 de noviembre de 2012, Ángel Aguirre Rivero se reunió con el Consejo, calificó el esfuerzo de los habitantes de Olinalá como “heroico” y se comprometió a que durante los 3 años del alcalde en turno, las fuerzas armadas permanecerían en la cabecera realizando funciones de policía municipal. Ofreció, además, respaldar la conformación de una policía comunitaria. En la reunión con el mandatario estaba, en primera fila, Néstora, para ese momento una muy destacada figura del despertar ciudadano.

Situaciones parecidas se presentaron en esas mismas fechas en municipios aledaños. Por ejemplo, en Huamuxtlán, el secuestro de 17 personas el 2 de junio de 2012, provocó el resurgimiento del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtlán y, más adelante, la formación de una Policía Ciudadana.

Para enfrentar conjuntamente la inseguridad pública, pobladores de los municipios de Temalacatzingo, Cuauac, Ahuacatzingo, Tlapa y Huamastitlan formaron el Consejo Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP).

Los olinaltecos entablaron una estrecha relación con las CRAC y decidieron integrarse a ella. Néstora y otros compañeros caminaron el pueblo barrio por barrio, para celebrar asambleas y que cada una de ellas nombrara a sus policías. El 24 de marzo de 2013, la Policía Ciudadana tomó protesta en la Escuela Secundaria Federal y marchó por las

principales calles de la población. Casi dos meses después, el 18 de mayo, 170 hombres y mujeres de la PC de Olinalá se integraron con todos los derechos a la CRAC. Néstora fue elegida Coordinadora.

La policía ciudadana propinó golpes demoledores a la delincuencia de Olinalá. En los diez meses que estuvo funcionando, la tasa de criminalidad disminuyó en 90 por ciento y no se produjo homicidio alguno.

Irónicamente, cada batacazo que la policía ciudadana dio a los *malosos* se convirtió en motivo de conflicto con el gobierno estatal. Sin pelos en la lengua, Néstora divulgó las amenazas que los socios de políticos corruptos hacían a los empresarios locales para que se retiraran de la venta de materiales y mercancías, para monopolizar el mercado. La acusación no hizo ninguna gracia a las autoridades. Menos aún les gustó la publicación que ella hizo de un comunicado de prensa en el que se denunciaba la implicación del alcalde y de otros funcionarios gubernamentales en el tráfico de drogas. Sus roces con el secretario de Gobierno eran constantes.

El 21 de agosto de 2013, Néstora Salgado fue detenida, bajo la falsa acusación de secuestro agravado. El pretexto fue la aprehensión que ella hizo, como comandanta de la policía comunitaria, de varias adolescentes por vender drogas, y del síndico local, Armando Patrón Jiménez, por alterar las pruebas de la escena de un crimen en la cual hubo dos asesinatos donde él intentó huir con una vaca que era propiedad del finado. Sin que el gobierno estatal lo supiera, las jóvenes y el funcionario municipal fueron llevados a una cárcel en la comunidad de Tlatlautitepec.

Néstora fue trasladada en un avión a una cárcel de máxima seguridad en Tepic, a 3 mil kilómetros de su pueblo. No fue la única en ser reprimida. Entre agosto y diciembre de 2013, el gobierno del estado de Guerrero ejerció acciones penales contra 68 personas vinculadas a las policías comunitarias. De ellas, 13 permanecían privadas de la libertad y tres se encontraban en penales federales de alta seguridad al comenzar junio de 2014.

En la cárcel, Néstora ha visto como sus males se agravan. Primero estuvo incomunicada durante semanas. Para enfrentar las secuelas que le dejó el accidente automovilístico, necesita tomar analgésicos y hacer ejercicio con frecuencia para combatir los fuertes dolores que padece. En la prisión no le permiten ni tomarlos ni ejercitarse.

A pesar de su confinamiento, Néstora no baja la guardia. Con motivo del Día Internacional de la Mujer mandó un mensaje en el que llama a que: “Protesten y luchen si son humilladas en su trabajo, en su localidad y en su casa (...) Aguanten, no se dejen de nada ni de nadie, no acepten ser discriminadas”. Como las hermosas cajas de Olinalá, de esa madera está hecha la comandanta.

BERNARDINO

El 21 de agosto de 2013, el mismo día en que se detuvo a la comandante Néstora en Olinalá, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales —incluidas las Fuerzas Armadas—, aprehendió a 13 integrantes de la policía comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Entre los arrestados se encontraba Bernardino García Francisco.

Bernardino, indígena Na Savi, era el Coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso. Promotor de la formación de la policía comunitaria en su región, él mismo fue víctima de varios asaltos y estuvo a punto de perder el ojo derecho a raíz de un ataque.

Nativo de El Paraíso, en donde fue comisario municipal, Bernardino es uno de los sobrevivientes de la matanza de El Charco, en el que el Ejército ejecutó a 10 indígenas na'savi y a un estudiante universitario. Él resultó herido y estuvo encarcelado más de un año.

A sus 53 años, Bernardino tiene una larga trayectoria de lucha. Fue Presidente de los Bienes Comunales de Coapinola, fundador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y compañero de lucha de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, desaparecidos, torturados y ejecutados en febrero del 2009.

Bernardino está acusado de secuestro y detenido en el reclusorio de Acapulco. Entre los objetivos de la acción policiaco-militar en El Paraíso en el que fue apresado, estaba el poner fin al proceso de reeducación que ahí enfrentaban varias personas por acusaciones investigadas y juzgadas en la justicia comunitaria. Su arresto levantó una profunda ola de indignación, tanto en Ayutla como en el resto del territorio comunitario. Fue una advertencia de que la facultad de las comunidades para ejercer justicia estaba en entredicho. Pero fue también un indicador de lo mucho que las experiencias de Tixtla y Ayutla incomodaban a las autoridades gubernamentales y al Ejército.

EL FACTOR TIXTLA Y AYUTLA

La segunda ruptura dentro de la CRAC tuvo como protagonistas a dos bloques. Por un lado, varias comunidades de Tixtla, Olinalá y Ayutla asesoradas por Gonzalo Molina; por el otro, la dirección de la CJSLA. La gota que derramó el vaso fue la toma del Palacio Municipal de Tixtla por la corriente radical y el deslinde que de ellos hizo el coordinador de la CJSA, Eliseo Villar. Sin embargo, la historia de desavenencias, venía de atrás.

La marcha de policías comunitarios de Tixtla armados hacia Chilpancingo del 8 de abril de 2013 que alebrestó el escenario político nacional no fue un hecho aislado. A lo largo de ese año los comunitarios tixtlecos se habían movilizado intensamente por una gran variedad de demandas. Lo mismo tomaron el Palacio Municipal para exigir la libertad de sus detenidos que encabezaron las labores de salvamento y reconstrucción en el municipio ante los desastres naturales.

Esta intensa actividad generó continuos roces con el Ejército y el gobierno del estado. Los militares objetaron que los comunitarios estuvieran armados más allá de sus pueblos, pero éstos reivindicaron su derecho a hacerlo. La radicalidad de sus protestas provocó que sus compañeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se deslindaran de ellos.

Un mes después de la “toma” de Chilpancingo del 8 de abril, poco más de 100 vecinos de Acatempa, marcharon cerca de una hora, de su comunidad a la cabecera municipal en Tixtla, para exigir obras en beneficio del lugar

y el reconocimiento a sus policías comunitarios. Dos jóvenes iban al frente de la protesta enarbolando la bandera nacional. El grupo estaba encabezado por el comisario Pastor Coctecon. Participaban más de 70 personas del pueblo, 30 policías comunitarios y 10 más de Ayutla, quienes portaban rifles calibre 22 y escopetas. Con ellos iba Gonzalo Molina González, asesor de la casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.

Las autoridades montaron un operativo con policías federales, estatales, municipales e integrantes del Ejército para detenerlos en la carretera. Sin embargo, en una maniobra sorpresiva y eficaz, los habitantes de Acatempa rodearon el bloqueo con gran destreza y salieron por otro lugar diferente.

En el entronque de la carretera Chilpancingo-Tlapa se trató de impedirles el paso. Un militar les dijo que estaban violando las leyes al trasladarse fuera de su comunidad con armas y que no podrían entrara a Tixtla con fusiles y escopetas. El comisario comunitario le respondió, “no vamos a pelear con nadie jefe, vamos a la Presidencia Municipal porque queremos dialogar con el presidente municipal”. Los marchistas le gritaron a los militares que mejor se pusieran a buscar delincuentes y a desarmarlos, pues a ellos no les hacían nada y que no se metieran con la gente de bien.

La protesta continuó hasta que, al llegar a la entrada de Tixtla, los soldados se dispusieron a cerrarles nuevamente el paso. La discusión entre comunitarios y elementos castrenses se repitió. Los mandos comunitarios esgrimieron que iban armados bajo el amparo de la ley 701 del

estado. Finalmente, después de tres intentos por frenar y desarmarlos, la movilización llegó hasta el Palacio Municipal, en donde dialogaron con el alcalde.

El pulso repitió nuevamente, cuando los comunitarios se retiraron a su pueblo. Los soldados y funcionarios públicos volvieron a objetar las armas en manos de civiles. Si llevaban con ellos rifles y escopetas, le respondió el comisario a las autoridades, era porque son policías. “¿Dígame —le preguntó uno de ellos al director de Gobernación— qué policía no anda armado? Si el gobierno hiciera bien su trabajo como debe de ser, no habría necesidad de este cuerpo armado”. Los militares terminaron escoltándolos a su comunidad. Sin embargo, las luces de alarma se prendieron nuevamente. El conocimiento del terreno y la disciplina que mostraron los comunitarios generó preocupación en el Ejército.

Asesorando a los Acatempa, iba Gonzalo Molina González. Nacido en Matialapa, municipio de Tixtla, Guerrero, en 1962, fue el tercero de diez hermanos, creció en el seno de una familia dedicada a la fabricación de ollas, cazuelas y comales.

Gonzalo creció en la cabecera municipal. La pobreza le impidió estudiar una carrera; sin embargo, concluyó, con muchos esfuerzos, la educación media superior. Trabajó desde muy pequeño en labores de limpieza, jardinería y recolección de basura. Casado y con tres hijos, sacó adelante a su familia.

Según Tlachinollan, Gonzalo convivió con distintas comunidades de la región, viendo de cerca la pobreza y las carencias que predominan en ella. Sensible a la injusticia,

comenzó a promover desde muy joven la organización comunitaria para realizar proyectos sociales de autoempleo.

Pero esa labor se vio interrumpida tanto por el aumento de los asaltos violentos, los secuestros, las extorsiones, y los homicidios, como por la corrupción y la complicidad de los gobernantes con los *mañosos*. Gonzalo se convirtió entonces en uno de los más visibles promotores de la organización comunitaria por la justicia y la seguridad de los pueblos de Tixtla.

Molina González animó la formación de policías comunitarias en comunidades de ese municipio como Acatempa, Tecolzingtla, El Durazno, El Troncón, Zacatzonapan y en el barrio de El Fortín. Con convicción, fomentó el acercamiento con la CRAC. El había sufrido en carne propia la acción de la delincuencia. Su hijo, Cristian Molina, de 18 años y a su novia Abilene Ibáñez Sánchez, habían sido secuestrados el 30 junio de 2013.

La movilización de los vecinos promovida por Medina alcanzó una dimensión regional y provocó conflictos frecuentes con el Ejército. El 1 de julio de ese año, una partida de soldados retuvo en un cruce de la carretera Chilpancingo-Chilapa, a unos 10 minutos de la cabecera municipal Tixtla, a más de 50 policías comunitarios que se dirigían de Olinalá y Huamuxtlán a reforzar a sus compañeros de Tixtla tras el levantón del hijo de Gonzalo y la novia del joven. Los militares, sólo permitieron el paso a una comisión de cuatro de ellos. Muy molesto, Jesús Coronel, comandante de la Policía Ciudadana de Olinalá, afirmó que mientras el Ejército deja pasar tranquilamente en las carreteras y calles a los grupos de la delincuencia

organizada, hostiga a los integrantes de la Policía Comunitaria hostiga.

Finalmente, la movilización de los comunitarios logró rescatar al hijo de Gonzalo y a su novia, sanos y salvos.

El 18 de agosto, los comunitarios de Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán y Ayutla, marcharon en Tixtla en rechazo a la reforma energética y para exigir la salida de las fuerzas armadas de territorios comunitarios. En el mitin realizado en la plaza, Gonzalo, denunció que “con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Ejército y la Marina están entrando a nuestras comunidades, intimidando a nuestros pueblos y hostigando a nuestros policías comunitarios”.

El pulso entre los de Tixtla y las autoridades estatales subió rápidamente de tono. El 22 de agosto, un día después de las detenciones de Nestora y Bernardino, el gobernador Aguirre afirmó que los de la Casa de Justicia de El Paraíso ya no pertenecían a la CRAC pues “así lo expresó su coordinador Eliseo Villar” y por tanto “no están al amparo de la Ley 701, como la auténtica CRAC”.

Los comunitarios de Tixtla reviraron fuerte. El 27 de ese mes, centenares de ellos tomaron las instalaciones del ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de Nestora y Bernardino, así como de otros 22 policías comunitarios. En la acción, los comunitarios desarmaron a los policías municipales. Simultáneamente, 800 integrantes de la CRAC ocuparon las oficinas del ayuntamiento de Ayutla de los Libres y marcharon por la carretera Tierra Colorada a Cruz Grande.

“Esto es una prueba para el gobierno estatal y federal de que no vamos a permitir que sigan atropellando

nuestros derechos. Como nuestros compañeros no son liberados comenzamos a hacer acciones, esto va a depender de que se escalone la violencia, si nuestros compañeros son liberados ya no habrá acciones, pero si no es así pues vamos hacer más cosas”, advirtió Gonzalo Molina.

La reacción gubernamental fue enérgica e inmediata. El gobernador Ángel Aguirre dijo que las acciones violentas de “un grupo de Tixtla” fuera de la CRAC y la UPOEG violaban los acuerdos pactados. Las autoridades rompieron las negociaciones con los comunitarios. Mil guardias que marchaban del municipio de Ayutla a Florencio Villareal fueron desarmados por unos 600 soldados. El procurador de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, calificó la toma del ayuntamiento como una acción tipo guerrilla.

Dos semanas antes, el dirigente de la CJSLA, Eliseo Villar se había desmarcado de sus compañeros de los municipios de Tixtla, Olinalá y Ayutla, argumentando que habían cometido acciones fuera de la ley, como bloqueos de carreteras, toma de ayuntamientos y retención de personas en casas de justicias. Previamente, Molina había exigido a Eliseo Villar que rindiera cuentas de los recursos que recibe del gobierno del Estado. También, lo había señalado como responsable de las calumnias contra Nestora Salgado.

BAJO EL AGUA

Ingrid y Manuel son nombres que no evocan buenos recuerdos a los guerrerenses. En septiembre de 2013, en menos de veinticuatro horas, el estado fue golpeado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. Sus efectos

fueron devastadores en todas las regiones. Más de la tercera parte del municipio de Tixtla, incluyendo siete de los nueve barrios de la cabecera municipal, quedaron inundados, cuando la laguna “Espejo de los dioses” se desbordó.

Las calles se convirtieron en ríos de aguas negras y los habitantes perdieron de un día a otro sus pertenencias. Sus viviendas quedaron anegadas. Los servicios de electricidad y telecomunicaciones colapsaron. Conseguir víveres y agua potable se convirtió en una odisea.

El gobierno se concentró en el rescate de Acapulco y el municipio quedó relegado de la ayuda oficial. Los tixtlecos tuvieron que hacerse cargo de su propio salvamento. Organizados por los policías comunitarios y con el apoyo de los normalistas rurales de Ayotzinapa, apoyándose a sí mismos, enfrentaron como pudieron la emergencia. Al frente de esas labores estuvo Gonzalo Medina, el asesor de los comunitarios.

El gobernador Ángel Aguirre se presentó a Tixtla hasta ocho días después de la tragedia. Se encontró con una multitud rabiosa ante la tragedia y el abandono oficial. Un maestro que no dio su nombre, le dijo de frente al mandatario que el problema se tenía que solucionar de fondo y le pidió que no fuera a ofenderlos a con limosnas.

“Discúlpeme – le soltó de frente el profesor – pero yo no puedo venir a darle “vivas” cuando yo veo que mi gobernador después de ocho días se viene a presentar. ¿Qué le tengo que aplaudir señor gobernador? ¿Estar en las condiciones en que estamos, así bajo el agua? Estamos cansados de tanta indiferencia”.

El mandatario quiso interrumpirlo. “Ya, ya lo escuché” -le respondió. Pero los damnificados lo callaron. “A

eso vino, a escuchar, que se calle el gobernador, ahorita está hablando el pueblo”, le echaron en cara los pobladores.

Llorando y gritando, una mujer le espetó: “¡Puro Acapulco, Acapulco no es Guerrero! Mi casa se está cayendo porque es de adobe y el agua le hace mal y apenas se viene a parar”.

Como pudo, el gobernador sorteó la explosión de ira, ofreció ayudas de emergencia y se preparó a escenificar el primer montaje televisivo del municipio. Acompañado de su comitiva, Aguirre Rivero -reportó *El Sur de Acapulco*- caminó entonces dentro del agua, hasta quedar cubierto a la altura del pecho, y así, dar una entrevista a Televisa.

Las promesas gubernamentales de apoyo no se cumplieron y el enojo popular no menguó. En la primera semana de octubre, habitantes del barrio El Santuario, ocuparon la presidencia municipal y retuvieron al secretario del ayuntamiento, Edilberto Vega, así como a la regidora perredista, Erika Alcaraz.

Lejos de que la tragedia limara las tensiones entre el Ejército y la policía comunitaria, la exacerbaron aún más. El 14 de octubre, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, coordinados por los comunitarios, iniciaron labores de limpieza de la cabecera municipal. En eso estaban cuando llegó un cuerpo de fuerzas especiales, los rodeó y los presionó para que se retiraran. Los soldados acusaron a los muchachos y a los comunitarios de irse a tomar la foto. Exasperado, Gonzalo Medina denunció: “pero si son los soldados son los que vienen, están un rato y se van. Desde que se inició la inundación hemos estado con nuestro pueblo”.

Un mes después del desastre, los tixtleños sufrieron una nueva afrenta. Soldados y personal de Televisa, montaron en el poblado un escenario en el que supuestamente brindaban ayuda a los damnificados por las lluvias.

La maniobra fue vivida como una burla. “Hay una gran indignación porque vengan a hacer su circo, no se vale que vengan a lucrar con el dolor ajeno, si no nos ayudaron, que no nos chinguen”, dijo una de las víctimas.

Los habitantes les exigieron una disculpa y los militares se rieron. Ante la mofa, los soldados fueron retenidos durante seis horas, hasta que autoridades e inconformes llegaron a un acuerdo para liberarlos.

Durante dos meses, Tixtla permaneció cubierta por el agua. Los policías comunitarios fueron centrales en las tareas del rescate y reconstrucción. Lo mismo cuidaron las pertenencias de gente humilde que tomaron los picos y las palas para reparar la ciudad. Sin embargo, en lugar de reconocer ese esfuerzo, la respuesta gubernamental fue hostigarlos y apresar a su dirigente.

Gonzalo fue arrestado el 6 de noviembre de 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa. Está acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones. Fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 13 en el Municipio de Miahuatlán, estado de Oaxaca. Él, a pesar de que las condiciones de su detención son severas, no ha bajado la guardia. En los siete minutos semanales de teléfono que le son permitidos, envía mensajes de aliento y esperanza al pueblo de Guerrero.

EL TAMAÑO DE LA DESMESURA

A la detención de Nestora Campos, Bernardino García y Gonzalo Molina le siguió la de Arturo Campos Herrera. El 1º de diciembre, el indígena Na savi de 43 años de edad, fue arrestado después de participar en un evento cultural en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, para exigir la libertad de sus compañeros comunitarios presos.

Ese día, Arturo tomó la palabra. Se iniciaba la campaña “12 días por la defensa de nuestra vida y libertad”. Pidió no olvidar a los detenidos. “Nos faltan a todos”, dijo. Cuando regresaba del acto fue apresado. Lo acusan del delito de secuestro y otras lindezas por el estilo. Como si fuera un peligroso criminal, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mejor conocido como Almoloya.

Con una larga tradición de lucha social previa, Arturo promovió la creación de la CRAC-PC en Ayutla, en 2012. Enfrentó las amenazas de los narcotraficantes que dominaban la región, con la misma valentía que antes había denunciado las violaciones a los derechos humanos en la región por parte del Ejército.

Casado, padre de seis hijos, Arturo quiso ser abogado. No pudo. La temprana muerte de su padre cuando él tenía tres años de edad se lo impidió. Para estudiar trabajó de mandadero o limpiando casas particulares. Vivió en carne propia la discriminación. Aprendió a hablar castellano con fluidez. Al terminar la secundaria regresó a su comunidad a sembrar el campo.

En el 2000, junto a otros paisanos suyos, fundó la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y

Tlapanecos. Entre el 2000 al 2003 fue su secretario. Comenzó allí a denunciar los abusos de los militares.

Arturo ha sido uno de los más comprometidos denunciantes de la masacre del Charco. “Para él —dice el centro de derechos humanos— éste era el más extremo ejemplo de los alcances que tenían la militarización y la impunidad de las violaciones a derechos humanos que el Ejército cometía en las comunidades indígenas de Ayutla. Muchas de las mujeres que perdieron a sus familiares en los hechos, reciben a Arturo todos los años como se recibe a quien conoce el dolor y las heridas que una lucha tan larga deja, pero que no deja de acompañar con la misma determinación de siempre”.

Más adelante, Arturo se mudó a la cabecera municipal de Ayutla para ayudar a establecer vínculos entre las comunidades. Se convirtió en organizador de movimientos por servicios públicos en las colonias de la periferia de la cabecera municipal. Luchó por obtener la clave de centro de trabajo para la escuela comunitaria de Nuevo Horizonte, y fue elegido como Presidente de Padres de Familia de la Escuela Nueva Creación.

Ahora, sin ser un criminal, mucho menos un secuestrador, está preso en Almoloya, al lado de *El Chapo Guzmán* y personajes como él.

PLEITOS DE FAMILIA

La tercera ruptura dentro de la CRAC-PC se produjo cuando Eliseo Villar estableció una agenda muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado, enfrentando

a un sector de comunidades mayoritario en San Luis Acatlán, asesorados por Valentín Hernández Chapa y Pablo Guzmán. Originalmente, todos, Eliseo, Pablo y Valentín, formaron parte del mismo grupo. De hecho, fue la disputa de Valentín Hernández con Cirino Plácido la que le abrió la puerta de la conducción de la CRAC a Eliseo. El temor de que llegara gente de la UPOEG los llevó a promover al frente de la organización a un personaje duro para enfrentarlos, descuidando los usos y costumbres del Consejo. Eliseo era ese personaje: un policía sin larga trayectoria comunitaria.

La fractura entre el grupo de Eliseo y el de Valentín y Pablo comenzó a surgir a raíz de la detención de Eliseo y cuatro policías comunitarios más en Acapulco, el 6 de mayo de 2013. Eliseo se había trasladado al puerto con sus compañeros para que se les practicara un examen médico a dos menores de edad para detectar si habían consumido drogas. Allí fue arrestado por marinos y policías federales acusándolo de portar armas exclusivas del Ejército.

Era cierto. Eliseo y los policías comunitarios iban armados, como siempre lo hacían. Además, previamente habían informado por escrito a Rosana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos, y al comandante del 48 batallón militar con sede en Cruz Grande, que realizarían un viaje de San Luis Acatlán a Acapulco.

La reacción de la CRAC ante la detención de su dirigente fue enérgica. Declaró rotos los acuerdos que existían con el gobierno estatal, y responsabilizó de ello a la subsecretaria de Asuntos Políticos y al gobernador.

El Consejo consideró “una agresión directa a nuestro sistema de justicia, seguridad y reeducación que está

impuesto por los pueblos de Guerrero y a los compañeros”, la detención “arbitraria” de los coordinadores y policías comunitarios, por lo que al cumplir con lo acordado y no haber sido respetado “declaramos rotos los acuerdos de paz con el gobierno estatal”.

El pulso no llegó a mayores y Eliseo fue liberado. Sin embargo, el incidente le permitió adquirir una fuerza interna que no tenía previamente en la CRAC y distanciarse de Pablo Guzmán y Valentín Hernández. La gente se movilizó a su favor, argumentando que la Ley 701 lo amparaba. Pablo buscó que saliera libre bajo fianza negociando con el gobierno. Hasta ese momento, él era quien tenía hilos de la negociación con Aguirre. Pero, pagar la fianza implicaba aceptar que la policía comunitaria no tenía la facultad para trasladarse armada a realizar tareas más allá de sus comunidades. Finalmente no se dio fianza y Eliseo salió libre. Pero el dirigente le recriminó a Pablo la negociación. A partir de ese momento Eliseo tomó la batuta de la organización y la fractura se hizo inevitable.

Cuando el 28 de junio elementos del Ejército desarmaron nuevamente a Eliseo y a seis policías comunitarios que lo acompañaban y que se dirigían a una reunión a la casa de justicia de El Paraíso, las contradicciones internas se habían exacerbado.

Según el director de Tlachinollan, la agenda de Eliseo al frente del Consejo está guiada por la búsqueda de apoyo a proyectos productivos, el incremento de los recursos económicos (un millón de pesos al mes) que les da el gobierno estatal, la obtención de dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento y uniformes. Esta

orientación tuvo como resultado final el que el tema más político, el de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía, quedara desdibujado. Villar -explicó el antropólogo Barrera a la periodista Rosa Rojas- empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas. En esa ruta, Eliseo desistió de luchar por los comunitarios presos.

Motivo adicional de choque entre ambos grupos fue la decisión de Villar de crear una nueva Casa de Justicia en Cochoapa, con grupos afro mestizos de Ometepec, sin consultar a la asamblea y sin que trascurriera el tiempo establecido de prueba para hacerlo. El reglamento interno señala que deben de pasar dos años para que nuevos integrantes puedan asumir plenos derechos y con ello operar como parte de este sistema de seguridad y justicia.

En la reunión en la que se decidió la formación de la quinta Casa de Justicia, varios oradores llamaron a la prudencia, al consenso y al apego al reglamento interno. Valentín Hernández, asesor de la CRAC, reclamó que hubiera silencio respecto a policías comunitarios encarcelados. Enfático, dijo, “no estamos todos, faltan 13 compañeros que están presos, en dado caso que hubieran cometido faltas esto debe ser discutido y en su caso sancionado por la CRAC, no por el gobierno federal”.

Adicionalmente a ello, en otras comunidades, Eliseo Villar había buscado formar grupos de policía comunitaria paralelos a los ya existentes. En los hechos, ha constituido grupos clientelares afines a sus intereses, para hacer contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos que él y donde no tiene mayoría.

La relación de Villar con el gobernador Aguirre es estrecha. Cuenta el periodista Sergio Ocampo, que el mandatario ha declarado públicamente que Eliseo lo apoyó en su campaña, que le regaló un becerro, que es su amigo y que ahora él va a corresponderle.

Como resultado de esta disputa, un grupo de comunidades destituyó a Eliseo Villar en una asamblea efectuada el 30 de marzo de 2014. El coordinador depuesto negó la validez del evento y dijo que sus adversarios eran minoría.

Quienes desconocieron a Villar —explica Abel Barrera— son parte de una variopinta coalición de consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios —líderes históricos de la región de la Costa-Montaña—, que tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto. Sus ejes de acción consisten en tener coordinadores realmente supeditados a la decisión de las asambleas; nombrar a las policías en las comunidades; respetar y cumplir del reglamento interno y promover la reeducación de quienes delinquen.

Una acusación adicional que se le ha hecho a Eliseo, los de San Luis Acatlán señalan que cometió un fraude de 740 mil pesos en la compra de armamento, vehículos, cartuchos, uniformes y fornituras para la Policía Comunitaria.

Por lo pronto, entre otros muchos otros saldos de esta pugna, se encuentra que hoy en San Luis Acatlán hay tres Casas de Justicia distintas, cada una con su propio edificio. Por un lado, está la histórica, que ocupa la corriente de Pablo y Valentín. Por el otro, opera la de los pueblos fundadores. Finalmente, en unas oficinas construidas por el gobierno de Aguirre, despacha Eliseo.

CHILPANCINGO

En mayo de 2014, el gobierno estatal relanzó el Mando Único Policial en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Teloloapan y Tixtla. La medida consiste en la homogeneización de las policías, supuestamente para fortalecer la seguridad. Este mismo programa fue una directriz del Sistema Nacional de Seguridad anunciada desde finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y aunque, en junio de 2013 fue retomada por Ángel Aguirre Rivero para Acapulco e Iguala, tardó varios meses en aterrizar.

Desde el momento mismo de su anuncio, la medida fue rechazada enérgicamente por la CRAC y la UPOEG, que vieron en ella, una amenaza a la ley 701. “El mando único -dijeron- más bien podría servir para las zonas urbanas; nosotros tenemos nuestros propios sistemas de seguridad y justicia”.

La objeción comunitaria rindió frutos y el gobernador tuvo entonces que recular. El 20 de marzo de 2013 los coordinadores de la CRAC y el gobernador Ángel Aguirre Rivero pactaron que su Policía Comunitaria no sería incluida en el decreto para convertir las policías comunitarias y ciudadanas en auxiliares del sistema policial oficial, ni se le incluiría en el mando único.

Sin embargo, para meter más ruido en el complicado panorama de la seguridad estatal, se aprobó en el estado la formación de una Policía Rural. El 28 de noviembre de 2013, el Congreso decidió que ésta fuera un órgano operativo de la seguridad pública estatal, encargado de man-

tener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes de las comunidades en los municipios en que funcione y opere.

En la nueva norma se establece que los cuerpos de la policía rural desarrollarán sus funciones dentro de la circunscripción territorial de la localidad o municipio en la que fue constituida. Se acepta que sean las asambleas de las comunidades por mayoría quienes decidan las personas que serán contratados por el estado como policías rurales. Autoriza a que sus integrantes se desplacen siempre y cuando lo soliciten previamente a la policía municipal, estatal o federal, previa autorización de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado.

Los promotores de la reforma argumentan que la nueva legislación no sustituye a contenido en la Ley 701. Señalan que confirma el reconocimiento de la policía comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. Más aún, ésta formará parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Sus detractores, en cambio, le han formulado muchas críticas. La CRAC, por ejemplo, rechaza el formar un mismo cuerpo de policía con la policía rural.

Según la abogada Magdalena Gómez “la iniciativa aprobada contiene todos los elementos que el estado ha pretendido imponer a la policía comunitaria en cuanto a ser auxiliar, con sueldo y control jerárquico, es decir, desnaturalizando el proyecto autonómico. Además, en los hechos se está confinando a la CRAC y no se diga a los nuevos proyectos de policía ciudadana, al impedirles a ambos su ampliación a otras regiones y no hacerlo en cambio con la nueva policía rural”.

“La nueva policía —señala la licenciada Gómez— no tiene restricciones territoriales ni hay disposiciones expresas de que operará en comunidades y municipios distintos a aquellos donde opera la CRAC”.

Los señalamientos críticos fueron ignorados. El 14 de marzo de 2014, Aguirre Rivero tomó la protesta como Policías Rurales, de 200 campesinos de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri.

UN FUTURO EN DISPUTA

El 29 de abril de 2014, durante su informe como gobernador —en el que se fue la luz en 18 ocasiones— Aguirre dijo que había entablado mesas de trabajo con los grupos de la policía comunitaria. Algunos —señaló— rompieron unilateralmente el diálogo con el gobierno estatal, se rebelaron contra la autoridad legalmente establecida y se convirtieron por la vía de los hechos, en poderes paralelos, lo cual contradice los principios de la Carta Magna.

Según él, la amenaza a la gobernabilidad y la paz social obligó a tomar medidas, que concluyeron en el enjuiciamiento de varios líderes acusados de delitos del orden común. Sin embargo -destacó- eso no ha sido obstáculo para mantener el dialogo y el acuerdo con otros grupos, como los de la sierra que se constituyeron en policías rurales.

Las palabras del mandatario muestran que la ofensiva gubernamental contra las policías comunitarias dista de haber cesado. Nuevas acciones en su contra son previsibles en el corto plazo. La autonomía de los pueblos les resulta inadmisibles.

Las cartas están sobre la mesa. El proyecto histórico de la CRAC, que opera en 147 comunidades, y que redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos, es una referencia para los pueblos y ciudadanos de todo el país. Su existencia ha sido fuente de inspiración y estímulo para quienes buscan construir un proyecto autónomo. La división lo conduce rumbo al desfiladero. Pone en peligro esta experiencia ejemplar. Abre las puertas a quienes desean que el Ejército entre a esas comunidades a “poner orden”.

A lo largo de sus 19 años de vida, el Consejo ha tenido graves contradicciones internas en distintos momentos. Hasta ahora, los había sabido sortear con inteligencia, poniendo por delante el interés de las comunidades y los pueblos. En todo el país son muchos quienes esperan que, con base a la autoridad moral de las comunidades, las distintas corrientes sean capaces de superar las diferencias que los separan.

VIII) EL SALVAJE OESTE

EN LLAMAS

Michoacán está en llamas, pero por optimismo gubernamental no queda. Desde que las autodefensas se levantaron en armas el 24 de febrero de 2014, las autoridades gubernamentales desestiman la dimensión del asunto, y ensalzan los éxitos de sus estrategias.

A pesar de que los combates continúan y los narcos siguen en lo suyo, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de aquel estado, Alfredo Castillo Cervantes aseguró el sábado 10 de mayo de 2014 que el proceso de desarme, registro y desmovilización de los grupos de autodefensa en Michoacán “avanzó de forma exitosa”.

No hay novedad en sus declaraciones. Independientemente de lo sucedido en los campos de batalla, vez tras vez ha dicho lo mismo. A los pocos días de ocupar el cargo, empeñado en minimizar el conflicto y ensalzar la estrategia oficial, declaró que el avance de las fuerzas federales en Tierra Caliente había sido “menos complejo de lo que esperaban”.

No fue el único funcionario en usar ese tono optimista para referirse a lo sucedido en Michoacán. En enero de 2014, Monte Alejandro Rubido, entonces vocero de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral, aseguró que el eficaz despliegue de las fuerzas federales y la sustitución de los policías de 27 municipios generó que el margen de maniobra de los grupos delincuenciales esté prácticamente reducido a cero.

Palabras parecidas se han escuchado desde comienzos de 2007, cuando Felipe Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico en Apatzingán. Y se repitieron durante las dos ofensivas gubernamentales anteriores. Hoy sabemos que eran mentira, meras ráfagas de saliva y papel en la batalla por la opinión pública. Sus estrategias fueron un fracaso. Los malos conservan el control del territorio, hicieron crecer sus negocios y ampliaron su influencia en todos los ámbitos de la sociedad y el poder del estado.

En los hechos, dígame lo que se diga, en Michoacán hay una guerra que no ha terminado. Dos bandos armados combaten, tienen bajas, disputan un territorio, realizan acciones de sabotaje, cobran rentas. Utilizan armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, vehículos blindados y sistemas de información sofisticados. Cuentan con base social.

La guerra que libran es inusual. No es una guerra civil pero los ejércitos que pelean están formados y conducidos por civiles. En los hechos, cuestionan el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Mientras ellos echan bala, en el campo de batalla coexisten con policías federales, estatales y municipales, y con el Ejército. Ambos bandos aseguran que, en distintos momentos, una u otra de las fuerzas del orden han apoyado a sus rivales.

Como en todas las guerras, en ésta la primera baja ha sido la verdad. Las versiones sobre lo que acontece se suceden unas a otras. Las palabras de unos son contradichas por las de otros. Los distintos relatos se contraponen y se desmienten.

Hay una guerra, aunque Hipólito Mora, fundador y una de las principales figuras de las autodefensas, le llame de otra manera. No —le dijo a *Milenio*— no es guerra. Nos estamos defendiendo. Nada más. No atacamos a nadie. No salimos a buscarlos a ellos. Estamos nada más cuidando el pueblo para que no entren. No estamos en guerra, nada más defendiéndonos... Tenemos que defendernos. Si llega alguien no me voy a dejar o me voy a cruzar de brazos. Tengo que hacer mi deber que es defenderme.”

¿Por qué se pone en duda el optimismo gubernamental? Por el enraizamiento del fenómeno del narcotráfico en la vida del estado. Los *templarios* se abrieron paso en la sociedad michoacana como grupo justiciero local de autodefensa para enfrentar la barbaridad de otros *cárteles*. Desde allí, tejieron una imbricada malla de relaciones con la economía, la política, la justicia, los aparatos de seguridad estatales y la sociedad. Esa red les proporcionó simultáneamente una base social real y una enorme masa de damnificados que los odia y teme.

Los centros geográficos clave de la actual disputa son la Tierra Caliente michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre del Sur que separa una ciudad de otra.

Apatzingán y su valle son el epicentro de la vida económica y política calentana. Allí se concentran las sedes

de las instituciones y los poderes formales. También está la 43 Zona Militar, que tan poco eficaz fue en el combate al narcotráfico. Los Caballeros Templarios establecieron en esa ciudad una especie de centro financiero, desde el cual controlaban la recaudación de los demás municipios. Su cuartel general se encontraba en Tumbiscatio.

Pese a que la carencia de agua es evidente en la agreste Sierra de Coalcomán, una interminable red de mangueras negras cruza amplias extensiones. Sirven para que circule el líquido vital, desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de mariguana, a través de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez sofisticadas, en predios cercados para evitar que los animales se la coman.

La sierra michoacana ocupa el segundo lugar nacional en la producción de amapola y mariguana. Pero no es la única región de la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral Pacífico llegan lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectadas por radares o descubiertas por guardacostas, para trasladarla hacia Estados Unidos. A Lázaro Cárdenas, puerto de contenedores en rápida expansión, arriban, desde Asia, los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos; desde allí salen cargamentos de todo tipo de drogas.

Sobre esta base material, generadora de ingresos multimillonarios, los *templarios* han construido una próspera industria criminal de la que forman parte otras ac-

tividades ilícitas, como la venta de protección a agricultores y empresarios, la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de productos piratas a través del comercio ambulante. Se trata de negocios que blanquean sus ganancias mediante empresas lícitas, como las que exportan hierro a China.

Michoacán está en llamas. Para apagar el incendio no basta una ocupación policiaco-militar del territorio. Hay que rehacer desde abajo el conjunto de las relaciones sociales. Nada parece indicar que la actual estrategia esté haciendo algo así.

LAS NUEVAS FRONTERAS

En el nuevo siglo mexicano, Michoacán se ha convertido en una reedición del viejo oeste estadounidense, sólo que en lugar de la ley del revólver de entonces rige ahora la ley del cuerno de chivo.

Hoy como ayer, asistimos a la colonización de un territorio, al despojo de bienes y tierras, al vacío de instituciones de gobierno y, sobre todo, a la redefinición de las fronteras. Ciertamente, muchos de los actores de nuestra época son nuevos, pero otros son los mismos de entonces: mineros, ganaderos, ferrocarriles, forajidos y *sheriffes* en sus distintas versiones.

La siembra y tráfico de drogas es sólo una pieza más del rompecabezas del salvaje oeste michoacano. La entidad ocupa un lugar central en el mapamundi de las nuevas zonas de influencia planetaria que se disputan China, India, Estados Unidos y Canadá. Las fronteras que están

volviéndose a trazar en ese estado están siendo fijadas por la disputa por las materias primas y la pelea por las rutas comerciales.

En Michoacán se localiza el puerto de Lázaro Cárdenas, el de mayor profundidad en México. De allí parte, con rumbo a Matamoros y Nuevo Laredo, en nuestra frontera norte, el más importante corredor comercial del sistema ferroviario nacional y el más barato eje de transportación entre el Pacífico y el este de Estados Unidos: el Kansas City Southern de México (KCSM).

En la cartografía que retrata los contornos de los nuevos flujos comerciales puede dibujarse una raya que cruza el océano Pacífico y que conecta Lázaro Cárdenas, a punto de convertirse en el principal centro logístico marítimo de América Latina, con Shanghai, el mayor puerto del mundo (*Milenio*, 10/2/04). Si en 2008 desde el embarcadero mexicano zarpaban únicamente 1.5 por ciento de las exportaciones de hierro a China, a mediados de 2013 salían por allí casi la mitad de las ventas nacionales del mineral al dragón asiático.

Una de las principales empresas que exporta metales y minerales a través de este puerto es la trasnacional india AcelorMittal, un gigante entre los gigantes acereros del planeta. En el muelle posee una terminal de seis hectáreas con dos posiciones de atraque y una recepción de buques con una capacidad de 165 mil toneladas desplazamiento. Los productos de acero que ofrece son planchón, varilla, alambrón, placa, tubo, y lámina en rollo.

Oriente y occidente, costa y costa, y la frontera, han sido unidas por el ferrocarril. El 59 por ciento de la carga

por contenedores que llega al puerto lo hace por línea férrea, es decir, a través del Kansas City Southern de México. La empresa, que es conocida como el ferrocarril del libre comercio, obtuvo la concesión de 50 años con el derecho exclusivo de prestar servicios de transporte de carga a lo largo de los primeros 30.

Lázaro Cárdenas se enlaza — como señala la red de jóvenes ante la emergencia nacional — a través de una red multimodal de transporte a un grupo de entidades federativas que en conjunto generan 60 por ciento del PIB nacional. En sus muelles se descargan las materias primas y manufacturas chinas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las modernas plantas de ensamble instaladas en el Bajío, muchas de automóviles y aeroespaciales. De allí parten numerosos productos fabricados en los nuevos enclaves maquiladores. Por el puerto se exportaron en 2013 más de 172 mil coches y se importaron más de 146 mil unidades. A esa aduana arriban los precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

El eje Lázaro Cárdenas-KCSM es vital para descongestionar el movimiento interoceánico de mercancías desde y hacia Estados Unidos. Gracias a él, Washington puede sortear los cuellos de botella del Canal de Panamá y bajar sus costos de transporte entre el Pacífico y el Atlántico.

Nuestro vecino del norte tiene un severo problema orográfico. Sus agrestes montañas provocan que el traslado de mercancías entre oriente y poniente sea particularmente difícil, y el transporte por tierra, una labor ardua y cara. Como ha explicado Andrés Barreda, casi 80 por ciento de la economía estadounidense está concentrada en su mi-

tad del este. Allí se apiñan riquezas claves, la mayoría de ciudades e industrias estratégicas y una parte sustantiva de su población.

Por el contrario, el oeste es, excepto en la franja costera del Pacífico — particularmente rica en el valle de California —, un territorio no tan bastamente industrializado, aunque cuente con importantes reservas mineras, bosques y las instalaciones balísticas militares más importantes del mundo.

De ahí la extraordinaria importancia del corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo. Con el canal de Panamá cogestionado, el traslado de contenedores con ferrocarriles entre los dos océanos a través de México puede resultar más rápido y barato por esta ruta que transitando el territorio montañoso estadounidense.

Michoacán ha adquirido creciente relevancia para China, y no sólo como una cabeza de playa en América del Norte. De allí zarpan toneladas del hierro para satisfacer su sostenido requerimiento de acero, en buena parte extraído y comercializado por la empresa *templaria*.

De acuerdo con la revista *Expansión*, varios consorcios del dragón asiático han crecido vertiginosamente en el área. Por ejemplo, la firma china Desarrollo Minero Unificado de México en Lázaro Cárdenas, con más de 30 concesiones en su haber, pasó de tener tres empleados a 600 en el país.

Los intercambios económicos desde y hacia China son intensos. De aquellas tierras llegan la efedrina y pseudoefedrina para fabricar drogas sintéticas. Diversos reportes periodísticos dieron cuenta en 2013, del tráfico de

personas. Vetustas embarcaciones zarpan de los puertos de Guanddong, Hong Kong y Shangai, cargados de emigrantes indocumentados, para después ser transportados hacia México, desde donde intentan cruzar la frontera con nuestro vecino del norte.

No es la única actividad ilícita en marcha. Autoridades mexicanas detectaron lazos emergentes entre cárteles mexicanos y crimen chino organizado en la importación de contrabando.

Cada vez resulta más frecuente que barcos pesqueros del dragón asiático aparezcan envueltos en conflictos transfronterizos y comerciales. En países como Argentina, Corea del Sur y Filipinas se han detenido numerosos barcos con las banderas de ese país que han sido acusados de pescar en exceso y dañar las economías locales. México no está exento de esta amenaza.

Y no se puede dejar de lado el comercio bélico. En 2008, la 8ª Zona Militar de México detectó que armas provenientes del dragón asiático estaban siendo traficadas a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas, junto con armas estadounidenses y rusas. Granadas y otros bienes militares de fabricación china han sido capturados en Puebla. Reportes especializados en asuntos de seguridad sugieren que la entrada de este equipo bélico se lleva a cabo a través de puertos como Manzanillo (coincidentalmente controlado por la compañía de logística basada en Hong Kong, Hutchison-Whampoa) y son traficados hacia el país en contenedores de mercancía china. Michoacán forma parte de esas rutas comerciales.

Desde agosto de 2013, Servando Gómez Martínez, *La Tuta*, el jefe Templario, alertó: “Tenemos una invasión

desmedida de chinos. A lo mejor conviene a los intereses de varias corporativas, o no sé. Pero aquí están con nosotros ya. Y esos también traen mafias”.

Meses después, declaró a Channel 4: “Los chinos tienen la necesidad de negociar o de expandir sus mercados o de crear más fuentes de empleos o de crear más industrias de ellos en otras partes. Los chinos son unas trasnacionales inmensamente grandes. Son harto cabrones”. Y precisó: “Ningún empresario chino ha sido secuestrado”.

John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció que su gobierno estaba preocupado con lo sucedido en la entidad y dijo estar listo para tratar de ser útiles.

Son muchas las evidencias que indican que el incendio en el salvaje oeste michoacano está avivado no sólo por el insaciable apetito de una empresa criminal, sino por la guerra soterrada que China y Estados Unidos libran por el control de la cuenca del Pacífico y el acceso a los minerales. Como dice el clásico: ser paranoico no quiere decir que a uno no lo persigan.

UN ESTADO QUE CAMINA A DOS VELOCIDADES

Como muchos otros estados de México, Michoacán es realmente dos estados con un mismo nombre. Ambos tienen más o menos una población similar. Por un lado están los 4 millones de michoacanos que viven y trabajan en Estados Unidos; por el otro los 4 y medio millones que habitan la entidad.

Michoacán es el estado con mayor intensidad migratoria del país. En varias poblaciones estadounidenses,

la mayoría de los trabajadores emigrantes que allí viven provienen de esa entidad. Ha sido la principal receptora de remesas durante los últimos diez años. De acuerdo con el Consejo Estatal de Población de Michoacán (Coespo) el estado recibió el 13.2% del total de los envíos de dinero que ingresaron al país. Poco más de uno de cada diez hogares michoacanos recibe dinero proveniente del extranjero.

Tan importante es la comunidad michoacana transnacional, que la inmensa mayoría de los líderes de las autodefensas conocidos han pasado largas temporadas de su vida en Estados Unidos, e incluso, han nacido allí.

La magnitud del fenómeno migratorio y la importancia de las remesas para la economía regional son la evidencia de un estado donde las cosas no caminan bien. Si hay un Michoacán en Estados Unidos y otro en México, hay también dos Michoacanos dentro de la entidad. Uno económicamente boyante, rico, en parte turístico; otro, devastado por las políticas neoliberales, lleno de pobreza y marginación.

Se trata de enclaves de riqueza rodeados de un mar de precariedad. Michoacán es el principal estado productor de hierro, el principal exportador agropecuario, con cultivos como el aguacate y las moras. Pero es también una entidad en la que según el Coneval, 54.4 por ciento (es decir 2.44 millones de personas) y de su población viven en la pobreza, entre ellos, 650 mil en condiciones de pobreza extrema.

En lugar de disminuir la pobreza ha aumentado. Literalmente, decenas de miles de familias carecen de vivienda y servicios básicos, son analfabetas, se sostienen con

ingresos menores a dos salarios mínimos y sufren de pobreza alimentaria. Hoy hay 200 mil pobres más de los que existían en 2010.

Los indicadores de bienestar son dramáticos. Uno de cada cuatro personas mayores de 15 años se encuentra en situación de rezago educativo, es decir no ha concluido la secundaria. Siete de cada diez carecen de seguridad social. Tres de cada diez son vulnerables por carencia de acceso a servicios en la vivienda. Uno de cada tres vive en carencia por acceso a la alimentación.

En ese océano de carencias y necesidades ha florecido el narcotráfico. Miles de jóvenes (y no tan jóvenes) ven en esta industria una forma de ganarse la vida, escalar socialmente, disfrutar lujos que de otra manera serían inaccesibles. En muchos municipios, los cárteles funcionan como instituciones de seguridad social: dan dinero para ver médicos y comprar medicinas, apoyan el entierro de los difuntos, mejoran la infraestructura de los pueblos.

El auge del narcotráfico — dice el investigador Salvador Maldonado Aranda en su ensayo *Drogas, violencia y militarización en el México rural* — puede comprenderse a partir de las reformas neoliberales del Estado. Primero, por las políticas de ajuste estructural y la reestructuración económica, política y social, que contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, con particular énfasis en las drogas. Y, segundo, por las transformaciones relacionadas con cuestiones de seguridad, corrupción y protección política.

Según Maldonado, la “acumulación social de la violencia involucra la existencia de dos mercados: uno que

realiza transacciones de mercancías ilícitas y otro que, imitando al primero, produce y trafica con mercaderías políticas, como el clientelismo y la corrupción.

Bajo la inspiración y conducción del general Lázaro Cárdenas, en 1947 se abrieron en el sur del estado cientos de kilómetros de carreteras y brechas, se repartieron miles de hectáreas a campesinos, se otorgaron créditos para el campo y se regularon los precios agrícolas. Además se llevaron a cabo proyectos hidráulicos, minero-metalúrgicos e hidroeléctricos para integrar la región a la economía y política regionales. Se creó una economía agrícola y minera ligada al mercado estadounidense. Fue en los años cincuenta, cuenta el académico Luis Astorga, cuando se generalizó la producción y el tráfico de drogas en Michoacán. Narcotraficantes, empresarios y políticos se beneficiaron de la exportación de la producción local.

Los códigos de la cultura ranchera que allí florece han tejido, de acuerdo con Maldonado, “una red de silencio y solidaridad entre quienes cultivan y trafican drogas”; “sus nexos espaciales-familiares permiten evadir la ley entre ciudades medias y territorios serranos”.

La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas colapsó las economías doméstica y empresarial de la región. Sin inversiones relevantes en las últimas siete décadas, los efectos de las políticas neoliberales sobre la infraestructura productiva de Apatzingán fueron crudamente descritos por el biotecnólogo Julián Peña Castro, autor del *Blog ChiNaco*: “El tren ya no existe, las fábricas agrícolas están en ruinas, los centros de distribución ejidales son cascajos, el ingenio es irreconocible, las enormes ave-

nidas que se hicieron están hechas pedazos. El narcotráfico es el nuevo latifundista calentano y no tiene ningún interés en compartir su riqueza”.

En Tierra Caliente, explica Maldonado, la distancia entre élites, caciques y narcotraficantes se ha hecho cada vez más borrosa. Al tiempo, la relación entre narcos y políticos se ha vuelto más compleja y conflictiva, en la medida en la que la droga demanda protección oficial creciente.

El narco teje profundas relaciones de complicidad con su entorno inmediato. Como señala Luis Nereida Pérez Prado, los narcotraficantes son distintos de los caciques porque no necesitan enriquecerse con el dinero del pueblo y mejoran los servicios de la comunidad.

LUZ Y SOMBRA

Esa noche no la olvidaron jamás. Estaban en el antro Luz y Sombra, en Uruapan, para divertirse un rato, bailar con la novia, ligar. Era el 6 de noviembre de de 2006. Un comando entró e hizo rodar en la pista de baile las cabezas decapitadas de miembros de los Zetas. A su lado dejó un recado.

El mensaje decía: “La Familia no mata por dinero, no asesina mujeres, ni gente inocente; solo ejecuta a quienes merecen morir. Todos deben saber esto...es justicia divina”.

Dos semanas más tarde, los lectores de los periódicos *La Voz de Michoacán* y *El Sol de Morelia* se encontraron en sus páginas con una inserción pagada que explicaba el ideario de los corta cabezas. La Familia, señalaba el desplegado, pretende imponer el orden en la entidad, erradicar el secuestro, la extorsión telefónica y de persona a persona,

los asesinatos pagados, los robos en carretera y los asaltos en los hogares. Advertía, también, que iba a prohibir la venta del ice en las calles.

El manifiesto explicaba quienes integraban el nuevo grupo justiciero: “trabajadores de la región de Tierra Caliente organizados por la necesidad de terminar con la opresión, la humillación a la que han estado sometidos por la gente que siempre ha detentado el poder”. Finalmente pedía la sociedad su comprensión y ayuda a su cruzada contra el crimen.

Días más tarde, los nuevos justicieros distribuyeron un volante en el que felicitaban al entonces presidente Vicente Fox por enviar a las fuerzas federales al municipio de Apatzingán.

Luces y sombras de la industria criminal mexicana, un nuevo cártel había hecho su aparición en Michoacán. Se trataba del tercero en su historia, después de los Valencia y el Golfo-Zetas.

La incorporación de la entidad al circuito de los grandes negocios organizados de droga en México, comenzó con Los Valencia. Desde fines de los ochenta ellos fueron claves en la exportación de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos desde Michoacán. Una década después lo serían en el negocio de las metanfetaminas.

A pesar de su importancia, Los Valencia pasaban relativamente desapercibidos. Cuenta Guillermo Valdés, ex director del Cisen, en su *Historia del Narcotráfico en México*, que, cuando la DEA solicitó en 1999 a la PGR que participara en un operativo conjunto con Estados Unidos y Colombia, con el objetivo de dismantelar a este grupo, las autoridades mexicanas no habían oído hablar de él.

Según María Idalia Gómez y Darío Fritz, Armando Valencia Cornelio y Luis Valencia trabajaban adoptando el más bajo perfil posible. Primos nacidos en Uruapan y migrantes en Estados Unidos en la década de los ochenta, comenzaron a traficar mariguana en aquel país. Emprendedores como eran, con las ganancias regresaron a México, compraron ranchos, alquilaron parcelas y se dedicaron a sembrar hierba para exportarla del otro lado de la frontera.

Socios confiables de los narcos colombianos, se dedicaron también a comercializar coca. Contaban con buques atuneros dotados de tecnología de punta, en los que recogían en alta mar los cargamentos del polvo blanco, para luego descargarlos en el puerto de Lázaro Cárdenas.

El negocio fue exitoso y su crecimiento exponencial. En su *Brevísima historia del crimen organizado en Michoacán* Romeo LopCam aventura la hipótesis de que este auge en el cambio de siglo fue lo que llevó a sus líderes a tomar el nombre de Cártel del Milenio, “en su afán de mostrarse como actores destacados de lo que percibían como un cambio de época”.

La situación se complicó para ellos con la llegada a la entidad de los Zetas, en aquel entonces brazo armado del Cártel del Golfo. Dotados de una estructura militar mucho más eficaz y poderosa, los Valencia fueron prácticamente barridos del mercado a sangre y fuego.

La guerra entre ambos cárteles comenzó el 17 de febrero de 2002, con la ejecución en Morelia de Jorge Luis Caballero Valencia, lugarteniente del cártel del Milenio, a manos de los tamaulipecos. A partir de ese año, los narcos pasaron a controlar las policías municipales y la estatal. Gobernaba la entidad Lázaro Cárdenas Batel.

Derrotado el cártel del Milenio, parte de sus restos dieron origen, del otro lado de la frontera michoacana, al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), originalmente encabezado por Armando Valencia. Hoy está al frente el michoacano Rubén Oseguera Cervantes, conocido como *El Mencho*.

En su crónica *Silver or Lead*, publicada en la revista *The New Yorker* a finales de mayo de 2010, William Finnegan ofrece dos versiones distintas que él recogió sobre el desembarco de los tamaulipecos a Michoacán. Según una de ellas, fueron ex dirigentes de los Valencia, enojados con sus jefes, los que pidieron auxilio al Cártel del Golfo para zafarse de ellos. De acuerdo con la otra, fue iniciativa del Golfo desembarcar en aquella entidad para hacerse de una región estratégica en su negocio.

El acuerdo entre el Golfo y los Zetas para operar la nueva plaza fue que el Cártel se quedaría con el negocio de las drogas, pagándole a sus sicarios una renta, a cambio de que estos se establecieran en la entidad para garantizar el éxito de las operaciones. Los Zetas disciplinaron las bandas de maleantes locales y los obligaron a pagarles cuotas para actuar. Las extorsiones se fueron extendiendo como plaga, pasando de los giros negros tradicionales a las actividades productivas lícitas. Se impuso así una nueva forma de operación criminal que combinaba la producción y tráfico de estupefacientes con el despotismo tributario hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad michoacana.

El dominio y la expoliación de los Zetas duró cinco largos años, hasta que se volvió insostenible. En 2006, brotó la inconformidad y rodaron las cabezas de sus sicarios

en el centro nocturno Luz y Sombra. La ofensiva de La Familia en territorio michoacano coincidió en el tiempo con una arremetida gubernamental en forma contra los Zetas a nivel nacional. La combinación de ambas fue demoleadora. Su derrota y desplazamiento en Michoacán fueron definitivos.

LA FAMILIA

Quienes hicieron nacer La Familia habían pasado antes por las filas del Golfo. Así lo reconocieron ellos.

El periodista Renato Ravelo entrevistó a un encargado de relaciones públicas del naciente consorcio criminal, que pidió ser identificado como El Tío. ¿Ustedes dependen del cártel del Golfo?- le preguntó el reportero.

-Sí, pero queremos independizarnos...tenemos interés en erradicar de aquí a los grupos ajenos al estado. Este territorio es nuestro porque todos los miembros de la empresa son michoacanos. Por eso lo llamamos La Familia Michoacana -le contestó el publicista.

Pero, más allá de las palabras, sobre sus reivindicaciones regionalistas, la nueva organización se topó con límites insalvables. Enclavada territorialmente lejos de la frontera norte, debió de negociar con otros cárteles el traslado y paso de sus mercancías hacia Estados Unidos.

Asimismo, aunque La Familia se presentó públicamente como una iniciativa de la sociedad michoacana para defenderla de los fuereños terminó haciendo suyo el modelo empresarial que combinaba producción y tráfico de drogas y cobro de rentas por medio de la violen-

cia. Sin embargo, lo perfeccionó y llevó hasta las últimas consecuencias.

La Familia primero y Los Caballeros Templarios después, armaron un sofisticado consorcio, del que formaba parte una intrincada red de negocios ambiciosos y lucrativos lícitos e ilícitos, un verdadero ejército, un aparato recaudador de impuestos más eficaz que la Secretaría de Hacienda, agencias de servicios sanitarios, empresas constructoras y prácticas de seguridad social, un brazo ejecutor de justicia y una naciente denominación religiosa.

Arturo Cano le preguntó al sacerdote Gregorio López, una de las figuras más reconocidas del movimiento de autodefensas, por qué los Templarios llegaron a tener consenso social. El religioso respondió: "Por cinco razones: cooptaron el ámbito médico, de la salud; lo mismo la educación, donde todos los directivos tenían que ser templarios, pasar por sus procesos de seudofilosofía; la economía, porque todas las fuentes de trabajo las controlaron bajo su ideario. En el caso de la religión, la controlaron a través de una secta protestante llamada Nueva Cosecha. A nivel intelectual formaron Vida Vital, una especie de colegio, una casa de capacitación. Y por último la cuestión judicial, compraron todas las direcciones. Todas las autoridades actuales son de ellos. Y, finalmente, controlaron la seguridad pública, los Ministerios Públicos. Es decir, un cártel de la muerte lo hicieron un cártel social".

Al frente de La Familia quedaron originalmente dos líderes carismáticos. Uno fue Jesús Méndez Vargas, a quién le llamaban *El Chango*, el otro Nazario Méndez Vargas, también conocido como *El más loco*, *El Chayo*, *El Dulce* y *El Pastor*.

El Chango fue finalmente desplazado de la línea de mando después de fuertes choques internos, hasta ser encarcelado en 2011 en Aguascalientes. Él era, de acuerdo a testimonios recabados por Arturo Cano, el “impartidor de justicia”, “el jefe, el patriarca”.

Nazario Méndez nació en Guanajuatillo, Michoacán, el 8 de marzo de 1970 a las 5 de la mañana. Medía 1.65 metros, tenía cabello abundante y negro, nariz afilada y tez morena clara. Hasta la fecha ha muerto en dos ocasiones, la primera el 9 de diciembre de 2010, y la segunda el 9 de marzo de 2014.

“En mi mente inculta e infantil bullía la idea de ser como Kalimán para hacer el bien a la humanidad, escribió Nazario en el capítulo tercero del libro *Me dicen: el más loco*, en el que cuenta su vida y la de la empresa que forjó. En junio de 2006 el Ejército decomisó 500 ejemplares de la obra en el puerto de Zihuatanejo. Dos menores fueron arrestados por leerlo.

Con portada de color rojo y el título en letras amarillas, el libro fue publicado en 2011. Su autor lo presenta como creación de un idealista. Escrita como un anecdotario, aparece en el texto su primera muerte, contada por sus colaboradores.

El más loco nació en el seno de una familia pobre de 12 hermanos, con un padre mujeriego y borracho y una madre trabajadora. Engañaba al hambre con frijoles y tortillas y luchaba por ayudar a su mamá. “Soy —escribió— como un árbol con raíces profundas que lo tienen sujetado al suelo en donde por azares del destino nació y de donde nunca puede irse”.

Sin electricidad ni televisión, escuchaba en un pequeño radio de pilas las radionovelas *Kalimán* y *Porfirio Cadena*, héroe de mil enfrentamientos y justiciero por vocación. De “el hombre increíble” adquirió la convicción de que lo más poderoso es “la paciencia y la mente humana”.

Su carácter —dice él— se forjó entre el trabajo, las hambres, los tablazos correctivos de su madre, los golpes en los pleitos, sus sueños de progreso y sus amarguras de impotencia.

A finales de la década de los ochenta trabajó en los campos agrícolas de Estados Unidos, donde obtuvo la residencia. Vivió en San José, Red Good City, Eureka y Río Grande. Allí vendió su primer carrujo de mota y obtuvo una ganancia de 925 dólares. De los dividendos le mandó a su mamá 329 billetes verdes. A los 18 años regreso a su país natal. En Apatzingán contrató como medieros a campesinos para sembrar yerba. Desde México llevaba camiones cargados de sombreros, en lo que, a decir de algunos paisanos suyos, ocultaba marihuana. En 1994 fue detenido del otro lado de la frontera y juzgado por tráfico de estupefacientes.

Al quedar libre se estableció en Tamaulipas, donde se internó en una clínica para tratamiento adicciones. Tiempo después ingresó en otra en Zacatecas para alejarse de las metanfetaminas y el trago. Había comenzado a leer con avidez desde 1992 y en alguno de esos trances encontró el camino de su religiosidad, incursionando indistintamente en la *Biblia*, brujería, esoterismo, superación personal y masonería.

“Fue en ese tiempo —escribió— cuando sentí el llamado de Dios, iniciando el estudio de la *Biblia* como lo hacen

los verdaderos teólogos, profundizando en el entendimiento de la vida, mensaje y filosofía del maestro de Galilea”.

A diferencia de la creencia en la Santa Muerte y Jesús Malverde — escribe el filósofo Ismael Hernández — la doctrina religiosa de La Familia y los Templarios no proviene de asumir como propio un culto popular ya existente sino del intento deliberado de construir una visión del mundo propia. Eso fue lo que hizo Moreno.

Una parte de ese culto quedó plasmado en el libro *Pensamientos de la Familia*, que Nazario firmó con el sobrenombre de *El Más Loco*. Según George Grayson, la obra está profundamente influida por el pensamiento del líder cristiano estadounidense John Eldredge, fundador de la denominación llamada los Ministerios de los Corazones Rescatados. El libro de *El Chayo* copia muchas de las ideas de un texto de Eldredge titulado *Sé todo lo que puedes ser*.

El pastor Eldredge sostiene allí y en obras como *Salvaje de corazón* que hay que liberar a los hombres y a las mujeres para que puedan vivir acatando los dictados de su corazón, como aliados de Dios; todo hombre y mujer tienen que ser rescatados y tienen una batalla que pelear, una aventura para vivir.

El ministro de culto estadounidense reivindica, también, la tesis de que la violencia forma parte de la naturaleza humana y, aún más, de la naturaleza de dios, pues la *Biblia* dice en varias ocasiones que Jehová es el señor de la guerra.

A partir de 2006, Nazario contrató, pagándole una fortuna, a conferencistas como Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Miguel Ángel Cornejo y Alex Day. Asimismo, envió

-recuerda Francisco Castellanos- a michoacanos a cursos impartidos por la Iglesia Cristiana “Cristo Nuevo”, en Ciudad Juárez.

El Más loco financió centros de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos, a los que asistieron unas 47 mil personas. Según él, les dio a esos grupos el nombre de La Familia Michoacana. Lo hizo porque “la familia es un concepto que se refiere a un grupo homogéneo, a una misma clase social, a una cultura, tradición, misma sangre, mismo linaje, mismos intereses e iguales objetivos”.

Después de tomar un sabático y regresar a su estado, narra en su autobiografía, “me encontré con la novedad de que en mi estado estaba impregnado de un grupo delictivo, cruel, salvaje, sin sentimientos, que asolaban e imponían el terror en Michoacán: Los Zetas. Por ello decidimos iniciar una batalla sangrienta para expulsarlos de la entidad”.

A finales de diciembre de 2010, después de un cruento enfrentamiento de tres días en Apatzingán, mataron por primera ocasión a Nazario Moreno. Alejandro Poiré, entonces vocero de Los Pinos, anunció con bombo y platillo el fallecimiento de *El Chayo*. Nunca ofreció pruebas, No las tenía... Comenzó entonces dentro de las filas Templarias una especie de canonización de su jefe, que lo volvió objeto de culto.

Más allá de la indudable influencia de Eldrege, la mística de La Familia surge de la búsqueda de una alternativa espiritual y moral, en la se mezclan la cultura popular ranchera de Tierra Caliente, una visión del mundo construida desde la “filosofía” de la superación personal y

la autoayuda, esoterismo, diversas creencias religiosas y la religiosidad de alta intensidad que priva en el estado.

¡VIVA CRISTO REY!

El caso de Nazario Moreno no es excepcional. Los vientos religiosos soplan fuerte en Michoacán. Si en el censo 2010, el 84 por ciento de los mexicanos se declararon católicos, en ese estado la media del 92 por ciento. La herencia Cristera sigue viva en aquellas tierras.

Según el académico Salvador Maldonado Aranda, en el sur de la entidad se ha creado una cultura regional ranchera, caracterizada por los valores del individualismo frente al Estado, de la familia frente a la sociedad, y por un exacerbado catolicismo popular.

A pesar de ello, las denominaciones evangélicas se han duplicado en diez años, mientras que los no creyentes se mantienen estables en 1.9% desde hace 20 años.

Esta fe, faltaba más, da también para el florecimiento de los más arcaicos cultos, como el que se practica en la comunidad de Nueva Jerusalén, en el municipio de Turicato.

Adoradores de la Virgen del Rosario, seguidores del líder religioso Martín de Tours, sus feligreses tienen prohibido jugar fútbol, leer diarios, ver televisión y estudiar. Sus hijos no asisten a la escuela pública.

Según los feligreses, Nueva Jerusalén se fundó en 1973, luego de que supuestamente la Virgen del Rosario se le apareció a una anciana llamada Gabina Romero, que transmitió órdenes al párroco del Puruarán, Nabor Cárdenas Mejorada, para que creara una comunidad “protegi-

da por la divinidad". El sacerdote fue excomulgado por la iglesia católica, pero no por el PRI local. El poblado se convirtió en una reserva de votos tricolores.

Uno de esos nuevos cultos que desafían a los ancestrales es precisamente el practicado por los Caballeros Templarios. La jerarquía los enfrentó con una mezcla de resignación, entendimiento y choque. El asesinato de cinco sacerdotes en Tacámbaro fue un momento particularmente difícil para ella.

La Arquidiócesis de Morelia cuenta con 226 parroquias, 80 rectorías (templos) y es atendida por alrededor de 540 sacerdotes, 120 de ellos pertenecientes al clero regular. Se calcula que en la diócesis viven más de mil religiosas, la mayor parte de vida activa, aunque existen 13 monasterios femeninos y uno para monjes de vida de clausura.

De Morelia dependen cuatro diócesis que conforman la Provincia Eclesiástica de Morelia: Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tacámbaro y Zamora.

El arzobispo de Morelia, Mons. Alberto Suárez Inda, fue nombrado obispo en 1985, y designado arzobispo de Morelia diez años más tarde. Como cumplió 75 años el 30 de enero de 2014 mandó su renuncia al Papa.

Discreto, en ocasiones contestatario frente a los gobernadores de la entidad, Suárez Inda ha sido a un tiempo, cordial y distante. Se ha pronunciado en varios momentos contra el incremento de la violencia en la entidad.

El 27 de octubre de 2013, poco antes de los acontecimientos en Tacámbaro, Suárez Inda envió una carta al gobernador Vallejo, diciéndole que la situación en Michoacán podía cambiar, a condición de que se restableciese el Estado

de Derecho, para lo cual se requería una colaboración respetuosa entre “el Gobierno Federal, las Fuerzas Armadas, los Gobiernos Municipales, los Poderes Legislativo y Judicial, para que se avance, más allá de visiones particulares, en el aterrizaje de las principales propuestas consensuadas en el Acuerdo por Michoacán, que hemos de valorar como un germen de esperanza.”

En el centro de todas las tormentas se encuentra la Diócesis de Apatzingán. Su obispo, Mons. Miguel Patiño Velázquez, nació en ese estado en 1938, y pertenece a la congregación de los Misioneros de la Sagrada Familia. Se trata de una pequeña congregación muy conservadora, creada por Juan Pablo II, de la que, además del mismo Patiño, proviene el obispo de Tacámbaro.

Mons. Patiño ha estado al frente de la diócesis durante 32 años. Presentó su renuncia a la sede episcopal el 1 de octubre de 2013, pero no ha sido aceptada. Fue de los primeros obispos consagrados por el entonces delegado apostólico Prigione y accedió a la dignidad episcopal a una edad temprana, 42 años. Se le consideró entonces orientado ideológicamente a la derecha. Allí sigue anclado. Sin embargo, su preocupación central no es de índole política sino la atención pastoral en una zona de alta violencia derivada del crimen organizado.

A nivel pastoral, Mons. Patiño ha sido muy activo. Conoce la situación de la feligresía, así como de las condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecen en la región, incluida la violencia.

La Diócesis se fundó en 1962. No tuvo en sus orígenes (como no lo tiene ahora) un proyecto de misión. Se aco-

pló a una situación de bienestar económico generado por la producción de mariguana y amapola, de narcotráfico sin cárteles. Ante la descomposición de las comunidades, la iglesia guardó silencio.

El modelo eclesial de la diócesis es absolutamente tradicional, de una religiosidad atorada en el tiempo. Tal y como el polémico padre Gregorio López le dijo al periodista Arturo Cano, la iglesia en la zona templaria, “es una Iglesia acobardada. Prudencia pura que no hace nada”.

Los problemas para ella como institución comenzaron a surgir cuando la Familia creció y ocupó el vacío espiritual de la región, convirtiéndose en una narcosecta que ofrecía servicios educativos y médicos. Se llegó a extremos en los que algunos sacerdotes fueron forzados a bendecir las fiestas de los templarios o dar misa a su cruz.

Contra lo que usualmente se cree, Mons. Patiño ha sido reacio a firmar las cartas pastorales criticando la inacción del gobierno y la violencia. Fue forzado a hacerlo por los sacerdotes de su diócesis, aunque no sin antes suavizar el contenido del mensaje. Incluso, cerró definitivamente el seminario diocesano en agosto de ese año a causa de la violencia.

Una de esas cartas a los fieles se dio a conocer el 15 de octubre. Intitulada “Hagamos de Michoacán un Estado de Derecho”, realiza un diagnóstico sobre la situación prevaletente en la entidad. Hace hincapié en que los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor que el Gobierno Estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la so-

ciudad, mientras que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal no ha rendido fruto alguno.

La carta provocó desconcierto y un repunte de la violencia contra los agentes pastorales de la diócesis. Hubo temor por la seguridad del obispo, quien según algunas fuentes recibió amenazas de muerte por parte de los Caballeros Templarios.

La Arquidiócesis de México en el semanario *Desde la Fe*, se solidarizó con Mons. Patiño en la editorial “Una voz valiente”, publicada el domingo 27 de octubre. Allí se señaló que la Iglesia no puede “dejar de exigir a las autoridades una acción decidida que ponga fin a estos actos criminales” y se advirtió sobre los riesgos que enfrenta el obispo tras sus denuncias. El semanario solicitó a las autoridades implementar medidas de seguridad para salvaguardar su integridad.

En la misma edición de *Desde la Fe*, la Conferencia del Episcopado insertó un comunicado “Por la Paz en Michoacán y en México”, solidarizándose con Mons. Patiño y convocando a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar “una acción pronta y eficaz ante la injusticia de los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan al bien y la prosperidad de tantas personas y comunidades, y les pedimos estrategias para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos y su desarrollo integral.”

El obispo Patiño participó el 31 de octubre de 2013 en una marcha por la paz en la región. Se manifestó preocupado por sus feligreses a los que dice, ve sufrir ante la ola de violencia que azota la región y al estar a la merced de grupos delictivos. Aseguró que la falta de libertad de

tránsito es otra muestra del Estado fallido. A los pocos días abandonó el Michoacán por razones de seguridad.

En noviembre, durante la 96 plenaria de la Conferencia del Episcopado celebrada, el obispo de Zamora, Mons. Jesús Navarro Rodríguez informó que desde el 18 de mayo de 2013, los nueve obispos de Michoacán — el arzobispo y sus tres auxiliares, así como los obispos de Zamora (y su auxiliar), Tacámbaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas — entregaron al gobernador interino Jesús Reyna, una carta expresándole la preocupación de los prelados en torno a la situación vivida en Michoacán. El apoyo de la Conferencia Episcopal para Patiño fue unánime.

El 15 de enero de 2014, el obispo Patiño dio a conocer una nueva carta pastoral en la que pidió al gobierno federal actuar para frenar la violencia en Michoacán. “La gente — dijo en ella — espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando el caos.”

Días después, declaró que era ingenuo creer que la situación de Tierra Caliente se va a resolver pronto; incluso -señaló- para la Iglesia es difícil porque una parte de sus feligreses está en territorio de Los Templarios y otra parte en territorio de comunitarios. Por ello, el deber de todos los grupos sociales es promover la paz sin contraponer a las instituciones ni a los grupos.

Entre los curas de la diócesis de Apatzingán se estableció una genuina y sólida simpatía hacia la participación popular en las autodefensas. Pensaban que se vivía una especie de “primavera de los pueblos” en la región. En un primer momento muchos de ellos estaban seguros de que quienes se integraron al movimiento son lo mejor de la

ciudadanía. Tenían claro que no era la gente de abajo la que conducía el proceso pero no les preocupaba mayormente quien lo dirigía, ni de donde provenía el armamento, ni sus fuentes de financiamiento.

Los curas no generaron una visión común ante el conflicto. Durante los primeros meses, Gregorio López, el *Padre Goyo*, desempeñó un papel muy importante en los medios. Sin embargo, el Arzobispo Suárez criticó su protagonismo. Tanto él como el obispo de Apatzingán lo descalificaron como vocero de la diócesis de Apatzingán.

En una iniciativa política que fue leída como el retorno del cristerismo, el 18 de enero de 2014, en plena ofensiva militar de las autodefensas, el *Padre Goyo* anunció la creación del Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar un Sano Tejido del Orden Social (CCRISTOS). “No se puede ser un hombre de Dios y predicar la paz cuando se vive en un pueblo en guerra, donde frecuentemente se derrama sangre inocente...no puedo seguir hablando de Dios cuando apesta a muerte” —dijo en una movilización en Apatzingán. Mientras tanto la multitud gritaba “¡Viva Cristo Rey!”.

Según Arturo Cano, Gregorio López, pasó 19 años en la diócesis de Apatzingán, con dos intermedios: uno, cuando se fue a estudiar a Roma, y el otro cuando lo enviaron a una cárcel eclesiástica, en las inmediaciones del estadio Azteca, “por ser el más rojo de los sacerdotes calentanos y porque necesitaban bajarme un poquito los humos”. Y añadió “no soy el más valiente ni el más listo; soy el más hocicón de la diócesis”.

La iniciativa de inmediato ganó el apoyo del líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora. Sus tropas se

pusieron camisetas blancas con el acrónimo de la naciente organización y asistieron a las misas y rosarios del párroco.

Los “¡Viva Cristo Rey!” despertaron en muchos lugares del país una gran ola de suspicacia y desconfianza. Lejos de sumar adhesiones a la causa de las autodefensas, el fantasma de la Cristiada galopando por los viejos territorios cristeros provocó muchas interrogantes sobre la naturaleza del naciente movimiento.

El 6 de marzo de 2014, en plena cresta de su popularidad, el *Padre Goyo* fue desconocido como interlocutor de las autodefensas con el gobierno federal. Días después salió del país para realizar estudios en la Universidad Pontificia de Roma y regresar hasta mayo.

EL PROFE

La primera muerte de Nazario Moreno coincide en el tiempo con el ajuste de cuentas dentro de La Familia y la fundación de los Caballeros Templarios el 8 marzo de 2011. En los hechos, la operación de la nueva empresa recayó en Servando Gómez, conocido como *El Profe* o *La Tuta*, fuertemente enfrentado a *El Chango*.

Los Caballeros Templarios de Michoacán toman su nombre y una parte de sus iconos de la orden fundada en 1118, poco tiempo después de que Godofredo de Bouillon conquistó Jerusalén. Integrada por monjes guerreros, tuvo como misión defender los santos lugares y ayudar y proteger a los peregrinos que viajaban a Palestina.

La orden medieval usaba como emblema —al igual que los michoacanos— una gran cruz roja sobre su manto

blanco. Gozaba de una gran popularidad. Sus miembros eran audaces, valientes y buenos soldados. Se hicieron ricos y poderosos.

Sin embargo, su éxito terminó convirtiéndose en su desdicha. Fueron perseguidos y extinguidos por Felipe el Hermoso, rey de Francia, con la anuencia del papa Clemente V, en 1307. Los monjes fueron desprestigiados, detenidos y torturados para que confesaran los más aviesos crímenes. Muchos fueron quemados y sus fortunas expropiadas.

Según Romeo LopCam la inspiración de los líderes de La Familia para asumirse como continuadores de la mítica Orden del Temple, proviene de que varios de los *best sellers* "en donde se les idealiza -escritos por autores como Maurice Droun o Piers Paul Read- suelen localizarse en las mismas estanterías" de los libros de John Elderedge y Chris Richard.

El Profe comenzó a ser conocido nacionalmente el 15 de julio de 2009 cuando se comunicó al programa de radial "Voz y Solución", conducido por Marcos Knapp, y acusó a la Policía Federal y la SIEDO, de ser los protectores del Cártel de Sinaloa en la entidad. Dotado de una indudable capacidad de comunicación, después de esa aparición pública ha sido protagonista, a rostro descubierto, de varios videos subidos a You Tube, en los que lo mismo ofrece al gobierno federal negociar, que da su opinión sobre quienes son las autodefensas.

Nacido el 6 de febrero de 1966 en el municipio de Arteaga, Gómez fue el primogénito de una familia de 5 hermanos. A los 19 años entró a estudiar en el Centro Regional de Educación Normal de su pueblo y a trabajar en

el municipio de Quiroga. En 1985 obtuvo una plaza en la escuela primaria Melchor Ocampo, ubicada en la periférica colonia El Ejidal, en Arteaga.

Inquieto, dejó la enseñanza después de 15 años de ejercerla, complementándola con la venta de papaya y jitomate. ¿Cómo es que abandonó la docencia? Le preguntó el periodista Tom Walker. *La Tuta* le respondió: “Yo tenía un trabajo muy sano y muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser, y para mi todo, no me satisfacía. Pues entonces se fueron dando las situaciones y aquí estoy”.

Esas “situaciones” que se fueron dando, consistieron, en parte, en el conocimiento de Juan Víctor Fernández Castañeda, lector del Tarot, y con el tiempo su guía espiritual, y la indicación de la baraja de que abandonara la docencia y mejor se dedicara a actividades más rentables.

Ante fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el hermano de La Tuta, Luis Felipe Martínez Gómez, El Güicho, narró como el ahora capo del narcotráfico dejó los salones de clase para dedicarse al narcotráfico. “Cuando Servando tenía como 19 años – publicó *El Universal*– se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga, donde dio clases ya que es maestro normalista. Cuando se separó se fue a vivir al rancho de su papá llamado ‘Medina’, el cual se encuentra a las afueras del municipio de Arteaga, ahí durante dos años cultivó la papaya, jitomate y maíz”, comentó.

Cuando, más adelante comenzó a relacionarse con la industria de la droga, le recomendó que lo dejara. “Yo le dije a Servando – señaló su hermano – que dejara eso, esas cosas y luego fue cuando me di cuenta que él estaba

metido en el narcotráfico, pero él me contestó: “Tengo que seguir en esto porque ya no me puedo salir”.

En el 2000 —cuenta Tomás Borges en *Los Angeles Press*— “su pareja sentimental lo abandonó, al no estar de acuerdo con su modo de vida *bandida*, por lo que éste se va a vivir al rancho *Medina*, propiedad de su padre, donde le comenta al benjamín de la familia, sobre lo redituable que es el tráfico de enervantes y de cómo puso ante a las autoridades a un agricultor de apellido “Barragán”, sólo porque le caía mal”.

Un año después ingresó a “La Empresa”, organización criminal creada por Carlos Mendoza Rosales “El Tísico” y que en los noventas se alió con el Cártel de los Valencia para tener más presencia en el estado.

En 2007, ya como uno de los líderes de la Familia Michoacana y como su “Coordinador Operativo”, La Tuta, asistió a la Primera Reunión de Tierra Caliente. En el cónclave participaron 14 presidentes municipales electos democráticamente, mismos que se convirtieron en el ala política de la organización.

Hoy, Servando Gómez, es uno de los capos más buscados en el país. El Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 2010 publicó el acuerdo específico No. A/123/09, en el que se ofrece un monto de recompensa de hasta 30 millones de pesos en moneda nacional, a quien proporcione información de él.

LA EMPRESA TEMPLARIA

Desde el puerto de Lázaro Cárdenas parten los barcos que transportan el hierro que el dragón chino demanda para

satisfacer el voraz apetito de materias primas que su crecimiento sostenido requiere. Cada cargamento vale 13 millones de dólares. En un año zarpan 30 buques con los contenedores llenos del mineral. Entre 50 y 75 por ciento de ese hierro proviene del crimen organizado, mostró un reportaje del canal de televisión británico Channel 4.

Michoacán ocupa el primer lugar en la producción nacional de hierro. Su extracción creció en la entidad de manera sostenida y acelerada, estimulada por los altos precios de las materias primas en el mercado internacional. Los responsables formales de las explotaciones son mineras, en su mayoría trasnacionales, como Ternium, Arcelor Mittal, Endeavour Silver Corp y AHMSA, que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado. Sin embargo, *Los caballeros templarios* les han complicado un poco el negocio.

El *cártel* tiene el control de partes muy importantes de la cadena productiva. Exige a las compañías pagar cuotas de protección por el trasladado de su cargamento. Hace negocios con otros empresarios que extraen mineral de explotaciones no concesionadas. Tiene buenas relaciones comerciales con compradores e influencia sobre la aduana de Lázaro Cárdenas. Cobra por el uso de muelles del puerto. En las negociaciones entre mineras y ejidatarios presiona a las corporaciones para que paguen más regalías, servicio por el que carga una comisión.

Y, cuando las empresas se atreven a desafiar sus presiones, el *cártel* no duda en actuar. En abril de 2013, Virgilio Camacho, ejecutivo de Arcelor Mithal, la mayor compañía acerera del mundo, fue asesinado después de que denunció a los *templarios*.

El caso de la exportación de hierro a China muestra que los *caballeros* son mucho más que un grupo dedicado a traficar drogas. Los estupefacientes son apenas uno más de los rubros en los que se ocupan. Se dedican también a administrar la violencia, impartir justicia y cobrar impuestos. Sus negocios han tejido una imbricada telaraña empresarial que opera en las principales ramas productivas, tanto legales como ilegales, de Michoacán y otras entidades. Son un corporativo vigoroso comandado por hombres de empresa.

Así lo reconoció su líder Servando Gómez Martínez. Según él, su organización es una hermandad, un mal necesario, una empresa que busca proteger y apoyar al pueblo, dedicada a hacer negocios.

Las actividades de las empresas *templarias* son múltiples: importan llantas de caucho radial coreanas para tractocamiones y obligan a los transportistas a comprarlas y usarlas; distribuyen ropa china que llega a Lázaro Cárdenas y la llevan a Guanajuato para reetiquetarla con marcas como Armani, Hugo Boss y Guess; adquieren y alquilan vehículos e inmuebles; venden ganado; compran obsidiana en Guatemala para hacer artesanías, e instalan máquinas tragamonedas (*Milenio*). También monopolizan la comercialización del limón y, a través del manejo de oferta, mantienen elevados los precios del cítrico, al tiempo que traen ropa usada de Estados Unidos y controlan el comercio ambulante que vende productos piratas.

Michoacán es primer lugar nacional en valor de producción agropecuaria y aporta 10.5 por ciento al PIB nacional en este rubro. Se cultiva y exporta aguacate, zarza-

mora, toronja y limón. En casi en todos estos giros participa la empresa *templaria*.

Ese es el caso del aguacate, fruto del que ese estado es el principal productor y exportador en el país. Cobrando protección, los *templarios* ordeñan económicamente al conjunto de los participantes de la cadena productiva del oro verde: desde el dueño de un modesto predio hasta las seis grandes empacadoras transnacionales que acaparan su exportación —y son las principales beneficiarias del dinámico crecimiento de su cultivo, a raíz de la apertura del mercado estadounidense a finales de 1997—, pasando por transportistas y jornaleros.

Circula la versión —no comprobada— de que la gota que derramó el vaso de la paciencia de la administración Obama hacia Michoacán fue la exigencia *templaria* de cobrar derecho de piso a los funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que participan en la certificación de las huertas donde se siembra el fruto para su exportación a ese país.

Entre sus fuentes de recaudación se encuentran, también, rubros más tradicionales del crimen organizado, como la venta de protección a cantinas, prostíbulos, rastrojos, tortillerías, tiendas de ocasión, restaurantes, cafeterías, transportes, operadores portuarios y un largo etcétera. Venero adicional de ingresos es el cobro de comisiones a presidentes municipales y a la administración pública estatal, la asignación de obras públicas a contratistas asociados con los *caballeros* y la contratación de su personal en distintas instancias de gobierno.

Según varios informes de inteligencia gubernamental difundidos por *Milenio* en Michoacán los *templarios*

tiene ingresos de al menos mil millones de pesos anuales, producto de la suma de todas sus actividades ilícitas (salvo la venta de droga en Estados Unidos que no está contabilizada en dichos documentos).

Con estas rentas, más las provenientes de la venta de drogas, los *templarios* sostienen un ejército de 10 mil hombres, bien armados y pertrechados, con equipo de telecomunicación y transporte modernos, y una nómina de 30 mil servidores. Apoyan a políticos de todos los partidos y compran los favores de policías y militares. Invieren en ello, según *Milenio*, 7 millones de dólares mensuales. Simultáneamente, hacen obras públicas y asistencia social entre sectores de la población más pobre en sus zonas de influencia en el estado.

La empresa Templaria tiene una millonaria narcónomina. En ella aparecen (según *Milenio*) desde un general hasta mandos policiales no solo de Michoacán, sino de otras entidades de la República donde ese cártel tiene presencia, como el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Colima, Tabasco, Chiapas, Morelos, Baja California y Tamaulipas.

En una de las nóminas interceptadas, que no corresponde a Michoacán, un general del Ejército estaría recibiendo 2 millones de pesos mensuales. Un mando de la Policía Federal, 800 mil. Un mando ministerial, 150 mil pesos al mes. Un director antisequestros, 30 mil pesos mensuales. Un comandante de órdenes de aprehensión, 15 mil pesos. En total, en esa entidad, los criminales estarían pagando más de 5.4 millones de pesos por mes de sobornos.

De manera paralela a esta maquinaria económica, Los Caballeros Templarios construyeron una formidable

red de representación política. No crearon un partido político pero utilizaron indistintamente todos los existentes de acuerdo a su conveniencia. En lugar de poner en su nómina a los directores de seguridad y de obras de los municipios se apoderaron de alcaldías completas. La hidra de su influencia creció hasta las más altas esferas del gobierno estatal. El 4 de abril de 2014, el ex gobernador interino y secretario de Gobierno Jesús Reyna fue detenido por sus nexos con el cártel.

La desmedida masificación de este consorcio empresarial los llevó a exprimir cada vez más a distintos sectores de la población —incluidos los productores de marihuana que, durante años, no cotizaron en sus arcas— y a perder el control interno de algunos mandos. Los abusos contra la población, incluidos los sexuales, crecieron de la mano de la incursión en giros como el cobro por el derecho de piso y la extorsión.

Este insaciable despotismo tributario, con su espiral de violencia, despojo y humillación, se volvió cada más intolerable e inadmisibile para compañías mineras, grandes agricultores, empresas de transportación, gobierno federal y de Estados Unidos, pero también para jornaleros, gente humilde y clases medias. Llegó así la hora de las autodefensas.

IX) LA ALBORADA INDÍGENA

CASI, CASI, UN LEVANTAMIENTO

Lujo, refinamiento y calidad son el sello de los vehículos Rolls Royce. Los tableros de varios de sus modelos están hechos con sangualica, una madera preciosa, dura y pesada, también conocida como granadillo, que crece en las costas michoacanas. Por su calidad y color, se utiliza también para elaborar paneles de yates y fabricar bistoríes e instrumentos musicales.

Considerado en México árbol en vías de extinción, enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con la categoría de especie protegida, su elevado precio y la gran demanda del mercado asiático han propiciado su saqueo y exportación ilegal. En julio de 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente *aseguró* en el puerto de Manzanillo dos contenedores con poco más de 39 metros cúbicos de madera de esta materia prima forestal que se pretendía enviar a China.

Como en tantas otras actividades ilícitas perpetradas en los 25 kilómetros de la región costera del municipio de Aquila, en la tala irracional de la sangualica y su venta a China continental está involucrado el cártel de los Caballeros Templarios. No es su único negocio en la región. Por allí salen también, con el mismo destino, toneladas y más toneladas de hierro. Desde esas playas se llega y se sale de las partes más escarpadas de Tierra Caliente. En sus litorales desembarcan lanchas rápidas con cargamentos de *coca* provenientes de Colombia. En los ranchos privados asentados sobre la ocupación ilegal de territorios comunales aterrizan avionetas Cessna para trasladar armas y drogas.

Por si fuera poco, más allá del hostigamiento de los caciques y narcos, las tierras comunales propiedad de indígenas nahuas se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras del sector social de la región.

En esas costas se disputan palmo a palmo y vida a vida la tierra, el territorio y los recursos naturales. De un lado se encuentran, los comuneros nahuas de Ostula y 22 poblados cercanos; del otro, juntos o separados, están los pequeños propietarios privados, la empresa minera Terrium-Las Encinas SA (la segunda en importancia a escala estatal) y *Los caballeros templarios*.

Esta lucha arrastra tras de sí medio siglo. Comenzó cuando en 1964, después de que sus tierras ancestrales fueron reconocidas por una resolución presidencial, fallas téc-

nicas en los planos permitieron a los pequeños propietarios de La Placita invadir el territorio comunal y fraccionarlo. Los invasores terminaron aliándose al crimen organizado en la región.

Los nahuas de Ostula respondieron al despojo y la violencia de narcos organizando sus guardias comunitarias. Lo hicieron en 2010, más de dos años antes de que surgieran las autodefensas michoacanas de Tierra Caliente. Sus enemigos respondieron a sangre y fuego. En tres años fueron asesinados 32 comuneros y desaparecidos cinco más. Varias de las víctimas eran autoridades comunales o integrantes de la policía comunitaria. Los homicidios se perpetraron sin que el gobierno interviniera para impedirlos. Nunca se investigaron ni se castigó a los culpables.

Los nahuas de la costa michoacana no fueron los únicos en echar a caminar formas de autodefensa. En 2008 los comuneros purépechas de Nurío, la tierra del Tata Juan Chávez, recuperaron la tradición de las rondas y se responsabilizaron de su propia seguridad. En 2011, los comuneros de Cherán se sublevaron contra el saqueo de sus bosques a manos de integrantes de cárteles y talamontes y dieron un salto en su lucha histórica por la autonomía al nombrar sus guardias. Un año después, le siguió en la ruta de la autodefensa indígena contra los *mañosos* la comunidad de Urípachó. Luego, con distintos niveles de participación y recuperación de su identidad e historia, la demanda se extendió a muchas otras comunidades más de la Meseta Purépecha.

Antes del levantamiento de las autodefensas de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán en febrero de 2014, entre los pueblos indígenas michoacanos estaba ya en marcha

un proceso de autoorganización comunitaria para hacerse cargo de la vigilancia de sus recursos naturales, tierras y territorios, y protegerse de narcotraficantes. Con muchos menores recursos que los calentanos, procesada con los modos de los pueblos originarios, mezclada con otras demandas ancestrales, esa movilización pasó casi inadvertida para la opinión pública. Sin embargo, abrió el camino de lo que vendría después.

La irrupción étnica contra la inseguridad pública influyó significativamente en la dinámica de las autodefensas de Tierra Caliente. El doctor José Manuel Mireles así lo reconoció. “Ya teníamos años viendo la forma en la que lo hicieron los purépechas, las estrategias que tenían —explicó. Teníamos la intención pero no el valor para que nos diera resultado. Y nos dijimos: ¿si ellos pudieron hacerlo, por qué nosotros no?”

Las guardias comunitaria indígenas en la entidad generaron preocupación entre los políticos locales. Cuando fue evidente que su presencia no se podía silenciar más, el gobernador Fausto Vallejo admitió su existencia en la Mesa Purépecha y en Ario de Rosales y anunció que serían regularizadas y sus integrantes capacitados, evaluados y remunerados.

El surgimiento de los cuerpos de seguridad en las comunidades indígenas fue parte de un vigoroso proceso de recomposición étnica de los cinco pueblos originarios del estado. Atisbos de esta emergencia se develaron el 12 de octubre de 1992, cuando una marcha de comuneros y maestros purépechas tiró al suelo la estatua de Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España.

Como recuerda el periodista Eugenio Bermejillo, la pieza clave de esta recomposición ha sido el regreso a sus raíces comunales que los purépechas han experimentado en las últimas tres décadas, en el territorio que va desde la cañada de los Once Pueblos hasta la zona lacustre de Pátzcuaro.

A partir de la década de los setenta del siglo pasado fueron retomando el trabajo gratuito y para beneficio colectivo llamado *faena*, y revitalizando la vida comunitaria en base a la colaboración entre barrios. Incluso los emigrantes ahora cooperan con la comunidad.

En palabras del antropólogo Luis Vázquez, los tarascos se están *purepechizando*. Al hacerlo no están descubriendo súbitamente una tradición sino reconstruyendo su identidad trastocada por los procesos de organización agrario-forestales en la región.

Cada una de estas guardias es diferente a las otras —señala Eugenio Bermejillo— sea por antigüedad, estilo, fuente de financiamiento y arraigo comunitario, pero todas tienen una base, a veces más cercana, a veces más lejana con la tradición comunal de origen prehispánico.

El camino de la autodefensa indígena se vio profundamente alterado por el remolino social provocado por del levantamiento de Tierra Caliente en febrero de 2013. La lucha de los pueblos originarios adquirió una nueva dinámica. En multitud de poblados donde el terror y el miedo impedían formas de resistencia abierta, surgieron guardias comunitarias nuevas. En otros, las policías comunitarias ya existentes se potenciaron. Varias más decidieron no mezclarse con la movilización, conservar su autonomía y, simultáneamente, expresar su respeto.

DON JUAN

Si en alguna figura se sintetiza la purepechización de los tarascos y sus afanes de autonomía, es en Juan Chávez Alonso, Don Juan para sus hermanos y compañeros, expresó, como muy pocos más, esos anhelos.

El 28 de de marzo de 2001, Don Juan tomó la palabra en el Congreso de la Unión junto a los comandantes zapatistas y otros dos delegados indígenas. Vestido con sombrero, su inseparable chamarra, gabán purépecha y botas de trabajo, se dirigió a los legisladores con su voz de sabio, serena, pausada y firme.

“Somos los indios que somos —les dijo—, somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos; queremos seguir siendo los pueblos que somos; queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos; queremos seguir pensando la palabra que pensamos; queremos seguir soñando los sueños que soñamos; queremos seguir amando los amores que nos damos; queremos ser ya lo que somos; queremos ya nuestro lugar; queremos ya nuestra historia, queremos ya la verdad”.

Los diputados y senadores reunidos ese día en San Lázaro hicieron como que escuchaban, aunque no oyeron nada. Días después, acordaron una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que incumplió los acuerdos pactados entre los zapatistas y el gobierno federal en febrero de 1996.

Para Don Juan el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés fue una traición del Estado mexicano a los pueblos indios. Una más. Una deslealtad similar a la re-

forma al artículo 27 constitucional con la que se legalizó la apertura al mercado de tierras de la propiedad social.

En el CNI, la organización india más amplia y representativa del país, Don Juan fue, hasta su fallecimiento el 2 de junio de 2012, un hermano mayor. Fue una de las más importantes autoridades morales del movimiento indígena nacional; en su nombre habló en múltiples foros y conferencias, recorrió el país y viajó al extranjero.

Nacido en la comunidad de Nurío, en Michoacán, de 71 años, casado y padre de siete hijos, técnico agropecuario, agricultor especialista en educación indígena, investigó y reflexionó sobre su pueblo, la nación purépecha. Fue un sabio. Se expresaba fluida y articuladamente en castellano y en purhé. Siempre estaba dispuesto a escuchar y a explicar con enorme paciencia lo que se le preguntaba.

Con los pies puestos en las raíces de su comunidad y la mirada divisando el horizonte zapatista, Don Juan fue un formidable traductor cultural entre dos mundos. Escucharlo era un acontecimiento. Simultáneamente representante comunitario y líder nacional, sus pláticas eran verdaderas cátedras en las que, para referirse al mundo indígena, hablaba simultáneamente de historia de los pueblos originarios y de México, hacia reflexiones lingüísticas, analizaba conceptos jurídicos, descifraba la destrucción ambiental en clave de barbarie capitalista, explicaba cuestiones agrícolas y hacía agudos juicios morales.

Sus conferencias eran una original mezcla de experiencias personales, recuperación de la historia no escrita de los pueblos indios, y de análisis sobre las relaciones de explotación y opresión étnica y de clase. Músico y poeta,

sus discursos parecían en ocasiones ser obra de un predicador laico, de un celebrador de la palabra.

Cuando, en septiembre de 2003, en Cancún, el agricultor coreano Lee Kyung Hae se inmoló para protestar contra la destrucción de la agricultura campesina por parte de la Organización Mundial del Comercio, el CNI le organizó, un emotivo funeral. En un auditorio colocaron dos fotos del señor Lee, en las que lucía sonriente, pulcramente vestido de traje y corbata, sin seña que evidenciara desesperación. Una cruz de parafina derretida y veladoras prendidas, adornadas con pétalos de rosas rojas, parecían formar su cuerpo. Un rectángulo de flores y otro más de veladoras enmarcaron el altar. Tres copas de copal remataron y aromatizaron el icono sagrado con el que se le rindió homenaje. Juan Chávez fue uno de los dos notables indígenas que oficiaron el rito. Con un señorío y solemnidad que envidiaría el más capaz de los ministros de culto, el purépecha preparó el terreno para que la tierra y la naturaleza acogieran al mártir.

Don Juan conoció de manera directa la experiencia de ser trabajador migrante del otro lado de la frontera. “Sin salidas, se nos están yendo los muchachos, los hijos, los nietos -decía. Desde los 13 o 14 años se van a cruzar la línea internacional. Van a la muerte allá en el desierto, al maltrato del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Los muchachos se van porque no hay salidas. Y con su salida se desintegran las familias y las comunidades. Allí está el etnocidio, la muerte cultural de los pueblos y también la devastación de los recursos naturales”.

Crítico implacable de los gobiernos de todos los colores, recibió amenazas, represalias e intentos de soborno.

Nunca se amilanó. “Son ellos, los gobiernos -aseguraba-, los que siempre han tendido como perdedores a las comunidades indígenas de todo México y como beneficiarios a los caciques, a los ricos y a los poderosos. Los gobiernos son los responsables directos de la creación de conflictos entre pueblos, son los que históricamente le han arrebatado la tierra a los indígenas para entregarla a los acaparadores, a los ejidatarios que no tienen arraigo en la tierra y la venden o la rentan a los grandes empresarios y a los saqueadores de este país”.

Zapatista hasta el último segundo de su vida, Don Juan advirtió, una y otra vez, la estrecha relación entre los rebeldes del sureste mexicano y el movimiento indígena nacional. “El EZLN y el CNI -explicaba-, somos ya una sola fuerza nacional. La palabra armada que se hace escuchar desde enero del ’94, es por nosotros aceptada, defendida y respetada, en razón histórica del supremo derecho de los pueblos a la rebeldía. El EZLN enarbola hoy las demandas que por siglos nuestros pueblos han visto negadas por los gobiernos. El CNI hace suyas estas demandas...”

Sembrador incansable de otro futuro, Don Juan proponía: “Soñemos juntos y hagamos nacer la semilla de la esperanza porque ésta es la hora de los pueblos indígenas, de la democracia, libertad y justicia”. Entre esos sueños estaba también el anhelo de autodefenderse.

EL MANIFIESTO DE OSTULA

Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen

ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.

Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, pasará a la historia en la mente del pueblo llano. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.

Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el 13 y 14 de junio de 2009 el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se decretó el fin del reparto agrario.

El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la

25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.

La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobre vivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.

El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios.

Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.

El Manifiesto de Ostula es una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía *de facto*.

OSTULA

Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defendieran su integridad, Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.

La comunidad recuperó sus tierras el 29 de junio de 2009. Ese día —contó el comunero Pedro Leiva Martínez— “llega mi padre y me dice: ‘hijo, prepárate, la comunidad te necesita. Es necesario que vayamos por nuestras tierras. Yo no sé quienes vayan a regresar. Tengo cinco hijos, pero no sé cuántos vayan a regresar. Vayan a casa, díganle a su madre que les prepare unos lonches. Cómprase un encendedor, una linterna y llévense un nailon. Llévense sus resorteras y un cuchillo o navaja’. Nos íbamos yendo a la batalla. Éramos nuevos.”

Al igual que Pedro, ese 29 de junio centenares de comuneros fueron a rescatar lo que era suyo. Desde sus

casas, los pequeños propietarios les espetaban con burla: “Oh, indios, ¿para dónde van? No es tiempo de cangrejos”. Los indígenas les respondieron que no iban por cangrejos, sino por sus tierras. Previamente, dentro del paraje habían metido ya unas mil personas. Sin embargo, *la gente de razón* había contratado a un grupo de paramilitares para hacerles frente. Recibieron a los comuneros con disparos de armas de alto calibre. Igual, los indígenas no se rajaron, se encomendaron a Dios y se siguieron de frente. Las tierras fueron recuperadas.

El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.

Las tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, fueron recuperadas después de una larga y tenaz labor organizativa, acompañada de la recuperación de la autoestima y la dignidad indígena. Además del robo de su territorio, *la gente de razón* humillaba cotidianamente a los comuneros. Pedro Leiva contaba “cómo nos hierva la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón”.

Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.

Todo esto lo hicieron al margen de los partidos políticos, ya que éstos, en lugar de servir a los comuneros de

Ostula los dividían. Los políticos se acercaban a ellos en tiempo de elecciones. Les daban frijol o láminas y les pedían su voto y luego olvidaban sus promesas. Por eso, en asamblea general decidieron no votar en las elecciones y darse a sí mismos sus propias formas de gobierno.

CONTRA LOS NARCOS

La familia michoacana tomó el control de la costa michoacana el primer año de gobierno de Vicente Fox. Sin embargo — explica Arturo Cano— fue hasta 2009 cuando la Armada de México colocó un retén en el límite invisible que separa las tierras de la comunidad indígena de Ostula y la mestiza de La Placita. Curiosamente los marinos llegaron allí sólo después de que los comuneros nahuas armaron su policía comunitaria.

El retén no sirvió de mucho para luchar contra el narcotráfico. Funcionó durante cuatro años — cuenta Cano— pero fue hasta hace poco que el jefe regional de los *Caballeros templarios* se fue, “sólo tras el avance de las autodefensas que, dicho sea de paso, llegaron a la costa michoacana el 13 de enero, cuando *tomaron* la cabecera del municipio de Coahuayana”.

El campamento de los marinos tampoco fue útil para proteger la vida de los comuneros. Los narcos cometieron tantos crímenes que es difícil llevar la cuenta. Uno tras otros fueron ejecutados sin que los marinos hicieran algo para evitarlo. Pedro Leiva Martínez fue uno de los asesinados.

Para los nahuas de Ostula estaba claro que ellos estaban en una guerra. A fines de septiembre de 2011, en la

tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, Pedro Leiva explicó: “Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos.”

El 6 de octubre de ese año, pocos días después de narrar en la ciudad de México la historia de su lucha, Pedro Leiva fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan. Las autoridades y la prensa local quisieron presentar el homicidio como resultado de un pleito familiar en una noche de tragos. Pero esa versión hizo agua porque está llena de contradicciones e inconsistencias.

Leiva Domínguez fue asesinado a pocos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica a la comunidad sobre la posesión y propiedad del territorio. Pedro había sido parte de la comisión negociadora de los indígenas nahuas.

Pedro nació en la comunidad La Palma Sola y era vecino de la ranchería Xayacalan, en el municipio de Aquila, Michoacán. Al morir tenía 34 años y estaba casado con Luz Aurora Ramírez Martínez. Era hijo del comisario de bienes comunales y tenía cuatro hermanos.

Pedro era delegado de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Tenemos que luchar — decía —, venga lo que se venga, pase lo que pase,

contra quien sea. Una lucha no es fácil; es desgastante, tanto económica como física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad.”

Después de su homicidio siguieron otros más. El 6 de diciembre de 2011 fue torturado y asesinado el comunero J. Trinidad de la Cruz, *Don Trino*, después de una agresión a la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a pesar de que a 500 metros se encontraba un retén de la Marina. Hay quien asegura que si lo mataron fue precisamente porque los elementos castrenses estaban allí.

LA REALIDAD DEL SUEÑO

En junio de 2012 Don Juan falleció a causa de un accidente ocurrido en su casa mientras construía una troje. Unos cuantos meses después, en diciembre, comunidades de la Meseta Purépecha y organizaciones sociales realizaron actividades culturales para honrar su memoria y recuperar su legado. En la reunión se debatió la creación de una ronda regional de vigilancia y autodefensa, responsable de la seguridad en la región ante los embates del crimen organizado.

En su comunidad natal, Nurío, se había formado en 2008 una policía comunitaria y un Consejo Comunal integrado por 20 comuneros adultos, para brindar seguridad a las familias y organizarse. Esa primera guardia indígena fue un anuncio del levantamiento que se avecinaba. Desde allí se promovió la extensión de la experiencia a otros pueblos.

Los guardianes de Nurío visten uniformes que exhiben en la espalda la leyenda de “Policía Comunitaria” y la bandera purépecha en un hombro. Son elegidos por el pueblo. “Aquí —señala una de las autoridades comunitarias— todos los conocemos, sabemos quién puede ser al que más le guste echarse sus tragos, el más trabajador. Algunos son nuestros parientes, si no, nuestros vecinos y como uno conoce a su familia también, pues hay respeto con la comunidad”.

Su formación acarreó resultados favorables inmediatos. El índice delictivo en la comunidad disminuyó drásticamente. Ahora, las faltas más graves que se consignan al Concejo Comunal consisten en alguna alteración del orden público provocada por el consumo de bebidas alcohólicas o diferencias familiares. Esos problemas se solucionan en la misma comunidad sin tener que recurrir a la implementación de justicia del municipio de Paracho, al que Nurío pertenece.

Sus habitantes están convencidos de que su modelo puede servir como ejemplo a replicar a la región. Así lo señaló Agustín González Xaku, integrante del Concejo Comunal de Nurío, en 2012: “Estamos seguros que la implementación de una policía comunitaria puede brindar seguridad a cada una de las comunidades purépechas (...) Aunque a los gobiernos municipales, estatales y federales no les guste, es nuestra forma de organización y será de esta forma que las comunidades puedan estar tranquilas y seguras”.

Esa misma ruta siguieron los pobladores de Urapicho, en el mismo municipio de Paracho. Acosados por La

Familia primero y después por Los Caballeros Templarios, instalaron retenes a la entrada de su comunidad y nombraron guardias comunitarias. En agosto de 2012, el gobierno estatal en coordinación con el federal instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) a cambio de que los indígenas levantaran los piquetes y depusieran sus armas. Los pobladores aceptaron, pero cuando la BOM fue retirada de la zona, los comuneros retomaron las armas y reinstalaron las guardias comunitarias.

“Lo de Urapicho – dijo Trinidad Ninís Pahuamba, miembro del Consejo Mayor de Cherán, a *Proceso* en octubre de 2012– es importante porque se toma conciencia de que solamente entre toda la comunidad se tendrá la fuerza suficiente para poder hacerle frente (a las amenazas) y buscar su seguridad (...) Sólo cuando (las comunidades) se levanten van a darse cuenta de todas las cosas que se esconden. Eso es lo que está pasando por varias comunidades de la zona, lo mismo está pasando en Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachen, Arantepecua, Quiriseo y Sevina”.

Nosotros, explicó un representante del Consejo Comunal de Nurío, “comenzamos con nuestra organización para la seguridad y ahora es tiempo de pensar en la organización de la región, porque podemos hacer las cosas más fáciles para nuestros vecinos, porque ellos nos pueden cuidar de cierta área y nosotros de otras zona y así puede ser más segura la seguridad para nuestras comunidades en la Meseta Purépecha. El máximo sueño de Nurío es tratar de organizar a las demás comunidades y esto no significa que nos estemos rebelando contra el gobierno, sino que estamos tratando de colaborar para que las cosas se hagan bien”.

El sueño comenzó a hacerse realidad. El 1 de febrero de 2013, tres semanas antes del levantamiento de Tierra Caliente, durante la celebración del Año Nuevo Purépecha, los dirigentes varias regiones indígenas de la entidad se pronunciaron a favor de la autodefensa de los pueblos indígenas ante el embate de la delincuencia organizada.

La lista de los indígenas insumisos es larga. En ella están además de Cherán, Urapicho, Nurío, Cocucho, Nahuatzen, otros núcleos de la Meseta, el pueblo nahua de Santa María Ostula y Santa Clara de la zona de Zirahuén, cada vez son más las comunidades indígenas del estado que decidieron organizar su defensa.

Según el dirigente de la organización Nación Purépecha, Abundio Marcos Prado, unas 25 comunidades purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes de Michoacán apoyan la autodefensa armada y no confían en las policías municipales. En la región lacustre de Pátzcuaro — declaró en febrero de 2013 a *La Jornada* — se está forjando un sistema de seguridad territorial, para protegerse fuera y dentro de las comunidades.

“El gobierno del estado sólo reconoce a 16 comunidades que se autodefienden, abundó Prado, pero son 25, y pronto serán más, porque nos estamos organizando en los pueblos del municipio de Erongarícuaro para colocar dos retenes en la carretera ribereña hasta Santa Fe de la Laguna, así como en los pueblos purépechas de Angahuan y Capacuaro”.

La disposición de los pueblos indígenas de Michoacán de resolver sus problemas de seguridad pública por sí mismos no se limitó a nahuas y purépechas. En las zonas mazahua y *hñahñú* en el oriente de la hay poblacio-

nes como Carpinteros, Francisco Serrato, Curundeo, Crescencio Morales y Donaciano Guerra, que se organizaron para proteger su territorio.

“Ahí son 11 comunidades, cada una aportó su número de guardias — declaró Abundio Marcos al periodista Eugenio Bermejillo—. Son pagados por su propia comunidad. Nadie, ni federales ni estatales entran y yo creo que no se animan porque las comunidades pueden agarrar a la ciudad de México por los cuernos, le pueden cortar el agua del Sistema Cutzamala”.

Fue el robo de la madera y la afectación de las ricas huertas aguacateras lo que motivó la formación de las guardias. “En una sola noche no aparecía un fruto en toda la huerta, imagínate de toda una temporada de trabajo, y la inversión que hay”, añadió.

En el caso de la región aguacatera de Salvador Escalante, donde se encuentra el lago de Zirahuén, pueblos como Coruvi, El Mirador y Churucureo colocaron retenes y se protegen con armas de fuego contra asesinatos, secuestros y extorsiones.

Según el diputado Eleazar Aparicio, presidente de la comisión legislativa de Atención a Pueblos Indígenas del Congreso local, fueron la incapacidad de los gobiernos federal y estatal, así como la corrupción, las que propiciaron la autodefensa de los pueblos indígenas. “Los pueblos se hartan cuando ven que nadie los protege y que las denuncias no tienen ningún efecto, se organizan solos y se rebelan ante los gobernantes”, sostuvo.

Para el legislador, es legal que las comunidades se protejan con los medios que tengan a su alcance, y sería un

error que el gobierno quisiera disuadirlos por medios violentos de que no lo hicieran, mientras que a la delincuencia organizada le permite actuar libremente.

Antes del levantamiento de civiles armados en Tierra Caliente, las guardias comunitarias se habían extendido ya en la Meseta Purépecha. Lo mismo había sucedido en la región costera. Fueron las comunidades indígenas las primeras en enfrentar al crimen organizado en Michoacán. Lo hicieron, por lo regular, como parte de su resistencia al despojo de sus recursos naturales.

CHERÁN

Una manta, entre otras muchas colgadas en la localidad de Cherán, sentencia: “Cuando cortes el último árbol, cuando contamines el último río, cuando mates el último animal, te darás cuenta que el dinero no se come”.

El letrero sintetiza la problemática de una comunidad mayoritariamente purépecha que vive del bosque y sufre la destrucción de sus recursos naturales a manos de tala-bosques asociados con el crimen organizado. Resume los sentimientos de un municipio que el 15 de febrero de 2011 se levantó para enfrentar a los saqueadores y tomar en sus manos la conducción de su propio destino.

Un comunero, sin nombre y sin rostro como todos en el pueblo, da cuenta de hasta qué punto el lema de la manta expresa el sentir de los naturales del municipio. “Desgraciadamente —dice— esas personas (talamontes) al terminar con los árboles no se dan cuenta que terminan también con la fauna y flora, y desgraciadamente después

ellos piensan que van a comer dinero, y el dinero no nos alimenta. Uno siente ese dolor, yo vivo en el campo.”

Cherán posee 27 mil hectáreas de territorio comunal, 20 mil de ellas boscosas. Desde allí se alimentan los ríos Duero, Cupatitzio, Tzarárakua y el lago de Pátzcuaro. Sin embargo, más de 80 por ciento de la superficie poblada por árboles de pino, encino, roble y oyamel ha sido incendiada y talada; y el otro 20 por ciento también ha sido talado, aunque aún no ha sido incendiado. Quienes defienden lo poco que queda del bosque son los comuneros. Una tragedia para una comunidad cuya principal riqueza son los recursos maderables.

Alrededor de 20 mil almas habitan el municipio. Se ganan la vida como resineros, trabajando el campo, dedicándose a la ganadería, y vendiendo artesanías. Otros 12 mil migraron a Estados Unidos. Las remesas que mandan son fundamentales para la sobrevivencia de la comunidad.

Un comunero, paliacate en el rostro, voz de todos, explica la dinámica de saqueo que padecieron durante años: Primero ellos entran y talan la madera. El otro grupo que llega viene haciendo la quema de los residuos de cada árbol y entonces en esos lugares, con los grupos armados que mantienen un cerco de protección para ellos, nuestros comuneros no pueden subir al cerro y entonces también nos roban la tierra”.

El negocio -narraron los alzados a Gloria Muñoz- “lo encabeza un señor conocido como *El Güero*. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para que

puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara”.

Los de Cherán no sólo fueron víctimas de despojo. También sufrieron secuestros, extorsiones y asesinatos. El memorial de agravios es largo: más de cinco desaparecidos, media decena de asesinados y varios heridos, amén de viudas y menores huérfanos.

El 8 de mayo de 2008, Lepoldo Juárez Urbina, ex presidente municipal y representante del movimiento de resistencia civil pacífica, fue levantado y luego asesinado por un comando armado. En abril de 2010 fue ultimado Hilario Gembe, hermano del representante de Bienes Comunales. En febrero de 2011, Rafael García Ávila, Jesús Hernández Macías y Baltazar Gerónimo Rafael, de Bienes Comunales, fueron desaparecidos. El 15 de abril de ese año, los talamontes hirieron de bala a Eugenio Sánchez Rendón. Diez días después, Armando Hernández Estrada y Pedro Juárez Urbina fueron asesinados con armas de fuego.

Los campesinos denunciaron ante las autoridades la tala de sus bosques desde 2008. Caminaron, paso a paso, la ardua ruta de los procedimientos legales. La respuesta oficial fue el silencio. No les importó el llamado de Nana Echeri (la Madre Tierra). “En el municipio gobierna el PRI -contó uno de los dirigentes a Rosa Rojas- en el estado el PRD, y en el país el PAN y ninguno de los tres niveles han hecho caso a nuestra demanda de justicia y de combatir el crimen organizado que ha talado nuestros bosques”.

Así las cosas, el 15 de abril decidieron hacerse justicia por sí mismos. Expulsaron a los talamontes, cerraron el poblado con barricadas con piedras y costales de arena y

troncos secos y restos de camionetas incendiadas, reactivaron la ronda tradicional comunitaria, e instalaron en cada esquina fogatas en cada uno de los cuatro barrios de la ciudad, en las que se mantienen en guardia toda la noche.

Ese 15 de febrero, el volcán del descontento social hizo erupción. Los comuneros detectaron que los rapamontes estaban cortando árboles por donde se encuentra el ojo de agua de la Cofradía, “y entonces — cuenta un poblador — la comunidad, al ver eso, el coraje de tres años hace que la gente diga que nos van a dejar sin agua, nos van a dejar sin vida”. Hartos, un grupo de pobladores se enfrentó y retuvo a cinco delincuentes y a sus vehículos durante tres días, para entregarlos finalmente a la comisión de derechos humanos del estado. Los malandrines fueron liberados a los días, pues sus cargos no eran graves.

A partir de esa fecha — escribió Gloria Muñoz — la población se armó con palos, piedras, machetes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y hasta del gobierno. Fueron prohibidas las bebidas alcohólicas, portar armas y distribuir propaganda partidista.

Como sucedió en el levantamiento oaxaqueño de 2006, las fogatas permitieron restablecer el tejido social y reforzar los lazos comunitarios. Allí, alrededor de la lumbre, compartiendo el café y los alimentos, ha crecido la conciencia y la fraternidad.

Fue hasta el 19 de mayo, más de un mes después de que Cherán se levantó, que arribaron a ese municipio elementos federales, ejército, y policías del estado y de Che-

Luis Hernández Navarro

rán, para integrar las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), y coordinarse en la vigilancia. Sin embargo, su presencia es mínima y no ha impedido que siga la tala del Cerro de San Miguel, ni las amenazas.

Desde mediados de agosto la vida en esta población comenzó a regularizarse. Las escuelas se reabrieron y, para evitar el cansancio de la gente después de cinco meses de constante vigilia, se permitió la circulación de personas y vehículos por su territorio entre 8 de la mañana y 8 de la noche. Sin embargo se sigue controlando a quién entra y sale.

El levantamiento es, también, expresión de un proceso de construcción de autonomía indígena desde abajo. Desde hace años, Juan Chávez, profundamente respetado en la región, señaló que el camino a seguir “es la autonomía en los hechos. Un camino a partir del derecho histórico de los pueblos indígenas. No hay que pedirle permiso al gobierno. Hay que ir construyendo las condiciones para que haya autonomía real. Hay que hacer mucho trabajo de base. Trabajar mucho para que se den las condiciones y la determinación de la autonomía surja de las bases, del pueblo”.

Según explicó Salvador Campanur a *Desinformémonos*, los habitantes de Cherán identificaron que poseen un territorio, “que es nuestra casa y tenemos que defenderla. Es el modo en que nació la defensa del territorio que nos heredaron nuestros más antiguos”. Más adelante organizaron la vigilancia por medio de rondines y fogatas para enfrentar a “los malos” quienes, denunciaron, estaban apoyados por grupos armados y fuerzas militares. Así tomaron control de su territorio, y posteriormente organizaron

sus elecciones por usos y costumbres, lo que tuvo que ser reconocido por las instituciones electorales. En la ronda tradicional -señala el comunero- “no existe una técnica de nombramiento para elegir quiénes pueden o quiénes no pueden integrarla. Es un deber para niños, jóvenes, adultos y mayores”, a quienes no se les proporciona un salario.

Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado. Por ser cabecera municipal, Cherán obtiene los recursos de ley que le corresponden como ayuntamiento, que han servido para equipar y mantener su seguridad.

La experiencia de Cherán marcó a las autodefensas que surgieron en febrero de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán. Así lo reconoció el doctor Mireles en diversas ocasiones. Sin embargo, una y otra vez, los pobladores de Cherán se han encargado de aclarar que no son lo mismo.

AUTODEFENSA Y DESARME

Semeí Verdía es un nahua delgado y con sombrero que salió corriendo de Ostula en febrero de 2010 porque intentaron matarlo mientras jugaba fútbol. Miembro de la Comisión Comunal de Diálogo para la Problemática Agraria de la Comunidad, fue uno de los comuneros más activos en la lucha por recuperar la tierra.

Semeí se tuvo que exiliar de su pueblo durante cuatro largos años. Dos tíos suyos, maestros de profesión, fueron asesinados. Ahora carga una pistola en el bolsillo del pantalón y está al frente de los guardias de su pueblo. Junto con varios desplazados y con el auxilio de las autodefensas de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, retomó su comunidad y obligó a la *mañana* a poner pies en polvorosa.

La formación y expansión de los civiles armados en Tierra Caliente y su guerra contra *los caballeros templarios* crearon las condiciones para que los comuneros de Ostula se reorganizaran y recuperaran su territorio. El 8 de febrero de 2014, un grupo de exiliados retornó a su comunidad. Al mediodía efectuaron una asamblea a la que asistieron más de mil 200 personas y acordaron reconstituir su policía comunitaria. A Semeí lo eligieron para estar al frente del equipo de seguridad. Apenas unos días antes, el 27 de enero, había sido uno de los signatarios del Acuerdo de Tepalcatepec.

En la reunión de Ostula, los pobladores de Xayakalan solicitaron ayuda apoyo para frenar una amenaza de desalojo de sus tierras de un supuesto agente del Ministerio Público y de un policía ministerial. Habían pasado la noche en vela temiendo lo peor. La asamblea se trasladó para allá.

De allí salieron — escribió Arturo Cano — 70 camionetas con su carga de *cuernos de chivo*, R-15 y escopetas. La caravana selló la alianza entre los mestizos de Aquila y la policía comunitaria de Ostula, comunidades que, en general, se han llevado de regular a mal.

Desde el principio, la policía comunitaria de Ostula se ha distinguido de la mayoría del resto de los grupos de autodefensa en que está nombrada y sujeta a las decisiones de la asamblea comunal y debe responder a ella. En cambio, los civiles armados se forman por la libre asociación de sus integrantes, sin relación alguna con asambleas comunitarias, y sin ordenamientos acordados por ellas. El armamento, los vehículos y los recursos de que disponen

los nahuas de Ostula son mucho más modestos y precarios que los que poseen las autodefensas.

Desde que resurgieron de la arena, la relación entre los comunitarios nahuas y las fuerzas armadas ha sido difícil. Los choques entre ambos han sido frecuentes. A pesar del papel que los policías comunitarios han desempeñado en la lucha contra los *templarios*, el 19 de marzo de 2014 unos 40 efectivos de la Marina, bajo el mando del comandante Alfredo Valdés de León, desarmaron a 14 policías comunitarios que resguardaban el pueblo de La Placita, hasta hacía algunas semanas bastión de la delincuencia organizada, bajo el mando de Federico González Merino, alias *Lico*, y Mario Álvarez.

En respuesta, un día después alrededor de mil 500 habitantes del pueblo de Santa María Ostula y de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, junto con 300 policías comunitarios y autodefensas, cerraron durante dos horas la carretera 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas a la altura de la base y retén de la Marina en el poblado de La Placita. Exigían que les sean devueltas las armas decomisadas.

La acción de los marinos contra los guardias comunitarios de Ostula formó parte de la ofensiva del gobierno federal para desarmar y desmovilizar a las autodefensas michoacanas. Pero fue también un eslabón más de una ofensiva para golpear y desarticular a los sectores más politizados de la movilización indígena y ciudadana en Michoacán, aquellos que luchan por derechos históricos y que enfrentan grandes intereses, como el de las mineras transnacionales.

La comunidad de Ostula ha pagado una enorme cuota de sangre por tratar de defenderse del crimen organi-

Luis Hernández Navarro
zado, recuperar sus tierras, proteger su territorio y conservar riquezas naturales a punto de extinción como los árboles de sagualica. Su futuro inmediato depende del desenlace que tenga el movimiento de autodefensas. Independientemente de lo que suceda tiene ya un lugar en la historia. En ellos se sintetiza, en mucho, la alborada indígena por la autodefensa, que precedió al alzamiento de febrero de 2013. Y, por si eso no fuera suficiente, el Manifiesto de Ostula y la sangre de sus gentes son ya parte central de la lucha de liberación de los pueblos indios del país.

X) EL LEVANTAMIENTO

LA HORA DE LA VERDAD

El domingo 24 de febrero, grupos de civiles armados de Tepalcatepec y Buena Vista, en la Tierra Caliente de Michoacán, se levantaron en armas contra el cártel de los Caballeros Templarios. En Coalcomán y Apatzingán, donde se habían realizado planes para sumarse, el movimiento abortó.

El alzamiento comenzó en La Ruana, Hipólito Mora logró convencer a un grupo de limoneros y ganaderos de participar en la lucha. Días antes, el 10 de febrero — escribió Denise Maerker — se había reunido con Miguel Ángel Gutiérrez, al que apodaban *El Kiro* por su parecido al personaje de Kalimán, y con Juan José Farías *El Abuelo*, un personaje asociado en el pasado con el cártel de los Valencia. Allí acordaron la fecha para tomar las armas.

La fecha — le contó *El Kiro* a Arturo Cano — la establecieron Hipólito Mora y *El Abuelo*. “Ese día había ceremonia oficial en el ayuntamiento y los conspiradores sabían

que llegarían elementos de la Marina (“los sicarios se fueron por esa razón”). Coincidentemente, había renovación de la mesa directiva de la Asociación Ganadera. “Ellos iban a poner al presidente, con la idea de que no se les escapara ni un becerro de ponerle cuota, con el fin de controlar todas las cuentas”.

En una entrevista que Mora le dio al periodista Roberto Zamarripa, éste ofreció una versión ligeramente diferente de los preparativos del movimiento. En una comida en Tepalcatepec, Hipólito habló con agricultores y ganaderos. “Me llevé unos cuatro amigos míos. Y ahí fue cuando planeamos. Acordamos con los líderes de allá: ‘Si antes del 24 se dan cuenta Los Templarios, nos matan. Hay que tener mucho cuidado’. Afortunadamente no se dieron cuenta. Se llegó al 24 y lo hicimos un domingo. Ellos iban a hacer una reunión entre todos los ganaderos, que son como unos 800. Ahí en la reunión les iban a decir ‘¿saben qué? Hoy es el día, vamos a hacer esto’.

“Entonces yo les dije -continuó Mora su relato: ‘lo voy a hacer primero yo y si el pueblo me responde en cuanto se levante el pueblo les hago la llamada para que en plena junta les den a conocer: se acaba de levantar la Ruana y se animen’. Y así lo hicimos. Salió bien todo, se hizo la llamada, estaban en la reunión (en Tepalcatepec) todos los ganaderos, y ‘se acaba de levantar La Ruana y quieren que lo hagamos nosotros también ¿se animan? Actos súbitos primero en La Ruana, luego en Tepalcatepec. Luego en la cabecera de Buenavista Tomatlán. Mítines en las plazas centrales y la proclamación de guerra contra los Caballeros Templarios”.

Ese domingo 24, un camión de perifoneo convocó a una reunión en la plaza. Hipólito llegó allí armado con una escopeta hechiza y una pistola calibre 9 milímetros, con 34 encapuchados y convocó a la gente a sumarse a la lucha contra los Templarios. Sus hombres de confianza eran su hijo mayor, un albañil al que le llaman “El Tribilín” y un trabajador suyo. Mora llamó a la multitud a levantarse en armas. A un tiempo con júbilo y temor, la gente se adhirió. Ocupó las casas de los malosos, expropió sus armas y municiones y puso retenes en la entrada de la ciudad.

Siguió entonces el turno de Tepalcatepec. Allí, según contó el doctor José Manuel Mireles a *Subversiones*, se habían preparado con sigilo durante seis meses. Los promotores de la asonada, principalmente ganaderos, habían visitado casa por casa de la cabecera municipal para sumar al alzamiento a los jefes de familia. Precavidos, sembraron vigilantes para observar los pasos de los gatilleros de los Caballeros Templarios.

En un “movimiento rápido y simultáneo”, 80 ganaderos armados, vistiendo camisetas con la consigna “Por un Tepalcatepec libre” estampada, detuvieron a varios miembros del crimen organizado.

Los Templarios se disponían a cobrar la cuota de protección a los ganaderos cuando éstos los apresaron. Cuando los malosos quisieron sacar sus armas, el Ejército intervino para impedirlo. Los alzados habían acordado previamente con los jefes militares de la región que una partida de soldados patrullara las inmediaciones del lugar de encuentro.

A los Templarios les decomisaron armas y vehículos. Los ganaderos entregaron a sus detenidos al Ejército y

éste al MP de Apatzingán y a la Policía Judicial Federal. Sin embargo, a las 12 de la noche todos estaban libres.

No todo fue exitoso. Se iban a levantar también Apatzingán y Coalcomán. En Apatzingán los descubrieron y, según Mireles, los propios delincuentes se disfrazaron de comunitarios para poder entrar. En Coalcomán los sorprendieron, los amenazaron y nadie se movió. Tardarían semanas en volverlo a intentar.

El levantamiento no fue algo espontáneo, ni resultado de un acuerdo tomado de una semana a la otra. Diversos testimonios de autodefensas cuentan que, antes del 24 de febrero, diversos enviados gubernamentales (o que se presentaban como tales) tuvieron reuniones con habitantes de Tepeque para preparar las acciones. Efectuaban sus asambleas preparatorias en el salón de fiestas propiedad de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, ubicado en la salida a Coalcomán. A ellas asistían también militares.

Las autoridades estatales estaban al tanto de los preparativos del alzamiento. En diciembre de 2012, Guillermo Valencia, entonces alcalde de Tepalcatepec, les informó que se estaba gestando un movimiento producto del hartazgo de la población. Se enteró de la conspiración cuando varios de los participantes le comentaron “que habían tenido reuniones con personal militar. El día que surgieron ya había esa coordinación”.

En un video subido a You Tube un par de meses después, Servando Gómez, “La Tuta”, hablando por los Templarios, denuncia que fue el propio Gobierno quien armó a los guardias. “En Tepalcatepec y Buenavista – dice en el mensaje – hay más de mil gentes armadas, ¿De dón-

de salieron esas armas?, que recapacite el Gobierno federal... Un general de Tacámbaro, uno de Pátzcuaro, uno de Uruapan y uno de Zamora y dos de Apatzingán, y están haciendo que el pueblo contra el pueblo pelearan”.

En los expedientes 031/2013 y 032/2013 de la CNDH, los pobladores de Buenavista Tomatlán acusaron a la milicia de haber incitado la creación de los grupos de autodefensa que operan en la zona.

La asonada fue exitosa. Se consolidó en esos dos municipios y comenzó a extenderse a otros. Dio comienzo entonces una larga y complicada guerra de varios meses entre autodefensas y Templarios, en la que el Ejército, las distintas policías y los gobiernos estatal y federal tendrían intervenciones vacilantes y contradictorias.

LOS CHOQUES

Quienes emergieron como líderes del alzamiento de Tierra Caliente son hombres, adultos maduros, calentanos, muchos de ellos rancheros, que han vivido varios años en Estados Unidos, varios masones, y algunos con antecedentes penales por delitos contra la salud, que saben manejar armas.

Uno de los fundadores del movimiento, Hipólito Mora, fue originalmente pequeño ganadero y cultivaba limones en un huerto de 15 hectáreas. Vive con sencillez y tiene 11 hijos. Ataviado siempre con sombrero, empezó a usar armas a los 17 años. De complexión robusta, padece del corazón.

Mora decidió levantarse en armas cuando se enteró que su hijo sólo podía cortar limón de su huerta para ven-

derlo por dos días a la semana, para que los Templarios integrantes del grupo criminal obtuvieran más ganancias por el producto que ellos también producían y podían cortar diariamente, comenzó a pedir justicia. “No nos dejaron otra alternativa, o nos moríamos de hambre”, explicó. Los criminales se habían apropiado de todo, ya no dejaban trabajar a nadie.

José Manuel Mireles desatacó como vocero del movimiento. Nacido en Tepalcatepec en el seno de una familia con fuertes raíces en el municipio, es alto, delgado y médico cirujano. Empezó a estudiar en la escuela Médico militar, y se graduó en la Universidad Michoacán. Con varias incursiones de política institucional en su haber, militó lo mismo en el PRI en el PRD y en el Partido Alternativa Socialdemócrata.

En 1985 fue secretario de Deportes de Michoacán, bajo la administración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En 2006, el partido del sol azteca lo inscribió en el lugar 25 de la lista plurinominal para integrar el Senado de la República, por la Coalición Por el Bien de Todos. Trabajó con el gobernador Leonel Godoy Rangel, como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud, hasta 2011.

Trabaja como médico en la Secretaría de Salud desde hace unos 25 años, con un salario de ocho mil pesos quincenales. Es masón, nieto de bracero y fue durante años, migrante.

Para él, el asunto detonó cuando los Templarios empezaran a abusar de las menores de edad. A la periodista Laura Castellanos, Mireles le contó como “el ímpetu por levantarse le vino durante el último cuatrimestre de 2012:

atendió a 40 niñas embarazadas por violaciones o estupro infantil por parte de Los Templarios. “Puras niñas de 11 a 14 años, la más vieja era de 14 años”, dice. “De septiembre, octubre y noviembre fueron 26 niñas de los ranchos.”

Pero, estuvieran en el movimiento por razones económicas o por indignación moral, las cosas comenzaron a complicárseles el 6 de marzo, después de varios golpes de suerte. El enfrentamiento dejó de ser un asunto entre ellos y los Templarios.

En Buenavista Tomatlán elementos del Ejército detuvieron a 34 autodefensas. Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, los presentó como “personas armadas por la delincuencia organizada”, vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los detenidos tenían entre 18 y 30 años de edad y se trasladaban en cinco camionetas.

En la incursión militar, fue liberado el director de la Policía Municipal, Otoniel Montes Herrera, y cinco policías, retenidos en las oficinas de la alcaldía. Aseguraron 32 armas cortas y 15 largas, entre las que destacan fusiles de asalto R-15, escopetas, rifles AK-47 y las llamadas “mata-policías”, y dos chalecos antibalas.

Cinco días después, fuerzas castrenses arrestaron a 17 personas más de La Ruana, en un retén que habían instalado. Les decomisaron armas de uso exclusivo del Ejército.

El rechazo de la comunidad a la acción militar fue inmediato y enérgico. Profundamente indignados, un grupo de más de 300 pobladores confrontó a unos 47 soldados y bloqueó la base militar en la que estaban durante casi 20 horas. Un video captó la escena y fue subido a la red. “Mira

nomás como tenemos a los guachos (soldados) aquí (...). Ahí está la población, (vean) como está enfurecida con los guachos, con la traición del Gobierno” -dice una voz en la grabación.

La acción trató de ser ocultada y menospreciada por las autoridades. El coordinador de Comunicación Social estatal, Julio Hernández Granados, dijo que los militares no habían tenido problemas. “Existe –señaló– una base militar instalada en La Ruana, con más de 50 efectivos de las fuerzas armadas, que en ningún momento vieron amenazada su integridad”.

Menos sutil, el procurador del estado, Plácido Torres, lo desmintió: “Nada más (se nos informó) lo que pasó, pero no con detalles. (Lo que sucedió fue que) el Ejército detuvo a algunas personas y en respuesta a ello (civiles) retuvieron algunas camionetas del Ejército”. Luego añadió que los militares ya habían sido liberados por el grupo de autodefensa. “No sé decirle exactamente cuánto (tiempo permanecieron retenidos) pero fueron horas, no fue gran cosa. Ya se solucionó”, dijo tratando de bajarle dramatismo al asunto.

Las autoridades castrenses sostuvieron que sus tropas no habían sido retenidas, puesto que estaban armadas y en la zona de la Ruana, el Ejército tiene otras fuerzas de reacción. “Lo que sí hubo –señalaron– fue un altercado verbal que no pasó a mayores”.

Las protestas ciudadanas contra el arresto de sus guardias no cesaron. Decenas de campesinos se movilizaron a la sede de la PGR y el Zócalo para exigir la libertad de sus parientes. Explicaron que sus familiares se levantaron

en armas por la corrupción y pasividad de las policías ante los abusos de Los Caballeros.

“No queremos a ningún cártel allí -dijeron. A ninguno. Queremos ser libres, queremos ser como antes éramos, que haya trabajo todos los días para darle de comer bien a las criaturas, para vestirlos y todo. Estas personas se trajeron a los hombres que nos defendían, ahora nos va a tocar a las mujeres levantarnos en armas”.

Una de las esposas de los detenidos detalló: “Las armas se las quitamos a los Caballeros, en La Ruana agarramos Caballeros, cuando nos empezamos a levantar en armas todos estábamos diciendo allá viene un fulano, es caballero, vámonos todos y les quitábamos las armas, los chalecos y todo. Los policías eran puteros de los Caballeros”.

LA DIGNIDAD DE LAS ARMAS

Las autodefensas explicaron su levantamiento elaborando un dramático relato de los abusos cometidos por los Templarios. Durante años, explicaron, la población de Tierra Caliente fue víctima de extorsiones, robos, asesinatos, violaciones y toda clase de abusos.

Concentrados inicialmente en pedir cuotas a narcotraficantes de la región”, la situación se agravó según el doctor Mireles, “ya que incrementaron las ejecuciones (...) comenzaron a cobrar cuotas, derecho de piso e, incluso, permiso para vivir”. La situación se agravó a partir de 2012 y los funcionarios fueron o cómplices u omisos.

Las narraciones del expolio eran dramáticas. Los ganaderos debían pagarles a los *malosos* mil pesos por cada

res que comercializaran y los carniceros 15 pesos por cada kilo de carne que vendieran. Las tortillerías 4 pesos. Las empacadoras de limón estaban obligadas a darles un peso por cada kilo vendido. Ni siquiera los mas humildes cortadores escapaban de dar su cuota.

En Tepalcatepec, calcula el doctor Mireles, “se llevaban 30 millones de pesos al mes nada más de esos tres negocios, sin contar lo que pedían a las familias. Había familias que tenían que pagar entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales”.

El relato de Hipólito Mora fue parecido. A *Milenio* le contó que primero pidieron moche a los que hacían droga, a los que cocinaban metanfetaminas en laboratorios. Pero después no les fue suficiente ese dinero y empezaron a meterse con los negocios legales. El pueblo se hartó cuando tomaron control de las empacadoras de limón para ellos y sus amigos productores.

El mismo Mora le dio “un mal ejemplo” a Roberto Zamarripa de *Reforma* sobre la conducta Templaria. “Si usted se peleaba con su esposa en su casa -le platicó-, le hablaban a ellos, iban, a veces les ponían una putiza al matrimonio, o si no una multa... Aquí hay un río, le llamamos el río Grande. Tiene muchísima arena. Toda la gente ocupa arena para construir pisos o casa, íbamos al río. Otras personas tenían su manita de chango, maquinaria pesada ahí para vender arena. Llegaron al extremo de apoderarse del río. Ya nadie podía ir a recoger arena ahí. ¡Un río federal!”. La situación se volvió insostenible cuando comenzaron a abusar de las mujeres. “Llegaban —explicó Mireles— a tocar a la puerta de las casas y decían: ‘me gusta mucho tu

mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña porque esa sí se va a quedar conmigo varios días' y no te la regresaban hasta que estaba embarazada".

Las personas que tuvieron el valor de denunciarlos, amanecían muertos con todo y familia. La demanda que habían presentado, aparecía en el piso, frente a su puerta, hecha pedazos.

Un joven de La Ruana narró a *Reforma*: "Muchos seres perdieron sus hijos, perdieron sus esposos, sus amigos. Llegó a tal grado que cuando te iban a matar a un familiar te pasaban el teléfono y decían 'mira cabrón, cómo lo estamos matando; escucha cómo está gritando... escucha el ruido de la sierra'. Eso ya es algo demoníaco, descuartizar personas vivas".

Llegó así el momento de los fierros, independientemente de los riesgos que eso implicaba. Dijo Hipólito a *Milenio*: "Sí, está uno fuera de la ley. Sí, estoy consciente. El arma que traigo está prohibida. Por esta me puedan dar cinco años o más, estoy consciente, pero no le doy mal uso. Es para defender a mi pueblo y lo voy a seguir haciendo".

LOS CLAROSCUROS DE LAS AUTODEFENSAS

Las autodefensas michoacanas son grupos de civiles armados que han tomado la justicia en sus manos y combaten militarmente a *Los templarios*. Se presentan como gente de trabajo. Según José Manuel Mireles, "somos pueblo, somos miles, somos un Consejo de Autodefensas Unidas de Michoacán, formado por empresarios, campesinos, presidentes municipales, regidores, huerteros, limoneros, estudiantes, padres de familia, etcétera".

Las autodefensas son una confederación de grupos locales, autónomos entre sí, que tienen sus propios mandos militares y se coordinan a nivel regional. Mantienen relaciones estrechas con sectores productivos y poderes municipales. Aunque su fuerza fue creciendo con el paso del tiempo, están integradas por al menos 20 mil hombres, en su mayoría con la complexión física apropiada para los enfrentamientos.

Sus voceros afirman que se financian con las ganancias de la explotación de los ranchos abandonados por *Los templarios*, o con lo que han dejado de pagar a sus extorsionadores. Sin embargo, tienen otros importantes respaldos económicos. En muchos lugares son los ricos quienes sostienen al ejército irregular y hasta les pagan a sus peones para echar bala.

Las autodefensas están armadas mayoritariamente con AK-47, R-15, M2 y fusiles de asalto, armas difíciles de adquirir y caras. Han demostrado que saben utilizarlas. Tienen, además, chalecos antibalas, uniformes, equipos de radiocomunicación y camionetas blindadas.

¿De dónde proviene su armamento y pertrechos? Afirman que, en un primer momento, de sus equipos de caza y, con el paso del tiempo, de los *templarios* muertos o huidos. Alguno de sus voceros reconocen que las han comprado y, otros señalan que se las hicieron llegar migrantes solidarios.

Antes de su aparición pública y a lo largo del conflicto, el Ejército y la Policía Federal han proporcionado cobertura a las operaciones militares de las autodefensas. Estanislao Beltrán, uno de sus dirigentes más reconocidos,

se lo confesó con todas sus letras a Carmen Aristegui. El secretario de Gobernación y el comisionado Nacional de Seguridad lo ratificaron en distintos momentos.

La coordinación entre militares y autodefensas ha sido muy clara en distintos momentos. En muchos lugares, las operaciones militares contra los Templarios se hicieron de manera conjunta o, por lo menos, coordinada.

Esta relación ha sido confirmada en diversos momentos por los jefes de los alzados. Luis Antonio Torres, al que llaman *El Americano* o el *Comandante Simón*, un michoacano nacido en Los Ángeles, California, que ha estado en el centro de muchas tormentas, le contó a Arturo Cano, sobre “un coronel del Ejército que me empezó a apoyar, no puedo decir el nombre pero son altos mandos los que nos están apoyando”.

A pesar de ello, la colaboración entre autodefensas y fuerzas armadas no ha sido tersa ni lineal. Ha tenido una naturaleza pendular. Los roces con el 51 batallón de infantería han sido frecuentes.

Pero la realidad parece indicar que el ejército no es homogéneo. A lo largo de estos meses y estas historias se encuentra comportamientos antagónicos que van desde la corrupción y el apoyo al narco (según frecuentes denuncias), la fiel disciplina a los contradictorios mandatos federales a la colaboración con las autodefensas.

Los claroscuros del movimiento son evidentes. Muchos michoacanos tomaron las armas para enfrentar a grupos delictivos y defender su territorio, sus bienes y su seguridad. A diferencia de las policías comunitarias de origen indígena, es inocultable el papel del gobierno federal,

los empresarios agrícolas y hasta integrantes de cárteles en su nacimiento y auspicio. Pero una cosa es su origen y otra en lo que se convirtieron al calor de la lucha y la incorporación de sectores populares a la movilización. Conforme el movimiento se fue desplegando las mutaciones que iba sufriendo lo convirtieron en algo diferente a lo que fue en su nacimiento.

Entre las autodefensas y el gobierno federal se construyó una alianza explícita para combatir a *Los caballeros templarios*. Los civiles armados no están en guerra contra las autoridades federales. Sin embargo, aunque una parte de ellas lo hagan, no se subordinan a la lógica gubernamental, tienen una autonomía relativa. Por un lado, acarician el lomo a los funcionarios públicos, por el otro, los condicionan.

LA RESPUESTA TEMPLARIA

Los Templarios no estaban cruzados de manos. Su respuesta ante la sublevación fue enérgica. Combinó acciones militares, hostigamiento económico, movilizaciones ciudadanas y una campaña de comunicación.

El 13 de marzo, aparecieron mantas suyas colgadas en puentes vehiculares o peatonales de Morelia, y en la vía pública de diversos municipios del interior del Estado.

Una de ellas exigió: “Expulsen de nuestro Estado a delincuentes lacras y abusivos y establezcan condiciones para que la sociedad michoacana viva en paz y pueda desarrollarse de manera plena en el ámbito laboral, económico, educativo, político y espiritual”. Otra demandó: “Terminen con la farsa de las policías comunitarias”.

Una empacadora de limón y una estación de gasolina fueron incendiadas en la comunidad de Santa Ana Amatlán, del municipio de Buenavista Tomatlán.

Cuatro días después, los Templarios emplazaron a Sabritas, Marinela, Bimbo y Barcel, así como gaseras y cableras, a no distribuir sus productos y servicios en la región. De no acatar la instrucción —amenazaban— quemarían sus camionetas.

El volante que distribuyeron como advertencia en redes sociales decía: “Se les pide de la manera más atenta que va estar prohibido surtir a sus productos a los poblados de Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec. A partir de esta semana se les van a quemar todas las unidades si se les sorprende ir a dichas localidades mencionadas”.

No era la primera ocasión en la que algo así sucedía. En mayo de 2012 habían prendido fuego a instalaciones de Sabritas en 3 municipios de Michoacán y 2 de Guanajuato.

Las amenazas surtieron efecto. Javier González Franco, director general de Bimbo, reconoció que había desabasto de sus mercancías en algunos poblados de Michoacán, debido a las restricciones que ponen los grupos del crimen organizado. A *Milenio* le dijo: “No nos gusta arriesgar a nuestra gente y ellos lo saben; ante cualquier tipo de riesgo tratamos de cubrir lo mejor posible esos territorios”. Resignado, añadió: “No somos los únicos que pasamos por estas situaciones, existen muchos proveedores que están en la misma circunstancia. Por el momento dejamos de vender, yo diría que son días que no podemos entrar y en otros días sí podemos entrar”, indicó.

Las “solicitudes” templarias fueron acompañadas de nuevas mantas en varios municipios. En una ella infor-

maron: “En protesta e inconformidad con las formas en que se ha comportado el gobierno al proteger al cártel disfrazado de comunitarios, decidimos a tiempo decir al gobierno que jamás lo permitiremos y preferimos morir de frente”.

A Enrique Peña Nieto le advirtieron: “Es muy riesgoso estar echando a pelear al pueblo contra el pueblo y apoyar al cártel de Jalisco disfrazado de comunitarios”.

Los soldados no escaparon a sus cuestionamientos. “Al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas ¿Por qué tanto apoyo a los guardias comunitarios de La Ruana y Tepeque?, pusieron en otro aviso.

La ofensiva de mantas y volantes fue acompañada de mensajes grabados subidos a YouTube. En uno de ellos, Servando Gómez, demanda al Gobierno federal que ponga orden con las policías comunitarias. El vocero Templario asegura que las autodefensas no son de Michoacán, sino que provienen de estados como Jalisco y Sinaloa. Precisa que es el cártel de Jalisco Nueva Generación está detrás de ellas.

Con el paso de las semanas aparecieron más narco-mantas en ocho municipios de Tierra Caliente, responsabilizando al general de policía colombiano, Óscar Naranjo, asesor del presidente Peña Nieto en materia de seguridad, de ser el responsable de la creación de esos grupos.

Acusaciones similares a las de *Los templarios*, en el sentido de que las autodefensas son un instrumento del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron también divulgadas por autoridades michoacanas y algunas federales. El 30 de enero de 2014, la PGR informó que dos civiles armados detenidos confesaron que el crimen organizado de Jalisco entregó armas a las autodefensas michoacanas.

Los choques entre ambos *cárteles* tienen una larga historia tras de sí. El CJNG declaró públicamente la guerra a los michoacanos. En un comunicado subido a YouTube, en el que puede verse a un grupo de encapuchados vestidos de negro, con armas de alto poder en sus manos y con una pancarta que anuncia “Por la libertad de Guerrero y Michoacán”, los de Jalisco alertaron: “Atento aviso: a todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán se les comunica que ya estamos en sus estados para limpiarlos de lacras. El problema es con la organización que se hace llamar *Los caballeros templarios*”.

La respuesta Templaria escaló. Al cerco económico, la denuncia en mantas y videos, las amenazas a empresas alimenticias y destrucción de bienes, le siguieron acciones mucho más violentas, como la matanza de jornaleros de Felipe Carrillo Puerto.

El 10 de abril, varias camionetas salieron de La Ruana rumbo a Nueva Italia. Iban cargadas de cortadores de limón que se dirigían al homenaje por el natalicio de Emiliano Zapata. Sólo pudieron pasar tres, porque el resto quedaron atoradas en un bloqueo de la carretera a Apatzingán. Ya en la tarde, cuando regresaban de exigirle seguridad a Jesús Reyna, secretario de Gobierno, fueron salvajemente agredidos. Fueron asesinadas según reportes oficiales 14 personas, ocho de ellas limoneros: tres productores y cinco cortadores. Voces muy reconocidas en la región, denunciaron que, en realidad, el número de fallecidos fue mucho mayor y que en su mayoría provenían del estado de Oaxaca.

La matanza le fue atribuida a Francisco Galeana Núñez, el *Pantera*, responsable del tráfico de droga y el

cobro de extorsiones a empresarios y a productores en los municipios de Apatzingán, Uruapan, Gabriel Zamora, Zinacuarero, Nuevo Parangaricutiro y Tingambato.

Los Templarios siguieron moviendo sus piezas en el tablero. El 19 de abril, miles de gentes protestaron en Apatzingán en contra de las autodefensas. “El pueblo no quiere abusos de nadie, quiere trabajo y un Michoacán en paz”, rezaban los volantes difundidos por un grupo denominado Movimiento Ciudadano por la Ciudad del Pueblo, Caminos y Carreteras de Michoacán.

En varios municipios más, la gente permaneció encerrada en sus casas, ante la amenaza de que explotarían bombas. Fueron evacuadas oficinas de gobierno, escuelas, comercios. Las corridas de autobuses con destino a los municipios calentanos fueron suspendidas.

Instalados ya en una espiral de violencia ascendente, el 28 de abril fue un día movido. Los Templarios atacaron a tiros un retén en La Ruana. Por lo menos 10 hombres resultaron muertos y siete heridos. Una de las autodefensas que participó en el enfrentamiento advirtió: “No estamos con ningún cártel. Queremos vivir en paz y que nos dejen trabajar”.

Simultáneamente, el transporte de pasajeros se interrumpió en casi todo el estado durante ocho horas, y cientos de manifestantes encapuchados tomaron las carreteras protestando contra el Gobierno Federal y las autodefensas.

El cerco se volvió asfixiante. Antes del 10 de mayo, un grupo de atemorizadas madres le dijo a *Milenio*: “Estamos amenazadas para el 10 de mayo; dicen que nos tienen un regalo, que nos van a matar como perros a todas.”

La Ruana fue sitiada por los Caballeros Templarios. Quedó desabastecida, sin gasolina, con escasos alimentos y medicinas. Muchas tiendas cerraron. Los molinos de gas para el nixtmal funcionaron irregularmente. En las casas se cocinaba con leña o con microondas.

El 16 de mayo el Ejecutivo envió 2 mil 500 soldados a 19 municipios de Michoacán. Su objetivo fue restablecer el orden y la seguridad. O, en otras palabras, romper el cerco. El general Alberto Reyes Vaca fue designado titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. En sus manos se concentraron los mandos de la policía estatal y de las fuerzas federales presentes en Michoacán.

Como si viviera en otro estado, unos cuantos días más tarde, el 23 de ese mes, el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, preso meses después por sus vínculos con el crimen organizado, declaró que las guardias comunitarias en la región de Tierra Caliente habían desaparecido ya definitivamente y no sólo de manera temporal. De volver a tomar las armas -amenazó- serán detenidos y se les fincarán responsabilidades.

Siguiendo el mismo guión, el 27 de mayo Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, echó las campanas a volar. La estrategia de seguridad en el estado de Michoacán -aseguró- ha permitido que el territorio estatal recupere la tranquilidad, además de la detención de algunos delincuentes.

AQUILA

Muy pronto, la dinámica indígena atravesó el movimiento. Fue un invitado que se coló a la fiesta sin ser requerido. Su

presencia trastocó los acontecimientos. En junio se formó una policía comunitaria en el municipio nahua de Aquila. Formada por más de 100 jóvenes indígenas, acusó a militares y policías municipales de tener vínculos con el crimen organizado y de que los dirigentes de la comunidad habían sido amenazados.

En la cabecera municipal de Aquila viven casi 5 mil habitantes. Se ubica a unos 15 kilómetros de la carretera costera que une al puerto Lázaro Cárdenas con el estado de Colima. En Aquila existe una mina de la cual se extraen un promedio de 200 mil toneladas de minerales al mes, operada por el consorcio italo-argentino Ternium de México. Según la Procuraduría General de la República el crimen organizado cobraba cuotas por el mineral extraído.

La empresa tiene con la comunidad un Convenio de Ocupación Temporal firmado el 25 enero de 1990, que ampara sus operaciones en 383 hectáreas. Paga regalías de explotación minera a 401 comuneros de Aquila a razón (según información de la empresa) de unos 30 mil pesos mensuales. Sin embargo, los comuneros han tenido conflictos permanentes con la compañía, además de sufrir la extorsión de los Caballeros Templarios.

“Somos comuneros del municipio -informaron en un video- ya estamos hartos de la delincuencia organizada que opera en la región, vimos lo que hicieron los municipios de Tierra Caliente, por eso también nosotros nos organizamos”.

En cuadro aparecen siete hombres con el rostro cubierto. Casi todos usan playeras blancas con un mensaje que dice “Por un Aquila libre”. Los criminales — denuncia-

ron— “nos están explotando nuestros recursos naturales, el hierro”. El gobierno —acusaron— “los resguardó a ellos. Entonces no le tenemos confianza”.

El 11 de junio, un grupo armado incursionó a bordo de varias camionetas, mostrando fusiles de grueso calibre y playeras blancas con el emblema “Por un Aguillilla Libre”. Luego se retiraron y realizaron apariciones esporádicas.

“Ya no alcanzábamos a pagar las cuotas que nos cobraban a los ganaderos, a las tiendas, a los comuneros, a todos. Nos estaban cobrando cuotas muy altas ya; el Municipio estaba en manos de ellos, ellos eran nuestro Gobierno”, explicó el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Octavio Villanueva.

Los ganaderos —dijo— debían pagar casi una tercera parte de su venta por cada cabeza de ganado, que les tomaba dos años engordar. A los comuneros que reciben regalías de la mina de hierro les establecieron una cuota de 2 mil pesos mensuales.

Detrás de la decisión de autodefenderse había una larga lucha contra la empresa minera. A principios de la década de 1990, el gobierno federal otorgó a la empresa Hylsa una concesión por 300 hectáreas, con un área de explotación de 73 de ellas. Sin embargo, a la fecha Ternium ha invadido 200 hectáreas.

Según Octavio Villanueva, el consorcio sobornó autoridades comunales y municipales. Hace más de dos décadas se formó un grupo de comuneros que demandó mayores regalías por parte de la mina. El movimiento fue encabezado por José Ramírez Verduso, pero lo asesinaron. En 2004 nació otra asociación que reivindicaba justicia en

el pago de regalías. Sin embargo, sus promotores fueron comprados.

Para manejar discrecionalmente las regalías, la empresa promovió un grupo de 40 incondicionales, a los que dio trato privilegiado. Indignada, la asamblea comunal les canceló sus derechos por 40 años. Sus integrantes se refugiaron en Colima.

Encabezada por el anterior comisario, Agustín Villanueva, en diciembre de 2011, la asamblea comunal acordó realizar un paro total en la mina. Durante tres meses no se extrajeron minerales. El gobierno envió en febrero de 2012 policías federales y estatales para desalojar el plantón. Los comuneros resistieron. Finalmente, el 18 de marzo de ese año se firmó un acuerdo en el que Ternium se comprometió a pagar 3.8 dólares por tonelada. Sin embargo, la empresa nunca pagó lo acordado.

A raíz de las negociaciones encabezadas por Agustín Villanueva, actualmente se otorgan poco más de 13 mil pesos mensuales a cada comunero, según la cantidad de hierro extraído (3.8 dólares por tonelada). Este pago que no le agrada para nada a la minera.

Cuando en 2013 se alzaron los civiles armados de Tierra Caliente, Villanueva Ramírez tomó las armas y organizó al grupo de autodefensa porque se oponía a pagar parte de las regalías a la delincuencia organizada. Los secuestros y desapariciones tenían hartos a los habitantes del municipio.

En un primer momento, el presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, negó la presencia del grupo y dijo que lo único que había era una división en la comuni-

dad indígena de San Miguel Aquila. Según él, los guardias no eran más que comuneros encapuchados que presionaban a las autoridades agrarias y el gobierno para resolver sus demandas.

El 19 de junio, 250 personas marcharon en la cabecera del municipio, mostrando pancartas con mensajes de rechazo al comando, y acusándolo de supuestos malos manejos en las regalías que la minera otorga a los comuneros, por permitirle extraer el mineral en su territorio. “El pueblo de Aquila repudia a los grupos de gente armada”, escribieron en cartulinas.

Los manifestantes acusaron a los policías comunitarios de no ser originarios de la demarcación, y, de estar encabezados por el ex titular del comisariado comunal, y el comisario no reconocido por el Tribunal Agrario.

El 24 de julio los comunitarios se asentaron definitivamente en el pueblo y forzaron la salida de las autoridades. Desarmaron a los policías municipales, a los que vinculaban con los Templarios, y se hicieron cargo de la seguridad.

Circunspeto, el gobernador interino Jesús Reyna, reconoció: “El grupo de autodefensa que apareció el miércoles en el municipio de Aquila desplazó a la Policía local”. Y repitió la versión oficial sobre el origen del conflicto. “Desde nuestra perspectiva — dijo —, es un asunto totalmente diferente al de los grupos de autodefensa y al de los grupos de guardias comunitarios. En este caso se trata de un problema interno de la comunidad de San Miguel de Aquila, donde ofrece sus servicios la empresa minera Ternium y entrega mensualmente importantes cantidades de dinero por regalías a los comuneros”.

Pero los guardias comunitarios tenían otra versión de su alzamiento. Para demostrarlo colocaron varias mantas en el pueblo. Una advirtió: “Por un Aquila libre de muerte, secuestro y extorsiones”; otra decía “No más cuota delictiva”.

Los comunitarios agarraron a varios jóvenes templarios, les quitaron sus radios y teléfonos, y los pusieron a trabajar como albañiles, jardineros y limpiando calles, jardines y ríos.

Uno de ellos, de nombre Ricardo, dijo a *Milenio*: “Quiero ofrecer una disculpa, en especial a los habitantes de Tierra Caliente, donde dañé a mucha gente. Fui un pen-dejo por trabajar con Los templarios, hoy solo quiero colaborar con la policía comunitaria para que me dejen estar con mi familia, aquí, en Aguililla”.

El desafío indígena en plena zona de influencia de la minera trasnacional resultó inadmisibile para el gobierno. El 5 de agosto, efectivos militares y policías estatales desplegaron un operativo para hacer presencia en la localidad, desarmar a los guardias comunitarios que habían hecho cargo de la seguridad del municipio.

El 14 de agosto, de madrugada y bajo la lluvia, fueron detenidos 45 comunitarios, en un operativo conjunto del Ejército, Marina y Policía Estatal en el municipio de Aquila. Su justificación fue cumplir cinco órdenes de aprehensión en contra de “delincuentes e integrantes de un grupo armado”.

Según el comisariado de bienes comunales, Octavio Villanueva, el pueblo respondió reteniendo a 66 elementos de las fuerzas armadas. Los concentraron simbólicamente

en el patio de maniobras de la empresa comunal de tractocamiones que trasladan a Colima el hierro y en la plaza principal. Los soldados fueron finalmente liberados por un comando militar que amedrentó a la gente.

Uno de los pobladores narró a *Reforma* el operativo. “La gente – detalló – estaba pacífica porque estábamos esperando a un grupo de militares que iban a llegar a hacer una negociación. Nosotros no traíamos armas, ninguna”. Cuando hablaban con un teniente, arribaron cerca de 600 soldados para romper la mesa en donde se negociaba un canje: autodefensas detenidos por militares. “Ellos no llegaron haciendo preguntas, llegaron golpeando, llegaron echando balazos”, relató.

Interrogado Jesús Reyna sobre el por qué del trato desigual a los distintos grupos armados, respondió que “los de Aquila estaban en flagrancia del delito”. Y añadió: “Cada caso merece un análisis de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo al momento, y esto no quiere decir necesariamente que el día de mañana se tenga que hacer con los de Tepalcatepec o Buenavista, como tampoco se está diciendo que se vaya a hacer”.

La redada tuvo efectos devastadores para la población. “Estamos en manos del crimen”, se lamentó el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Octavio Villanueva.

Después de la desarticulación de la guardia, relató un comunero de apellido Díaz a *Desinformémonos*. “vinieron cinco asesinatos, tres desapariciones forzadas y levantones por parte del crimen organizado de los que todavía se quedaron en la comunidad”.

“La mayoría de los indígenas huyeron por las amenazas del cartel de los Caballeros Templarios, “apoyados por el gobernador interino y el presidente municipal, Juan Hernández”. La comunidad se desplazó —informó *Desinformémonos*.

El 18 de enero de 2014 se formó un nuevo grupo de autodefensas en la cabecera municipal de Aquila. En él no participan los indígenas sino avecindados, “apoyados por la Policía Federal; el comisionado Alfredo Castillo y el gobierno los dejaron que anduvieran por todos lados y portaran armas, cosa que a nuestros compañeros no, por eso están en la cárcel y no quieren sacarlos”, apuntó el Comisariado de bienes comunales.

La comunidad decidió no incorporarse a las autodefensas por la desconfianza existente hacia las autoridades, “y porque primero hay que resolver los problemas que hay en casa. Si vas y te metes a querer arreglar los problemas al vecino, no lo vas a poder hacer”, explicó el representante de la comunidad.

Y, en un giro trágico, las autodefensas comenzaron a tomar las costumbres y mañas de los Templarios, apoyados por la policía. “Ahora —denuncia Villanueva— ellos me amenazan como comisariado, quieren que los apoye y les pague el dinero que se les daba a los del cartel, que porque es para seguridad y ellos se encargan”.

El trato diferenciado que se brindó a los comuneros de Aquila con respecto a las autodefensas de Tierra Caliente despertó la sospecha de que, quien se encontraba detrás del operativo militar era la minera Tenium. Comuneros, académicos y ambientalistas señalaron a la empresa. Ésta

se deslindó de las detenciones. Dijo ser “respetuoso de las autoridades, así como de los temas internos de la comunidad y se mantiene al margen en todo momento”.

Según el nuevo comisariado, Octavio Villanueva, los conflictos entre la comunidad por las regalías de la mina no provocaron la formación del grupo de autodefensa, aunque reconoció que existen. “Quiero que quede bien claro -le dijo a Carmen Aristegui: el hecho de que haya surgido un grupo de autodefensa en Aquila es en contra del crimen organizado. No nos armamos nosotros en contra de la minera... son dos temas (distintos)”, dijo. “Nosotros nos armamos en contra del crimen organizado porque no podíamos pagar tanta cuota”, afirmó.

Sin embargo, muchos comuneros piensan que la empresa está detrás de la detención de sus paisanos. Uno de ellos comentó a *La Jornada* que sus compañeros están en la cárcel porque “hay intereses económicos y políticos”.

LA MATANZA DE LOS REYES

Quienes debían de protegerlos, los asesinaron. El 22 de julio de 2013, ciudadanos que protestaban contra la extorsión de los Templarios en el municipio purépecha de Los Reyes fueron masacrados por policías.

Una semana después de los hechos, ocho de ellos, con el rostro cubierto por paliacates rojos, gorras y sombreros, narraron su tragedia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la ciudad de México.

“Acudimos —explicaron— a una manifestación que pide lo mismo que nosotros, justicia. Íbamos con cami-

setas blancas y los policías municipales distrajeron a los de la Policía Federal. Nosotros dijimos, cuando vimos a una patrulla municipal, 'nos vienen a proteger', pero la verdad, lo que ocurrió no tiene nombre: hombres armados y policías acribillaron a sangre fría a los manifestantes. Muchos se tiraron al piso y los mataron. Se ensañaron con mujeres y niños, fue un acto cobarde".

Sus problemas habían comenzado meses antes. El 21 de enero de este año, narraron, "llegaron a nuestra comunidad unas personas y nos entregaron sobres exigiéndonos dinero, la cuota por la cantidad de tierra que tenemos. Llenos de temor no sabíamos si aceptar o no. Toda la comunidad en la asamblea tomamos la decisión de no colaborar, de no pagar tope lo que tope".

El acuerdo —contaron— "se lo fuimos a comunicar al presidente municipal el 23 de enero, pero no estaba, le dejamos la respuesta y entonamos el Himno Nacional. Desde ese momento ha habido agresiones. Nos desaparecieron a un compañero de nombre Roberto Serrano Cervantes. Denunciamos ante la autoridad ese hecho y no hay respuesta".

Fue entonces que acordaron unirse. "Somos —señalaron— cuatro comunidades las que nos hemos organizado. Hemos hecho un comedor comunitario, ahí comemos todos para protegernos. Las mujeres cocinan para los niños y llevan la comida a la escuela. Estamos solos, somos pacíficos, pero estamos organizados para defendernos. No tenemos armas, no nos hemos manchado de sangre las manos".

Los habitantes de Los Reyes no se reivindicaron ni como policías comunitarios ni como grupos de autodefensa.

sa. “Somos – dijeron – indígenas, campesinos purépechas de cuatro comunidades de este municipio que nos hemos organizado para defendernos de las agresiones y de la extorsión de los ‘malos’, que vinieron a exigirnos a nuestra comunidad 2 mil pesos por hectárea de cultivo en cada cosecha. En asamblea dijimos no, no vamos a pagar ni a colaborar”.

Ya en la ciudad de México, los voceros explicaron: “Venimos a exigir justicia. Le pedimos al gobierno federal que haya más militares, más marinos y policías federales para que cuiden nuestra seguridad. Tenemos miedo, los niños han dejado de jugar, los hombres hemos dejado de trabajar y las mujeres están con nosotros hombro con hombro en la defensa de lo que es nuestro, de nuestras tierras”.

Sus comunidades – advirtieron – están dispuestas a todo para defender su dignidad, sus tierras y sus pertenencias. “Aquí estamos para exigir justicia”, insistieron.

LA PRIMERA TOMA DE APATZINGÁN

En los primeros días de octubre de 2013, resultaba evidente que la estrategia gubernamental había hecho agua. La realidad caminaba por la acera de enfrente de lo que lo hacía el discurso oficial. Tanto así que, el 15, empujado por los sacerdotes de su diócesis, el obispo Miguel Patiño Velázquez emitió un comunicado alertando la gravedad de la situación y del fracaso de las autoridades para enfrentarla.

Consternado, advirtió en el mensaje que, en lugar de disminuir, “han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado

y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo. En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el Ejército y los federales se vayan de Michoacán y a los comisariados ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición”.

“Los gobiernos municipales y la policía —denunció— están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor de que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad”.

Y con una crudeza inusual señaló: “Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas”.

El momento de quiebre en la confrontación entre autodefensas y Templarios se produjo unos cuantos días después del mensaje del purpurado. El sábado 26 de octubre, unas 600 autodefensas tomaron desarmados el centro de Apatzingán.

Habían llegado hasta allí provenientes de Tepalcatpec y Buenavista Tomatlán, en una caravana de alrededor de unos 100 vehículos, para protestar contra el crimen organizado en el centro neurálgico de su poder. La acción

estuvo coordinada entre los alzados y el Ejército. Durante el trayecto, los civiles fueron resguardadas por militares. Una noche antes de su arribo, fuerzas federales desarmaron a la Policía Municipal de esa ciudad, acusada de trabajar para los Templarios.

El objetivo de la movilización era tomar Apatzingán y romper el asfixiante cerco impuesto por la *maña*. José Manuel Mireles así lo reconoció. “Estábamos decididos a hacerlo -le dijo a *Reforma-*, ya llevábamos más de seis semanas de bloqueo. No tenemos incluso a dónde llevar a nuestros enfermos y pacientes; está más cerca Apatzingán, con 60 kilómetros (de distancia), que Guadalajara, con 300”.

Apatzingán es la capital del imperio templario. Con una población de cerca de 124 mil habitantes, es el motor económico de Tierra Caliente. Desde allí se conectan varios municipios vecinos con la Autopista Siglo 21, que va de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro, y de ahí a Morelia.

Los soldados condicionaron la entrada de los civiles armados a Apatzingán a que lo hicieran sin armas y regresaran a sus municipios en cuanto terminara la protesta. Los civiles marcharon sin sus pistolas y fusiles. Al llegar al centro de la ciudad fueron recibidos a balazos. Un francotirador disparó contra ellos desde el campanario de la iglesia ubicado en el Zócalo. Un hombre fue herido de bala. Desde el mismo lugar, otro sujeto aventó una granada; sus esquirlas laceraron a otro autodefensa. Una tercera persona rafagueó desde la azotea de un edificio y destrozó los cristales de una de las camionetas de los manifestantes. Seis vehículos, un tráiler y un camión repartidor de agua fueron quemados.

Al regresar a Tepalcatepec, los autodefensas fueron recibidos como héroes. Unas 5 mil almas los vitorearon.

Los Templarios reviraron a fondo. En la madrugada, hombres con fusiles y explosivos de fabricación casera atacaron subestaciones de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que abastecen a 18 municipios y quemaron varias bombas expendedoras de seis gasolineras. Provocaron un apagón mayúsculo en toda la región.

La acción militar fue acompañada de protestas ciudadanas. El día siguiente, 27 de octubre, en el mismo Apatzingán, cientos de personas tomaron las calles para expresar airadamente su malestar por la incursión de las autodefensas. En lonas y cartulinas señalaron que fueron las fuerzas federales quienes habían llevado la violencia a esa ciudad.

Una de las mantas que cargaban los manifestantes decía: “Llegó la violencia y el caos al Municipio de Apatzingán. El Ejército la trajo y la acompañó en todo su recorrido”. Otra señalaba: “Qué vergüenza. La Policía Estatal y Federal y el Ejército Mexicano primero tomaron la Presidencia (Municipal), oficinas de la Policía violentando toda autonomía y desarmaron a nuestros policías”.

La multitud se dirigió a la sede de la zona militar. Furibunda arremetió contra los soldados y exigió le entregaran a los uniformados que habían acompañado a las autodefensas.

Ante los ataques, el Ejército respondió con sobrevuelos, patrullajes permanentes, puestos de control aleatorios y resguardo de instalaciones de la CFE y Pemex.

Un día más tarde, los representantes del Consejo de Autodefensas fueron convocados a Apatzingán, para con-

versar con Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República. Según el doctor Mireles, asistente al encuentro, el Procurador le dijo al general de zona: “Apoyo tu decisión de permitirles que se defiendan y bien armados, pero quiero que sepas que no deja de ser ilegal”. Y éste le respondió: “Lo sé, pero sabes que en legítima defensa todos los ciudadanos se pueden armar, y eso es lo que están haciendo”.

Mireles narró esa conversación a la periodista Laura Castellanos. “Nos pidieron —le contó— que mantuviéramos la claridad del movimiento, y que no se nos incursionara gente de otros cárteles, pues tienen la espinita de que nuestro movimiento social está financiado por otro cártel”.

El médico le señaló que desde el principio del levantamiento tuvieron lazos con mandos militares y luego con la Policía Federal, y que a lo largo de los meses la coordinación con ambos se incrementó. “Inicialmente, su objetivo era patrullar los pueblos, cuidar las carreteras, pero sin meterse en los combates”. Pero ahora -le precisó- son los efectivos federales quienes intervienen en los enfrentamientos contra Los Templarios y ellos se repliegan.

En la reunión con el General y con el Procurador acordaron no traer armas a la vista por respeto a la institución castrense. El general de zona les instruyó: “En las trincheras póngalas todas hacia mí si quieren cabrón, pero en el pueblo no vayan a las tortillas con el pinche cuerno colgando a las espaldas”.

Pero la guerra continuaba. El 1 de noviembre de instalaron narcorretenes en las dos carreteras que conectan a Apatzingán con Buenavista Tomatlán y Aguililla. Sus vigilantes se ampararon en una deslavada manta que los

presentaba como integrantes de un efímero “Movimiento por la paz”. A unos cuantos metros, las fuerzas federales colocaron sus puestos de observación y dejaron hacer a los *malosos*.

En plena escalada, el gobierno federal decidió dar un golpe de mano a una posición clave de los Templarios. El 4 de noviembre el Ejército asumió las funciones de seguridad pública en Lázaro Cárdenas. La Secretaría de Marina (Semar) designó al vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado, director de la Administración Portuaria Integral (API), y al capitán de navío José Luis Corro Chávez, capitán del puerto.

Cerca ya del naufragio, el 18 de noviembre el Gobierno de Michoacán anunció una nueva estrategia, diseñada con la Federación, para contener el avance de los grupos de autodefensa. Sin revelar las líneas de acción, se aseguró que no permitirán que el movimiento armado siguiera expandiéndose en la entidad.

Ese mismo día, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, advirtió que no habría más tomas por las autodefensas porque “la Federación” tiene una estrategia para contenerlos y “reducirlos”.

Sin embargo, el 19, los civiles armados ocuparon Tancítaro. Dos días después, el mandatario estatal anunció: “No se permitirá que se sigan expandiendo. Si tratan de ingresar a otro municipio, serán detenidos por el gobierno del estado y la Federación”. Por supuesto, más allá de estas palabras, los civiles armados siguieron avanzando durante esos días y a lo largo de los meses siguientes.

Desbordado, Vallejo volvió a amenazar. “Tanto están fuera de la ley los delincuentes — dijo — como las guar-

días comunitarias que manejan, entre otras cosas, armas reglamentarias que ningún ciudadano puede traer, nada más de entrada, y nadie puede hacer justicia por propia mano". Nadie pareció hacerle caso.

Voces parecidas comenzaron a escucharse desde la Federación. El día del aniversario de la Revolución Mexicana, durante la firma de un convenio de colaboración con la CNDH, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que los grupos de autodefensa no iban a extenderse más en el país, ya que los operativos del gobierno federal para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional están dando resultados y les quitarán el "pretexto a quienes dicen estar buscando la justicia".

La advertencia no sirvió de mucho. Los enfrentamientos continuaron. El 27 de noviembre, dos agentes de la Policía Federal murieron y 13 más quedaron heridos en una emboscada de los Templarios sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán. Nuevamente, se sonaron las sirenas de alerta. Ese mismo día, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que "en Michoacán, el Estado mexicano (está) amenazado".

Mientras tanto, refugiado en la tranquilidad de los rumbos del Ajusco en la ciudad de México, el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, hizo señalamientos claves sobre la estrategia gubernamental, en el Seminario sobre la Violencia, auspiciado por El Colegio de México.

Según el investigador Sergio Aguayo, éstas consistieron en tres puntos. Primero, las dependencias de segu-

ridad se repartieron la coordinación de las operaciones: el responsable de Michoacán es el Ejército; de Tamaulipas, la Marina, y de La Laguna, la CNS-Policía Federal. Segundo, hay comunitarios buenos y malos. Los primeros responden a intereses ciudadanos legítimos y los segundos son ‘paramilitares’ al servicio del crimen organizado. Y, tercero, las guardias ciudadanas son “anticonstitucionales pero funcionales”.

LA CAPITAL MUNDIAL DEL AGUACATE

Signo de los nuevos vientos que soplaban, y que habían quedado al descubierto con la primera toma de Apatzingán, a mediados de noviembre de 2013 las autodefensas ocuparon Tancítaro, con el apoyo del Ejército y la Policía Federal.

Tancítaro tiene el record guiness del guacamole. Es conocido como la capital mundial del aguacate. La producción de oro verde en el municipio en 2013 fue de 195 mil toneladas, 185 mil para exportación, la mayoría destinada a Estados Unidos y 10 mil toneladas para el mercado nacional. La derrama económica que dejó ascendió a 5 mil 550 millones.

Para los Templarios, el municipio era fuente de ganancias extraordinarias. Según la revista *Expansion* los sectores aguacatero y limonero en el estado le generaban al cártel ingresos superiores a mil millones de dólares año.

La revista reproduce el testimonio de un agricultor de Tancítaro de 41 años que pide no ser identificado por su nombre, en el que narra la extorsión que padecían. “Al

principio (pedían) una cuota de 1,000 pesos (al año) por hectárea”, señala un productor de Tancítaro, de 41 años. “Y al siguiente año nos doblan la cuota. (...) La mitad de (los ingresos de) la producción se iba en gastos y la otra mitad casi se estaba yendo en cuotas”.

El 16 de noviembre, las autodefensas tomaron el control del municipio. Con el rostro cubierto, arribaron a la cabecera municipal a bordo de camionetas con leyendas contra Los Caballeros Templarios. Ocuparon el zócalo y la presidencia municipal, quedándose con el armamento de los policías locales.

Poco antes, el convoy de militares y civiles armados había sido emboscado por Templarios. Los enfrentamientos duraron 45 minutos. El saldo de los combates fue de 9 muertos y 7 heridos.

El alcalde panista, Salvador Torres Mora, apoyó la toma. El gobierno federal —advirtió— debía hacer una limpia general de criminales en todo Michoacán. El edil sostuvo que las guardias comunitarias de su localidad eran auténticas, pues casi todos sus integrantes eran de la demarcación. “No soy de izquierda ni me siento el Che Guevara, pero el pueblo me eligió y estoy comprometido a brindarle mi apoyo”.

Además de Tancítaro los alzados tomaron Pareo y se siguieron de frente sobre la región que comunica a Buenavista y Tepalcatepec. Se apoderaron de Zirimbo y luego de Condímbaro. Sin embargo, dejaron fuera la franja que colinda con San Juan Nuevo.

En su ofensiva, dejaron sin protección también cinco comunidades, cuyos habitantes abandonaron sus vivien-

das. Más de mil 500 personas tuvieron que buscar refugio en la Casa del Sembrador, de la parroquia San Francisco de Asís, pues integrantes de la delincuencia organizada los amenazaron con quemar sus casas con todo y niños.

Contradiendo las declaraciones del gobernador, José Manuel Mireles avisó, inmediatamente después de la toma de Tancítaro, que su próxima misión sería “rescatar” el municipio de Los Reyes, donde se reportaba el mayor número de asesinatos de todo el estado.

El 26, la población de Santiago Acahuato, perteneciente al Municipio de Apatzingán, se alzó en armas y fue ocupado por autodefensas. El pueblo levantó barricadas y aceptó el establecimiento del grupo armado.

El responsable del grupo de avanzada de los guardias comunitarios, Francisco Range, señaló que continuarían la marcha hacia San Juan Nuevo, Uruapan, Apatzingán, Arteaga y Tumbuiscatío. “Cerraremos la franja desde Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, porque nuestra función es liberar a los pueblos del sometimiento de *Los Caballeros Templarios*. Cuando la comunidad se puede defender sola nosotros seguimos nuestro camino a otros pueblos”, añadió.

Lejos de disminuir, el desorden en las filas gubernamentales creció. De manera sorpresiva, el 3 de diciembre, Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, señaló que la solución a la violencia en Michoacán no pasaba por la integración de grupos de autodefensa. “No es con grupos violentos enfrentados con otros grupos violentos (como se va a llegar a una solución) sino respetando la ley”.

Para despedir el año a tambor batiente, el 30 de diciembre un grupo de autodefensa tomó la cabecera municipal de Churumuco y la tenencia de Poturo, poblaciones ubicadas a menos de 20 kilómetros de San Jerónimo, municipio de Huetamo.

Aunque desde el punto de vista territorial, las ocupaciones realizadas durante diciembre no fueron muy extensas ni muy pobladas, desde el punto de vista estratégico fueron muy significativas.

XI) TIEMPOS EQUÍVOCOS

ENERO

La verdad de un hombre, decía el novelista francés André Malraux, comienza siempre a partir de lo que oculta. Con la llegada de 2014, la verdad gubernamental sobre las autodefensas, se fue esclareciendo.

En un vuelco de 180 grados del discurso oficial, el 6 de enero de 2014, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que los grupos de autodefensa de Michoacán tuvieran relación con el crimen organizado. Más aún, reconoció que había colaboración estrecha entre el gobierno federal y los alzados.

En el caso de Michoacán -dijo en conferencia de prensa- hemos venido trabajando con estos grupos denominados autodefensas, los cuales por supuesto donde estamos seguros, tenemos datos, que no tienen que ver o están asociados al crimen organizado. "Esperamos encontrar respuesta -advirtió- porque el caso es que no pueden estar

en esta denominación y en esta circunstancia, ellos lo saben y nos han dicho su por qué y su circunstancia y nosotros les decimos que lo que queremos es construir con ellos, dotarles de la seguridad, y que quien quiera participar esté dentro de las instituciones, y en eso estamos trabajando fuertemente”.

Ese mismo día, por primera ocasión, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la violencia que se padece en varios municipios. “En Michoacán –aseveró– existe debilidad institucional”. El jefe del Ejecutivo admitió que entre los momentos difíciles que tuvo que afrontar en su primer año de gobierno estaban los episodios de violencia en varios municipios michoacanos, en los que bandas del crimen organizado sostienen enfrentamientos con los grupos de autodefensa y contra las Fuerzas Federales.

Las declaraciones gubernamentales tenían como telón de fondo el recrudecimiento de los combates en Michoacán. Para esas fechas las autodefensas operaban en 60 localidades de 21 municipios. Controlaban territorios con explotaciones agrícolas y ganaderas muy productivas. Su estrategia consistió en apoderarse de Apatzingán, pero también de lugares estratégicos como Arteaga, Tumbiscatío, Coahuayana, Múgica, Parácuaro y Uruapan, para cerrar la pinza del control territorial de la región. Extraoficialmente se hablaba de que en sus filas participaban 7 mil hombres armados.

Los días 4 y 5 de enero, grupos de autodefensa tomaron Parácuaro. Once agentes municipales fueron detenidos por los alzados. La reacción de los Caballeros Templarios fue enérgica: incendiaron autobuses, bloquearon carrete-

ras y emboscaron y mataron a dos soldados. Las bajas castrenses no fueron reconocidas por el gobierno. Verdaderos combates se trabaron entre los dos bandos. Fue un fin de semana caliente.

Simultáneamente, pobladores de Parácuaro, encabezados por su síndico municipal, Inocencio Carbajal, bloquearon la autopista que comunica a Apatzingán. Los manifestantes exigieron así la salida del grupo de autodefensa que tomó control de la seguridad en ese poblado.

Al explicar lo sucedido, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna, cantinfleó. “No se trata de un avance geográfico de las autodefensas. Se trata de un surgimiento y brote independiente (de civiles armados)”, balbuceó a manera de explicación.

Peor aún lo hizo, el gobernador Fausto Vallejo. “(Quienes tomaron control de la seguridad) —aseguró— son gentes de fuera, realmente son pocas las gentes que están de Parácuaro, y obviamente hay el temor, la inconformidad de los habitantes y funcionarios por lo que está sucediendo”.

Jesús Bucio, líder de las autodefensas de ese municipio, explicó en una asamblea relatada por *El Universal* que ellos se armaron allá dos meses atrás, después de que los criminales secuestraran, violaran y mataran a una niña de 15 años por la que pedían un rescate. Añadió: “Soy gente trabajadora. La necesidad me hizo ponerme esta grupera de macho”, y señaló sus charreteras, su arma.

El 8 de enero, con protestas en todos el estado, a alcaldesa priísta de Parácuaro, Lucía Barajas Vázquez, acudió a la 43 zona militar, ubicada en la periferia de Apatzin-

gán, para solicitar a los mandos castrenses que liberen a los 11 policías municipales que permanecen detenidos en la cárcel local, y pidió desalojar a los grupos de autodefensa por considerar que usurpan funciones.

Antes la amenaza de que las autodefensas llegaran a Huetamo, la alcaldesa de ese municipio Dalia Santa Ana Pineda, se puso al frente de un grupo de transportistas y ciudadanos que marcharon por las principales calles de esta cabecera municipal en contra de los alzados.

En el quinto día de protestas contra la presencia de autodefensas en Parácuaro, docenas de tráilers, camiones y vehículos repartidores fueron secuestrados para bloquear los caminos por los Templarios. Algunos fueron incendiados. En el puente que va a la comunidad de Uspero, entre bloques e incendios de vehículos, colocaron una manta que decía: "Peña Nieto queremos paz. Ya no enfrentes a los pueblos de Michoacán apoyando a los grupos de autodefensa".

Pero el hecho central que precipitó los mensajes del gobierno federal sobre las autodefensas fue el accidente aéreo sufrido por Juan José Mireles el 4 de enero. Una avioneta con matrícula XB-MSA en la que se desplazaban cinco personas se desplomó cerca de La Huacana. El doctor, que viajaba en ella, quedó herido. Tras el accidente fue trasladado a la ciudad de México bajo protección de las autoridades.

Extraoficialmente se informó que su desplazamiento se habría realizado por cuestiones de seguridad y ante la posibilidad de que algún comando irrumpiera en el Hospital Star Médica de Morelia, adonde fue llevado después del accidente.

El secretario de Gobernación explicó sin ambigüedad alguna: "Sí (lo) cuidamos, porque es una persona que

ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a los Templarios. Claro que di la instrucción de que se le diera el cuidado, y que se le apoyara, por eso se ha visto a la Policía Federal participando”.

Mal parado, y en medio de un escándalo público por la protección brindada a Mireles, Osorio Chong dijo que mantenían el diálogo con las autodefensas “acordando el que se metieran a la legalidad, que si querían participar pudieran hacerlo dentro de las instituciones, con capacitación y, por supuesto, ayudando a las fuerzas de seguridad”.

El accidente -reconoció- “movió un poco este diálogo”. Y añadió: “Queremos ver en qué sigue el hecho del acuerdo de que ya estén dentro de la legalidad”.

OTRA VEZ APATZINGÁN

Incontrolable, la expansión de las autodefensas siguió a toda máquina. En un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se registraron 44 grupos de civiles armados en Michoacán, distribuidos en 45 regiones, de 19 municipios en la zona de Tierra Caliente.

El 12 de enero, las autodefensas ocuparon Nueva Italia después de un combate de dos horas. Llegaron un día después de ingresar a El Ceñidor, municipio de Múgica, cuyo alcalde participó en una marcha contra los civiles armados. Con ello, garantizaron el control de un centro de comunicación estratégico, desde donde se puede afectar el tránsito entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Apatzingán.

El combate fue duro. Templarios y autodefensas se dieron con todo. Los comercios cerraron sus puertas y un

helicóptero sobrevoló el terreno. Se levantaron barricadas y se disputó el control de la ciudad. Finalmente, los civiles armados ganaron la batalla.

Simultáneamente, Apatzingán vivió durante días una situación tensa. Con las gasolineras cerradas, el combustible escaseó. Bombas molotov fueron arrojadas contra varios edificios. Los comerciantes del mercado municipal sacaron su mercancía ante la amenaza de que sería incendiado. Los soldados acordonaron el primer cuadro de la ciudad. El 13 de enero, un grupo simpatizante de los Templarios se enfrentó a golpes con soldados. A las 3 de la tarde más de 200 personas marcharon rumbo a las instalaciones de la 43 Zona Militar, reclamando el apoyo del gobierno federal a las autodefensas. Exigieron diálogo con el mando castrense. Un trailer fue secuestrado para arremeter contra la zona. Soldados del 51 batallón de infantería arremetieron contra la muchedumbre, y la dispersaron a culatazos y golpes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los ciudadanos de ese país no viajar por carretera a Morelia o Lázaro Cárdenas, y diferir los viajes no esenciales a Michoacán.

Advirtió que los grupos armados, que realizan frecuentemente bloqueos a carreteras, no son hostiles hacia los turistas. Sin embargo — dijo el gobierno estadounidense — deben considerarse volátiles e impredecibles.

EL COMUNICADO

En medio de un sonado escándalo político por hacer reconocer públicamente su relación con las autodefensas y

sujeto a todo tipo de presiones, el gobierno federal metió reversa y comenzó a jugar a marchas forzadas la ficha de su desarme.

De entrada, anunció un acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán. El acuerdo firmado entre el gobierno federal y el de Michoacán propone a las autodefensas entregar las armas, replegarse a sus actividades y los invita a enlistarse como policías si tienen la vocación para hacerlo.

De inmediato comenzaron a desplegarse aparatosamente destacamentos militares en la zona de influencia de los alzados.

Con Mireles convaleciente y bajo su custodia, lo hizo grabar una declaración anunciando la necesidad de entregar las armas.

En El Noticiero de Televisa del 13 de enero sobre las 23:20 horas, afirmó que él y otros líderes aceptaban “regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que sólo somos civiles, somos gente de trabajo y de bien que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía porque durante mas de 12 años no hubo quien nos la resolviera”.

Sin embargo, de inmediato metió reversa. En una conferencia de prensa en una casa de la Ciudad de México que ofreció a la misma hora en que se difundía su entrevista, rectificó. “No he autorizado ningún desarme, sólo hasta que detengan a las siete cabezas (templarias), para dar esa instrucción se requiere que se lleve a cabo un consejo general, no puedo autorizar nada, no estoy a favor del desarme ahora”, afirmó sin titubear.

“Estamos dispuestos a desarmarnos –añadió– cuando las autoridades cumplan con su responsabilidad (...) Este problema no se resuelve con política, con palabras bonitas, se resuelve como le estamos haciendo, en 10 meses ya estamos en el 25 por ciento del estado, en 28 municipios y 69 poblados”.

Hipólito Mora también se desmarcó del gobierno. Sin darle muchas vueltas al asunto, señaló: “primero deberían desarmar a los malos, a Los Caballeros Templarios, porque si nos desarman a nosotros se nos van a venir y nos van a fregar con todo y familias. Que empiecen por desarmar a aquellas gentes. Que no agraven las cosas, que detengan primero a quien deben detener”.

Un autodefensa de Nueva Italia respondió: “Que Osorio Chong venga a desarmarnos. Nunca va a venir, pero que lo intente”.

Ese mismo día, el Consejo de Autodefensas anunció que los habitantes de la cabecera municipal de Coahuayana –en la región costa-norte de la entidad “se levantó en armas contra el narco”. La rebelión fue provocada por el asesinato a balazos de Julio Navarrete, conocido mecánico muy querido en la región. Los pobladores sacaron sus armas e hicieron frente a los homicidas.

Aunque en la opinión pública surgieron todo tipo de dudas y cuestionamientos sobre lo que estaba aconteciendo, la maniobra gubernamental fracasó. En represalia, las autoridades le retiraron la vigilancia a Mireles.

Pero, además de la toma de posición pública del doctor y sus compañeros, lo que verdaderamente provocó el descarrilamiento de la iniciativa gubernamental de des-

arme, fue el rechazo de las comunidades a entregar las armas, y el enfrentamiento con el Ejército en el ejido Antúnez.

Alertados por los de Nueva Italia, los pobladores sabían con anterioridad que los soldados se dirigían a su poblado. La gente bloqueó el puente de la carretera Nueva Italia-Apatzingán. Iban desarmados. El convoy militar tuvo que detenerse.

Diversos videos fueron grabados en el momento. En ellos puede verse a la población forcejeando con un centenar de militares: los desarman y les quitan los cascos. Los soldados dispararon primero al aire. Casi nadie se retiró. En ese momento usaron nuevamente sus armas pero ahora contra los civiles. Tres personas murieron. La gente no se retiró.

Rodrigo Benítez Pérez, de apenas 25 años de edad, fue uno de los fallecidos. Su madre, Juana Pérez Avilés, que trabaja todos los días de 7 de la mañana a 4 de la tarde en una tortillería, le contó al periodista de *La Jornada* Fernando Camacho, que el día en que murió su hijo Rodrigo prácticamente todo el pueblo acudió al llamado de ayuda de los grupos de autodefensa para evitar ser desarmados. "Fue una cosa tan rápida -recordó la mujer. Yo no sé cómo pasó, porque (Rodrigo) se encaminó a unos 25 metros de aquí y me dijo que lo esperara, pero ya nunca regresó. Él ya venía para acá, pero recibió una bala en el lado derecho de la espalda. Lo alcanzaron a llevar al doctor, pero ya no se pudo hacer nada por él".

Mario Pérez Torres fue otra de las víctimas mortales. Su hijo Jorge Pérez García recordó con Fernando Camacho haber visto a su padre muerto, "tirado al lado de la patrulla. El tiro le entró por la quijada y le desbarató todo

aquí atrás. Ahí me lo dejaron tirado, pero no llevaba armas, nada más iba a apoyar a las autodefensas”.

Consternada, Juana Yépez García, la pareja del finado, cree que “la muerte de él fue injusta porque a los soldados se les hizo fácil venir a dispararle a gente inocente. Antes la gente los saludaba, pero ya no. Los soldados se volvieron matones”.

Por allí de las dos de la madrugada, cuenta Julio Hernández López, “las órdenes cambiaron. En varios casos, según la misma fuente (*Valor por Michoacán*) las armas fueron devueltas a grupos de autodefensa que pudieron reinstalar sus rutinas de protección (rondines, retenes, por ejemplo). Los soldados se retiraron a sus cuarteles y al siguiente día los roles se mantuvieron sin cambios, con los templarios en fuga cantada, las autodefensas en posesión de armas, el Ejército y la Policía Federal tomando posesión de la zona, el gobernador sentado en un Apatzingán al que de otra manera no iría y el secretario de Gobernación (MAO) como comandante en jefe de una farsa popular prolongada”.

Un día después, “fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Apatzingán, Michoacán, mientras los elementos de la policía municipal fueron desarmados y acuartelados en espera de órdenes”. En los puentes peatonales de la ciudad habían aparecido mantas exigiendo la salida de las autodefensas.

Presionado para aceptar el desarme, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán difundió el 15 de enero un comunicado en el que refrendó que no depondría las armas. La exigencia del secretario de

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de deponer las armas y regresar a sus comunidades de origen -alertaron- les hace pensar que “sólo se busca proteger a *los templarios*”.

Ya es tiempo –advirtió el Consejo– “de que el pueblo michoacano se dé cuenta del poderío (con) que contamos para enfrentar a todas estas lacras de *Los caballeros templarios*”. Según ellos en sus filas hay 25 mil hombres armados, pero “la realidad es que, en una situación de emergencia, en menos de 15 minutos al menos contamos con un ejército de unos 140 mil elementos para irnos a la guerra si es necesario”.

Ese mismo día, los alzados se encontraron con una novedad: el gobierno federal nombró a una especie de Virrey para hacerse cargo del manejo del conflicto en la entidad.

EL PEP GUARDIOLA DE MICHOACÁN

A finales de 2013, las operaciones militares de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La *narcoguerra* en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extranjera. Los inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como señaló una nota de Reuters a propósito de la *narcominería*: “el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda restaurar el orden y ganar la batalla contra *Los caballeros templarios*”.

Ante el desbordamiento informativo y político, el gobierno federal anunció un nuevo plan hacia la entidad.

Entre otros, tres hechos nuevos distinguían este nuevo programa de los previos. Primero, la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la inseguridad pública. Segundo, la intensificación de la guerra contra los *templarios* por grupos de autodefensa. Y tercero, la intervención directa del grupo michoacense en la vida política de Michoacán, al margen del pacto federal.

Efectivamente, el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes el 15 de enero, personaje cercano a Enrique Peña Nieto y hasta ese momento titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como un moderno virrey, arropado con la figura de comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, colocó al del presidente, léase Atlacomulco, Estado de México, en una posición clave para la definición de la política de seguridad nacional. De paso, acota la zona de influencia del secretario de Gobernación en el asunto.

La designación de Alfredo Castillo fue acompañada del nombramiento como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de un personaje muy experimentado en el área de inteligencia, vinculado a Emilio Chuayffet: Monte Alejandro Rubido. No duró mucho en esa responsabilidad. El 18 de marzo de 2014 pasó a ser Comisionado Nacional de Seguridad.

Castillo Cervantes había sido subprocurador en Cuautitlán Izcalli y procurador de justicia del Estado de México, durante la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto y en los primeros meses de mandato de Eruviel Ávila. Aunque no se había destacado como un gran operador, se le construyó una imagen inflada.

Su intervención como bateador emergente en el caso trágico caso de la niña Paulette careció de credibilidad. El desenlace dejó más preguntas que respuestas. Se le atribuyó la aprehensión de Elba Esther Gordillo, pero ésta fue parte de una estrategia diseñada por Bazbaz y la SHCP a través de mecanismos de inteligencia financiera. Su papel para resolver la investigación acerca de la explosión en el complejo administrativo de Pemex, fue irrelevante.

Alfredo Castillo llegó a Michoacán con la bendición presidencial y con suprapoderes. Relegó al gobernador Vallejo, permanentemente enfermo y ausente, a una especie de personaje de acompañamiento. Su llegada, con el consentimiento de la clase política local, fue en los hechos una desaparición práctica de Poderes.

En sus primeras apariciones públicas, Castillo dio muestras de banalidad a la hora de tratar asuntos públicos. En entrevista con Roberto Zamarripa en *Reforma*, dijo que él no podría ganar la guerra solo, “de la misma manera que Messi por sí mismo no te puede ganar un Mundial. Se necesita un buen portero, buenos defensas, buenos medios... y se necesita un buen director técnico que los haga jugar”. Se comparó con Pep Guardiola y afirmó que estaba leyendo un libro del ex entrenador del Barcelona.

Las desafortunadas declaraciones tuvieron consecuencias inmediatas. En papel de árbitro, Jorge Zepeda Patterson le marcó fuera de lugar. Castillo — dijo el periodista — no ha entendido, no puede ser el Guardiola de Toluca. En su libro intitulado *Otra manera de ganar*, Guardiola argumenta sobre la necesidad de apostar por los cuadros locales. En Michoacán, la designación del secretario de Se-

guridad Pública (Carlos Hugo Castellanos Becerra) y del Procurador General de Justicia del Estado (José Martín Godoy Castro) fueron dados a conocer en conferencia de prensa por el gobernador Fausto Vallejo, pero en los hechos fueron impuestos por los mexiquenses. Ambos funcionarios trabajaron con Alfredo Castillo en el Estado de México y recientemente en la Profeco.

El comisionado no paró en su comparación con Guardiola. Fue más allá y afirmó que sus hijos lo ven “como a un Batman que agarra a los malos”. El panista Juan Ignacio Zavala, lo ridiculizó y afirmó que “estamos ante alguien que gusta el papel de superhéroe”.

Las pifias no se quedaron allí. A los pocos días de llegar al cargo, empeñado en minimizar el conflicto y ensalzar la estrategia oficial, declaró que el avance de las fuerzas federales en Tierra Caliente había sido “menos complejo de lo que esperaban”. Lo sucedido desde entonces desmintió sus palabras.

Muy pronto quedaría claro su personal estilo de enfrentar el conflicto. La diputada independiente Selene Vázquez, se lo resumió en una entrevista a Arturo Cano: “Amedrentar, amedrentar y amedrentar”.

LA SORPRESA DE DAVOS

Lo quisieron sacar por la puerta y se les metió por la ventana. Durante más de un año la estrategia gubernamental sobre la inseguridad pública y las autodefensas consistió en tratar de sacarlo de la agenda informativa de los medios de comunicación. La apuesta de la nueva administración consistió en cambiar la percepción no en resolver el problema.

Pero el asunto se les presentó en el lugar y momento menos oportunos. En el Foro Económico Mundial de Davos, adonde el Presidente Peña Nieto llegó a presumir el éxito de sus reformas estructurales y las nuevas oportunidades de inversión que eso abre para México. El Foro, como se sabe, es la gran Feria anual de los Amos del Universo. Es el gran mercado global al que asisten los principales directivos de organismos económicos y financieros internacionales, empresarios y gobiernos para discutir cuestiones económicas.

Cuando el mandatario mexicano festejaba las virtudes del nuevo entorno económico del país en la Conferencia Magistral “Transformando México: Sociedad, Política, Economía”, Klaus Schwab, presidente del Foro, se portó como un verdadero aguafiestas. En la sesión de preguntas y respuesta, le señaló que a pesar de las buenas noticias derivadas de las reformas aprobadas, el punto de la inseguridad está en centro de las preocupaciones de los medios de comunicación. “En las últimas semanas ha habido reportes sobre grupos de autodefensa y cómo serían integrados en los mecanismos de seguridad” -apuntó Schwab. Dio a entender lo que es un valor sabido en los medios internacionales: los cambios estructurales no tienen valor si no hay seguridad.

Con media estocada dentro, el Presidente Peña le respondió que el problema de la inseguridad no es privativo de México, pues azota a toda América Latina. Le informó que el número de homicidios vinculados al crimen organizado disminuyó desde el inicio de su gobierno en un 30 por ciento. Señaló la instrumentación de una estrate-

gia focalizada, basada en la regionalización del problema de la inseguridad, para atender la problemática específica de las distintas regiones y entidades. Puntualizó que había emergido una organización genuina de algunos grupos de autodefensa, para defenderse de la incursión del crimen organizado. Y anunció la convocatoria del Estado para que aquellos grupos de autodefensa que quieran participar en las tareas de seguridad, lo hagan.

Para limpiar el camino, a los cuestionamientos sobre la posible intervención del general Óscar Naranjo, asesor externo de seguridad del presidente Peña, en el impulso a los grupos de autodefensa, el gobierno respondió con el regreso del ex militar colombiano a su país “para trabajar de lleno en el proceso de paz, sumarse a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos”. Desde Davos, Santos lo dio a conocer a través de su cuenta en twitter.

Mientras tanto, los civiles armados siguieron echando bala. A pesar de las declaraciones públicas de las autoridades, la ofensiva militar siguió. El 23 de enero una autodefensa que controla la región del valle de Apatzingán ocupó la localidad de Las Yeguas, municipio de Parácuaro. Dos días después, un grupo de tomó las comunidades indígenas de San Pedro Jucutacato, Carátacua, Chimilpa y Cutzato, municipio de Uruapan, ubicadas a unos kilómetros de la cabecera municipal rumbo a San Juan Nuevo. Unos 40 jóvenes encapuchados, muchos de ellos armados, bloquearon los accesos de Jucutacato, pequeña comunidad purépecha, donde colocaron barricadas con costales de arena. En la página Valor por Michoacán, apareció: “Jucutacato se levanta en armas contra el crimen organizado. En ambas

acciones, los civiles armados fueron acompañados de fuerzas federales.

El 27 de enero le tocó turno a Peribán, una comunidad de 21 mil habitantes. Los autodefensas llegaron armados con rifles y pistolas, playeras blancas con el logotipo de “Policía Comunitaria” y algunos con el rostro cubierto. Levantaron barricadas y asumieron el control de la localidad.

Ese mismo día, en la cuna del levantamiento, se firmó el Pacto de Tepalcatepec. En él grupos de autodefensa acordaron con el gobierno federal y la administración estatal incorporarse de manera legal a fuerzas de seguridad pública y a las Defensas Rurales. El acuerdo fue firmado por el comisionado Castillo Cervantes y el gobernador Fausto Vallejo. Compromete a los civiles armados a registrar las armas con que cuentan; a presentar un listado de quienes aspiren a regularizar su situación para, una vez validado cada expediente individual, formar parte de los cuerpos de defensas rurales a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional También acredita la posibilidad de incorporarse a las policías municipales, previa autorización del cabildo, además de la acreditación de los exámenes de control y confianza dispuestos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Pacto fue en realidad una ruta de cooptación para institucionalizar la rebeldía con cuernos de chivo incorporando a los civiles armados a las guardias rurales. Una acción sin posibilidades de funcionar. A final de cuentas, fue un acto para la gradería, para tomarse la foto, para silenciar las voces que alertaban sobre los peligros de que civiles se hicieran cargo de la seguridad pública. Pero no fue una acción eficaz para acabar con la autonomía de las milicias.

Mientras sus dirigentes se tomaban la foto con los funcionarios públicos, los civiles armados siguieron su avance, ahora sobre el municipio de Peribán.

Entre loas del Comisionado Castillo a las autodefensas y solicitud de altura de miras para “institucionalizarse”, el documento de ocho puntos establece la convicción de los gobiernos federal y estatal de “reconstruir la tranquilidad y el orden públicos desde un enfoque integral que abarque los aspectos sociales, económicos y culturales, para lo cual es indispensable utilizar todas las herramientas y mecanismos legales para lograr un ambiente de institucionalidad duradera y estable”, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Gobernación. Las autodefensas se vuelven institucionales al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales.

En declaraciones a Radio Fórmula, el 28 de enero, el comisionado Alfredo Castillo, aseguró que los grupos de autodefensa podrán portar armas de bajo calibre o las que usan regularmente para la caza. Anunció, por enésima ocasión, que lo que estaba en puerta era un desarme total, el cual sería hecho por el Ejército.

Y, en entrevista en MVS, el doctor Mireles reviró diciendo que la legalización de los grupos de autodefensa y el registro de armas ante el Gobierno Federal es solo un teatro. “De hecho —afirmó— es una burla de mis propios compañeros hacia el Gobierno Federal ir a registrar una pistolita que no usan en las autodefensas. Están burlándose unos de otros. No hay algo realmente formal, todo es teatro. Imagínate, yo tengo todas mis armas registradas, pero son de cacería, deportivas”.

Sin coordinación con los civiles armados de Tierra Caliente, el mismo 28, se levantaron en armas la cabecera municipal de Yurécuaro y comunidades vecinas como El Sabino, Las Palomas, en contra del crimen organizado por la ineptitud y caso omiso a denuncias ante autoridades municipales, estatales y federales". La ofensiva siguió su curso. El 5 de febrero tomaron la cabecera municipal de Lombardía, municipio de Gabriel Zamora.

Convertido Mireles en una figura incómoda para el gobierno, los integrantes de las autodefensas más afines al Comisionado Castillo, se deslindaron del médico. Designado como vocero del movimiento, Estanislao Beltrán, declaró que Mireles Valverde "está en la recuperación de su accidente y él no sabe cómo se encuentran las autodefensas. El doctor, dijo, "es una gran persona, es un hombre de calidad, pero a nosotros nos interesa que él se recupere. Él no está en condiciones de declarar; no tiene conocimiento de las acciones que estamos haciendo acá, del avance".

El 8 le tocó turno a la joya de la corona: Apatzingán. Sin disparar un sólo tiro unos 600 autodefensas entraron a la ciudad. Desde la mañana, junto a policías y militares, habían "limpiado" el terreno para evitar sorpresas. Pasadas las 10 de la mañana, Hipólito Mora y sus hombres, ataviados con camisetas con el logotipo de Cristos, asistieron a misa de catedral, oficiada por el padre Goyo. De inmediato, las diferencias a interior de movimiento comenzaron a aflorar. Su compañero Estanislao Beltrán lo acusó de romper un acuerdo previo. La acción estuvo coordinada con el gobierno.

Como si no supiera lo que realmente acontecía en Michoacán, el titular del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que las autodefensas en Michoacán no portaban más armas de uso exclusivo del Ejército, aunque todavía continúa el proceso de desarme.

A pesar de los amagues de la entrega de armas, la ofensiva militar siguió adelante. El 16 de febrero tomaron la tenencia de Las Cruces, municipio de Tumbiscatío y la población de Pucúan del Río, municipio de La Huacana.

El 24 de febrero fue día de celebración. Y de la misma manera que un año antes, Hipólito Mora comenzó el levantamiento en La Ruana, en esta ocasión fue el primero en conmemorar el aniversario de la lucha. Como si fuera parte de una cruzada religiosa, lo hizo, con 250 de sus compañeros, de una manera muy peculiar: con una misa al pie de un altar a la Virgen de Guadalupe que se colocó donde antes hubo un templo a Nazario Moreno. En una manta colocada al lado de la capilla se leía: “Bienvenidos a La Ruana, pueblo libre del crimen organizado”.

Hombres, mujeres y niños, en su mayoría humildes, marcharon coreando la consigna de “¡Fuera Los Templarios, queremos la paz!”.

Al dirigirse a sus vecinos, cáustico, Hipólito Mora advirtió con su rifle bajo el brazo: “No estamos festejando nada, tenemos muchos muertitos y gente en la cárcel, me hubiera gustado que estuvieran aquí los que están encarcelados, no se pudo, pero parece que ya pronto saldrán”. Y, para que quedara claro, señaló: “No nos convertiremos en paramilitares”.

En Tepalcatepec desfilaron cientos de personas vistiendo camisetas con la leyenda “Autodefensa, Por un

Tepalcatepec Libre”. Con música de mariachis, barbacoa y cerveza expresaron su júbilo. También hubo misa. “Hace un año — dijo el doctor Mireles. Tepalcatepec era un infierno, era un pueblo fantasma, no se podía caminar. Este año representa un gran logro porque nos habían dado 24 horas de vida como movimiento y aquí estamos.”

El balance del primer año era positivo. Las autodefensas tenían el control total de los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Coacomán, Chinicuila, Tancítaro, Parácuaro, Peribán y Coahuayana. Y, de manera parcial, La Huacana, Apatzingán, Churumuco, Múgica, Uruapan, Tocumbo, Los Reyes, San Juan Nuevo, Aquila, Ario de Rosales, Tingüindín, Lombardía, Aguililla y Gabriel Zamora.

El aniversario les dejó un sabor a triunfo, pero, también, de tarea inacabada. Los siguientes pasos estaban cantados. El Consejo General de Autodefensas acordó en reunión reciente avanzar hacia Lázaro Cárdenas. Sus objetivos eran: controlar la vía por la cual los *templarios* sacan el fierro de sus minas; eliminar a los sicarios que se ocultan en la sierra y, cerrar el cerco sobre Tumbiscatío y Arteaga, simultáneamente santuario y nido mayor de los *templarios*.

Como unos días más tarde explicó Arturo Cano: “El frente de Lázaro Cárdenas se suma a los que las autodefensas ya tienen abiertos en Los Reyes, Ario de Rosales, Apatzingán y la costa, en las inmediaciones de Colima, una suerte de herradura chueca, si se mira en el mapa, que va cayendo de a poco sobre los lugares que consideran refugios de los *templarios* mayores”.

Con esta orientación, el 24 de febrero, las autodefensas tomaron Caleta, una pequeña bahía turística, que, de

acuerdo con la periodista Laura Castellanos, era estratégica para Los Templarios, porque allí se encontraba un enorme almacén de provisiones que proveía su corredor serrano hacia Arteaga, el bunker de Servando Gómez. Distante 10 horas de Apatzingán, allí se instaló un retén que permitió controlar buena parte de la carretera costera que va de Colima a Guerrero. En dos ocasiones la Secretaría de Marina trató de desarmar los autodefensas que se instalaron allí. Lo mismo sucedió, pero a cargo de militares, en Huahua, una comunidad cercana.

A pesar de eso, los mismos civiles armados que ocuparon Caleta, continuaron su marcha hasta la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad portuaria.

El mismo día del operativo, el coronel Jorge Carrillo Olea había escrito en las páginas de *La Jornada*: “Michoacán sufre la manifestación y los efectos de una guerra que el gobierno federal trata de acallar rápidamente más que resolver. Una guerra que asume las características de una suerte de contienda sin nombre que tal vez existió en el tribal siglo XIX africano. La información oficial, cada día más falsa, pinta un cuadro ideal de constante superación. La realidad es bien distinta: el fuego se esparce dentro de Michoacán y a otros estados.

“La propaganda oficial hace aparecer que muy pronto se llegó al principio del fin, pero no es así. Tratan de convencer de que el conflicto avanza hacia su solución, pero se cumplen todos los requisitos desastrosos como para pronosticar una danza sin fin previsible. Los actos oficiales no son confiables ni en las formas ni en los efectos.”

El 26 arribaron a las localidades de Santa Clara del Cobre, Opoepo y Zirahuén, del Municipio de Salvador Escalante. Instalados en Pátzcuaro, a 45 kilómetros de Morelia, sólo realizaron patrullajes. La página Valor por Michoacán anunció jubilosa: Ya nos encontramos a menos de 40 minutos de la capital michoacana.

De inmediato, el Comisionado Castillo informó: “No es un tema de movilidad de manera independiente. La entrada es coordinada con las fuerzas federales y civiles que no estén armados”. Sin embargo, de que las autodefensas llevaban armas, las llevaban.

Ante el peligro de enfrentarse a nuevos desbordamientos, las autoridades trataron de meter nuevamente en cintura a los sublevados. En las instalaciones de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, los coordinadores de los grupos de autodefensa y el comisionado Castillo Cervantes, acordaron que los agentes comunitarios no ingresarían a Morelia ni a ninguna cabecera municipal de la zona urbana. Asimismo, establecieron que las autodefensas no harían un solo movimiento que no sea consensuado con las autoridades federales y estatales.

Jugando a dos manos, el 3 de marzo la Policía Federal dio cobertura a las autodefensas para que tomaran la alcaldía de Apatzingán, al tiempo que resguardaba la huida del Presidente Municipal.

El 9 de marzo, por segunda vez, “cayó abatido Nazario Moreno González, líder religioso y uno de los fundadores de *La Familia Michoacana*”. Fue delatado, según contó un testigo a Arturo Cano, por el alcalde de Apatzingán.

Estaba aún fresca la noticia sobre el abatimiento de *El más loco* cuando Hipólito Mora, fue cercado, junto a sus

hombres, en el rancho Los Palmares. Al frente del ataque se encontraba Luis Antonio Torres *El Americano*. Señalaban a su antiguo compañero de ordenar el homicidio de dos comunitarios, Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda conocidos como *El Pollo* y *de Nino*, además de extorsionador, ladrón de ganado, asesino y bandido.

Mora había informado al comisionado Alfredo Castillo sobre los presuntos vínculos de *El Americano* con el crimen organizado. Pero el 11 de marzo Mora sabía que Castillo y *El Americano* habían negociado algo. Oficialmente, el comisionado mediaba entre los grupos enfrentados, pero jugaba con los dados cargados apoyando a Torres. Su tropa, dotada de armas de alto poder, amenazó con tomar por asalto Los Palmares.

El fundador de las autodefensas solicitó ayuda durante horas. Fuerzas federales estaban apostadas a unos centenares de metros de los hechos pero no hicieron nada. Finalmente, el gobierno federal envió un helicóptero. Las autoridades le dijeron que la idea era sacarlo de allí por su propia seguridad. Confiado, el líder de La Ruana subió a bordo de la aeronave. En realidad, viajaba en calidad de detenido. Lo entregaron a la procuraduría estatal en Morelia y allí le levantaron imputaciones por homicidio y por otros 34 delitos, entre ellos despojo, privación de la libertad, amenazas, robo a casa habitación y violación de domicilio.

Días después lo enviaron al penal de Mil Cumbres. Unos 70 hombres leales a Mora se atrincheraron durante 60 horas, hasta que finalmente aceptaron entregar al Ejército sus armas. En advertencia de lo que puede pasar, escribieron con plumón en cartulinas: Estamos listos para morir.

En Buenavista Tomatlán las autoridades reinstalaron al alcalde que había sido expulsado del municipio por sus presuntos vínculos con la criminalidad.

Para que quedara claro a qué estaba jugando el 13 de marzo, el comisionado Alfredo Castillo, afirmó que existen “indicios muy importantes” de la coparticipación del líder de las autodefensas, Hipólito Mora, en el asesinato de, dos autodefensas que fueron encontrados calcinados el 8 de marzo.

La traición gubernamental fue burda. “Cuando se lo llevaron de aquí -narró el doctor Mireles al periodista Ernesto Ledezma- nos dijeron que se llevaban a Hipólito y al Americano para platicar en un lugar neutro y resolvieran sus diferencias, para evitar una guerra dentro del mismo pueblo, porque los dos son de La Ruana. Después nos damos cuenta de que a nuestro amigo *El Americano* lo dejan en Buenavista y a Hipólito se lo llevan hasta México, y luego que lo regresan a Morelia y luego que lo meten a la cárcel. Y con más de 30 cargos, de despojo de propiedades y aparte una de asesinato”.

El vocero del Consejo General de Autodefensas, por conducto de José Manuel Mireles, denunció que en realidad Mora fue encarcelado por reclamar al gobierno el incumplimiento de los acuerdos de Tepalcatepec, y exigir la liberación de cerca de 90 integrantes de las autodefensas arrestados por las fuerzas federales

DE HÉROES A VILLANOS

En marzo de 2014, dejaron de ser héroes para convertirse en delincuentes. Ya no fueron más los valientes justicieros

que combaten a *Los caballeros templarios*, sino meros criminales. En cuestión de días, la imagen de los líderes de las autodefensas michoacanas mutó drásticamente. Aunque ellos eran y hacían lo mismo que habían sido y que habían hecho desde que se levantaron en armas, su imagen pública se deterioró aceleradamente.

Durante meses se presentó a los dirigentes de los grupos civiles armados como hombres de trabajo, genuinos agricultores y profesionistas rurales indignados por los interminables abusos de los *templarios*, que les chupaban el fruto de su trabajo y tomaban a sus mujeres a la mala. En marzo, en cambio, se les exhibió como criminales con historiales delictivos de consideración: narcotraficantes, asesinos, extorsionadores y lavadores de dinero.

La historia comenzó en enero de 2014, cuando se filtró a la prensa el expediente de José Manuel Mireles, en aquel entonces la voz pública más articulada de los guardias civiles. El médico ya era figura pública y de vez en cuando hacía declaraciones incómodas para el gobierno. Se supo entonces que el vocero fue detenido en noviembre de 1988 por posesión de 86 kilos de marihuana y estuvo preso tres años y ocho meses. El periódico *Excelsior* informó que tenía en sus manos una copia del expediente del proceso penal 209/988, que se convirtió después en el II-233/988 contra el doctor. Sin embargo, casi no se divulgó que su proceso tuvo varias anomalías legales.

Interrogado por Carmen Aristegui sobre este asunto, el médico respondió que conoce la cárcel, y que la ha pisado en distintas ocasiones. Las primera —le contó a la periodista— “a los 12 años, por estar jugando billar en lugar

de estar estudiando en la Secundaria". También pasó 90 días tras las rejas en Estados Unidos, por traer tarjetas que lo presentaban como médico cirujano, sin tener la licencia de la Barra de Médicos del estado California para hacerlo.

El siguiente objetivo en la mira fue Juan José Farías, *El Abuelo*, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec. Personaje querido y admirado en su municipio y en la región, se le identificó, sin embargo, como antiguo integrante del *cártel* del Milenio, acusado de ser lugarteniente de los Valencia, preso en dos ocasiones (1988 y 2009) por portar arma de fuego y posesión de hachís. En 2006, la PGR, lo había vinculado también con el narco Zhenli Ye Gon y con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del *cártel* Jalisco Nueva Generación.

El expediente de *El Abuelo* comenzó a difundirse ampliamente después de que se reunió con el Comisionado Castillo el 5 de febrero. El incidente dejó muy mal parado al encargado presidencial de solucionar el conflicto, que tuvo que hacer verdaderos malabares verbales para explicar el encuentro.

Le siguió en la lista de esta estrategia de demolición del liderazgo de las autodefensas Hipólito Mora. El dirigente del grupo de Buenavista Tomatlán fue apresado por su presunta participación en el asesinato de dos autodefensas. Días después, se publicó que tiene antecedentes penales en Estados Unidos por traficar con droga.

Cuando el mismo Mireles se rebeló contra el desarme, el dedo índice acusador del Comisionado lo volvió a señalar. En una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el funcionario informó que el médico era

investigado por 5 homicidios que se cometieron a finales de abril en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Más aún, aseguró que había fotos de él sosteniendo la cabeza de un difunto como trofeo. “Es una línea de investigación -dijo-, efectivamente existen algunos señalamientos, inclusive hay testimoniales en donde el primero en llegar, antes que todos los demás a ese punto, es el doctor Mireles. Hay fotografías de él sosteniendo alguna cabeza como trofeo de uno de estos muertos, al final de cuentas eso no es suficiente para poder hacer una imputación”.

La denuncia oficial era falsa. El doctor nunca ordenó el ataque que produjo los muertos y llegó al lugar de los hechos cuando ya todo había pasado. Sobre la foto aclaró que el MP le había solicitado enderezar el cuerpo porque la médico forense tenía que tomar fotos.

En algunos casos, la información sobre el pasado criminal de algunos de los líderes de las autodefensas, que los convierte de ángeles en diablos, es sólida. En otros es un montaje calumnioso. La duda es por qué los expedientes sobre sus antecedentes se divulgaron hasta meses después del surgimiento de las autodefensas. Dos hechos políticos relevantes dan luz sobre esta interrogante.

El primero es la sórdida pugna entre el comisionado federal Alfredo Castillo y el gobierno de Michoacán. Aunque de dientes afuera todo es armonía entre ellos, en los hechos hay un soterrado pleito. El pleito cobró una larga lista de víctimas, incluido el secretario general de Gobierno y varios alcaldes que fueron a parar a la cárcel.

El segundo elemento es la resistencia de una parte de las autodefensas a los planes y deseos gubernamentales. Los

líderes no se disciplinan (por lo menos no todos) y sus bases no entregan las armas. No aceptan las condiciones que el gobierno les pone. No se alinean como el gobierno quisiera.

La relación entre autodefensas y gobierno federal es compleja, tiene muchas aristas. Hay entre ambos una alianza explícita para combatir a *Los caballeros templarios*. Se coordinan para realizar operaciones militares conjuntas. Las guardias civiles no están en guerra contra las autoridades federales. Sin embargo, no se subordinan a la lógica gubernamental. Por un lado, acarician el lomo a los funcionarios públicos, por el otro, los condicionan. Poco antes de ser detenido, Hipólito Mora había amenazado al gobierno con realizar bloqueos carreteros si no se liberaba a sus compañeros presos.

Las autodefensas tienen muchos integrantes y están muy bien armadas. Mantienen autonomía, disciplina, modos de funcionamiento, mando, control de territorio, ambición como grupo de poder. Se hacen justicia a sí mismas e influyen en las decisiones de los municipios. Si se lo proponen, pueden ser una fuerza decisoria en el proceso electoral del próximo año.

Esta autonomía es muy incómoda para el gobierno que quisiera que el problema desapareciera de la noche a la mañana. Pero, conforme pasa el tiempo, sigue allí. El arresto de Hipólito Mora, la creación de una nueva imagen de los líderes civiles armados, ahora como delincuentes, y la salida del país por unos meses del padre Gregorio López para “estudiar” no son hechos ajenos a esta situación. Anuncia una nueva etapa entre el gobierno federal y las autodefensas: o los líderes de los grupos civiles armados

se disciplinan a la estrategia de las autoridades o son encarcelados.

Algunos de los armados tienen clara la nueva fase del conflicto. No en balde, por medio de un video difundido en las redes sociales, José Manuel Mireles acusó al gobierno federal de sembrar la división entre los comunitarios y quererlos traicionar para debilitar el movimiento y desaparecerlo. Dijo que no tienen confianza en la autoridad y que faltan muchos convenios por cumplir de parte del gobierno.

El mismo Mireles advirtió: “A pesar de que nos quieren desaparecer, nos quieren meter en cárceles y nos quieren traicionar, la base, el pueblo, las mujeres y los hombres fuertes de Michoacán seguiremos unidos, en pie de lucha, y no pararemos”.

TRES ULTIMÁTUM

Desarmarse o no desarmarse, he ahí el corazón del pleito en Michoacán entre civiles armados y gobierno federal. Estados Unidos presionó para que las autodefensas sean desmovilizadas, el gobierno federal las emplazó a que dejaran las armas y los alzados exigieron que, antes de entregar un solo fusil, las autoridades debían cumplir con una serie de condiciones. Los tres pusieron su ultimátum sobre la mesa. El 10 de mayo fue la hora cero.

El pulso se libraba desde comienzos de año, sino es que antes. El 9 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar en México debido a amenazas a la integridad y

seguridad que representan organizaciones criminales transnacionales en este país. Michoacán ardía.

La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Cinco días después del comunicado estadounidense, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emplazó a los grupos de autodefensa a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades estatales, se hacían cargo de la protección y seguridad de los habitantes de la Tierra Caliente.

Los civiles armados no le hicieron mucho caso. El 12 de enero, después de un combate de dos horas, *tomaron* la comunidad de Nueva Italia, punto neurálgico en la ofensiva contra *los caballeros templarios*. Uno de los milicianos que participaron en la batalla le reviró al secretario de Gobernación: Que Osorio Chong venga a desarmarnos (...). Nunca va a venir, pero que lo intente (*El Universal*, 14/1/14).

A buen entendedor, pocas palabras. Para que no hubiera duda del mensaje del *Tío Sam*, el 17 de enero, una semana después de la alerta a sus ciudadanos sobre México, el secretario de Estado, John Kerry, dijo estar preocupado por el surgimiento de milicias para combatir a los narcotraficantes en Michoacán y preparado para tratar de ser útil en lo posible.

La estabilidad en Michoacán es importante para Washington. Desde ese estado mexicano parte uno de los corredores claves para el transporte de mercancías entre el Pacífico y el Golfo de México, el formado por la mancuerna del puerto Lázaro Cárdenas y el ferrocarril Kansas City. Desde allí se ha establecido un comercio privilegiado con

China. Dos de cada tres aguacates que se consumen en el país vecino son cultivados en Michoacán y exportados, en su mayoría, por seis grandes emparadoras transnacionales de capital estadounidense. Los michoacanos son la segunda comunidad de mexicanos más numerosa del otro lado del Bravo; 4 millones radican allí y mandan a su estado más de 2 mil millones de dólares al año.

Un mes después de las declaraciones de Kerry, el 27 de febrero, el informe anual que Washington elabora sobre derechos humanos en todo el mundo advirtió sobre la preocupante proliferación de los grupos de autodefensa en varios estados de la República Mexicana, especialmente en Guerrero y Michoacán.

A pesar de ver algunas incongruencias en la amonestación del *Tío Sam*, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), saludó el documento: “Me parece —afirmó— que el informe sobre el punto de las autodefensas, que refleja en términos fidedignos el crecimiento de este fenómeno y la vacilante y contradictoria actitud del Ejecutivo mexicano, es inobjetable”. “Las autodefensas —añadió semanas después— son un cáncer que ha padecido Colombia durante varias décadas. Es muy fácil caer en este tipo de modelos donde se genera un Frankenstein que luego ningún gobierno controla.”

El asunto era motivo de preocupación no sólo de la administración Obama, sino de los grandes inversionistas extranjeros. Eso quedó claro, el 23 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando el fantasma de los grupos civiles armados en Michoacán se le apareció al presidente Enrique Peña Nieto.

“No podemos ser ajenos a una imagen que lamentablemente México ha proyectado, o proyectó en el pasado -respondió el mandatario- y que a veces llega a empañar otros logros y esfuerzos que tiene nuestro país y beneficios que se están logrando para nuestro país. A veces la inseguridad, a veces señalada y marcada en algunas partes del territorio nacional, insisto, llega a empañar logros en otros ámbitos”.

Comenzó entonces una soterrada puja por desmilitarizar a las milicias y obligarlas a deponer las armas, que muy pronto provocó fuertes choques. El 14 de febrero, en la comunidad de Antúnez, el Ejército mató a tres civiles que se resistieron a ser desarmados. El gobierno federal se vio obligado a posponer la medida. El punto se convirtió en motivo de conflictos permanentes y un diluvio de declaraciones de funcionarios públicos, anunciando la inminencia y obligatoriedad de la medida.

El pleito alcanzó uno de sus picos cuando el gobierno federal tomó como rehén al líder de La Ruana, Hipólito Mora, al arrestarlo por ser el supuesto responsable de ordenar dos asesinatos; acusó de terrorismo a 17 guardias de Yurécuaro; dividió a los civiles armados, negociando con Juan José Farías, *El Abuelo*, y buscó desplazar de la vocería del movimiento a José Manuel Mireles. Argumentando el éxito de su estrategia para combatir a los *templarios*, el comisionado Alfredo Castillo puso el 10 de mayo como fecha límite para la entrega de armas.

Los alzados respondieron marchando el 6 de abril en 15 poblados y organizando una caravana motorizada. Por voz del doctor Mireles, reviraron que no los pueden

desarmar. “Sin armas cualquier pendejo en bicicleta nos va a matar”, dijo el vocero en la comunidad de Nuevo Urecho. Simultáneamente aumentaron sus demandas: libertad de al menos 100 de sus compañeros presos; eliminar o detener a 20 mandos medios *templarios*; legalizar y otorgar personalidad jurídica a las autodefensas; integrar a la policía estatal a sus miembros y restaurar el estado de derecho en Michoacán. Fijaron como plazo para tener soluciones favorables el mismo Día de las Madres.

El 14 de abril pareció pactarse una tregua entre alzados y autoridades. Ambos firmaron un acuerdo en el que se establece que “Los grupos de autodefensas se obligan a registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, a más tardar el 10 de mayo de 2014, determinando su portación y uso, según lo establezcan los parámetros legales”. Entre esa fecha y el 10 de mayo del presente año ambos “continúan trabajando de manera coordinada para la ubicación de objetivos del crimen organizado”. Según Mireles se trató de un “muy buen acuerdo, porque es lo que hemos estado peleando desde hace 13 meses”.

Poco duraría la supuesta luna de miel. Dos semanas después la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre un enfrentamiento en la costa michoacana en el que “murieron cinco personas que se hacían pasar como autodefensas”. De los abatidos en Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, se responsabilizaría a Mireles. Quedaba claro que el amago de una causa penal contra el médico no era procurar e impartir justicia, sino desmovilizar a actores críticos o incómodos para los planes gubernamentales.

Para que quedara en claro lo que estaba en juego, dos días antes de la fecha límite, el 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Michoacán a decir que cueste lo que cueste la paz y la tranquilidad volverán a la entidad.

EL TEATRO DE SOMBRAS MICHOACANO

El 7 de mayo, autodefensas afines al Comisionado Castillo, desconocieron a José Manuel Mireles, como vocero de su movimiento por considerar que su comportamiento y sus acciones han fraccionado las filas de los comunitarios. Después del accidente -acusaron sus antiguos compañeros-, el doctor andaba por la libre y no obedecía a nadie; tomaba decisiones por su cuenta y cometió errores como el de hace unos días.

El doctor respondió que todo era falso Mireles y que se trataba de "un mitote de 'Papá Pitufo". Y añadió: "No hubo convocatoria, el Consejo lo formamos 36 municipios y solo acudió una parte de Buenavista, de ahí que rechazo que me haya destituido".

Apretando las tuercas, un día antes de vencerse mañana el plazo otorgado para su desarme y desmovilización el presidente Enrique Peña Nieto declaró: "Espero que cumplan".

El 10 de mayo llegó. Y, como si fuera la función de un teatro de sombras en el que se proyectan marionetas delante de un fondo iluminado para generar la sensación de movimiento, se puso en escena la representación del desarme y desmovilización de las autodefensas michoacanas.

Frente al comisionado Alfredo Castillo, parte de las autodefensas cambiaron las armas prohibidas y las barri-

cadadas por fusiles y pistolas reglamentarios, uniformes de la fuerza rural del estado y un régimen policiaco. “Con esto – dijo Estanislao Beltrán, *Papá Pitufo* – ya tenemos un compromiso, somos gobierno”.

La ilusión de movimiento que el montaje quiso crear fue la de los civiles armados michoacanos ciñéndose al ultimátum gubernamental para entregar sus *cuernos de chivo* a cambio de un fusil R15, una pistola 9 milímetros y 15 balas para la escuadra y 30 tiros para el rifle; la de transportarse en Estaquitas de Nissan en lugar de las camionetas 4x4; la de actuar en la legalidad en vez de tomar la justicia en sus manos.

Pero ese teatro de sombras no pudo ocultar que ese 10 de mayo las autodefensas no se desarmaron ni se desmovilizaron, solamente se dividieron. Una parte se sujetó a la voluntad gubernamental, otra se niega a acatarla y varias más se encuentran en el limbo, sin saber aún qué hacer.

En la ceremonia, el comisionado declaró que lo inédito de este movimiento social armado (...) es que en esos días la gente no se levantó contra el Estado, sino para solicitar la presencia del Estado. Y hoy los que representan al Estado son ustedes.

Pero resulta que ese Estado sigue ausente en Michoacán. El mismo Castillo tiene que desplazarse custodiado por un enorme equipo de seguridad, y trasladarse en una Suburban blanca con blindaje tipo 5, que resiste ataques de cañón corto y largo. Tan es así que el montaje para anunciar la toma de protesta de la nueva Fuerza Rural estuvo protegido por agentes armados hasta los dientes.

Extorsiones, secuestros, robos, asesinatos siguen siendo un asunto cotidiano en varias regiones de la entidad.

No hay indicio de que la producción y tráfico de drogas se hayan frenado. Entre enero de 2012 y marzo de 2014 sólo se lograron decomisar 844 armas de fuego. La maquinaria del *narcocapitalismo* en Michoacán camina. Los negocios que lavan las ganancias del crimen organizado florecen como siempre.

Las autodefensas no entregaron las armas. Sólo las registraron. Y lo hicieron de manera acotada: según informes oficiales, 6 mil 442, casi 70 por ciento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Las ametralladoras M50, los Barret y los lanzagranadas que salieron a relucir en diversos momentos del conflicto han desaparecido de la escena.

El gobierno federal calcula — dijo el comisionado — que hay 7 mil pistolas o rifles de alto poder, en manos de las autodefensas. Durante los primeros meses de este año, los civiles armados aseguraron poseer al menos tres veces más. La cifra podría ser mayor. El espejismo de los fierros tiene carta de legitimidad entre la población michoacana.

El montaje incluyó a los acarreados. Según contó el doctor Mireles, cuando el presidente Enrique Peña Nieto visitó el municipio de Tepalcatepec, “mis coordinadores del consejo de autodefensas trabajaron todo el día y toda la noche seleccionando a los ciudadanos más nobles que tenemos, productores, empresarios, ganaderos. Y le presentaron al Estado Mayor Presidencial las listas de la gente que iba a ir al acto.

“Por la mañana, llegaron temprano a la unidad deportiva donde iba a ser la asamblea con Peña Nieto y a los coordinadores generales que hicieron la lista no los dejaron pasar y los que ya estaban adentro les dijeron: ‘señores, se

tienen que retirar todos porque el Presidente trae su propio público'. Llegaron 12 autobuses llenos de militares vestidos de civil", relató.

Las autodefensas michoacanas son la nueva Bola, la masa en la que se funden los destinos de quienes están hartos de la inseguridad pública. No hay entre sus integrantes unidad ideológica o política alguna. Su horizonte inmediato consistió en deshacerse de la empresa *templaria*.

Las autodefensas nunca han sido una fuerza homogénea. Son un archipiélago de grupos autónomos, con liderazgos locales, coordinados entre sí. No son iguales la policía comunitaria de Ostula, sujeta a la asamblea general, que los civiles armados de Tepalcatepec, vinculados a Juan José Farías, *El Abuelo*, acusado de pertenecer al *cártel del Milenio*, cuyos seguidores se sumaron a la Fuerza Rural.

Su unidad siempre fue frágil. A partir del 10 de mayo resultó inexistente. El gobierno federal la hirió de muerte. Sus principales dirigentes se enfrentaron entre sí. Unos se sometieron incondicionalmente al comisionado Castillo, otros apostaron por conservar su autonomía. Los primeros destituyeron al doctor Mireles, los segundos lo sostienen. Por ejemplo, Héctor Zepeda Navarrete, líder de Coahuayana, anunció que para ellos el mando único lo sigue encabezando el médico y sólo de él recibirán órdenes. "Nosotros — dijo — estamos del lado del doctor Mireles, no podemos estar del lado de otras personas y nosotros vamos por un solo camino, que es acabar con *Los caballeros templarios*. Nosotros no pertenecemos a ningún *cártel*".

Otros más, como los comuneros de Aquila, se manejan por aparte. Octavio Villanueva aclaró a *Desinformémonos* que ellos no llevan relación ni tienen preferencia con

ninguno de los dos grupos de autodefensas (el de Estanislao Beltrán, *Papá Pitufó*, y el de José Manuel Mireles). “Les decimos que respetamos su movimiento y su lucha, pero la nuestra es aparte.”

El plazo fatal del 10 de mayo se cumplió. Aunque el comisionado Castillo asegura que las autodefensas representen al Estado, eso es más un buen deseo que una realidad. Siguen sin llegar a la entidad la paz, la estabilidad y el estado de derecho. Al terminar el mes de mayo permanecían en la cárcel más de 100 integrantes de las autodefensas y en multitud de caminos y carreteras se mantenían retenes.

El 16 de mayo, después de más de dos meses tras las rejas, Hipólito Mora Chávez, salió libre. El juez de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia, Plácido Torres Pineda, quien fuera procurador de Justicia en la administración de Fausto Vallejo Figueroa, revocó el auto de formal prisión contra él.

Fuera del penal, y anunció su incorporación a las fuerzas rurales dio lectura a un mensaje: “Confío en que el cambio que se ha iniciado en Michoacán va en el rumbo correcto, que entre todos logramos la tranquilidad y el Estado de derecho. Deseo la reconciliación entre mi gente y que la llegada del desarrollo en Tierra Caliente continúe y se mantenga, estoy seguro que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no nos va a fallar”. Muchos de sus seguidores aseguraron que le habían obligado a leer el documento.

Un día después, celebró con los suyos su liberación. Una manta le decía: “Hipólito: en estos dos meses supimos lo que en verdad hacías, defendías y luchabas por tu pueblo”.

El 22, el presidente Enrique Peña Nieto echó las campanas a volar. En Tepalcatepec, en un acto en el que no asistieron los alzados, dijo que el gobierno federal escuchó la voz de los grupos de autodefensa, dándoles un “cauce institucional” para crear la nueva Fuerza Rural. Declaró que su gobierno apoyará de manera decidida este esfuerzo institucional, que vendrá a sustituir a las fuerzas de seguridad municipales que tenían “debilidad institucional” y donde varios de sus elementos fueron cooptados por el crimen organizado.

Al cerrar el mes de mayo, José Manuel Mireles impartió una charla a estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Michoacán, dijo allí, “no se ha pacificado realmente, sigue siendo un infierno” y quedan 34 municipios “levantados en armas”. El comisionado —denunció— “acabó la guerra mediáticamente” Y aclaró: “todavía no me corren y sigo siendo su coordinador general”.

De los 36 municipios “levantados en armas” —aseguró el doctor—, el comisionado Castillo estableció guardias rurales en dos: Buenavista, donde “nada más uniformó a *templarios* perdonados y arrepentidos”, que ahora son dueños de huertas y ganado, y Tepalcatepec, donde “sí uniformó a los ganaderos” con la intención de que los habitantes de estas comunidades vecinas “vengan a matarse unos a otros”.

Antes de la fractura, las autodefensas eran ya un coctel político-social de pronóstico incierto. Coincidían en sus filas, todos armados, grandes agricultores, integrantes de *cárteles*, migrantes y pueblo llano. Al finalizar mayo, la mezcla se volvió aún más incierta. Las consecuencias de su fractura son inimaginables.

En entrevista con Sanjuana Martínez, para *La Jornada*, Mireles fue aún más lejos. “En Michoacán — dijo — la guerra no ha empezado. Va a empezar ahora que se va el dizque comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Y la guerra va a estar dura, porque no nada más tengo que pelear contra los *templarios* declarados, sino contra los perdonados y los arrepentidos, los falsos autodefensas”. Por más teatros de sombras que se monten, la seguridad no ha llegado a Michoacán.

XII) ALGUNAS OTRAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS

LA PROFECÍA

Cuenta el poeta Juan Bañuelos que poco tiempo antes de nuestra entrada al primer mundo teleciano en enero de 1994 aparecieron tres vasijas en la cueva de San Andrés *Sakamchen de los Pobres*, en Chiapas. Una contenía pólvora, otra tierra y pedruscos, y la tercera agua. Cada uno de los recipientes advertían de un acontecimiento por venir. Era una profecía más en tierra de piedras parlantes. Dos de los tres eventos anunciados son ya una realidad: el símbolo de la pólvora se materializó en el levantamiento armado de enero de 1994. La tierra y las piedras, en el temblor que sacudió a Chiapas en los comienzos de 1996 y dañó seriamente la iglesia de San Andrés, y en los sismos que le han seguido y que hoy alarman a buena parte de la población. El tercero, el agua, muy bien puede anunciar el diluvio de la inseguridad, la impunidad y la multiplicación de auto-defensas para hacerles frente que se vive en el país.

Como hongos en temporada de lluvias, comenzaron a surgir grupos de defensa ciudadana a finales de 2012 en varios estados. Por ejemplo, en febrero de 2013, en la comunidad de “El Pizarrín”, del municipio de Motozintla, 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas se reunieron y conformaron los “batallones de autodefensa civil”. Quieren impedir la explotación de minas de oro, titanio y barita, a manos de empresas canadienses.

Así sucedió también en Veracruz, ante la molestia del gobernador del estado y funcionarios de su gabinete. En marzo de 2013, los habitantes de la comunidad El Inglés, municipio de Tlalixcoyan, a 97 kilómetros del puerto de Veracruz, hicieron público que estaban organizados en grupos de vigilancia ciudadana para enfrentar la delincuencia. Habían comenzado a formarlos desde 2012.

Su paciencia se había colmado. Eran frecuentes los robos en casas habitación, levantones, amenazas de secuestro y la sustracción de cable de cobre de la red eléctrica. En un video subido a las redes sociales, uno de los habitantes explica: “Nosotros tenemos que cuidarnos porque nos robaban lo poco que teníamos, incluso había días que dejaban sin luz el predio porque nos chingaban todos los cables. Ahora el pueblo cuida al pueblo”.

Por si fuera poco, los pobladores padecían el abuso de las autoridades encargadas de procurar justicia. Cuando acudían al Ministerio Público a presentar la denuncia de los delitos, los agentes ministeriales les pedían una “cooperación de 200 pesos” para hacerlo.

Los vigilantes se cubrieron el rostro con pasamontañas y paliacates y se armaron con palos, machetes y es-

copetas. Realizan rondines de vigilancia por los caminos vecinales y calles de la comunidad. Fue el segundo grupo de guardias civiles que surgió en el municipio. El primero fue el Guardia Civil Huasteco, que se dio a conocer en 2012, y que algunas fuerzas han caracterizado como un grupo paramilitar.

El gobierno niega la presencia de las autodefensas y le irrita que la prensa los documente. Gerardo Buganza, el secretario de Gobierno, declaró enfático: “No hay en Veracruz grupos de autodefensa. No existen”. Disparándole al mensajero, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, consideró que el fotoperiodista Félix Márquez, “que difundió varias imágenes del grupo, debería estar preso”.

Sin embargo, a pesar de la negativa de las autoridades a reconocer lo sucedido, en enero de 2014, surgió un grupo similar en la comunidad de Piedras Negras, en el mismo municipio. Asolados por la delincuencia, que en unos cuantos días perpetró un asalto violento a un mini súper, robó maquinaria de un predio y asaltó en la vía pública a una persona que iba a depositar 12 mil pesos a un banco, los habitantes de esa comunidad se hartaron. Ahora, en el poblado existe un Consejo Ciudadano de Seguridad que demanda resultados a las autoridades y grupos de vecinos que realizan rondines por las noches para cuidar sus colonias.

La irrupción de estos grupos provocó un intenso debate dentro de la izquierda. En el número 152 de *El Insurgente*, su órgano de análisis y difusión, el EPR repudió la aparición de los grupos de autodefensa o guardias comuni-

tarias, pues consideró que “tienen patente de Estado y los hilos con que se mueven son manejados desde las distintas zonas militares: son paleros y marionetillas que rinden parte en el cuartel”. Para la organización armada “es falso que hayan surgido de la necesidad de defenderse de los malos, de los cárteles del narcotráfico, de los extorsionadores (...) Tan falso como que son pueblo organizado, que ya está cansado de las injusticias y de que el gobierno no haga nada”. Para ellos, se trata de grupos promovidos y estructurados bajo la lógica del paramilitarismo ramplón del siglo XXI. Son mercenarios que han sido adiestrados conforme a los manuales de la contrainsurgencia, elaborados por patrocinadores internacionales del terrorismo paramilitar contrainsurgente, es decir, del imperialismo estadounidense.

Según el EPR, estos grupos son paramilitares utilizados para “avasallar aún más al pueblo, para imponer y justificar la militarización, para imponer el terrorismo de Estado, para auspiciar desplazamientos forzados y para acelerar el nuevo proceso de acumulación originaria que se está desarrollando en el país”.

En cambio, para el periodista Guillermo Almeyra (y con él para una parte de las fuerzas progresistas), esta apreciación resulta tan incorrecta como ver en las civiles armados una copia mexicana de los paramilitares colombianos. Según él, éstos “quieren afirmar el poder de los terratenientes sobre los campesinos como señores de horca y cuchillo, verdugos y jueces, mientras que en México las comunidades y pueblos de Michoacán que forman sus autodefensas quieren en cambio acabar con las violencias, las violacio-

nes, los saqueos, la tala de bosques, la prepotencia y la eliminación de las conquistas históricas de la reforma agraria realizada en los años 30 bajo el gobierno del michoacano Lázaro Cárdenas". Para Almeyra, "las autodefensas son una reacción ante el crimen, pero también una expresión de la necesidad de crear bases semiestatales independientes del Estado del capitalismo, en el cual nadie confía".

La denominación de autodefensa es imprecisa. La prensa habla de estos grupos de distintas formas, sin distinguir unos de otros: autodefensas, policías comunitarias, grupos de vigilancia vecinal, vigilantes, guardias civiles policía ciudadana, etcétera.

Estos grupos comparten el ser expresión de comunidades rurales (indígenas o mestizas) y de barrios marginados de poblados o ciudades, que se arman para defenderse a sí mismos, enfrentar la inseguridad, la impunidad policíaca y para cuidar su territorio, recursos naturales y bienes comunes. Son asociaciones que surgen ante una situación excepcional o límite, y que apelan como fuente de legitimidad a sus derechos como pueblos (en caso de los indígenas) o a la necesidad de sobrevivir.

Y, aunque tienen algunos rasgos comunes, hay diferencias sustantivas entre ellos, tanto en sus orígenes, como en los intereses que persiguen, en el armamento con el que cuentan, en la forma de organización que se dan, así como en las reglas con las que operan y en la relación con sus comunidades de las que provienen y en las que actúan.

De hecho, no todos los que afirman ser autodefensas lo son en realidad. Hay que algunos de ellos no son más que un chantaje de algún dirigente campesino o urbano-

popular para negociar con el gobierno algunas demandas; o bien una baladronada para atraer la atención de la prensa. Otros han sido señalados, con evidencias serias, de ser la envoltura elegante de paramilitares.

Su proliferación está asociada al crecimiento en los índices delictivos: robo, extorsión, secuestro, violación, asesinato. También a las agresiones de empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de comunidades, y que en ocasiones cuentan con pistoleros para amedrentar a quienes se les resisten. Surgen donde el Estado ha abandonado sus responsabilidades en el terreno de la seguridad pública, y ha perdido credibilidad. Se forman para llenar los vacíos que la incapacidad o corrupción de las autoridades deja. Actúan ante la ineptitud policíaca para combatir el crimen.

Los civiles armados enfrentan un hecho dramático: la descomposición de las corporaciones policiales, y la actuación de sus integrantes como cómplices o ejecutores de todos tipos de delitos. Son muestra del fracaso del modelo de seguridad pública y sus políticas. Su existencia, según algunos políticos y analistas, cuestiona y deteriora la imagen del poder público y de la gobernabilidad en el país.

En los hechos, ocupan ya un lugar significativo en la vida política nacional. Tanto así, que importantes defensores de derechos humanos, entre los que se incluyen religiosos, no han dudado en identificarse a sí mismos con esa etiqueta. Compartir la "marca" autodefensa, sin embargo, no diluye las diferencias realmente existentes entre quienes se reivindicán como tales. Es por eso que es necesario analizar cada caso en lo individual. Sólo así puede vislumbrar-

se con claridad las posibilidades reales de transformación social contenida en ellos. En Michoacán, por ejemplo, hay múltiples denuncias sobre la infiltración de templarios o del cartel de Jalisco en las autodefensas.

No hay un registro oficial que dé cuenta del número exacto de organismos de este tipo existentes en el país. La CNDH maneja sus cifras, la prensa tiene las suyas y diversos investigadores otras diferentes. Los números de unos y otros no coinciden.

El 14 de enero de 2014, mientras la sirena de alerta sonaba en los cuartos de guerra de la clase política nacional, la CNDH difundió un informe sobre los policías comunitarios y grupos de autodefensa que actúan en el país. Según los datos de la institución, éstos actúan en 11 entidades, principalmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

De acuerdo con el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero de la misma institución, de los 81 municipios michoacanos, hay presencia de autodefensas en 46.

Para la CNDH, la agrupación armada más extendida es la UPOEG, con presencia en 21 localidades; seguida por la CRAC con 15; la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), con cuatro; la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), con tres; la Policía Ciudadana de Olinálá (PCO-CRAC), con una y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón, (MAAC), con una.

La CNDH registra dos grupos de autodefensa en Oaxaca: uno, en el municipio de Santos Reyes Nopala, en-

cabezado por el alcalde priista, Freddy Gil Pineda. Otro, en Juchitán de Zaragoza, formado para impedir que la empresa Mareña Renovables construyera un parque eólico en la barra de Santa Teresa, de San Dionicio del Mar.

Un trabajo de síntesis periodística arroja cifras distintas a las de la CNDH. En los primeros cuatro meses de 2013 se documentó la existencia de 69 grupos de autodefensa o policías comunitarias en 14 entidades: Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Hidalgo y la Huasteca Potosina.

En al menos nueve entidades (Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí), la organización de la población tuvo como propósito el hacer frente a la delincuencia común y al crimen organizado.

Apenas dos meses antes del informe, Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, había alertado sobre la expansión de grupos de autodefensa en el país, y llamado al gobierno mexicano a “tomar cartas en el asunto”, pues, de no lograr contenerlos, se seguirán extendiendo por todo el territorio.

Para Plascencia, estos grupos armados no están regulados, son “informales”, con atribuciones que corresponden a las autoridades, y que suplantán la acción del Estado. Según él, este fenómeno es el reflejo de un problema de gobernabilidad, por lo que hace falta que quien tiene a su cargo la seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal logre restablecerla para evitar que las personas tomen justicia por propia mano.

La opinión del ombusman es compartida por distintos analistas. Según ellos, la existencia de policías comunitarias y autodefensas, es contraria a la Constitución, que establece en su artículo 21, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías y que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. El monopolio de la fuerza y de la procuración e impartición de justicia debe recaer en el Estado y los ciudadanos de deben hacerse cargo de perseguir a los delincuentes.

El 12 de septiembre de 2013, el polémico asesor de Enrique Peña Nieto en cuestiones de seguridad, el general colombiano, retirado, Óscar Naranjo, advirtió que no cualquier persona debe andar armada. “Las autodefensas no son ni policías ni comunitarios. En un Estado de Derecho es inadmisibles ciudadanos armados”, dijo Naranjo durante una conferencia magistral en el Colegio de México sobre la violencia en América Latina. La aparición de las autodefensas ha sido sistemáticamente negada por la mayoría de las autoridades gubernamentales de los estados. No importan las siglas políticas a las que pertenezcan, su respuesta es usualmente la misma: decir que allí no ha pasado nada. El surgimiento de los grupos de civiles armados se ha convertido para ellos en un verdadero dolor de cabeza, en muestra de que no gobiernan, de que su capacidad de mando está en entredicho. En lugar de ver en el fenómeno una expresión de una ciudadanía participativa consideran que es una reprobación a su gestión.

Desafortunadamente para ellos, esconder un problema no lo soluciona. Por el contrario, lo hace aún mayor.

LA HUASTECA POTOSINA

En las entrañas de la Huasteca potosina se reconstituye la nación Xí'iuuy, que significa indígena, y son conocidos como pames. Un pueblo originario que se creía en proceso de desaparición se ha encontrado consigo mismo.

Su bandera simboliza esta recreación de su propio orden, en la que se recupera y reinterpreta su historia. Tiene franjas de tres colores: rojo, negro y amarillo. Rojo, porque cuando los xi'iuuy combatieron desnudos contra la invasión española en la guerra chichimeca, se pintaban el cuerpo de ese color. En el centro hay una palma, abajo de ésta una flecha y arriba un rifle. Junto a ellos hay varios cucuruchos, por los primeros frailes.

Esta reconstitución de la nación Xí'iuuy, en la que los maestros bilingües han desempeñado un papel relevante, tiene expresas distintas y complementarias nociones: la defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, también, la formación de sus guardias comunitarias.

Sebastián de la Cruz es indígena xi'iuuy. Vive y trabaja en la comunidad La Nueva Palma. Desde el pasado 16 de febrero es guardia comunitario. Hace unos meses fue arrestado por policías ministeriales sin orden de aprehensión. Primero lo acusaron de un robo que nunca cometió. Luego lo extorsionaron. Finalmente lo encarcelaron cinco días, a pesar de ser inocente. Cometieron con él un atropello y una humillación (Noticieros Televisa, 9/4/14).

Para evitar ser detenidos, los indígenas de La Palma deben pagar una cuota a la policía, e incluso, necesitan empeñar sus herramientas de trabajo. Los que se niegan son golpeados, amenazados y conducidos a las barandillas. Los atropellos son constantes y la justicia nula. Aunque muchos indígenas no hablan español, no hay traductores en el Ministerio Público.

“La policía de San Luis Potosí está infiltrada (me dijo en entrevista Miguel Ángel Guzmán, el profesor y licenciado que los asesora legalmente), tanto la estatal como la municipal. Trabajan dos turnos: en uno son los buenos, en el otro los malos. Son asaltantes. ¡Extorsionan hasta las tienditas!”

Por si fuera poco, a los *xí'uiy* les llueve sobre mojado. A los atropellos policiales que sufren hay que añadir la acción de delincuencia. La situación es muy grave. Desde 2010 son extorsionados también por criminales. Si rechazan pagar o dejar sus tierras son asesinados. Los homicidios quedan impunes. Los delincuentes se arreglan con los agentes del Ministerio Público sin grandes problemas.

“Muchas bandas y grupos delictivos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado — explica Miguel Ángel — y empezaron a tomar control de las comunidades; hasta las puertas de estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas.”

Las autoridades gubernamentales locales niegan los hechos. No hay denuncias por abusos o actos de extorsión en contra de elementos ni estatales ni municipales, aseguran el comandante en la región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura Ortega.

Martín Hernández Martínez es también guardia comunitario de La Nueva Palma. Harto de estar harto, asegura: Ya estamos cansados de tantos abusos. Por eso, para protegerse a sí mismos de la delincuencia, los abusos policíacos y el despojo de sus tierras, 2 mil cabezas de familia acordaron formar sus guardias comunitarias.

Los nuevos encargados de seguridad son 100 personas, nombradas en asamblea, armadas con varas y machetes. El año pasado eran 30. Algunos van embozados. Se proponen cuidar el orden en sus pueblos. Montan guardias y alertan sobre la presencia de extraños. Se han adiestrado para aprender procedimientos de detención. *De las autodefensas a las guardias comunitarias* es el nombre de su manual de formación que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad.

Propusieron al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de proyecto de Ley para la Operación de las Guardias Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser reconocidos legalmente y contar con el aval de las autoridades estatales.

Ven en la experiencia de Cherán un modelo a seguir, tanto en términos de justicia comunitaria, como en que la comunidad se rija a partir de sus usos y costumbres. No van a impedir que la policía entre en sus localidades, pero, con el fin de evitar más abusos, exigirán que antes de que se detenga a un miembro del ejido, debe exponerse a la comunidad.

Justifican la formación de sus servicios de seguridad en el artículo 9 de la Constitución estatal. Las guardias comunitarias, asegura Miguel Ángel Guzmán, han existido

desde hace mucho y actualmente en las comunidades indígenas hay una figura donde los jueces auxiliares cuentan con colaboradores que son llamados de diferente forma, pero cumplen con esa función.

A raíz de la formación de las policías comunitarias disminuyeron los índices delictivos. La policía limitó su presencia y el Ejército entró a realizar patrullajes regulares. Aunque van con tanquetas, asumen un perfil bajo. Los oficiales dicen: la bronca no es con nosotros, es con las policías. El surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias en el estado no se limita a los municipios de Tamasopo y Rayón. Han hecho su aparición grupos organizados en Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario ejidal fue nombrado primer comandante.

En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se van relevando.

Como sucede en la Huasteca potosina, hay hartazgo en muchas comunidades indígenas. En más de dos estados, grupos de ciudadanos han tomado la seguridad en sus manos o se disponen a hacerlo. Silencioso o silenciado, hay en marcha un nuevo levantamiento indígena en el país.

LOS NAHUAS DE AYOTITLÁN

Gaudencio Mancilla Roblada desapareció la madrugada del 21 de agosto de 2013. Un comando con hombres arma-

dos que se transportaba en varias camionetas lo detuvo en un camino vecinal y se lo llevó sin orden de aprehensión. Luego cateó cinco casas. Sus compañeros temieron que hubiera sido levantado para ejecutarlo.

Gaudencio tiene 62 años de edad y es el representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el estado de Jalisco. Su vida se le ha ido en cuidar su comunidad y denunciar la explotación ilegal que practican y el impacto ambiental y social que provocan las empresas mineras y madereras con los recursos naturales en la Sierra de Manantlán.

Apenas unos días antes de su arresto, él había explicado la grave situación por la que atraviesa su pueblo en la Catedral Tata Juan Chávez Alonso, realizada en San Cristóbal de las Casas, con la participación de la comandancia zapatista y el Congreso Nacional Indígena. Allí contó cómo en su tierra hay “un pulguero de mineros, que están a la brava, pistola en mano, robando el material rocoso de las minas”. Explicó la forma en la que la actividad ilegal agota el agua y devasta los recursos naturales “a la fuerza”. “La comunidad indígena de Ayotitlán está sufriendo mucho porque ya no podemos interponer amparos, ya no podemos parar las mineras”, dijo.

Como nobleza obliga, la Catedral resolvió denunciar “que los malos gobiernos y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de minerales y maderas preciosas, particularmente en la costa Nahua y la meseta purépecha de Michoacán y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, Jalisco”.

Los captores de Gaudencio resultaron ser agentes de la Fiscalía General del Estado y no pistoleros de las mineras. Pero la preocupación por su paradero no era exagerada. Apenas el 17 de junio un grupo de hombres armados llegó por él a su casa, en el rancho La Guayaba, ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García de Barragán, con una sola misión: desaparecerlo. Gaudencio se les escapó.

Él tuvo suerte. Otros desafortunadamente no. A Aristeo Flores y Nazario Aldama Villa los mataron antes por denunciar tala ilegal de bosques y narcotráfico. Y el 23 de octubre de 2012, uno de los opositores a las mineras en la región, Caledonio Monroy Prudencio, un joven abogado indígena, fue desaparecido por ocho hombres armados y con capucha.

Desde entonces, para su protección, Gaudencio cargaba con él una pistola nueve milímetros de uso exclusivo del ejército. No era para menos. Su vida está en peligro. Su trabajo le estorba a las mineras, a los talabosques y a un buen número de autoridades gubernamentales. Sus enemigos son grandes y algunos no lo quieren vivo.

Los agentes de la Fiscalía que arrestaron a Gaudencio lo golpearon y torturaron en una casa. Pretendían que inculpara a un grupo de funcionarios y un diputado como promotores de una policía comunitaria en la localidad. “La policía que me detuvo —contó el dirigente indígena— me agredió y querían que señalará a personas para que se dijera que sí se está haciendo la policía comunitaria”.

Los funcionarios a los que los agentes querían involucrar en el asunto eran Alfonso Hernández Barrón, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHH);

Clemente Castañeda, diputado local de Movimiento Ciudadano, y a los integrantes de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, César Díaz y Jaime Hernández Lamas.

La idea de formar una guardia comunitaria no era un secreto para nadie. Se había discutido públicamente. Como representante del Consejo de Mayores, Gaudencio había participado desde noviembre de 2012 en asambleas ejidales y reuniones de trabajo con el gobierno municipal de Cuautitlán de García Barragán, diputados locales y mandos del Ejército para analizar la posibilidad de hacer realidad la iniciativa. Pero, las fuerzas vivas locales hicieron hasta lo imposible por descarrilar la iniciativa.

Hacer nacer la policía comunitaria en Ayotitlán era una necesidad urgente por muchos indígenas. No era para menos. Según Jaime Hernández Lamas, el abogado de Gaudencio: “La seguridad en la zona sur de Jalisco es desastrosa; se sigue sacando mineral y hay un impacto ambiental bruto. Esto no ha sido resuelto por el gobierno del estado”.

Gaudencio denunció la tortura y las verdaderas causas de su detención, que nada tenían que ver con conformación de grupos de vigilancia comunitaria, ni con la posesión del arma. “Es totalmente falso esto -aseguró- porque la Fiscalía quiere cubrirse de todas las agresiones en mi contra (...) El asunto es de minas”.

“Dijeron que qué me importaba que se trabajaran las minas —narró—. ‘Señores —les respondí—, me importa porque es mi comunidad, porque soy ejidatario y porque hay una reserva (la de la Biosfera de Manantlán)’. Y ellos insistían: ‘A ti qué chingados te importa.’”

“El asunto es ese: por haber parado lo de las minas (el 3 de junio pasado, más de 200 nahuas detuvieron dos sitios de explotación de hierro). Ése es su problema. Pero les aclaro que no es Gaudencio, es toda la comunidad que las ha querido parar”.

El escándalo por su arresto se hizo mayúsculo. De hecho, traspasó fronteras. Como su ropa estaba llena de sangre por los golpes, al presentarlo le compraron prendas nuevas, le curaron las heridas y le permitieron que se aseoara. Para obtener su libertad, pagó una fianza de cinco mil pesos, una cantidad muy pequeña.

Los agentes no sólo detuvieron a Gaudencio. También hurtaron papelería fundamental de la comunidad. Según cuenta en la revista *Desinformémonos* Ernenek Mejía -con la colaboración de Afra Mejiad-, se llevaron también “diversos documentos clave en los juicios que ha liderado el Consejo de Mayores, entre los que estaba el expediente agrario en el que se dictaminan las 16 mil hectáreas complementares asignadas al ejido de Ayotitlán y que nunca les fueron entregadas; documentos sobre la conformación de comités de Derechos Humanos en la Sierra, así como de los archivos sobre las reuniones con integrantes del Comité Técnico para la creación de la policía Comunitaria de Ayotitlán en el que participaron en un evento público tanto autoridades del gobierno y el ejército, como miembros de organizaciones no gubernamentales y civiles”.

Diez días después de su aprehensión, el 31 de agosto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, visitó al ejido de Ayotitlán y se reunió con Gaudencio y los dirigentes del Cuerpo Consultivo Agrario. Ante ellos se compro-

metió a investigar y castigar a los responsables de la tortura a la que fue sometido Mancilla y pidió “disculpas” a las personas que fueron golpeadas durante los cateos del 22 de agosto. Simultáneamente, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco clausuró las minas Piedra Imán y Caña Verde. Pero no les duró mucho el gusto a los nahuas. El día después, las empresas reanudaron la extracción de hierro, como si nada hubiera pasado.

Ayotitlán es una de las comunidades nahuas más grande del estado de Jalisco. Sus pobladores viven del la producción de autoconsumo de maíz, frijol y chile, y de cultivar café. Complementan sus ingresos migrando para trabajar de manera temporal en Manzanillo y Autlán.

El arresto y liberación bajo fianza de Gaudencio Mancilla, la muerte y desaparición de líderes comunitarios, la tenaz resistencia contra madereros y mineras, la integración fallida de un grupo de guardias comunitarios en la sierra de Manantlán son parte de una lucha ancestral de los nahuas por defender su territorio. Una lucha entre “invasores” e indígenas, en las que éstos protegen a su comunidad. Una verdadera conflagración que tiene su origen en la Colonia con la República de Indios de Ayotitlán y su último eslabón en el ciclo de movilizaciones que arrancaron en 1971.

Como explica Ernenek Mejía, lo que los pueblos originarios de Manantlán han hecho es defender “un territorio que al no ser para los indígenas un simple bien económico, sino el espacio que habitan y el cual les permite vivir bajo su propia forma de entender y organizar el mundo, los lle-

va a oponerse contra los emprendimientos incompatibles con sus principios de vida como nahuas y campesinos”.

La República de Indios de Ayotitlán -señala Mejía- es “un espacio indígena reconocido en la época colonial con autoridades y territorio propio, que les permitió durante largo tiempo reproducir lo que llaman de trabajo “en común” y gobernarse por “la mayoría”, además de haberles ofrecido, una vez extintas estas repúblicas con las leyes liberales, el argumento legal y legítimo para exigir su derecho a la tierra”.

Enfrentados al despojo sistemático de sus tierras, los nahuas de Ayotitlán han luchado secularmente para que se les restituyan. La memoria del atraco está presente en quienes hoy siguen peleando por ellas: a Ayotitlán se le reconocen tan solo 30 mil hectáreas de las 446 mil 742 que demostró tener originalmente la República de Ayotitlán. Su resistencia se ha acompañado tanto de su recomposición étnica como de la defensa de sus recursos naturales, de manera destacada los bosques. Gaudencio explicó en una asamblea celebrada en noviembre de 2012 la forma en las que sus diversas demandas se encuentran profundamente imbrincadas y cómo han sido hostigados por enarbolarlas. “Anteriormente -explicó- llegaron madereros, robándose madera y saqueando. Preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista”.

En 1965 fue creado el ejido de Ayotitlán y con él -documenta Mejía- desembarcaron nuevos intereses y lo

que Gaudencio llama de “la política”, es decir el arribo de diversas organizaciones campesinas oficiales e independientes afiliadas a partidos del gobierno u opositores, que disputan entre ellos el poder de sus organizaciones y de la Comisaria Ejidal. También llegó en 1967 la extracción de minerales con la instalación, al sureste del territorio nahua, de la paraestatal Peña Colorada. Para entonces, las maderas finas y los grandes volúmenes de extracción maderera habían prácticamente concluido. El nuevo negocio de los “invasores” consistió en la explotación de hierro.

Las movilizaciones campesinas e indígenas lograron sacar de la región a los aserraderos y crear la Reserva de la Biósfera de Manantlán, que, durante algún tiempo, les sirvió como cobertura legal para frenar el expolio de sus recursos naturales. Simultáneamente, uno de los dirigentes más notables del pueblo nahua Zaferino Padilla, junto a un grupo de “mayores”, promovió la reanimación de la lucha por “lo indígena”.

De acuerdo con Mejía, para “los defensores de la comunidad” la recuperación de la cultura no podía separarse de la recuperación del territorio, de la vuelta a lo “común” y de gobernarse por “la mayoría”. Fue así que durante años se organizaron fuera de “la política” y juntaron a las “cabezas” con el objetivo de “reconstituir el Consejo de Mayores”, del cual Gaudencio Mancilla se transformó el representante legal y con la muerte de Zaferino, en el encargado del compromiso de “volver a lo indígena”.

En 1967 comenzó sus actividades en la región la minera Peña Colorada, originalmente una compañía paraestatal, que fue privatizada en 1992. La empresa evadió

pagar regalías que debía entregar a la comunidad y favoreció la gestación de grupos afines a sus intereses dentro del ejido. Con la explotación se presentaron graves problemas de contaminación del agua de poblados vecinos, y en otros escasez del líquido vital.

Llegaron a la zona, también, compañías ilegales, dedicadas a extraer hierro, que luego vendían en el mercado negro. Contaban con la protección de guardias armados y autoridades corruptas. Los nahuas las enfrentaron bloqueando el traslado del material e impidiendo la instalación de maquinaria, en Piedra Imán y Cañada Verde. Los empresarios respondieron amenazando de muerte a los dirigentes indígenas.

Estas empresas, de acuerdo con el abogado Hernández Lamas, obtienen ganancias semanales de hasta 30 millones de dólares. Y, a pesar de las denuncias de los nahuas, "No se ha detenido un solo camión. A diario sacan al menos 30 camiones y no se ha detenido uno solo; no se ha cuestionado qué empresa es la que está haciendo eso, ni quién las ha autorizado". Queriendo tapar el sol con un dedo, el gobierno del estado, por voz del encargado de su política interna, Arturo Zamora, negó que la detención de Gaudencio y los problemas en la región tuvieran que ver con la minería. Sin embargo, un reportaje de la revista *Proceso* demostró lo contrario. Las cifras son sorprendentes. Según datos oficiales de la Secretaría de Economía -documentó la publicación- "las compañías mineras abarcaban ya 33% del territorio jalisciense. La cifra contrasta con la de 2005, cuando el gobierno de Jalisco tenía concesionado sólo 6% de su espacio a compañías dedicadas a ese rubro".

La Semarnat Jalisco — señala la misma revista — no ha dejado de otorgar permisos a las mineras: en 2011 autorizó 68 estudios técnicos justificativos para exploración y seis manifestaciones de impacto ambiental (MIA); en 2012 emitió 33 estudios técnicos justificativos procedentes y 18 manifestaciones MIA (el triple que el año anterior). Prácticamente todas las solicitudes son para la extracción de hierro y unas cuantas para barita.

Fue por esta situación de abierto despojo y agresiones directas a los dirigentes nahuas, — detalla Mejía — que el Consejo de Mayores y algunas organizaciones del ejido, propusieron a la asamblea formar una policía para “la defensa de la comunidad”. En un primero momento, la iniciativa fue votada favorablemente por mil 500 ejidatarios.

La intención era crear un grupo para la seguridad de la comunidad, con el apoyo de las autoridades policiales para vigilar las únicas tres entradas a la región nahua. De esta manera se podría identificar a los comandos armados, a los tala montes y a los vehículos que entraran y salieran de la extracción ilegal del hierro.

El proyecto fue saboteado por el presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, el priista Pedro Sánchez Orozco. El 17 de marzo, sus maniobras, junto a las de otras autoridades estatales provocaron que la propuesta del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán abortara. Los operadores del PRI — cuenta *Proceso* — “organizaron una asamblea de ejidatarios paralela a la del consejo y comenzaron a regalar birria a los asistentes, algunos de los cuales murmuraban que esos días habían visto a “los enmascarados” por la sierra y que cuatro nuevas minas ile-

gales habían comenzado a reventar la tierra en los predios Rancho Viejo, El Pedregal, Piedra Imán, Cañada Verde y Cortapico”.

Para que no quedara duda de por dónde iba la cosa, ese mismo día en Guadalajara, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, advirtió que no permitiría la creación de ninguna policía comunitaria en Jalisco.

Descarrilado el proyecto, el diputado Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, anunció que “las comunidades indígenas náhuatl de Jalisco y Colima habían pospuesto “para mejores momentos” la organización de una policía comunitaria.

Gaudencio Mancilla fue sentenciado el 8 de enero de 2014 a tres años y tres meses de prisión. Sus derechos políticos y civiles quedaron suspendidos mientras dure la condena. Además deberá pagar una multa de 3 mil 69 pesos. Permanece en libertad provisional bajo caución.

A pesar del castigo, Gaudencio no quita el dedo del renglón. Firme en su lucha, sostiene: “tenemos un derecho como pueblos indígenas y lo que estamos haciendo es cuidar los recursos de nuestras comunidades. El gobierno debe verlo y debe frenar este tipo de anomalías”.

SOLEDAD ATZOMPA

En mayo de 2014, a Soledad Atzompa llegaron nuevamente los reflectores. El duelo verbal sobre la existencia o no de las autodefensas en el municipio atrajo a los medios. Sí hay grupos de civiles armados, aseguró su alcalde Bonifacio

Aguilar Landa. “Al día de hoy, quiero decirles, no existe ningún grupo de autodefensa”, respondió el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández.

El líder estatal del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que el presidente municipal de ese municipio tiene razón, que es cierto que existen autodefensas. Pero Jorge Alberto Burguete, comandante de la Tercera Zona Naval, lo contradijo: no hay ninguna fuerza de autodefensa en ese municipio, aseguró. No hay autodefensas pero sí policía comunitaria, reviró Julio Atenco Vidal, dirigente indígena de la sierra Zongolica.

Soledad Atzompa es un municipio de la Sierra de Zongolica, mayoritariamente indígena. Ocupa el sexto lugar entre los poblados más marginados de Veracruz. Su población es de más de 20 mil habitantes, 93 por ciento de ellos pobres y casi el 65 por ciento extremadamente pobres. La mitad de sus 4 mil casas tienen piso de tierra y menos de dos de cada diez cuentan con drenaje.

En el año 2007, Soledad Atzompa estuvo en el centro del huracán informativo. Ernestina Ascensio Rosario, indígena nahua de 73 años de edad, murió mientras pastoreaba ovejas, presuntamente agredida por soldados. Sus familiares y vecinos aseguraron que fue asesinada. Una primera autopsia reveló que había sido violada. Una segunda arrojó que había fallecido de causas naturales. Durante semanas el asunto fue un escándalo nacional pero luego fue sepultado por otros asuntos.

A comienzos del mes de mayo de este año las cosas cambiaron. El presidente municipal de extracción perredista Bonifacio Aguilar alertó que debido a la inseguridad, los

secuestros, las extorsiones y a los robos, los ciudadanos se habían organizado para crear grupos de autodefensa. Un taxista fue secuestrado en una localidad vecina y la población indignada levantó retenes fijos durante una semana. El escándalo estalló, más aún con el antecedente de que la región fue, en alguna ocasión, cuna de proyectos político-militares.

“Soledad Atzompa apareció otra vez en el mapa —dijo Ricardo López Dolores, síndico municipal—, no éramos visitados y ahora hasta el Ejército viene. Se toma fotos con nuestra gente y antes ni nos tomaba en cuenta”. Los militares —señaló— explicaron su presencia como parte de su labor de supervisión de las carreteras.

No fueron los únicos. Un convoy de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública llegó a ese municipio para conocer de primera mano la situación de inseguridad que se vive en esa región de la sierra central.

Igual el debate siguió. Julio Atenco, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz), denunció que la “gente que anda encapuchada” en esas zonas proclamándose como autodefensa no son pobladores del municipio.

En las comunidades —explicó el dirigente— “se tiene respeto por la autoridad municipal y sus instituciones, pero también se tienen instituciones y leyes no establecidas que igual se respetan. No se vale que grupos extraños se autoproclamen como defensores”.

Según Atenco, en el municipio hay policías comunitarias. Se trata de “organizaciones que desde siempre han existido en estas comunidades. Son electos por la gente y

no son producto de hechos de desesperación o intranquilidad. Es una forma de organización que tenemos entre los pueblos nahuas”.

Esa policía es electa por la comunidad en la misma asamblea en la que nombran al Agente Municipal y al Juez Auxiliar. A diferencia de las autodefensas que se mueven de manera autónoma, los guardias comunitarios están bajo el mando de esta autoridad civil. El servicio es honorífico, sus integrantes no reciben remuneración.

Ante el hartazgo y la emergencia, en una reunión los líderes comunitarios “le pidieron a la autoridad municipal que apoye a las policías comunitarias, porque la policía municipal es incapaz, no hay vehículos, no tienen medios para comunicarse entre sí, y por eso se sumaron a la policía comunitaria. El Ayuntamiento pidió el apoyo del estado”.

El caso de Atzompa no es exclusivo en la entidad. Según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Arturo Matiello Canales, cuando menos en diez municipios principalmente de la zona serrana de Veracruz, hay grupos de autodefensas, armados y no, que no son subversivos. Estos se localizan en Coscomatepec, la sierra del Pico de Orizaba, Huatusco, Soledad Atzompa. “Son -puntualiza- ciudadanos que buscan protegerse de la inseguridad”.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. El 9 febrero, se difundió una fotografía en la que aparecen cinco sujetos con el rostro cubierto, armados con fusiles, pistolas y cuchillos, mostrando un cartel que dice: “Autodefensa de la Sierra de Zongolica”. El grupo dijo llamarse Ciudadanos Zongoliqueños por la Paz y Seguridad Social. Está asesorado por Román Vázquez González, dirigente de la agru-

pación Movimiento Indígena Liberal Popular y Autónomo de Zongolica (MILPAZ). Curiosamente, la “autodefensa” defiende la construcción de una Hidroeléctrica en la sierra de Zongolica que ha sido severamente cuestionada por organizaciones ambientalistas y populares. Advierten en que no quieren a gente “de fuera”, pues “ellos están protegiendo los ríos”.

Román y sus “autodefensas” — señala una parte de la izquierda y los ecologistas — buscan distraer la atención sobre las fallas que la hidroeléctrica ha tenido y la renovada exigencia de las comunidades de frenar el funcionamiento de la hidroeléctrica asesoradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA).

En un momento en el que diversas voces han anunciado la formación de una gran convergencia nacional de autodefensas sería bueno que, antes de extender un cheque en blanco a cualquiera que se reivindique como tal, se escuche la palabra de las comunidades a las que los civiles armados dicen representar. Esa es la lección de la Zongolica.

EN LA CAPITAL DEL PANUCHO

Cuando en el mes de marzo se anunció la aparición de grupos de autodefensa en Yucatán, las autoridades lo negaron. Las imágenes de ciudadanos del municipio de Kanasín armados con palos, machetes y otros artefactos fueron — según el secretario general de Gobierno, Víctor Caballero Durán — tan sólo una forma de llamar la atención.

El funcionario dijo a *Reforma*, que “con justa razón reclaman la presencia de la Policía y esto ha generado ex-

presiones de inconformidad de esta naturaleza, y tomando esta expresión que se da a nivel nacional adoptan esta denominación, pero no es para nada ningún grupo de auto-defensa”.

Los habitantes del fraccionamiento Villas de Oriente, en la llamada “capital del Panucho”, piensan de otra manera. En su mayoría jóvenes que ganan uno o dos salarios mínimo, son doblemente víctimas; de robos y violaciones, y de la decisión policiaca de no patrullar lo que llaman “tierra de nadie”, formaron sus grupos de seguridad.

El grupo de unos 30 vecinos efectúa rondines en dos horarios. El primero desde las 11:00 horas y hasta las tres de la madrugada. El segundo turno hasta que amanece. Participan las hijas y esposas. Cuando ven algún sospechoso hacen sonar sus silbatos.

Exasperado, uno de los vecinos aseguró a *Excelsior* que pensaban llegar “hasta las últimas consecuencias, hasta que las autoridades nos hagan caso y nos vengán a apoyar. Ya en últimas instancias, hasta armas vamos a comprar como en otros estados, tomar la justicia con nuestra propia mano”.

La decisión de los pobladores de Villas de Oriente no fue improvisada. A pesar de que Yucatán es en las estadísticas uno de los estado más seguros, 300 pandilleros de diversas colonias atacaron el módulo de la policía en el Palacio Municipal.

El secretario de Gobierno de la entidad aceptó que ha faltado atención necesaria en seguridad en ese sector colindante con Mérida. Pero negó categóricamente la presencia de los grupos de autodefensa. “No están generando

subversión o levantamiento, —dijo— simplemente es una expresión de malestar que de alguna manera que se da en un momento en que el país está muy sensible a este tema”.

Su movilización fue eficaz. La Policía estatal comenzó a hacer labores de vigilancia. Varias unidades patrullaron las calles del lugar, hicieron revisiones y detuvieron sospechosos. Un ama de casa le dijo a *Reforma*: “Era raro ver una patrulla aquí, pero ahora ya vemos muchos vehículos con policías...”

En el mismo Yucatán, pero en los municipios de Oxkutzcab, Maní y Aki, en la región citrícola del sur de la entidad, unos 150 campesinos productores de limón formaron sus autodefensas, para vigilar sus parcelas. Los citricultores habían solicitado ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero no recibieron mucha atención. Armados con escopetas, machetes, coas, dijeron “no me robarán más”.

Estimulados por los altos precios del cítrico en el mercado internacional, los hurtos se generalizaron. A finales de la primera quincena de marzo, el productor Feliciano Che Moo trasladó su cargamento de limón (alrededor de 50 cajas) a la orilla de la carretera. Fue a buscar una camioneta para subir la mercancía y al regresar ya habían desaparecido 10 cajas. “Por eso decidimos en una junta prepararnos para defender nuestras parcelas -explicó- y crear algo así como autodefensas, como en ese estado (Michoacán), donde la gente está armada para defenderse de narcos y maleantes”.

José Tec Poot, campesino citricultor de Kinchil, de unos 35 años de edad -cuenta Luis Boffil en *La Jornada*- vi-

gila celosamente y con su escopeta “cazadora”, sus propios plantíos de limón, así como los de otros compañeros suyos. Los rondines son alternados: de día y de noche; con la luz del sol, la vigilancia es solitaria; con las sombras de la noche, los rondines son ejecutados en grupos de tres a cinco personas.

Tec Poot asegura que “los grupos de autodefensa que creamos los campesinos han rendido buenas cuentas. Ya detuvimos a varios ladrones y sin disparar un tiro, pero estamos dispuestos a soltar plomazos si la cosa (los robos) se vuelva más cabrona”.

Su iniciativa tuvo éxito. Tan sólo en la última semana de marzo, detuvieron a ocho rateros, que querían hacerse dueños de la noche y de los cítricos.

Un poco más al sur, en el vecino estado de Campeche, el dirigente del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez), Luis Antonio Che Cu, amenazó con integrar un “cuerpo de seguridad rural”. Asolados por traficantes de madera que saquean sus bosques, y hartos de plantear su problemática al secretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, sin tener respuesta, los representantes de 24 comunidades de los municipios de Escárcega y Candelaria convocaron a una asamblea para la conformación de la primera policía comunitaria del sur del Estado.

La reunión se efectuó en la comunidad de El Mirador, en medio de la selva, en la zona limítrofe con Guatemala. En una asamblea en la que participaron más de 200 campesinos se expusieron las razones por las cuales requieren tomar medidas propias para vigilar sus tierras y el patrimonio natural ante la tala ilegal; además de evitar

la corrupción a la que constantemente son sometidos por parte de la Policía Municipal y el tráfico de droga.

El Frente Campesino ya había efectuado, anteriormente algunas protestas heterodoxas. El 14 de diciembre de 2012 derribó una estatua levantada en el Paseo los Héroes a la memoria de Juan Camilo Muriño en la capital del estado, a la que consideraban ofensiva.

Ante el nuevo reto de los campesinos, Candelario Salomón Cruz, alcalde de Candelaria, siguió el mismo guión de otras autoridades en el país. Advirtió que no se tolerarían las autodefensas porque no están permitidas por la ley y se arrestaría a sus integrantes. “No pueden ser policías mientras no haya una legislación que lo permita”, aseguró. Pero, añadió condescendiente, que si a sus grupos les quieren llamar “policía rural”, que “los nombren como quieran”.

Sin embargo, advirtió: “En Candelaria se mantiene la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, hay vigilancia por parte de la Policía Estatal Preventiva y aplicación de la justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. No se va a permitir que Che Cu quiera imponer policías comunitarios como en otros Estados”.

XIII) LA REESCRITURA DE FRANKENSTEIN

HACIA UN MOVIMIENTO NACIONAL DE AUTODEFENSAS

Como si su naciente movimiento fuera el último eslabón de “la Marcha de la Humanidad”, el mural de del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, los promotores del primer encuentro nacional de *autodefensas* ciudadanas se reunieron el 28 de mayo de 2014 en el Polyforum Cultural.

El tamaño de la misión que se dieron a sí mismos es tan grande como la obra plástica que enmarcó el evento. La variopinta colección de sombreroños, religiosos, un ex gobernador, empresarios, catedráticos, defensores de derechos humanos y autodefensas que se congregó en el Polyforum, lo hizo con un objetivo central: promover entre los mexicanos la necesidad de tomar la seguridad en sus propias manos y autodefenderse de la violencia ante la inacción del Estado mexicano en materia de seguridad pública.

Quienes convocaron al encuentro provienen de los más disímiles entornos. Entre ellos estaban el senador Ernesto Ruffo, el general retirado José Francisco Gallardo, el catedrático Jaime Cárdenas, el empresario Jaime Rodríguez, el guerrerense Bruno Plácido, el limonero Hipólito Mora, el obispo Raúl Vera, José Manuel Mireles, el sacerdote Alejandro Solalinde, el cura Gregorio López, Mario Segura y Talía Vázquez. Notable fue la ausencia de Javier Sicilia quien explicó su ausencia señalando que “los grupos de autodefensa surgieron en el país en una coyuntura particular, en un contexto específico, con actores específicos. Respeto ese proceso, pero no pertenezco a él.”

Muy significativa también fue la no asistencia de las diversas experiencias de policías comunitarias de origen indígena, particularmente de la CRAC guerrerense.

Un papel central en la organización y convocatoria del evento lo desempeñaron, escribió Arturo Cano, las hermanas Vázquez Alatorre. Una, Selene Lucía, es diputada local independiente y preside la comisión de justicia del congreso michoacano. Y, la otra, Talía, adquirió relevancia cuando acusó de violación a quien fuera su esposo, Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de la secretaría de Gobernación ligado a diversos escándalos con permisos a casinos.

Los discursos de la reunión estuvieron a tono con la magnitud de la empresa que se echaron a los hombros. José Manuel Mireles sostuvo que la iniciativa no era un llamado a la insurrección ni a levantarse en armas, sino a la solidaridad nacional y a la demanda de justicia y seguridad. Planteó la necesidad de crear la Guardia Nacional, prevista en la Constitución pero que no existe en los hechos. “La opre-

sión la vivíamos de dos partes: una por acción de parte de los criminales, y otra por omisión de parte del gobierno”, dijo al aclarar que su “guerra” no es contra el gobierno ni con los estados, “nuestra guerra es contra el crimen”.

“No somos guerrilleros, no tenemos capacitación, pero llego un momento que ya no se podía”, dijo, al tiempo que llamó a formar un Frente Nacional de Autodefensas.

Muy enérgico, Raúl Vera, obispo de Saltillo, aseguró que la violencia que se padece en todo el país es culpa del gobierno, pues ya no es posible distinguir entre crimen organizado emanado de los Cárteles y el crimen organizado que se desprende del Estado mexicano. Por eso -afirmó- el surgimiento del movimiento de las autodefensas ciudadanas “lo llenan de esperanza”, ya que se presenta como un mecanismo de defensa, casi natural e intuitivo, contra el gobierno, a quienes definió como unos “pillos que heredan puestos” y como una “clase noble que se mantiene de manera absurda” en el país.

Filoso, el obispo señaló que comparado con los pillos del gobierno, el capo Joaquín *El Chapo* Guzmán es una hermana de la caridad. “La violencia que padecemos viene del Estado. Podrán estarla ejecutando un cártel por acá, un cártel por allá, pero la violencia viene del Estado, son los primeros culpables de lo que padecemos. Nos autodefendemos, pero del gobierno”, añadió.

Según el purpurado, estas autodefensas no surgieron para hacer una revolución armada, sino para dar el brinco y asumir como mexicanos “lo que les corresponde como verdaderos señores de esta nación”. Por ello, sostuvo, hay que convertir a las víctimas, la mayoría en el país,

en sujetos sociales que a través de un proceso de educación, de conciencia y de formación de cuadros de manera sistematizada pueda ser capaz de dictar leyes y de reconstruir México.

El padre Alejandro Solalinde dijo que “lo que hace falta hacer en este país es barrer las instituciones que no funcionan”. Añadió que hay muchas maneras de ser *autodefensa*, y no necesariamente tiene que ser por la vía de las armas, sino como en su caso, por la defensa de los migrantes a través de la caridad. Reprochó que el Estado de derecho exista sólo para algunos, pues “los ricos tienen a su propia *autodefensa* con fraccionamientos, coches blindados, cuerpos de seguridad, porque nosotros no podemos hacerlo”.

Emotivo, Hipólito Mora recordó sus orígenes y sus circunstancias. “Soy campesino, nací en La Ruana y nunca pensé en estar aquí” - dijo. Y explicó cómo Los Caballeros Templarios no le permitían vender los costales de limón de sus huertos. “Solo dos días a la semana los compraban y pagaban entre 10 y 15 pesos por cada saco. No se puede vivir con eso”. Y, para que quedara claro dónde está parado después de pasar más de dos meses tras las rejas, advirtió: “Si pensaban que metiéndome en la cárcel me iba a doblegar, quiero que sepa el Gobierno que me hizo más fuerte, que voy a seguir luchando”.

La iniciativa buscó hacer converger y darle cuerpo a la creciente inconformidad ciudadana con la inseguridad pública. Fue, además, una forma de darle cobertura nacional a un sector de las autodefensas renuente a desarmarse y disciplinarse al comisionado Alfredo Castillo.

EL NUEVO FRANKENSTEIN

En distintos momentos se ha caracterizado a las autodefensas como un nuevo Frankenstein. Diversos analistas, políticos e incluso defensores de derechos humanos, se han convertido en nuevas Mary W. Shelley. Quieren escribir el relato de los civiles armados presentándolos como si fueran una nueva versión del viejo mito de la criatura surgida de la mano del hombre que escapa a su control, sólo para terminar haciendo el mal.

Sin embargo, las distintas versiones de la nueva novela no se ponen de acuerdo en quién es la “mano” que está detrás del fenómeno. Unos culpa al Ejército, otros al general Naranjo y varios más a la guerrilla. No faltan quienes las vean como creación de políticos resentidos en búsqueda de una revancha.

Calificar a las autodefensas de *Frankenstein* como si fueran sinónimo de maldad, no deja de ser una ironía. Quien haya leído la novela recordará que lo que este personaje siempre buscó fue la comprensión humana para compartir con los demás el amor, la virtud y los afectuosos sentimientos de su corazón. El monstruo, ingenuo, esperó hallar criaturas que, ignorando su fealdad física, lo amaran por sus virtudes.

Pero muy pronto, el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo, y la felicidad y el amor que tanto habían deseado se convirtieron en amarga y odiosa desesperación. El engendro, se volvió víctima de la incompreensión y los prejuicios de quienes sólo veían en él su fealdad externa y eran incapaces de reconocer sus cualidades reales.

De cualquier manera, la metáfora no deja de ser sugerente. Las autodefensas (y las policías comunitarias) surgieron por una causa tan noble y generosa como los sentimientos que albergaba el corazón de *Frankenstein*: garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y las comunidades, poniendo, literalmente, su vida en prenda. Sin embargo, en el camino, las autoridades gubernamentales, el ombusman, distintos intelectuales, y muchos medios de comunicación construyeron y divulgaron una imagen grotesca y deforme de los “hermanos en armas”, usando sin pudor algunos sus propios defectos o inventándolos hasta volverlos irreconocibles para los demás y para sí mismos.

En distintos casos, esa imagen se ha convertido para la opinión pública en la realidad. El movimiento ha dejado de existir en la percepción ciudadana tal cual es para convertirse en la caricatura que se ha hecho de él: guerrilleros embozados en una causa civil, narcotráficantes disfrazados de justicieros trabajando por formar un nuevo cártel, indios violentos deseosos de hacerse justicia a mano propia, paramilitares al servicio de proyectos de contrainsurgencia.

Por supuesto, como sucede con las caricaturas, algunos de los rasgos que refleja el dibujo son reales, sin embargo, el resultado final no lo es. La imagen grotesca que se ha construido de quienes buscan hacerse cargo de su seguridad y de la de sus familias sirve para exorcizar la amenaza del monstruo pero no para comprender las razones de su existencia.

Las autodefensas han sido sometidas a juicio sumario por atreverse a desconfiar y han sido juzgadas. Como *Frankenstein*, han sido condenadas y discriminadas

por su imagen y no por sus acciones reales y sus verdaderos propósitos.

De cualquier manera, independientemente de estos juicios y de sus claroscuros internos, las diversas experiencias de autodefensa y de policías comunitarias en el país siguen expandiéndose. A pesar de la actitud gubernamental de negarlas, menospreciarlas, dividir las o combatir las abiertamente, siguen surgiendo por casi todo el país. De acuerdo con las cifras del doctor Mireles, existen grupos de autodefensa en 16 estados y hay presencia de éstas en 36 municipios en Michoacán.

No parece factible que en el corto plazo vayan a desaparecer las asociaciones de los hermanos en armas. Llegaron para quedarse por un buen tiempo. Lo que de aquí en adelante suceda con ellas, será ya otra historia. Después de todo, el futuro ya no es lo que era antes.

INDICE

- I) INTRODUCCIÓN. LA VIRTUD DE LA NECESIDAD
- II) RENACIMIENTO EN EL MUNDO MAYA ZAPATISTA
- III) PAÍS DE NOTA ROJA
- IV) EL FRENO DE EMERGENCIA
- V) GUERRERO AMARGO
- VI) LOS COMUNITARIOS
- VII) EL FINAL DEL SUEÑO
- VIII) EL SALVAJE OESTE
- IX) LA ALBORADA INDÍGENA
- X) EL LEVANTAMIENTO
- XI) TIEMPOS EQUÍVOCOS
- XII) ALGUNAS OTRAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS
- XIII) LA REESCRITURA DE FRANKENSTEIN

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Pertenece a una generación que tras el 68 mexicano se vinculó a movimientos populares alternativos. Actualmente es coordinador de *Opinión* y articulista de *La Jornada*.

A mediados de los setenta fue organizador de sindicatos independientes. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.

Ha formado parte de proyectos de prensa crítica como *Información Obrera*, de asociaciones de promoción al desarrollo de base, y de centros de investigación como el Ceccam.

Entre sus libros se encuentran: *Chiapas: la guerra y la paz y la paz y Chiapas: la nueva lucha india*, *Sentido Contrario*. Compiló con Carlota Botey y Julio Moguel *Autonomía y nuevos sujetos sociales de desarrollo rural*, con Ramón Vera Herrera *Acuerdos de San Andrés*, y con Francisco Pérez Arce *Las luchas magisteriales 1979-1981*.

Publicaciones de Para Leer en Libertad AC:

- 1. Para Leer en Libertad.** Antología literaria.
- 2. El cura Hidalgo,** de Paco Ignacio Taibo II.
- 3. Jesús María Rangel y el magonismo armado,** de José C. Valadés.
- 4. Se llamaba Emiliano,** de Juan Hernández Luna.
- 5. Las Leyes de Reforma,** de Pedro Salmerón.
- 6. San Ecatepec de los obreros,** de Jorge Belarmino Fernández.
- 7. La educación francesa se disputa en las calles,** de Santiago Flores.
- 8. Librado Rivera,** de Paco Ignacio Taibo II.
- 9. Zapatismo con vista al mar: El socialismo maya de Yucatán,** de Armando Bartra.
- 10. La lucha contra los gringos:1847,** de Jorge Belarmino Fernández.
- 11. Ciudad quebrada,** de Humberto Musacchio.
- 12. Testimonios del 68.** Antología literaria.
- 13. De los cuates pa' la raza.** Antología literaria.
- 14. Pancho Villa en Torreón,** de Paco Ignacio Taibo II y John Reed.
- 15. Villa y Zapata,** de Paco Ignacio Taibo II, John Reed y Francisco Pineda.
- 16. Sembrar las armas: la vida de Rubén Jaramillo,** de Fritz Glockner.
- 17. La oveja negra,** de Armando Bartra.
- 18. El principio,** de Francisco Pérez Arce.
- 19. Hijos del águila,** de Gerardo de la Torre.
- 20. Morelos. El machete de la Nación,** de Vicente Riva Palacio, Eduardo E. Zárate, Ezequiel A. Chávez y Guillermo Prieto.

21. **No hay virtud en el servilismo**, de Juan Hernández Luna.
22. **Con el mar por medio. Antología de poesía del exilio español**, de Paco Ignacio Taibo I.
23. **Con el puño en alto**, de Mario Gill, José Revueltas, Mario Núñez y Paco Ignacio Taibo II.
23. **El viento me pertenece un poco (poemario)**, de Enrique González Rojo.
24. **Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial**, de Luis Hernández Navarro.
25. **Las dos muertes de Juan Escudero**, de Paco Ignacio Taibo II.
26. **Y si todo cambiara... Antología de ciencia ficción y fantasía**. Varios autores.
27. **Con el puño en alto 2. Crónicas de movimientos sindicales en México**. Antología literaria.
28. **De los cuates pa' la raza 2**. Antología literaria.
29. **El exilio rojo**. Antología literaria.
30. **Siembra de concreto, cosecha de ira**, de Luis Hernández Navarro.
31. **El Retorno**, de Roberto Rico Ramírez.
32. **Irapuato mi amor**, de Paco Ignacio Taibo II.
33. **López Obrador: los comienzos**, de Paco Ignacio Taibo II.
34. **Tiempo de ladrones: la historia de Chucho el Roto**, de Emilio Carballido.
35. **Carrillo Puerto, Escudero y Proal. Yucatán, Acapulco y Guerrero. Tres grandes luchas de los años 20**, de Mario Gill.
36. **¿Por qué votar por AMLO?**, de Guillermo Zamora.
37. **El desafuero: la gran ignominia**, de Héctor Díaz Polanco.

38. **Las muertes de Aurora**, de Gerardo de la Torre.
39. **Si Villa viviera con López anduviera**, de Paco Ignacio Taibo II.
40. **Emiliano y Pancho**, de Pedro Salmerón.
41. **La chispa**, de Pedro Moctezuma.
42. **Para Leer en Libertad en la Cuauhtémoc**. Antología literaria.
43. **El bardo y el bandolero**, de Jacinto Barrera Bassols.
44. **Historia de una huelga**, de Francisco Pérez Arce.
45. **Hablar en tiempos oscuros**, de Bertold Brecht.
46. **Fraude 2012**. Antología varios autores.
47. **Inquilinos del DF**, de Paco Ignacio Taibo II.
48. **Folleto contra la Reforma Laboral**, de Jorge Fernández Souza.
49. **México indómito**, de Fabrizio Mejía Madrid.
50. **68: Gesta, fiesta y protesta**, de Humberto Musacchio.
51. **Un pulso que golpea las tinieblas. Una antología de poesía para resistentes**. Varios autores.
52. **1968. El mayo de la revolución**, de Armando Bartra.
53. **3 años leyendo en libertad**. Antología literaria.
54. **El viejo y el horno**, de Eduardo Heras León.
55. **El mundo en los ojos de un ciego**, de Paco Ignacio Taibo II.
56. **Más libros, más libres**, de Huidobro (no descargable).
57. **No habrá recreo, (Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial)**, de Luis Hernández Navarro.
59. **Sin novedad en el frente**, de Eric Maria Remarque.
60. **Azcapotzalco 1821. La última batalla de una independencia fallida**, de Jorge Belarmino Fernández.
61. **Los brazos de Morelos**, de Francisco González.
62. **La revolución de los pintos**, de Jorge Belarmino Fernández.

- 63. Camilo Cienfuegos: el hombre de mil anécdotas,** de Guillermo Cabrera Álvarez.
- 64. En recuerdo de Nezahualcóyotl,** de Marco Antonio Campos.
- 65. Piedras rodantes,** de Jorge F. Hernández.
- 66. Socialismo libertario mexicano (Siglo XIX),** de José C. Valadés.
- 67. El gran fracaso. Las cifras del desastre neoliberal mexicano,** de Martí Batres.
- 68. Rebeliones,** de Enrique Dussel y Fabrizio Mejía Madrid.
- 69. Para Leer en Libertad FIL Zócalo 2013.** Antología literaria.
- 70. Un transporte de aventuras. El Metro a través de la mirada de los niños.** Antología.
- 71. Padrecito Stalin no vuelvas.** Antología.
- 72. En un descuido de lo imposible,** Enrique González Rojo.
- 73. Tierra Negra.** Cómic (no descargable)
- 74. Memorias Chilenas 1973,** de Marc Cooper.
- 75. Ese cáncer que llamamos crimen organizado.** Antología de relatos sobre el narcotráfico.
- 76. Lázaro Cárdenas: el poder moral,** de José C. Valadés.
- 77. Canek,** de Ermilo Abreu.
- 78. La línea dura,** de Gerardo de la Torre.

Descarga todas nuestras publicaciones en:

www.brigadaparaleerenlibertad.com

Este libro se imprimió en la Ciudad de México en el
mes de julio del año 2014.

Para su distribución gratuita y es cortesía de
Para Leer en Libertad A.C.

Queda prohibida su venta.
Todos los derechos reservados.